COLECCION DEBATE

De igual modo que aconteció en Vietnam, las informaciones sobre la Guerra de El Salvador, suelen quedarse atrapadas en la enmarañada red de intereses que tienden las partes involucradas.

La información oficialista, multiplicada por la caja de resonancia que facilita Washington, presenta —como en Vietnam— la imagen de una guerrilla desbocada y perdida que no cuenta con apoyo popular y que sufre permanente desventaja en el campo de batalla.

Sin embargo, una visita a los campamentos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y una mirada atenta a los efectos de cuatro años de ininterrumpida lucha, permiten detectar que la guerra puede tener otra cara, y también otros resultados.

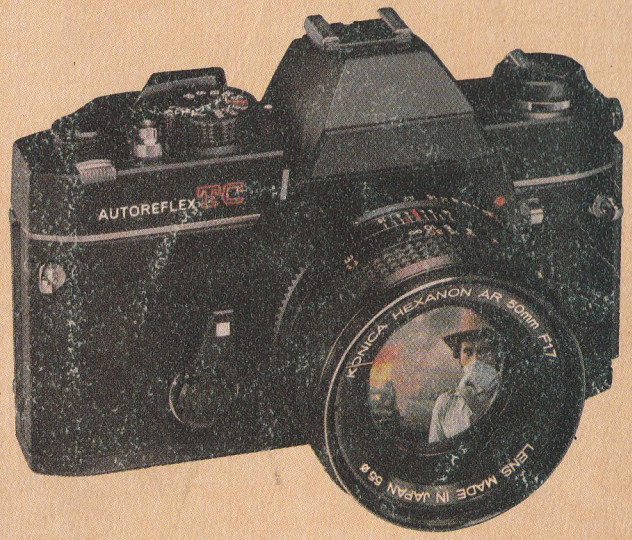
Gilberto Lopes, un periodista brasileño de extensa trayectoria en Centroamérica, se ha internado en todos los recovecos del conflicto. Con sagaz ojo periodístico y un estilo rápido y contundente, el autor rompe las barreras distorsivas de la información y nos ofrece, límpidos, los hechos del campo de batalla, los malabares políticos, la presencia de los Estados Unidos, el destino de las repetidas reformas y también el aspecto humano de la guerra.

educa

GILBERTO LOPES

REPORTAJE EN EL SALVADOR

educa



REPORTAJE EN EL SALVADOR

GILBERTO LOPES

REPORTAJE EN EL SALVADOR

COLECCION DEBATE

Diseñó la portada: Valeria Varas.

Gilberto Lopes

REPORTAJE EN EL SALVADOR

EDITORIAL UNIVERSITARIA CENTROAMERICANA

Primera Edición
EDUCA, Centroamérica, 1984

Reservados todos los derechos.
Hecho el depósito de Ley.

320.972.84
L864r Lopes, Gilberto.
Reportaje en El Salvador / Gilberto Lopes.
-- 1. ed. -- San José: EDUCA, 1984.
236 p.

ISBN 9977-30-036-4

1. El Salvador – condiciones económicas. 2. El Salvador – condiciones sociales. 3. El Salvador – gobierno. 4. Problemas políticos. I. Título.

© EDITORIAL UNIVERSITARIA CENTROAMERICANA –EDUCA–

Organismo de la Confederación Universitaria Centroamericana CSUCA, integrada por: Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad de El Salvador, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Panamá.

Apartado 64, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica.

a mis amigos

al pueblo salvadoreño,
que me enseñó lo que aquí escribo

a esos 200 mil muertos,
por cuyas vidas vivimos.

INTRODUCCION

El Salvador entró en el mapa contemporáneo de la noticia por la única puerta abierta a los personajes de esa geografía: la de los intereses geopolíticos mundiales; en este caso, la sensación norteamericana de que algo se le mueve bajo los pies, a un ritmo poco acostumbrado.

No es la primera vez que una lucha cruenta marca la historia de este pequeño país, de sólo 21 mil km. cuadrados, y unos cinco millones de habitantes.

En 1932, cuando estalló una rebelión campesina, en la ola de la gran depresión y de la caída de los precios del café, el presidente, general Maximiliano Hernández Martínez, la ahogó en la sangre de 30 mil campesinos, el dos por ciento de la población salvadoreña de la época.

Yo no sé si en aquel entonces el mundo se horrorizó por la masacre que, a 50 años de distancia, me causa una doble sensación: de angustia, ante hechos dramáticos que

dan la impresión de no haber terminado aún; y de horror, ante las fotos de las fosas comunes donde enterraban hasta los sombreros de esos cuerpos deformes, rígidos, en la incómoda posición de la muerte.

"Desde ese año maldito, todos nosotros somos otros hombres y creo que, desde entonces, El Salvador es otro país. El Salvador es hoy, ante todo, hechura de aquella barbarie...", expresó el dirigente comunista, Miguel Mármol, fusilado en aquellos días, pero escapado de la muerte por la mala puntería de sus asesinos.

No dudo de la razón de Mármol. Hernández fue derrocado en 1944, en la ola de democracia que trajo la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero El Salvador quedó cortado por la medida fina del machete, que desde entonces no ha cesado de caer sobre la cabeza de sus campesinos.

1932 vuelve a renacer también hoy, por otra prolongación histórica.

El principal protagonista de la insurrección fue el Secretario General interino del Partido Comunista Salvadoreño, Agustín Farabundo Martí.

Apresado en enero de 1932, tres días antes de la fecha fijada para la insurrección, su captura fue uno de los factores que contribuyó a hacerla abortar y, por supuesto, le costó la vida. Fue fusilado.

Farabundo Martí da hoy el nombre al Frente que reúne a las cinco agrupaciones revolucionarias que luchan, con las armas en la mano, contra el régimen salvadoreño: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Martí, nacido en 1893, fue secretario de Augusto César Sandino, el general nicaragüense por voluntad de sus soldados que, en 1927, se alzó contra la intervención norteamericana en su país. El 22 de junio de 1928, Martí estaba ya incorporado a las huestes de Sandino, en las montañas de Las Segovias, pero la relación entre ambos no iba a ser fácil; un año después se separaban.

Sandino expresó entonces que había quienes pretendían hacer de su movimiento una lucha de carácter social, pero él insistía más bien en el carácter nacional y antimperialista. Convencido de que no podría "reclutarlo para el movimiento comunista", Martí se apartó de Sandino, para volver a reivindicarlo momentos antes de su muerte, calificándolo de "uno de los pocos patriotas que hay en el mundo".

La voz del dirigente salvadoreño se apagó el primero de febrero de 1932, fusilado en el Cementerio General, donde aún reposan sus restos. Sandino no lo sobreviviría mucho tiempo; sería asesinado dos años después, el 21 de febrero de 1934, por órdenes del general Anastasio Somoza García.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue fundado en octubre de 1980, como resultado de la unificación de las fuerzas insurgentes que, durante todo ese año, forjaron diversas organizaciones, en un difícil proceso unitario. Integrado en un principio por las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Partido Comunista, se incorporaron, en noviembre del mismo año, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y, finalmente, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), que son las cinco agrupaciones que actualmente lo integran.

El FMLN se constituyó, desde entonces, en la máxima dirección del proceso revolucionario salvadoreño, habiendo creado cuatro frentes de lucha en todo el país: el Occidental, al que le dieron el nombre de "Feliciano Ama", dirigente campesino de la insurrección de 1932; el Central "Modesto Ramírez", en homenaje a un dirigente sindical de 1932; el Paracentral "Anastasio Aquino", líder indígena de una insurrección popular del siglo pasado; y el frente Oriental, el más desarrollado por la guerrilla, llamado "Francisco Sánchez", en homenaje a otro dirigente obrero del 32.

Además del FMLN, que reúne a las organizaciones político-militares de la revolución salvadoreña, otra gran agru-

pación, el Frente Democrático Revolucionario (FDR), fue creado en abril del mismo año. El FDR reúne a los organismos de masas de las cinco organizaciones que integran el FMLN; a partidos políticos, sindicatos y organizaciones gremiales, incluyendo a la Universidad de El Salvador y a la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas, en calidad de observadores.

En su primera declaración, el FDR anunció la decisión de constituirse como un frente amplio, con el objetivo de "impulsar la lucha de liberación y construir una nueva sociedad" en torno a la plataforma de un Gobierno Democrático Revolucionario.

El FDR fue descabezado a fines de noviembre de 1980, cuando sus principales dirigentes fueron capturados por fuerzas de seguridad durante una reunión pública en la capital salvadoreña y luego seis de ellos torturados y asesinados, incluyendo a su presidente, Enrique Alvarez Córdoba, miembro de una importante familia cafetalera salvadoreña.

Asumió entonces la representación del FDR el socialdemócrata Guillermo Ungo, dirigente del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).

El asesinato de los dirigentes del FDR obligó a esta agrupación a pasar prácticamente a la clandestinidad, y a diversos dirigentes a actuar en el exterior, cerrando las puertas a cualquier actividad opositora legal en el país.

Al vivir la tragedia y la lucha salvadoreña tengo la impresión de que esa historia se repite. Esta sensación me fue persiguiendo durante todo el texto, hasta que resolví recordar, en el capítulo sobre la política norteamericana en Centroamérica, una historia similar ocurrida hace casi 30 años.

Se trata de "La Batalla de Guatemala", librada por el régimen de Jacobo Arbenz en 1953 y 1954, cuando una conspiración montada por la CIA y apoyada por el Departamento de Estado, puso fin a su Gobierno.

La historia de esa lucha ha sido contada por uno de

sus principales protagonistas, el entonces canciller de Guatemala, Guillermo Toriello, aún activo en la política centroamericana y hoy exiliado en México.

El relato impresionante de los esfuerzos de Arbenz por detener una conspiración contra un régimen que había pecado de atentar contra los enormes y absurdos privilegios de una empresa bananera norteamericana, deja al desnudo los mismos mecanismos que vuelven a desempolvarse 30 años después.

Conocí el libro de Toriello —publicado, por cierto, al calor de los acontecimientos, sólo pocos meses después del derrocamiento de Arbenz— hace más de diez años, cuando Centroamérica era para mí una geografía y una historia muy lejanas. Pero ese relato lúcido, lleno de vida y de pasión, a pesar del estilo frío y diplomático, me dejó enseñanzas extraordinarias.

En la navidad de 1976, estando en México, leí en la prensa de ese país una carta abierta de Toriello al entonces recién electo presidente norteamericano, Jimmy Carter. Me llenó de sorpresa el encuentro con ese documento y el saber que Toriello estaba ahí, muy cerca.

Hice una cita con él, por medio de un amigo común, y lo fui a ver a Cuernavaca el primero de enero siguiente. Conversamos toda una tarde, en su casa; después lo he vuelto a ver algunas veces, él siempre participando en actividades vinculadas con la situación centroamericana, y yo reporteando.

Ahora, cuando en Washington la administración Reagan empieza a hablar de la "batalla de Centroamérica", el recuerdo de esa otra batalla, la de Guatemala, cobra nuevas dimensiones y sus lecciones adquieren una importancia extraordinaria.

La obra de Toriello me parece tan importante, su actitud frente a la agresión sufrida por su país tan entera, que no me explico cómo es posible que ese libro no se publique por lo menos una vez al año en algún lugar de América La-

tina, y cómo cada país no tiene al menos una edición. Le rindo aquí mi homenaje.

Estos son algunos antecedentes de esa lucha dramática que se libra en El Salvador y que, desde 1981, ocupa la primera plana de los periódicos en diversas partes del mundo.

Son muchos los periodistas internacionales que siguen esos acontecimientos, quizás más de un centenar los que cubrimos con regularidad o en forma permanente la insurrección salvadoreña.

Todos tienen diversas anécdotas, principalmente sobre los riesgos del trabajo, casi siempre perdidas tras la necesaria "objetividad" de las noticias. Esa objetividad tiende a opacar el testimonio de los que, sin ser actores, están muy cerca del escenario e influyen, con su percepción y sus escritos, en el rumbo de la obra.

Sé que sonará a herejía a ciertos "puristas" de la profesión, a algunos que creen que el papel del periodista es sólo el de relatar los acontecimientos y consignar la opinión de las partes en conflicto; pero, transcurrido el tiempo, y a la distancia, me parece que todos contribuimos a escribir el guión de esta tragedia en la que los principales actores consumen sus vidas.

La guerra desata enormes pasiones; pero, sobre todo, grandes intereses, que descargan su furia en el campo de batalla con tal ardor, que alcanza también a los que están cerca, simpatizantes, observadores, hasta abarcar, finalmente, a toda la sociedad, a todo el Continente y, cada vez más, a todo el mundo.

El periodista se ve, desde el principio, atrapado por esta vorágine, sin poder renunciar, desde luego, a su profesión y a su compromiso: para algunos ese compromiso es con la "objetividad"; yo, hace tiempo, renuncié a ella, si por tal cosa se entiende "equidistancia entre las partes".

Prefiero otro compromiso, también complicado, a veces difícil de definir, pero que me parece llenar más las

necesidades profesionales: es un compromiso con la verdad. Frecuentemente la encontramos, no a la mitad del camino, no equidistante entre las partes, sino en uno de los grupos en lucha, lo que puede obligar a abandonar una falsa y aparente neutralidad. Trato, eso sí de que sean los hechos —los mismos que me hicieron descubrir esa verdad en alguna parte— los que la revelen al lector.

Ese es el trabajo de todos los días, el delicado trabajo de todos los días de un periodista. Pero, en este caso, he tratado de plasmarlo en un libro que es documento y catarsis, donde está lo que vi, pero también, de un modo más libre que en un periódico o una agencia de prensa, lo que sentí, esa impresión siempre algo irreal frente a la muerte.

Este es un libro periodístico. Por muchas razones. La principal de ellas es que está basado en material recogido durante varias visitas a El Salvador durante unos dos o tres años, entre 1980 y 1983, en labor informativa. Creo que siempre pensé en la posibilidad de que todo el material recogido en esos viajes podía transformarse en libro, pues fui guardando los cuadernos de apuntes, diez por lo menos, llenos de entrevistas y observaciones personales sobre el desarrollo de la guerra.

Con el tiempo, esas observaciones fragmentarias se fueron conformando en una visión completa de la lucha, que incluye la dimensión humana —los miedos, los rencores, el coraje—, pero también la dimensión militar, política, diplomática y económica. He tratado que la primera contagie a todas las demás, pero no es tarea fácil. Creo que el objetivo está mejor logrado en algunas partes que en otras.

Este es un libro periodístico porque está escrito sobre la marcha de los acontecimientos. No sólo porque he incluido, cuanto fue posible, hechos del día mientras estaba escribiendo, sino porque todo el material que sirvió de base al texto estuvo concebido, en su momento, como producto de los acontecimientos diarios. Eso crea un problema. La información nace, y puede morir al día siguien-

te, con el periódico donde fue impresa. Aquí he tratado de que esa misma información sea ordenada de tal manera que, sin perder su actualidad, permita dar sentido a los acontecimientos a más largo plazo; que, tal como está presentada, sirva durante mucho tiempo como material para entender lo que ha ocurrido y lo que aún va a pasar en El Salvador.

Finalmente, el libro es periodístico también por su estilo, de frases y párrafos cortos, de cierto respeto por la técnica algo tramposa de la "espectacularidad", que los diaristas cargan como un "olfato" y de la cual quiero advertir desde ya al lector, para que no se deje engañar.

Pero, periodista que soy, pienso que esas características son positivas. Sé bien que en ciertos sectores cuando se dice que algo es "periodístico", sobre todo en ciertos medios intelectuales, se quiere decir que es superficial, poco teórico, en suma, de mala o mediocre calidad.

Pretendo todo lo contrario. El periodismo bien hecho aporta un elemento de realismo que llena de vida los acontecimientos. Ese tipo de periodismo no puede limitarse a una superficial descripción de los hechos, ni es tarea para los que sólo manejan bien una que otra técnica, que aplican con eficacia los criterios de la "pirámide invertida", o que escriben cualquier cosa sobre cualquier tema en el trayecto del aeropuerto al hotel en que se hospedarán.

Esa capacidad ayuda, pero si no va adobada con conocimientos certeros de la situación y una sólida formación teórica que permita ordenar los acontecimientos, más que una cualidad, puede resultar un engaño.

Todos esos desafíos se presentan, al escribir un libro como este; si fueron superados y bien resueltos es algo que no puede ser, evidente, evaluado sólo por mí.

El autor

Capítulo I

EL AVANCE DE LA GUERRILLA

No los había encontrado nunca, hasta ese día. Viajábamos a sacudones, a fines de marzo del 83, por un camino que hacía mucho había dejado de prestar servicios, en medio del silencio sobrecogedor de la montaña, lleno de ruidos de pájaros y chicharras, hasta desembocar en la calle principal de San Agustín, en el corazón del país.

Bajando la vista hacia la costa, unos kilómetros al sur, se divisaba el océano. Al norte habíamos dejado, hacía menos de una hora, la ciudad de Berlín en busca de los guerrilleros que, según nos dijeron, ocupaban posiciones aquí. Estábamos muy cerca del Río Lempa, que divide la zona oriental del resto del país, unos cien kilómetros al este de San Salvador.

El camino se ensanchó un poco, un claro anunció el caserío próximo. Los primeros brazos aparecieron; los fusiles empuñados nos indicaban que estábamos en una zona de guerra. Pero, en ese momento no sabíamos con seguridad si eran de la guerrilla o de la defensa civil.

— ¡Son ellos, son los muchachos!, me dijo René, al volante

del carro de alquiler en el que habíamos recorrido, en diversas oportunidades, los rincones más apartados del país.

Era la primera vez que los encontraba. Otros colegas habían estado con los guerrilleros en más de una oportunidad, inclusive en algunos de sus campamentos; pero la experiencia era nueva para mí. Estábamos en plena zona cafetalera, a sólo nueve kilómetros de la importante carretera del litoral, algunos de cuyos tramos controlaba también la guerrilla. Su presencia aquí nos indicaba, a pesar de la calma aparente, que no sólo estábamos en un país en guerra sino que, en ese país, los insurgentes ocupan un espacio cada vez más amplio.

Esa guerra ha costado ya más de 30 mil muertos en los últimos tres años, en su mayoría caídos durante los operativos militares contra las poblaciones campesinas, o asesinados por bandas paramilitares que siguen operando con relativa impunidad.

El Socorro Jurídico salvadoreño, organismo adscrito al arzobispado, denunció en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país que más de 12 mil civiles no combatientes fueron ejecutados en 1982. "No menos del 70 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales serían responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador", agregó el informe. El documento, que fue presentado por el Socorro Jurídico al trigésimo noveno período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, insiste en que prevalece en el país "la voluntad de asesinar". Esa situación dramática ha afectado a prácticamente cada familia salvadoreña.

A la enorme pérdida de vidas humanas hay que agregar la destrucción del aparato productivo y de la infraestructura del país.

El Frente Farabundo Martí ha ido estrangulando lentamente las vías de comunicación de la rica zona oriental, que comprende los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. Después de tres años de guerra, esa región se debate en una difícil crisis, provocada por la constante falta de energía eléctrica, de teléfonos, de agua y combustible.

Sólo San Salvador y los cuatro departamentos occidentales permanecen en una relativa calma, que a veces dan una desconcertante imagen de la situación.

Un diplomático latinoamericano, recién llegado a San Salvador, me decía en marzo de 1983 que las informaciones sobre

la situación del país parecían exageradas, ante el ambiente de normalidad que podía apreciar en la capital.

Yo le dije que tenía razón, y que no la tenía. Las informaciones sobre la guerra se concentran a menudo sobre los hechos espectaculares, los combates y la muerte, dando una imagen de que la guerra es un fenómeno que se puede apreciar del mismo modo, todo el tiempo y en todas partes.

En ese sentido el diplomático tenía razón; las informaciones, concentradas sobre los enfrentamientos ocurridos todos los días, pero en lugares muy diversos del país, dan la impresión, al que ve de lejos la situación, de que El Salvador es uno sólo y permanente frente de batalla.

Al llegar a la capital y encontrarse con que no veía la "lucha", se formó la impresión de que el cuadro había sido exagerado.

Pero la realidad es otra. La información, reducida muchas veces a los enfrentamientos armados, raramente llega a reflejar la profundidad del conflicto y las consecuencias dramáticas que la guerra tiene en la vida diaria del país y de la población. En ese sentido, más bien minimiza la gravedad real de la situación, cuya totalidad no puede apreciarse en una primera mirada sobre El Salvador.

Los sabotajes guerrilleros destruyen permanentemente las torres conductoras de electricidad, impidiendo el funcionamiento de fábricas, de maquinarias, de bombas de agua, en acciones que van desorganizando, paulatina pero profundamente, la vida del país.

Para el que llega a San Francisco Gotera, capital del departamento de Morazán, después de 170 km. de una carretera calurosa, lo más que le puede pasar es encontrarse con que no hay cerveza helada en las pulperías; pero, la vida diaria, en medio de la zozobra provocada por la falta de energía, o de agua, es otra cosa, sin hablar de la tragedia de las muertes y la tensión provocada por la lucha.

Por supuesto, se podría discutir si esa estrategia de sabotajes a la infraestructura y a las fuentes productivas del país favorece o desprestigia a la guerrilla; pero sin duda, deja en evidencia que el régimen es incapaz de asegurar el funcionamiento normal del país. Esa constatación va minando la fe pública en el gobierno y quebrando la resistencia de los que podrían opo-

nerse a un posible cambio.

En los últimos tres años, en los que he acompañado relativamente de cerca el desarrollo del conflicto salvadoreño, tengo la sensación de que la guerrilla va implementando una estrategia envolvente, que reduce el área geográfica de acción de las fuerzas gubernamentales y disminuye su control sobre el país.

Inclusive en San Salvador, si se necesita una nueva línea telefónica, probablemente la respuesta será que es imposible. Los guerrilleros han dinamitado las cajas telefónicas y la empresa de telecomunicaciones no está en condiciones de reemplazarlas ni, mucho menos, de garantizar el fin de los sabotajes.

De este modo, los servicios indispensables a la población, incluyendo, en muchos lugares del interior, el suministro de agua, ya no dependen sólo de la administración pública, sino principalmente de que la guerrilla decida incluirlos dentro de sus objetivos.

Lo que los insurgentes no pueden hacer todavía es ofrecer un servicio propio a los usuarios, lo que refleja, en cierto modo, una situación de "empate".

Esa campaña de sabotajes se ha incrementado notablemente desde los últimos meses de 1981 —cuando las escuadras del FMLN volaron el puente de Oro, una majestuosa estructura sobre el Río Lempa—, hasta octubre de 1982, cuando lanzaron una fuerte ofensiva en el oriente del país, que mantuvieron prácticamente ininterrumpida hasta los primeros meses del año siguiente.

EL ESTRANGULAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION

Después de varias visitas a El Salvador, por lo menos tres de ellas en 1982, y de haber recorrido gran parte de la zona más conflictiva del país, incluyendo unos mil kilómetros durante octubre y noviembre de ese año, que abarcaron desde San Francisco Gotera, al noreste; hasta San Miguel, Usulután y San Vicente, al oriente; Suchitoto y Chalatenango, al norte, se tiene la impresión de que la guerrilla ha extendido su radio de acción, que ha conquistado nuevas posiciones y ha imprimido a la guerra un rumbo favorable a sus intereses.

Al regresar de ese viaje a El Salvador, escribí dos balances de la situación; uno, sobre el aspecto militar; el otro, sobre las consecuencias políticas y económicas de la guerra, donde resumía la impresión de tres semanas pasadas nuevamente en el país.

En el primero de esos balances empezaba reiterando la idea de que el FMLN va "estrangulando" lentamente las vías por donde circulan las unidades del ejército y la riqueza del país. Los militares, agregaba la nota, "con una sangre fría asombrosa o una impotencia suicida —sólo el resultado de la lucha permitirá saberlo— preparan su estrategia reiterando que no están preocupados por la actual ofensiva de los insurgentes".

Si se mira el mapa de El Salvador se ve que el país se angosta precisamente allí donde el río Lempa toma su curso hacia el sur, dividiendo los cuatro departamentos orientales —Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión— del resto de la nación. En el mapa, el río pareciera más bien el cordón con el que la guerrilla ha ido apretando la cintura de El Salvador, hasta estrangular lentamente las venas por donde circula parte importante de la producción agrícola e industrial salvadoreña. La idea de que el gobierno puede morir gracias a ese abrazo poderoso de la guerrilla me quedó dando vueltas en la cabeza.

Hay que recorrer, una y otra vez, las carreteras Panamericana y del Litoral, para darse cuenta de que esas importantes venas están esclerosadas. En marzo de 1982, cuando se celebraron las elecciones constituyentes, se circulaba ya con dificultad por diversos puntos, entre ellos por San Felipe, un poco más allá de la entrada a San Vicente, por la Panamericana; o por la zona de Tierra Blanca, sobre la del Litoral, algunos kilómetros después del destruido Puente de Oro.

A la altura de San Felipe viajábamos detrás de un convoy militar que escoltaba unos 15 camiones cisterna, que transportaban combustible a la zona oriental del país. Pero, al llegar a este punto, próximo a los campamentos que el FMLN tiene en la región, el paso estaba interrupido, mientras un kilómetro más adelante el enfrentamiento entre fuerzas regulares e insurgentes impedía todo tránsito de vehículos.

Nosotros pretendíamos llegar ese día a Usulután, por lo que tomamos por la carretera que, vía San Vicente, conduce a

Zacatecoluca, y, desde ahí, por la carretera del Litoral, hacia el este. Supimos después que los vehículos no pudieron pasar de San Felipe.

La situación no era mejor para el gobierno en la carretera del Litoral. En la misma época, marzo de 1982, Usulután sufrió un fuertísimo asedio de los insurgentes que tuvieron prácticamente sitiada la ciudad; varios kilómetros antes ya se notaba los efectos de la lucha que arreciaba en Usulután. Pasado el Lempa, cruzando por el angosto e improvisado puente ferroviario, la desolación crecía; el abandono de los campos, la ausencia de vehículos en la carretera se iban haciendo notorios, hasta que empezaban ya los síntomas de sabotajes: postes derribados sobre la carretera, zanjas recientes y restos de barricadas hacían el tráfico muy difícil. En enero de 1983, en el marco de una nueva ofensiva guerrillera, el FMLN anunció su control sobre la carretera, en el tramo de unos 12 km., comprendido entre Tierra Blanca y el desvío a Jiquilisco. Recordé entonces ese viaje a Usulután. Cuando regresábamos, después de visitar la ciudad prácticamente sitiada por la guerrilla, acompañados por otros dos vehículos de periodistas, un tiroteo cruzado estalló cuando pasábamos precisamente por ese sector. La rápida marcha atrás, todos echados al suelo, con las puertas de los carros entreabiertas, fue sólo la primera reacción instintiva. Un kilómetro más atrás paramos, para esperar el fin del combate y rehacernos un poco del susto. El nudo estaba apretado ahí también, y no se podía circular sin gran riesgo.

Esa situación ha venido empeorando. Lo que al principio pareció producto de acciones ocasionales de la guerrilla se reveló, a poco andar, una estrategia de profundos efectos sobre la vida del país, que deterioraba grandemente la capacidad operativa del régimen.

En enero leí una entrevista al comandante Joaquín Villalobos, principal dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones integrantes del FMLN, donde analizaba ese proceso.

En junio de 1982, señaló el comandante, el movimiento revolucionario logra pasar de la defensa de posiciones a la guerra de movimiento; el control de las vías de comunicación aparece ahora como elemento fundamental de su táctica militar.

"El nuevo planteamiento militar que se utiliza en la parte final de la campaña, ya casi por julio, es el sabotaje en las vías de comunicación. El ejército se ve obligado a moverse para despejar los caminos; entonces, por nuestra parte, se generalizan las emboscadas de hostigamiento", forma operativa de la guerrilla que cobraría mayor importancia en la ofensiva de octubre. "El sabotaje al transporte va a adquirir en el futuro una connotación estratégica: el cierre, el bloqueo constante de las vías de comunicación y las emboscadas de hostigamiento...se convertirán en una parte fundamental de nuestros planes".

Al comentar la ofensiva de octubre, Villalobos señalaba que el objetivo de las fuerzas insurgentes era llevar al ejército a un colapso moral y proponía tres líneas de acción para lograr ese objetivo, entre ellas la desestabilización del país mediante sabotajes al transporte, a la energía eléctrica, al sistema de comunicaciones telefónicas y al combustible.

Villalobos destaca el hecho de que el oriente del país está prácticamente paralizado desde el punto de vista económico, entre otras cosas por la destrucción de puentes.

"Esta acción sobre las carreteras obliga al ejército a desplegar sus fuerzas; las unidades de élite son enviadas a controlar las vías de comunicación, mientras el ejército va sucesivamente perdiendo posiciones que se encuentran en las zonas de retaguardia nuestra". La conclusión de Villalobos era de que el movimiento guerrillero iba ocupando así el espacio perdido por el ejército, logrando creciente movilidad e influencia política.

Esa es la interpretación de la guerrilla de un hecho que me parece cierto: las vías de comunicación van siendo lentamente estranguladas, sin que el ejército pueda, aparentemente, hacer mucho para impedirlo. Para eso tendría que destruir las bases de operación de la guerrilla o confinarla realmente a partes marginales y aisladas del país.

Pero los acontecimientos recientes de la guerra indican una tendencia absolutamente diferente y en sentido contrario. La guerrilla había logrado consolidar frentes estables de guerra en Morazán, Chalatenango, Guazapa, San Agustín (Usulután), San Felipe (San Vicente) y otros lugares —Villalobos hablaba de siete concentraciones estratégicas de las guerrillas— donde sus fuerzas se abastecen, organizan y descansan mientras

la labor de hostigamiento obliga al ejército a dispersarse por todo el país, en un esfuerzo por evitar los sabotajes.

Como presintiendo las dificultades que la nueva modalidad de acción de la guerrilla podría crearle al ejército, el general José Guillermo García, entonces Ministro de Defensa, anunció, el 10 de octubre de 1982, apenas iniciada una nueva ofensiva guerrillera, un cambio en la estrategia militar. El ejército ya no trataría de desalojar las localidades ocupadas —unas 18, en aquella época— las que estimó como "sin importancia militar", sino que concentraría su atención en cuidar el orden público en lugares más importantes.

Las declaraciones del militar provocaron desconcierto entre los que estábamos en El Salvador, desatando una serie de especulaciones sobre las razones de la medida. El asalto simultáneo de la guerrilla a varias posiciones, en por lo menos tres diferentes departamentos, más el acoso permanente a que estaban sometidas carreteras, torres de energía eléctrica, puentes, teléfonos, obligaba al ejército a una labor que parecía desbordarlo.

A pesar de las declaraciones de García, los militares optaron finalmente por tratar de desalojar a los insurgentes en El Jícaro, Las Vueltas y otras localidades, pero de la mayoría ya los guerrilleros se habían retirado. Cuando el FMLN atacó Suchitoto, veinte días después, la respuesta fue el envío masivo de tropas. Algunas unidades utilizaron tácticas semejantes a las de la guerrilla, empleando pequeños grupos para realizar emboscadas y ataques por sorpresa a posiciones insurgentes, pero la tónica de la guerra siguió sin alteración. El ejército reaccionaba ante ataques y ocupaciones de territorio por la guerrilla que, a su vez, aprovechaba ahora para atacar a las tropas en sus desplazamientos. La imaginación, las nuevas iniciativas, seguían siendo, por regla general, una cualidad exclusiva de los insurgentes.

En ese contexto, las declaraciones de García, de que abandonarían ciertas zonas a los guerrilleros, parecen indicar más bien un momento de confusión, de evaluación precipitada y de falta de una respuesta adecuada frente a la nueva situación.

Se abrió entonces un debate en El Salvador sobre la estrategia militar seguida hasta entonces por el ejército. Salieron a

relucir críticas de los asesores norteamericanos a García por estar utilizando a las unidades de "reacción inmediata" —preparadas por los estadounidenses— en forma inadecuada y, meses después, esa polémica contribuiría a hacer que el ministro perdiera su cargo, siendo sustituido por el general Eugenio Vides Casanova.

Las derrotas en el campo de batalla empezaban a afectar seriamente la conducción de la guerra. La expresión más clara de ese descontento fue la insurrección del comandante del departamento de Cabañas, coronel Sigfrido Ochoa, el 7 de enero de 1983, tras cuya insubordinación no se pudo ocultar la discrepancia sobre la mejor forma de conducir la guerra, además de rencillas personales y políticas entre él y García. Ochoa era considerado entonces partidario de los sectores de extrema derecha en el seno del ejército.

¿Qué es lo que puede ver un observador atento, que trate de descubrir cuál es el rumbo de esta guerra durante su paso por El Salvador, sin estar vinculado ni al ejército ni a la guerrilla? De lo que ve y de lo que conversa, ¿qué cosas le pueden servir de indicadores sobre el rumbo de esta guerra, que parece estar entrando en su fase decisiva?

Ya hablamos de la situación en las carreteras; no hay cifras seguras disponibles, pero diversas estimaciones hablan de una reducción de un 50 a un 70 por ciento en el tránsito de vehículos y transporte de carga.

Ver el cabezal de un camión dinamitado en plena carretera, como lo vi al regresar de Gotera, todavía humeando, consecuencia de la explosión provocada minutos antes de que pasáramos, debe ser un ejemplo aleccionador para cualquiera. Hay pocos propietarios dispuestos a arriesgar en esa forma su capital, salvo por precios muy elevados y cuando no tenga otra alternativa. Pero el tráfico por las carreteras salvadoreñas es una aventura arriesgada y muchas veces sencillamente imposible.

A fines de enero de 1983, la carretera del Litoral quedó cerrada por varios días. Un atentado contra el puente del ferrocarril, paralelo al Puente de Oro, sobre el Río Lempa, aunque fallido, fue suficiente para deteriorar las bases de la construcción e impedir el paso. La situación de guerra que se vive en la zona, intensificada por esos días, cuando el FMLN tomó inclusive

la ciudad de Berlín, la tercera en importancia del departamento de Usulután, a pocos kilómetros de ese lugar, impedía el trabajo de las cuadrillas de reparación. La carretera permaneció cerrada; la alternativa era la deteriorada Panamericana. Los costos del transporte suben y suben.

¿Qué importancia tienen estos hechos en la guerra, cómo afectan la estrategia miliar? Es evidente el grave daño económico que los sabotajes provocan, hasta tal punto que amenazan con derrumbar la estructura productiva del país. Las carreteras y puentes deben ser, por lo tanto, protegidos.

Entre julio de 1981 y febrero del año siguiente, el FMLN reivindicó la destrucción de 12 puentes en el país, incluyendo el Puente de Oro, dinamitado al conmemorarse el segundo aniversario del golpe militar de octubre del 79.

Una evaluación de las acciones armadas en ese período, hecha por la comandancia guerrillera, destacó que el FMLN había pasado a controlar "una gran cantidad de vías de comunicación secundarias", manteniendo "un control más o menos permanente de las vías de comunicación estratégicas, estableciendo corredores de movimiento militar que atraviesan todo el país".

En una evaluación general de la situación, el FMLN destacaba que a partir de julio-agosto de 1981, después de la primera ocupación de la localidad de Perquín, en el norte de Morazán, sus fuerzas pasaron a una etapa "más ofensiva y definitoria de la guerra".

La elevación de su capacidad combativa, el desarrollo de las comunicaciones, el aumento de los cuadros capacitados en el mando y el desarrollo de la coordinación estratégica de sus unidades, el mantenimiento de la logística, principalmente del abastecimiento de municiones, fueron algunas características del desarrollo de la guerrilla destacadas por sus dirigentes.

En febrero de 1982, el FMLN estimó, cuando preparaba las acciones para hacer frente a la convocatoria electoral del mes siguiente, que el ejército necesitaba concentrar por lo menos 10 mil efectivos para tratar de aniquilar cualquiera de los frentes guerrilleros. "Aparte de esos 10 mil efectivos, necesitarían mantener por lo menos una cantidad equivalente al 30 por ciento de esa fuerza como unidades de reserva, para utilizarlas dentro del mismo operativo".

El ejército llevó a cabo, después de los comicios de marzo, diversas ofensivas de gran envergadura con ese objetivo, sin resultados efectivos. Recién un año después, en julio de 1983, cuando García había abandonado ya el gabinete, cerca de 17 mil hombres fueron enviados al departamento de Chalatenango, para tratar de recuperar las posiciones perdidas. A pesar de esa enorme concentración de tropas, no se informó de grandes combates; los insurgentes se movilizaron, esperando una mejor oportunidad de enfrentarse a los militares.

En junio de 1982, luego de los comicios, el FMLN estaba de nuevo a la ofensiva, otra vez en Morazán y, más particularmente, en Perquín, una altura estratégica en esa región. "Se trataba entonces de pasar de la defensa de posiciones a la guerra de movimiento, pasar de la dispersión a la concentración de fuerzas", dijo el comandante Joaquín Villalobos, miembro de la Comandancia General del FMLN.

Los insurgentes logran causar grandes bajas a las tropas que se movilizan a la zona para tratar de reforzar sus posiciones, hacen 43 prisioneros, capturan más de 170 fusiles, para, finalmente, derribar el helicóptero en que se transportaba el viceministro de Defensa, coronel Adolfo Castillo, al que apresan.

Es en esa época cuando el sabotaje al transporte se hace más intenso y el control de las vías de comunicación adquiere particular importancia militar.

Ese pequeño puente, que cruzamos tantas veces en cualquier lugar del país, sin siquiera darnos cuenta de su existencia, en una situación de guerra cobra una importancia extraordinaria. Eso salta a la vista cuando, al proximarnos, vemos ahí un destacamento militar, de diez a treinta hombres, quizás más, quizás menos, es imposible precisar con exactitud, protegidos por casamatas y barricadas que obligan a los vehículos a disminuir la velocidad.

El Salvador es un país recortado por innumerables ríos y, por lo tanto, por muchos puentes. Yo no pude estimar la cantidad de hombres necesarios para cuidarlos todos o, por lo menos, a los más importantes. Pero si calculamos unos 30 puentes indispensables y un promedio de 30 hombres custodiando cada uno —hay que recordar, por ejemplo, que en el Río Lempa, tanto por la carretera del Litoral como por la Panamericana, esa cifra es

muy superior, así como lo es en otros puentes de mayor importancia— no sería exagerado pensar que casi mil hombres hacen falta para cuidarlos todos. Son casi mil hombres clavados en esas posiciones, esperando, día y noche, que en cualquier momento un grupo guerrillero intente dinamitarlos.

A esos mil hombres hay que sumar los que deben estar patrullando las carreteras. No son muchos; en realidad prácticamente han desaparecido los patrullajes en vehículos, en los últimos meses de 1982, ante la posibilidad de una emboscada. Pero ese peligro obliga a concentrar fuerzas en determinados puntos, para proteger los caminos, o a ubicar unidades a lo largo de las carreteras, en lugares bien defendidos.

En la carretera que conduce de San Martín a Suchitoto —ciudad que habrá tenido unos 30 mil habitantes en sus mejores tiempos, ubicada 50 km. al norte de la capital—, a partir de un puente ubicado unos 20 km. antes del lugar una patrulla militar ha tomado posiciones en cada elevación al borde del camino. Es imposible saber exactamente cuantos hombres son, pero su número debe andar cerca de los doscientos. Ahí están protegiendo una carretera que no tiene por sí misma una importancia estratégica, pero que, de ser descuidada, sería inmediatamente copada por la guerrilla, aislando aún más esa sitiada ciudad.

¿Cuántos guerrilleros hacen falta para poner en jaque tal cantidad de hombres? Quizás unos 20 ó 30 son suficientes para hostigar permanentemente la zona y "clavar" en esas posiciones a centenares de soldados. Por eso es que, en una guerra de guerrillas, los expertos militares calculan que las fuerzas regulares deben contar con diez hombres por cada guerrillero, si quieren triunfar. Por supuesto, eso es así porque la guerrilla cuenta con un apoyo de retaguardia prestado por la población, que permite a esos 30 hombres sobrevivir, esconderse y descansar. De no ser así, serían fácilmente aniquilados.

Suchitoto es una localidad cercana y de fácil comunicación con la capital, escenario de frecuentes ataques de la guerrilla y, por lo tanto, visitada con frecuencia por los periodistas.

En noviembre del 82 volví nuevamente allí y quedé impresionado por lo que me parecía un rápido deterioro de la situación, de las condiciones de vida en la ciudad. Lo comenté con el capitán que comandaba las tropas y él discrepó.

—Hace dos meses, cuando llegué aquí, me dijo, sólo venían dos buses al día, desde San Martín, en el entronque de la carretera a San Salvador. Ahora vienen siete, agregó, pero hubo que controlar la carretera con auxilio de tropas enviadas por el Estado Mayor.

Así se explicaba el aumento de tropas en las cimas que dominan el camino, cuya presencia me llamó la atención. Para el militar, eso representaba una mejoría de la situación, pero yo quedé pensando si, desde el punto de vista militar, se justificaba el empleo de tantos soldados para garantizar el aumento de la frecuencia de buses de dos a siete. La respuesta parece obvia, pero ¿cuál es la alternativa?

Eso no es todo. En octubre, hacía ocho meses que la ciudad no tenía agua, debido a un sabotaje. El oficial me dijo que ya había localizado el daño, en un lugar de difícil acceso, pero no muy lejano de la ciudad. Sin embargo, necesitaba un refuerzo de 150 hombres para proteger a los obreros que harían la reparación. Las solicitudes que había enviado al Estado Mayor, explicando sus necesidades, en este caso no fueron siquiera contestadas, se lamentó.

Es un ejemplo dramático de la situación. Ocho meses sin agua una población que tuvo, en algún momento, más de 20 mil habitantes (alguien me dijo que llegaban a 30 mil) porque no había disponibilidad de 150 soldados para asegurar la reparación. Multiplicado por decenas de sabotajes similares al mes, en todo el país, ¿cuántos hombres se necesitan, ya no digo para prevenir, sino para reparar pequeños daños causados por la guerrilla?

Todo eso me parece conformar un cuadro alarmante de deterioro del control gubernamental sobre el país.

En Chalatenango hice un comentario parecido con el comandante del batallón Sierpe, una de las unidades especiales acantonadas en esa capital departamental, el mayor Avilés.

El militar nuevamente contradijo mi observación, pero no me convenció, a pesar de que pienso que hablaba honestamente, sin afán de hacer propaganda.

El razonamiento del mayor era el siguiente: hace pocos meses no se podía salir de noche en las calles de la ciudad. Los guerrilleros, apostados en lomas cercanas, hostigaban permanentemente, disparando. "Ahora, me dijo, se puede salir a cualquier

hora". Se ofreció inclusive para acompañarnos a dar una vuelta por la ciudad, solos, sin guardias, y relató que, el día anterior, realizaron un cateo en la ciudad, durante toda la noche, encontrando sólo tres viejos revólveres en manos de los ciudadanos. Esto le parecía un claro ejemplo de normalidad.

Nuevamente quedé con la impresión de que los costos militares para el logro de esa tranquilidad no guardaban relación con las necesidades del conjunto de la guerra.

Posiblemente, pues no tengo las cifras exactas, hubo que multiplicar hasta por diez el número de efectivos instalados en el cuartel de Chalatenango para poder disfrutar de esa tranquilidad en la ciudad, limitada, por supuesto, a unos cinco o seis kilómetros a la redonda, en dirección norte o este.

Esto se está repitiendo en todo el país, de acuerdo con todas las indicaciones obtenidas y no hay ejército que pueda aguantar mucho tiempo ese ritmo.

Los atentados contra las torres de conducción de energía tienen también ese doble efecto, sobre la economía y sobre la estrategia militar.

Sobre la economía, las consecuencias son obvias e inmediatas: la falta de luz paraliza industrias y deja también sin agua a las poblaciones afectadas. Los norteamericanos han tratado de paliar en parte esos efectos donando plantas de emergencia, que funcionan con diesel. Pero los atentados en las carreteras han hecho escasear rápidamente el combustible en toda la zona oriental del país, la más afectada por los sabotajes, obligando a un racionamiento cada vez más estricto.

Sobre la estrategia militar, los efectos son también, a la larga, devastadores. Hay que destinar una cantidad creciente de hombres para proteger las cuadrillas de reparación de aquellos daños más importantes; pero, ante la imposibilidad de repararlos todos, ante el ritmo de la destrucción, el gobierno va siendo desbordado rápidamente. Es una guerra de desgaste infernal que está consumiendo al ejército. Se ha llegado a un punto en que es evidente el fracaso de la estrategia de "sacar el pez del agua", similar a la utilizada por los norteamericanos en Vienam (con los mismos resultados) y que consiste en tratar de aislar a los guerrilleros de la población, para luego aniquilarlos.

Ni las patrullas civiles, creadas en los cantones, ni el bombardeo de esas poblaciones que deben, finalmente, ser abandonadas por los pobladores, han logrado cortar ese cordón umbilical con la población que es vital para la guerrilla.

Para ésta, el estrecho contacto con la población es absolutamente decisivo. La solución de ese problema tuvo características muy originales en El Salvador, donde la ausencia de territorio disponible para la preparación inicial y clandestina de la guerrilla, en la montaña o en la selva, los obligó a realizar el entrenamiento militar en una absoluta clandestinidad, prácticamente dentro de las poblaciones o de los caseríos, en territorio enemigo. Pero la dificultad inicial de esa preparación rindió luego frutos excepcionales, pues la guerrilla no estuvo nunca compartimentada de la población; tuvo que contar siempre con un apoyo decisivo para poder desarrollarse. De ahí su crecimiento espectacular en sólo dos años, desde la insurrección de enero de 1981 hasta inicios de 1983.

Así se explica también, en parte, el fracaso de la estrategia de "sacar el pez del agua". Es evidente que en eso ayudó también la imposibilidad de los diferentes gobiernos que se sucedieron desde octubre de 1979 de llevar a cabo una política popular, en particular la tan anunciada reforma agraria, concebida (como en Vietnam) como parte de la lucha contrainsurgente. Se trataba de restar el apoyo de los campesinos pobres a la guerrilla, dándoles un pedazo de tierra donde cultivar, principalmente en las zonas más pobres de Chalatenango y Morazán. Pero, cuando fue promulgada, ya no había condiciones de llevarla a cabo en esos lugares y, luego se vio, tampoco existían condiciones políticas para realizarla en el resto del país. La reforma se paralizó a poco andar, dando otro golpe decisivo a la estrategia contrainsurgente.

Al ejército no le va quedando entonces otra alternativa que aniquilar la fuerza guerrillera y cortar su suministro de armas, municiones, víveres y medicinas.

De ahí también la creciente participación del ejército hondureño en el conflicto, cercando la frontera entre ambos países, con el pretexto de impedir la violación de su territorio por cualquiera de las partes en pugna. De hecho, el ejército salvadoreño y los grupos paramilitares de ese país ingresan cuando quieren a territorio hondureño, con la complicidad de los militares de esa nación, como lo pude comprobar con decenas de testimonios de

los campamentos de refugiados salvadoreños en Honduras.

La verdad es que el ejército hondureño se ha alineado con sus colegas de El Salvador, a pesar de la humillante derrota que éste infligió a Honduras durante la corta guerra que libraron en 1969. El comandante de las fuerzas hondureñas, el general Gustavo Alvarez, no oculta su opinión de que "nuestros enemigos son los mismos enemigos del ejército salvadoreño".

Esa internacionalización del conflicto es una de las consecuencias más graves del fracaso de los planes de contrainsurgencia llevados a cabo por el ejército salvadoreño, con la asesoría militar norteamericana y el respaldo financiero y político del gobierno de ese país.

A pesar de que la participación del ejército hondureño en la lucha ha sido hasta ahora limitada a la zona fronteriza, la tendencia parece ser de una intervención creciente. Las dificultades del ejército salvadoreño para contener a los insurgentes abonará el camino para los que propugnan por una mayor e inevitable injerencia si se quiere evitar la derrota.

La alternativa de cercar a los guerrilleros por la espalda, de prensarlos entre dos fuerzas, las salvadoreñas atacando por el sur y las hondureñas sirviendo de yunque en la retaguardia, tiene que haber sido ya mil veces estudiada. Quizás podrían así eliminar dos de las principales concentraciones guerrilleras en el país, las de Chalatenango y Morazán, que desempeñan también un papel decisivo en el abastecimiento de las fuerzas rebeldes.

La ciudad de Chalatenango está a pocos kilómetros de la frontera, unos 20 quizás, hasta el punto más próximo del limítrofe Río Sumpul, escenario de una terrible masacre, en mayo de 1981, cuando el ejército hondureño cerró el paso a los hombres, mujeres y niños que buscaban refugio del otro lado, ante la acción del ejército salvadoreño.

El ejército, me parece, está siendo paulatinamente "clavado" en el terreno, inmovilizado, obligado a reaccionar ante la iniciativa de los rebeldes que están ahora en condiciones de emboscarlos en todas partes; ha ido perdiendo control del territorio y control político sobre la población, espacios que han sido ocupados por el FMLN.

De seguir esta progresión de la guerra, no hay duda de que el triunfo de la guerrilla no está lejano. Pero me sorprendería mucho que éste pueda venir sin tener que enfrentarse a maniobras desesperadas que no serán otras que una intervención extranjera, de otros países de la región, principalmente de Honduras, o la directa de los norteamericanos, que no ha sido nunca descartada.

Yo sé que algunas embajadas en San Salvador están ya informando a sus cancillerías que, de seguir el rumbo actual de la guerra, la única perspectiva para el gobierno salvadoreño, en las actuales condiciones internacionales, es la intervención norteamericana. No desconozco los problemas que esa intervención tendría que enfrentar, pero si las políticas adoptadas sólo contemplan un rumbo, el de la "colisión", hay que sacar de eso todas las conclusiones.

EL ACOSO GUERRILLERO

En octubre del 82, apenas iniciada una gran ofensiva insurgente que coincidió con la presentación, en México, de una nueva propuesta de negociación del FMLN y del FDR, un largo recorrido por el país mostraba las consecuencias de la extensión de la guerra, principalmente en los departamentos orientales.

Hice cuatro giras por esa región; una de ellas a San Francisco Gotera, capital de Morazán. Nunca había estado en Gotera desde que empecé a ir a El Salvador. La situación en el lugar está siempre "muy mala" y es peligroso ir, me dicen. Esta vez, decidí partir hacia allá al día siguiente de llegar a San Salvador, sin averiguar mucho cómo estaba. De otro modo corría el riesgo, nuevamente, de no ir.

Llegué en la tarde de un miércoles a San Salvador, procedente de San José, y partí, en un taxi alquilado, el jueves temprano hacia Morazán. Nadie estaba interesado en ir a Gotera ese día, algún otro acontecimiento atraía la atención de los demás periodistas en la capital salvadoreña. Fui entonces solo, con el chófer del taxi, un personaje extraordinario, que ha recorrido no sé cuántas veces El Salvador cubriendo, con diversos periodistas, los acontecimientos de esa guerra. Eso era, de cierto modo, una imprudencia, pues el FMLN había prohibido circular por las carreteras, sobre todo en la zona oriental donde ejercían un mayor control, y lo conveniente era siempre andar en más de un carro,

por si ocurría algún incidente.

Días antes, al iniciarse la ofensiva de octubre, la guerrilla se había apoderado de San Fernando, Torola, Perquín y otras localidades al norte de Morazán, prácticamente fronterizas con Honduras.

Sólo en el primer mes de esa ofensiva, el FMLN reivindicó haber hecho 210 prisioneros, capturado 422 fusiles, 25 armas de apoyo, incluyendo 2 morteros de 120 mm y más de 100 mil cartuchos de diferentes calibres.

Particularmente en Perquín los combates habían sido duros y exitosos para los insurgentes: 44 soldados, entre ellos un capitán, fueron hechos prisioneros y muchas armas capturadas.

El viaje a Gotera, en busca de noticias, pudo haber sido totalmente infructuoso, como ocurre muchas veces en que se sale a recorrer alguna zona del país y se vuelve a la capital sin nada. Esta vez, sin embargo, resultó particularmente interesante.

A fines de octubre la época de lluvias está terminando, pero el verde todavía predomina en las montañas, aun en las pobres y áridas montañas del norte y noreste salvadoreño. Hace calor, pero no demasiado, a pesar de las casi cuatro horas de carretera a pleno sol.

En contraste, el clima emocional está muy caldeado; los soldados están tensos, se ha combatido durante las semanas anteriores, han sufrido severas bajas, y aún se escuchan los disparos, esporádicos, en las montañas.

Poco después del Río Chiquito —que debemos vadear, pues el puente ha sido destruido hace varios meses y no ha sido reparado— un retén militar nos hace el alto. Jóvenes, con las caras cobrizas del campesino, nerviosos, fusiles en bandolera, dedos en el gatillo, miradas desconfiadas; estamos a muy pocos kilómetros de Gotera.

—¿Quiénes son, adónde van, qué quieren, a quién van a ver?, las preguntas se suceden, después de detener el vehículo, en medio de un registro minucioso. Abren la guantera, donde una hoja solitaria llama la atención del soldado.

— ¡A ver esta hoja!, dice desconfiado. Estaba en blanco.

Quizás nuestro aspecto —sin zapatos, el pantalón arremangado, los pies evidentemente mojados, la barba—, contribuye a la desconfianza de los siete u ocho soldados del retén. Ahí atrás, al cruzar el río, demasiado hondo para el viejo taxi, quedamos

varados. La alternativa es sacarse los zapatos, las medias, arremangarse el pantalón y empujar, hasta que aparezca alguien dispuesto a ayudar. Un camión, una cuerda y en un minuto estamos al otro lado, pero el aspecto queda algo desmejorado y los soldados no ocultan su desconfianza con éstos que parecen venir bajando de la montaña.

Vencido el retén, las primeras señales de que nos aproximamos a Gotera aparecen; aumenta el movimiento en la carretera, la presencia militar es mayor; las casas se suceden con mayor frecuencia. Entramos a la plaza por un costado de la Iglesia, al otro lado está el cuartel.

Rodeada de cerros, Gotera da la sensación de una "olla" bien vigilada por los ojos de la guerrilla. No pude deshacerme de la sensación de que allí, hacia el este o el oeste, ojos atentos observaban desde la montaña los movimientos de la ciudad, una plaza de guerra, la capital departamental más próxima a la línea del frente.

Ya había sentido una sensación similar hace unos dos años, cuando entramos a San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango, con un grupo de periodistas, unos 30 quizás. La población aún ardía, 24 horas después de terminados los combates y los bombardeos. Parecía que los guerrilleros observaban desde las montañas a los que llegaban ahora a ese lugar abandonado.

Un disparo, por ahí, recuerda que Gotera está cerca de la línea de fuego, mientras converso con el coronel, a cargo de las tropas en el lugar. Me pide no identificarlo por su nombre. Amable, tranquilo, lo encontré esa mañana con tres asesores militares norteamericanos quienes, vestidos de civil, se sorprenden de vernos en Gotera.

—¿De dónde vienen? ¿De San Salvador? ¿Ya se puede pasar?

Nuestra presencia allí es una respuesta notoria y se alegran, pues eso indica que las cosas "están mejorando", que la carretera está abierta. La ofensiva guerrillera se había iniciado dos semanas antes y desde entonces había estado intransitable; la guerrilla acechaba en diversos puntos, encargándose de que nadie pasara o amenazando seriamente a los que intentaran.

El coronel no quiso hablar de esos tres hombres que lo acompañaban, diciendo que eran miembros de organizaciones humanitarias que habían venido a estudiar el problema de los

refugiados. Una mentira piadosa, ciertamente.

Vestidos de civil, pero todos con su pistola al cinto, en cumplimiento de las normas impuestas por el Congreso Norteamericano para su permanencia aquí: deben estar alejados de la línea del frente y no portar armas de guerra. Se los había visto en otra oportunidad en el campo, armados de fusiles, evidentemente participando en operativos militares y la denuncia, hecha por la televisión norteamericana, provocó un pequeño escándalo y obligó a una mayor prudencia.

Hacía nueve días, un 12 de octubre, cuando en América Latina se conmemora el "Día de la Raza", las fuerzas del FMLN atacaron y ocuparon Perquín. "Esos salvajes celebraron ese día en forma tan criminal", me comenta el coronel. Aquí, evidentemente, no hay feriados.

El jefe militar de Morazán estimó que el FMLN tenía seis campamentos en la región y controlaba unos 400 km. cuadrados. La evaluación sobre la cantidad de efectivos de la guerrilla variaba grandemente; el coronel las estimaba en cerca de mil hombres, mientras otros oficiales y soldados creían que podía llegar a unos 2.500. Los soldados que habían participado en los combates de esos días se limitaban a decir que eran "muchísimos", ciertamente influenciados por la dureza de la lucha que acababan de enfrentar.

Según el comandante de Morazán, el objetivo de la guerrilla había sido el de ocupar Meanguera, la última población sobre la carretera que une Perquín a Gotera, antes de cruzar el río Torola. Ese objetivo no había sido logrado. Sin embargo pocos meses después, en enero del 83, un nuevo ataque de gran envergadura en Morazán permitió a las fuerzas del FMLN ocupar provisionalmente Meanguera.

El FMLN señaló entonces, por medio de su clandestina radio Venceremos, que sus fuerzas controlaban 18 poblaciones en el departamento y una superficie de 1.200 km. cuadrados, en vez de los 400 estimados por los jefes militares.

Es difícil saber exactamente la realidad, pero la cifra puede estar entre los dos extremos.

En ninguna otra parte del país la guerrilla está tan fuertemente implantada. Un incipiente poder revolucionario está ya establecido, lo que permite iniciar una pequeña producción agrícola y ejercer ciertas funciones administrativas, como de

justicia, de educación y salud.

Según los militares de Gotera, los insurgentes viven "del ganado que roban en las haciendas". Eso no es más que una mínima parte de la verdad; el término "robo", además, en las condiciones de guerra, carecen ciertamente del sentido que los militares le quieren dar.

Una población difícil de calcular sigue a los guerrilleros, vive con ellos en sus campamentos o en las zonas bajo su influencia.

La tierra del norte de Morazán, como en el norte de Chalatenango, es de las más pobres del país, lo que explica también que las cosechas de maíz o de frijoles no alcancen para el consumo de las fuerzas del FMLN y de los campesinos que los siguen. Aún dentro de una situación miserable, hay que alimentar a esa gente, entre ellos mujeres, niños y ancianos; es la condición trágica de la guerra.

En ese marco, la condena al "robo" de animales es parte de una campaña propagandística, sin desconocer que esa actitud contribuye a veces a restar apoyo a los insurgentes entre la población afectada que, muchas veces, son campesinos pobres. El equilibrio entre el hambre y las necesidades de la estrategia política no debe ser el problema menor que los dirigentes del frente nororiental tienen que resolver.

LA CONQUISTA DE POSICIONES

Una de las características de la guerra, sobre todo a partir de la ofensiva guerrillera de junio de 1981, es la creciente ocupación de territorio, sin que eso signifique que, en El Salvador, existan "zonas liberadas", territorios donde ya el ejército no puede entrar. La guerrilla ejerce su influencia ahí, pero no es completamente autosuficiente; el ejército puede entrar con grandes unidades, destruir campamentos y siembras de los irregulares.

En octubre de 1982, el FMLN ocupaba gran parte del territorio de Morazán ubicado entre el río Torola y la frontera con Honduras. Diversas poblaciones han sido abandonadas por sus moradores; el ejército considera que cualquier persona

que viva ahí es guerrilero o simpatizante de la guerrilla, lo que, para ellos, viene a ser lo mismo: su captura representa la muerte.

Desde esos campamentos las fuerzas del FMLN operan. Cuando atacaron Perquín, capturando a la guarnición de 44 hombres, entre ellos al capitán Jesús Manuel Flores, "había mal tiempo", y nos dieron poco apoyo aéreo, principalmente de helicópteros", explicó el coronel, en Gotera.

La ocupación y desalojo del terreno por cada una de las partes en lucha se sucedía en esa región, a fines de 1982. En octubre, los guerrilleros bajaron hasta las cercanías de Meanguera, cuando el ejército montó un gran operativo para desalojarlos.

"Se peleó duro desde las márgenes del Torola hasta Jocoaitique, les causamos numerosas bajas, pero los cadáveres se los llevaron, como lo hacen habitualmente y, debido a las bajas, optaron por retirarse a sus campamentos".

Una semana después del ataque podíamos llegar efectivamente hasta Jocoatique; más al norte seguía siendo territorio del FMLN.

La guerrilla, nuevamente, había optado por atacar, montar emboscadas, hacer prisioneros, recuperar armamentos y municiones, para luego retirarse en orden y con pocas bajas, como lo revela el hecho de que los militares difícilmente encuentran cadáveres en el campo.

Consultado sobre los avances de la guerrilla en el plano militar, el jefe de las fuerzas de Gotera estimó que habían mejorado su armamento; citó el uso de cañones de 90 mm y morteros de 81 y 120 mm, además del temible RPG-2 o "Bastón Chino", como parte del armamento del FMLN en la zona, además de una notoria mejoría en las comunicaciones.

Pero lo que más impresionó al militar fue el hecho de que "el fuego les estaba cayendo encima y seguían ahí, como si nada; yo creo que se drogan", fue la única explicación que encontró para justificar esa actitud suicida. Por supuesto, no ha habido nunca un indicio de que los guerrilleros se droguen para pelear y creo que sería difícil lanzar una ofensiva exitosa drogados. La explicación debe ser otra, probablemente una disposición de lucha que impresiona a los oficiales y soldados.

Del punto de vista militar, de la moral combatiente, de las bajas causadas al otro bando, de la recuperación de armas y municiones, la ofensiva de octubre del 82 terminó con un saldo extraordinariamente favorable a la guerrilla. Pero los militares estiman que, por el contrario, esa guerra está desgastando a los insurgentes y que, a la larga, les favorece. Será el desarrollo de los acontecimientos el que dirá quién tiene la razón.

La población de Suchitoto está ubicada en una altura que domina la presa de Cerrón Grande. Unos 20 km. al suroeste de la ciudad se encuentra el volcán Guazapa, que hay que bordear para llegar a San Salvador.

Guazapa es un fuerte reducto guerrillero, desde donde los insurgentes operan, tanto hacia el este como hacia el oeste, sobre la carretera a Chalatenango.

En las faldas del Guazapa, en el cantón de Palo Grande, están instalados los campamentos guerrilleros, según nos informan los militares y, desde allí, operan contra la ciudad, emboscando a las unidades militares, hostigándolas; de ahí la tensión que se observa desde el camino.

Hace casi tres años empezaron en esa localidad los síntomas de una escasez de agua que luego se hizo crónica. A pesar de la cercanía de la presa, Suchitoto, caliente y seca en verano, empezó a padecer sed, por los sabotajes. El agua era traída de San Martín, en camiones cisternas, pero los ataques guerrilleros fueron obligando a espaciar las entregas, hasta atacar y destruir el último camión. Desde entonces, el viaje es hecho por convoyes militares, fuertemente escoltados; pero la escasez fue obligando a la población a emigrar.

El 28 de junio del 82, el FMLN atacó Suchitoto por primera vez en forma masiva. Unos 300 guerrilleros, según los militares, la cercaron y hostigaron, pero sólo pudieron ingresar a un barrio cuyas calles desembocan en pleno campo.

A fines de octubre un nuevo y fuerte ataque vino a poner en una situación aún más precaria la defensa de la ciudad, hasta que, en febrero del 83, pusieron en desbandada las fuerzas que custodiaban la carretera y las afueras de la ciudad, en cuyo interior los militares se mantuvieron sitiados una semana.

El ejército no ha podido romper el cerco tendido por el FMLN, convirtiéndola cada vez más en una plaza de guerra. La imposibilidad de desalojar los campamentos ubicados en las cercanías impide poner fin al hostigamiento y a los sabotajes.

La vida, en una pequeña población del interior salvadoreño como Suchitoto, se ha transformado rápidamente. No es, ciertamente, ni parecida a la dureza que los insurgentes debían enfrentar en sus campamentos, en los primeros años de la guerra, pero no tiene nada de la normalidad de 1980.

La ciudad, con algunas calles empedradas, otras de tierra, es una población semi-rural. Saliendo de la calle central, a pocas cuadras, dependiendo de la dirección, se está en pleno campo.

La ciudad languidece. La guerra ha ido cortando sus vínculos con el resto del mundo. El mercado colorido que el visitante encontraba a la entrada de la ciudad, a dos cuadras de la plaza, está muy reducido. Los comercios establecidos han cerrado, algunas ventanas aparecen tapiadas con ladrillos, en un esfuerzo por proteger la mercancía que ya no existe. Por la calle central, empedrada, una sola pared de adobe serpentea, cuadra tras cuadra; sólo los cambios de colores —del blanco, al verde, al rosado— van indicando que, tras el muro uniforme, hay diferentes casas y familias.

Uno de los negocios siempre muy concurridos en el lugar es el de los molinos de maíz. Las mujeres, algunas niñas, con sus palanganas en la cabeza, se agolpan en la modesta casa, esperando el turno para moler su maíz. A 15 centavos la palangana, un poco más, un poco menos, de acuerdo con el tamaño. Los cuatro sencillos aparatos, instalados en un cuarto angosto, con piso de tierra, pertenecen al jefe político de la ciudad. A las once de la mañana, el lugar está lleno, los pequeños molinos van transformando los granos de maíz en una pasta que las mujeres luego palmearán, para darle la forma redonda y delgada de la tortilla, que cocinarán a fuego de leña; es el acompañamiento obligatorio de cualquier comida.

Se ven muchos niños, mujeres y ancianos, pero no hombres jóvenes en la ciudad; hay temor al reclutamiento y no hay trabajo. Algunos se habrán incorporado al ejército, otros a la guerrilla y otros habrán ido a buscar mejor suerte a otra parte.

A mitad de la calle, un letrero pintado en apagadas letras azules invita: "SE ARQUILAN PIESAS HINTERIORES, ENTENDERSE CON ANJELA AGUIAR".

Más allá de estas calles, es la guerra.

En las afueras se siembra maíz y frijoles, pero los cultivos

están muy reducidos, limitándose a las tierras que bordean la carretera. El ganado y la pesca complementan la dieta. Al otro lado de la presa, los cultivos y los animales pertenecen a la guerrilla.

Atrapada en su pasado, una anciana enrolla con dedos hábiles y ennegrecidos, unos pequeños puros. Sus manos diestras se mueven con rapidez sobre la mesita rústica, para fabricar más de 500 al día. Los puros van cayendo a un canasto en el piso: dos, de buen tabaco, valen 15 centavos. Hasta hace poco, por ese precio se podían comprar cinco, pero la inflación ha llegado también aquí. De todos modos, con un dólar se puede comprar casi 60 puros. Estamos en otro mundo, ciertamente.

El tabaco es un producto importante de esa zona, pero su cultivo está cada vez más restringido, porque las tierras disponibles y seguras son cada vez menos.

OTRA VISION DE LA GUERRA

Los soldados están cansados también de esta realidad y no lo ocultan. Por un lado, la carga de la atención a los civiles afectados por el conflicto recae cada vez más sobre el ejército. Por otro lado, los militares que conviven diariamente con la guerra, en el frente, ven las dificultades para lograr la victoria y las consecuencias de la enorme destrucción que se está produciendo.

Se enfrentan también, desde una nueva perspectiva, con las realidades de un sistema de injusticia tradicionalmente imperante en el país.

"No es lo mismo estar en San Salvador, viendo en un mapa el avance de las tropas, que estar aquí avanzando", me comentó un oficial, en Suchitoto.

En todo caso, el militar estimó que la situación de la guerrilla era aún más precaria que la de su tropa.

La guerra empieza a ponerlos también frente a la realidad de la vida de los campesinos, en el interior del país. Ellos la conocen bien, pues de ahí provienen muchos, pero tienen ahora, como autoridades, el poder para intervenir ante ciertas situaciones de notoria injusticia.

Un capitán me relataba indignado una estafa en un juzgado local, donde el secretario del juez se quedó con mitad de la in-

demnización otorgada a una pobre mujer que vio a su hijo morir atropellado. Esas tragedias personales; la vida, cruda como lo es normalmente para esa gente humilde, termina por indignar a ciertos oficiales y soldados. Pasó lo mismo con otros ejércitos enfrentados a la guerrilla y recuerdo por ejemplo que, en Perú, los oficiales revolucionarios que tomaron el poder con Velasco Alvarado, en la década de los 60, tuvieron como principal escuela la lucha contrainsurgente.

Esto ya empieza a verse en El Salvador. Impacta también a esos oficiales la enorme destrucción provocada por la guerra, que amenaza con terminar con la infraestructura del país; la necesidad de poner fin a eso gana fuerza en forma creciente en el seno de los oficiales jóvenes. Hay conciencia, por lo menos en ciertos sectores militares con los que conversé, de que no se puede detener esa destrucción sin poner fin a la guerra, cosa muy distinta a la opinión prevaleciente en el alto mando, de intensificar la lucha, para tratar de liquidar a la guerrilla. Ese es el camino más corto para arrasar también con el país, y los militares, en el frente, lo saben. Quien triunfe, heredará una nación arrasada.

La guerra, al prolongarse, va abriendo cauces a inquietudes insospechadas y provocando una crisis cada vez más aguda en las fuerzas armadas, a medida en que el triunfo parece lejano y las previsiones optimistas, carentes de fundamento.

La dramática situación del país en los últimos años, pero particularmente desde que el general Romero asumió el poder, en 1977, empezó por hacer conciencia en el seno de la fuerza armada de que era necesario impulsar reformas si se quería evitar un triunfo revolucionario a corto plazo.

Se trataba de llevar a cabo, en particular, una reforma agraria que permitiera restar apoyo campesino a los insurgentes. Los militares se pusieron detrás de la idea, impulsada inclusive por el general García, ministro de Defensa durante los tres primeros años del gobierno surgido con el golpe de 1979. Era un apoyo tímido, casi avergonzado, a una reforma que ha perdido todo impulso transformador, ahogada por la represión y la guerra. Pero el plan original impulsado por la embajada norteamericana, el ejército y la democracia cristiana era el de realizar ciertas transformaciones necesarias en el país, para evitar que cayera en manos de la izquierda.

Otras ideas se abren paso también en el seno del ejército. A fines de octubre del 82 escuché, por primera vez en boca de un militar, conceptos que revelan la conciencia de que el conflicto salvadoreño es una guerra prolongada, que tiene raíces profundas en el pasado de violencia y dictadura que ha vivido el país.

Esa concepción de la guerra se resume, de cierto modo, en una frase del mayor Avilés, comandante del batallón Sierpe de Chalatenango: 'Si usted tiende la mano a la juventud, usted neutraliza a la guerrilla", nos dijo cuando ya nos despedíamos, en la plaza frente al cuartel de la ciudad.

Avilés es un hombre joven, sencillo, franco. Fue edecán de Duarte, cuando éste era presidente de la República, pero no sé si es afín a las ideas de la Democracia Cristiana. Poco después de nuestra conversación supe que había sido herido. Según algunos cables, gravemente; según otros, no era tan grave.

El mayor nos habló largamente en aquella oportunidad sobre el futuro de la guerra. Lo que más me impresionó fue la idea muy clara de que el triunfo es una tarea a largo plazo, que empieza ahora con un trabajo por cambiar el concepto negativo sobre el ejército que predomina entre la juventud.

En Chalatenango, el ejército creó una escuela para los niños desplazados, que se han visto obligados a abandonar sus lugares de vivienda a consecuencia de la guerra para buscar refugio en ciudades más seguras.

El mayor estimó en unas 60 mil personas la población actual de la ciudad, de las cuales 15 mil son desplazados que viven en una situación crítica; debieron abandonar sus tierras y aquí no tienen trabajo. Los recursos para mantenerlos son prácticamente inexistentes, pese a la asistencia de organismos como la Cruz Roja.

El ejército se enfrenta así a una difícil situación, en cierto modo similar a la de los guerrilleros, que deben mantener y proteger a la población civil que los sigue y vive en las zonas bajo su control.

La escuela para los niños desplazados de Chalatenango tenía 700 alumnos, en su mayoría de seis a catorce años, alumnos de primer a noveno grado, y se llama "Once de Enero". La fecha es un recuerdo de la primera gran ofensiva lanzada por el FMLN, en 1981. Desde el nombre, la escuela tiene un fin pedagógico de

claro contenido político y refleja la concepción de que, aun ante un eventual triunfo militar sobre la guerrilla en el actual conflicto, es necesario prevenir un futuro resurgimiento de tendencias rebeldes en el seno de la sociedad; algo así como una "Revolución Permanente".

La similitud me vino a la mente cuando recordé la pequeña pero variada biblioteca que el mayor mantenía en su oficina, en el cuartel de Chalatenango. Ahí sentado, conversando, paseaba los ojos por el estante y, entre los libros, encontré algunos como "Los Sindicatos Soviéticos", de Isaac Deutscher, escritor marxista cuya simpatía por Trotsky se revela en sus varias obras. Una "Revolución Permanente", de nuevo estilo, ha ganado aquí otro adepto.

—¿Usted lee estos libros?, le pregunté al mayor.

—Sí, yo leo de todo, fue la respuesta.

Pero regresemos a la escuela para niños desplazados. Está claro que su creación y mantenimiento por el ejército es parte de la guerra, de una guerra total, que se libra crecientemente en cada rincón de la sociedad. Esa lucha por las mentes, esa guerra política, crece en importancia en El Salvador.

El mayor planteó esa visión del problema, pero desde otro punto de vista. "El ejército cree que tiene la razón, pero es muy difícil controlar a la guerrilla; sin embargo el pueblo, que una vez creyó que el FMLN era la solución, les dio la espalda".

"La guerrilla tiene que recapacitar", insistió, poco antes de despedirnos. "Cuando ellos empezaron ésto no había comprensión en el país; con el golpe de octubre, eso cambió".

Parecía evidente que el mayor era partidario decidido de las reformas prometidas por los militares jóvenes cuando derrocaron al General Romero. Pero, desde entonces, esos militares fueron desplazados del poder y del ejército, entre ellos el coronel Adolfo Majano, identificado como su principal líder, y el proyecto de entonces no es hoy más que un documento histórico. La guerra ha avanzado demasiado para que se puedan recomponer las cosas sobre los principios planteados hace más de tres años.

Desde el punto de vista militar, el oficial compartía la posición anunciada en aquellos días por el ministro de Defensa, el general García, resumida por él en la afirmación de que el ejército debía dar prioridad a los "objetivos rentables". García había anunciado que la fuerza armada no saldría a enfrentar a la guerrilla en cada lugar que ésta atacara, sino que, por el contrario, se concentraría en la defensa de aquellos puntos estratégicos que tuvieran alguna significación militar, económica o política.

—¿Qué significa Las Vueltas para nosotros (una población campesina ubicada a pocos kilómetros de Chalatenango, que había sido ocupada por la guerrilla), si toda la gente está viviendo aquí? Yo creo que la guerrilla se está desgastando, viviendo en una condición miserable, inhumana, comentó Avilés.

El mayor evaluaba la ofensiva guerrillera en su departamento como un esfuerzo "por recuperar terreno perdido en el campo internacional", realizando acciones espectaculares, pero "sin sentido estratégico".

Como estos ataques revelaban una mayor capacidad de acción del FMLN, le preguntamos si estimaba que había cambios en la forma de actuar de la guerrilla, o si ésta parecía contar con un número mayor de cuadros.

El militar estimó que no, pero señaló que "nuestra información es que trasladaron fuerzas de los departamentos de Morazán y San Vicente a Chalatenango". La afirmación me pareció extraña pues, por primera vez, la guerrilla estaba atacando simultáneamente en los diversos frentes, lo que hacía difícil suponer que había trasladado gente de Morazán o de San Vicente para atacar dos pequeñas poblaciones del norte de Chalatenango.

A esta altura de la guerra los militares reclamaban también que los guerrilleros "no presentaban un frente de batalla definido". El general Jaime Abdul Gutiérrez me dijo una vez que cuando el ejército lograra "fijar en el terreno" a las fuerzas del FMLN iba a terminar con ellas. Ese es precisamente el gran problema de las fuerzas regulares frente a una guerra de guerrillas. Desde la salida de García del ministerio de Defensa, el nuevo ministro, el general Eugenio Vides, renovó su estrategia, entre otras cosas para lograr ese objetivo, sin que los resultados puedan ser evaluados aún, a pesar de las declaraciones triunfalistas de ciertos comandantes de Departamento.

El problema se refleja en que, cuando el ejército llega a alguna localidad ocupada por la guerrilla, frecuentemente ya no la encuentra; los insurgentes se retiran anticipadamente, en orden y sin bajas, sin presentar combate a fuerzas superiores del ejército.

En Chalatenango, los guerrilleros habían atacado a una

fuerza regular de 100 soldados con unos 600 hombres, según las estimaciones militares, y luego abandonaron las posiciones que, evidentemente, no les interesaba mantener.

"La situación ahora está tranquila, pero la guerra de guerrillas no es continuada, es interrumpida", dijo Avilés, reconociendo que, en cualquier momento, podían iniciarse nuevamente los enfrentamientos.

Para intentar prevenirlos, también el ejército trata de hostigar a los insurgentes en sus posiciones, atacando con pequeñas unidades, por sorpresa. "Anteayer montamos otra operación relámpago contra la guerrilla; llegamos a un campamento e hicimos un ataque combinado de la artillería y la fuerza aérea" que, según el mayor, provocó muchas bajas entre los insurgentes.

El FMLN mantiene por lo menos cuatro campamentos bien identificados por el ejército en esta zona.

En Chalatenango conocí a un joven, ahora incorporado al ejército, Juan Antonio Menjívar, de 19 años, quien desertó de la guerrilla en junio de 1982.

Menjívar nos relató su paso por los campamentos de Los Morales, Patanera, Los Portillos del Norte y El Alto, al este y norte de Chalatenango, en las proximidades del vecino departamento de Cabañas.

Pero el conocimiento de la existencia y ubicación de esos campamentos no parece favorecer al ejército, que no logra cercarlos y destruirlos. Sólo en Los Portillos del Norte unas 200 personas, principalmente mujeres, niños y ancianos, acompañan a los guerrilleros, relató Menjívar, quien estuvo ahí realizando entrenamientos.

Por boca de Menjívar conocí las durezas de la vida en los campamentos, principalmente la falta de comida, o la zozobra de los guerrilleros, tratando de ocultar a niños y mujeres cuando el ejército lanzaba su ofensiva. El relato del muchacho presentaba todo con un sentido peyorativo, tratando de mostrar las precarias condiciones de la guerrilla. Quizás intentaba justificar también su decisión de abandonar el FMLN, al que, según relató, fue obligado a incorporarse por los guerrilleros. Pero el relato me dejó, por el contrario, un sabor de asombro en la boca, ante una gente que, a pesar de las terribles condiciones que debe soportar, ha mantenido y desarrollado la lucha.

LA GUERRILLA POR DENTRO

Cerca de año y medio después de lo relatado por Menjívar, a fines de octubre de 1983, estuve, por primera vez, en la zona bajo control de la guerrilla. Hice un viaje especial a San Salvador y de ahí a la ciudad de Jucuarán, en un territorio montañoso en la zona costera entre Usulután y San Miguel, al oriente del país.

Acompañado por dos periodistas de la revista norteamericana Newsweek y otros tres de la cadena de televisión ABC, entre ellos dos mujeres, entramos al territorio del FMLN una tarde de domingo, para recorrer, durante tres días, un amplio sector alrededor de Jucuarán.

Ahí la guerrilla ya no pasa hambre. El control del territorio les significa un amplio abastecimiento de maíz y frijol, la base de la alimentación campesina. Disponen también de ganado y de lo que pueden comprar en la ciudad, bien abastecida de prácticamente todo lo que les puede hacer falta para la vida en la montaña.

Salvo un fotógrafo de la revista norteamericana, los demás periodistas no teníamos experiencia en este tipo de incursión en territorio guerrillero. Pasamos el día previo al viaje angustiados, programando y reprogramando los detalles del encuentro. La cita había sido arreglada previamente: debíamos encontrarnos en el destruido puente de Moropala, en una carretera secundaria de Usulután, donde los guerrilleros nos esperarían para llevarnos a "su" territorio, al otro lado del río.

Pero había que programar el traslado hasta ese punto, y dejar también organizado el regreso; todo eso lo hacíamos en medio de mil conjeturas. La realidad fue mucho más sencilla que nuestra imaginación.

Llegamos a Jucuarán cerca de las tres de la tarde y fuimos recibidos en la sede de la Comandancia Revolucionaria de la ciudad, una casa que servía de cuartel a una unidad de 80 hombres, antes de la ocupación.

"El 8 de setiembre (de 1983) iniciamos el avance hacia Jucuarán. La fuerza armada salió de la ciudad hacia el puente de Vado Marín, más al norte, lo que evitó que se combatiera dentro de la población. Se peleó en las afueras, con el resultado de dos soldados heridos y un preso; se volvió a combatir en el puente y en poco tiempo los militares salieron en desbandada, dejando un

cañón de 90 mm, una radio militar y varios fusiles" relató uno de los insurgentes. Desde entonces, el FMLN controlaba la población. En realidad, todo el territorio al sur del río San Miguel estaba bajo control de la guerrilla, entre las localidades de Jucuarán y Chirilagua.

En esa primera población se vivía esa tarde de domingo el mismo ambiente bucólico de cualquier lugar del interior salvadoreño. La gente paseaba en las calles empedradas alrededor de la plaza. En la vieja alcaldía, decenas de niños, y también adultos, veían "Cartas de Morazán" o "La Decisión de Vencer", películas filmadas por la guerrilla sobre el desarrollo de los combates en el país.

Más tarde, la orquesta del pueblo ocupó el lugar y los jóvenes guerrilleros, muchos más hombres que mujeres, ciertamente, dieron inicio a un animado baile, que solo terminó a la hora del "toque de queda" proclamado por la comandancia guerrillera, a las nueve de la noche.

La sala estaba llena de fusiles. La vieja orquesta ensayó los primeros acordes, pero fue rápidamente reemplazada por el toca-cassette, con músicas mucho más modernas. Una juventud abigarrada bailaba al ritmo que sus pesadas botas les permitía. Todo olía terriblemente a sudor. Las muchachas, con sus pañuelos rojos al cuello y sus camisetas de la escuela militar de la guerrilla. Los muchachos, con sus granadas al hombro, buscaban una compañera para la siguiente pieza. También se baila en las zonas liberadas; mañana habrá que seguir la guerra.

Las fuerzas del ejército abandonaron la ciudad el 8 de setiembre del 83. Un mes y nueve días después, ante la ausencia del ejército y algunos problemas de robo que se habían suscitado, el FMLN decidió "tomar control, tanto político como militar, de Jucuarán y sus alrededores" y emitió un "decreto" de administración y policía.

Desde entonces, la vida sigue con normalidad, pero bajo el mando de las nuevas autoridades. Los guerrilleros se mezclan con la población, como si hubiesen estado siempre allí. Pero hay un oculto temor por lo que pueda pasar, sobre todo por la posibilidad de que la fuerza aérea bombardee la población. Los aviones vienen de vez en cuando, pero hasta la fecha de nuestra visita sólo en tareas de observación.

Esta es sólo una de las tantas "zonas de control" de la guerrilla. Aquí tienen sus campamentos, su centro de prensa y propaganda, su escuela militar, aquí está el mando de la grupación sur de la Brigada Rafael Arce Zablah, unidad perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que integran el FMLN. Esta brigada fue la que, a principios de setiembre de 1983, atacó la Tercera Brigada de Infantería del ejército, con sede en San Miguel, dando incio a la campaña militar "Independencia, Libertad y Democracia para El Salvador", que culminaría dos meses después con un saldo ampliamente favorable para los insurgentes. El balance hecho por el FMLN señalaba 1.121 bajas al enemigo, entre muertos y heridos; 212 prisioneros de guerra, incluyendo a tres oficiales, 512 fusiles recuperados, así como otras 22 armas de apoyo.

Bajando por la montaña, desde Jucuarán, se ve a la distancia la ciudad de San Miguel, quizás a unos 30 kilómetros de distancia. Por las veredas, la guerrilla circula libremente, es "su" territorio, en medio de las plantaciones de maíz, de frijoles y fincas de ganado, de una población campesina que es su base de apoyo. De aquí obtienen la alimentación; en la ciudad compran pilas, linternas, coca cola, cerveza, aceite, sal y todo lo que necesitan. Compran, no piden ni roban, según los comerciantes del lugar, algunos de ellos sin temor de manifestar su poca simpatía por los insurgentes.

En la ciudad, todo sigue funcionando, pero los guerrilleros se enfrentan a algunos viejos y graves problemas. Hace cuatro años no hay agua potable. Un ingeniero del FMLN llegó entonces a hacer el diagnóstico y una comisión del pueblo fue a las oficinas de la empresa estatal de acueductos para pedirles que enviaran unos trabajadores para hacer las reparaciones. Prometieron venir, pero el FMLN dio un plazo de dos semanas para que arreglaran el problema. De no ser así, su propia gente se encargaría de eso; el ingeniero dijo que lo podía hacer en tres días, si contaba con el material necesario: cemento, arena, cables, dos transformadores (que ya estaban en el pueblo) y otras pequeñas cosas.

Los teléfonos también seguían comunicando Jucuarán con el "exterior". En la oficina de la empresa estatal, un antiguo funcionario seguía operando el viejo teléfono a magneto.

— ¡Aló, aló Santiago, déme un numerito a Jucuarán! ¡San-

tiago... tiago...tiago, un numerito a Jucuarán!, repetía, con su voz apagada, mientras una campesina espera pacientemente a su lado, para hablar con un pariente en Santiago de María, a unos 45 km. de aquí. En la ciudad hay unos 15 teléfonos; las cuentas siguen llegando y la gente las paga normalmente, me dice el encargado.

No sólo el teléfono comunica Jucuarán con el resto del país. Dos balsas reemplazan el destruido puente de Moropala sobre el río Grande de San Miguel. La población cruza de un lado a otro, para llevar sus productos al mercado, o para ir al hospital en El Tránsito, pequeña población a la salida del camino de tierra. Esa aparente normalidad tiene, sin embargo, sus costos. "La cosecha de invierno estuvo mala por el exceso de lluvia, y todo está muy caro por la destrucción del puente", me dice una campesina. El transporte en camión desde el río hasta Jucuarán, hora y media cuesta arriba por un pésimo camino cuesta un colón, 25 centavos de dólar.

Hemos hablado de que la guerrilla decidió adoptar resoluciones administrativas en la zona donde ejercen un control efectivo. Dos comunicados en papel membretado con la bandera roja, la estrella blanca y la sigla ERP anuncian las "Disposiciones para la población de Jucuarán".

"El Ejército Revolucionario del Pueblo, considerando la falta de agua potable, de atención médico-hospitalaria, el deficiente servicio de transporte y la falta de aseo en las calles y la iglesia, decreta:

- Revisar las instalaciones de bombeo de agua para proceder a su reparación;
- Poner al servicio del pueblo un médico, por lo menos una vez por semana;
- Poner más vehículos para el transporte;
- Pedir a la población que limpie el frente de sus casas, y a los "guardianes del Santísimo que limpien y ordenen por fuera y por dentro la iglesia parroquial".

El otro comunicado, más drástico que el anterior, con fecha 17 de octubre de 1983, anuncia que "transcurrido un mes y nueve días de nuestra incursión, y ante la incapacidad del actual gobierno y su ministro de Defensa de retomar Jucuarán", se decide "tomar control, tanto político como militar" de la ciudad y sus alrededores.

Se prohibe la circulación después de las nueve de la noche y se establece "prisión mayor o menor", según el caso, para los delitos de robo y destrucción de bienes públicos y privados. La violación y el asesinato serán sancionados con la "justicia popular".

"Estos acuerdos, agrega la nota, incluyen al personal militar de nuestras fuerzas".

Las fuerzas del FMLN en Jucuarán están a cargo del comandante "Cirilo", 30 años, afable, quien nos recibe en la comandancia.

Cae la tarde del domingo y nuestra conversación, sentados en las escaleras de la plaza, es interrumpida por un campesino "pasado de tragos". Le pregunto al comandante si aquí se permite tomar licor, pues hay noticias de que en otras poblaciones ocupadas, los guerrilleros cerraban las cantinas y destruían las botellas.

"Todas las cantinas están abiertas en el pueblo", dice Cirilo. "Antes prohibíamos el trago, pero a medida en que vamos asumiendo responsabilidades civiles, de administración, tenemos que irnos acomodando a las necesidades de la población. Antes quemábamos la Alcaldía, ahora la usamos y sirve también a la población".

La administración de la ciudad sigue en manos del alcalde Mamerto Ramírez, demócratacristiano, pero trabaja ahora en estrecha coordinación con las fuerzas del Farabundo Martí.

Le preguntamos al comandante Cirilo por qué el ejército no corta el abastecimiento a la ciudad y los vínculos con el "exterior".

"Porque entonces toda la gente saldría hacia Usulután; les llegarían unas diez mil personas y ellos tendrían que mantenerlas".

Vamos a comer; para después nos prometieron una función de cine. Salvo un periodista de Newsweek, que acaba de verlas en Nueva York, ninguno conoce las películas filmadas por el FMLN. Una televisión a colores y una moderna Betamax nos permiten verlas cómodamente.

La acción empieza con la toma de la hacienda San Carlos, en el volcán de Osicala, al oriente del país, en agosto del 82.

Ernesto, miembro del colectivo de foto y filmación, nos explica que el ERP tiene dos equipos en la zona oriental del país: uno con la grupación norte de la BRAZ, y otro con la agrupación sur, al cual él pertenece.

"Para las actividades en el combate trabajamos uno en soni-

do y otro en imagen cuando se trata de cine, o entonces hacemos foto y videocámara. Casi siempre estamos ubicados en los puntos donde va a haber más acción, en general en la primera línea de fuego".

El colectivo hace también programas de entretenimiento y de educación para la tropa. Tienen técnicos para el mantenimiento del equipo y otros encargados de la logística, o sea, de conseguir películas, video cassettes, super 8 ó 16 milímetros.

El aparato de propaganda cuenta aún con el sistema de radio Venceremos y con los talleres de impresión y propaganda. Este último está instalado en uno de los ranchos campesinos de la zona. Ahí se imprimen comunicados, decretos y otras publicaciones de la guerrilla, tanto para los insurgentes, como para la población de la zona ocupada. Para eso hay un pequeño mimeógrafo manual, cajas de stenciles "propiedad del gobierno de El Salvador" y tinta. Con ingenio, han construido un bastidor para hacer trabajos en serigrafía usando, en vez de tela de seda, hojas de stencil, donde dibujan lo que quieren imprimir.

En ese taller hicieron los brazaletes que identifican a los miembros de la BRAZ y también ahí se imprimieron las camisetas con el letrero de la Escuela Militar. Laura, una belga de 28 años, es parte del equipo de propaganda. Trabajaba con grupos de solidaridad con El Salvador en su país, antes de incorporarse a las filas del FMLN, en 1982. Es la segunda persona de esa nacionalidad que encontramos en la zona; el primero fue el padre Roger Ponseele.

La presencia de ese sacerdote belga ahí donde estábamos fue para nosotros una sorpresa, aunque es conocida su militancia en el FMLN. De 44 años, alto, flaco, el pelo rubio y liso, la cara quemada por las jornadas en la montaña, "Rogelio" llega, en su traje "civil" y su buen español, con acento salvadoreño.

"Yo veo mi vida como un pequeño testimonio, el andar con la tropa..., comer tortilla con frijol..., tener miedo con ellos, estar esperando el fin de la guerra..., pienso que ese testimonio puede tener alguna importancia...".

Hablamos de la muerte. El tema está siempre presente en este mundo lleno de vida; pero ninguno con quienes conversé piensa que le puede tocar en el próximo combate.

"Yo me impresiono mucho cuando veo que esto no siempre es guerra, que hay mucho elemento humano, no sólo ante la muerte, sino cuando un guerrillero se encuentra con su hijo después de cuatro años sin verlo y llora. Lloramos juntos, pero ante la muerte la vida de un guerrillero es dura; cuando cae un compañero no se puede detener, hay que seguir combatiendo, no puede parar para llorarlo".

Además de su actividad pastoral con la población, Ponseele señala que también trata de reunir a los guerrilleros para celebrar misa, en ciertos períodos en forma más intensa que en otros, de acuerdo con las posibilidades de la guerra, "pues ellos son religiosos y lo aprecian".

"Con ellos se puede hablar del Evangelio tal y como es, porque para mí el Evangelio es radical, más radical que el marxismo".

Rogelio no empuña el fusil. "No me toca ir a la línea de fuego, nunca ando armado, pero admiro tremendamente a un sacerdote que agarra el fusil, aunque hasta ahora no he tomado esa decisión".

Al norte de aquí, en el departamento de Morazán, hay otro sacerdote, Miguel Ventura, que acompaña a la otra agrupación de la BRAZ.

"Desde que me incorporé, en 1980, la guerrilla ha avanzado tremendamente. Ahora hay una estructura logística; una estructura médica; otra de prensa y propaganda; hay un ejército poderoso, bien armado y bien entrenado; está la radio Venceremos; hay escuelas militares; hay escuelas para niños, donde aprenden a leer y escribir".

"Yo admiro muchísimo la contextura de los dirigentes revolucionarios, arriesgándose con los 'compas', comiendo tortillas, durmiendo en el suelo; su audacia, la seriedad de su compromiso, su mística cristiana".

Ponseele no pertenece a ninguna orden religiosa, "soy diocesano", de la diócesis de Brujas. Desde 1970 está en El Salvador, al principio trabajando en las afueras de la capital, en los años en que surgieron las organizaciones clandestinas.

"Nuestro trabajo se basa en que un cristiano tiene que comprometerse con una realidad; aquí, en El Salvador, el compromiso es con este pueblo pobre y explotado".

"Al principio buscábamos eso formando cooperativas, pero luego vimos que se necesitaba cambios más profundos, lo que

provocó todo un conflicto en las comunidades cristianas, pues estaba de por medio un problema delicado: el de la violencia.

"Cuando traté de discutir ese problema, una religiosa me derrotó; sacó tantos argumentos de la Biblia que quedé aplastado, pero esa misma monjita cayó con una pistola en las manos en la insurrección del 10 de enero de 1981".

La gente reacciona con "cierta timidez, con cierto miedo", ante la presencia de ese sacerdote, como él mismo lo reconoce.

"En El Zapote, donde estaba esta tarde, han sufrido bombardeos, lo que quiere decir que asistir a la misa que yo celebro —porque estoy vinculado al FMLN— ya es un gran compromiso".

La charla siguió hasta la noche. Al día siguiente lo encontramos montaña abajo, con su mochila al hombro, llena de libros, muy lejos de su diócesis de Brujas, a cuyo obispo ha escrito en más de una oportunidad, para explicarle su labor en la zona.

"¡Pero él nunca me ha contestado!", dice, no sin cierta amargura.

Habíamos partido muy temprano, el lunes en la mañana, de Jucuarán. Nos esperaban los comandantes de la BRAZ, Claudio Rabindranath Armijo y Ana Guadalupe Martínez. El camino es empinado, pero de bajada cuesta menos; ya tendremos que sufrir el regreso. Media hora de marcha, que el calor pegajoso de la mañana empezaba a dificultar, nos llevaría desde Jucuarán hasta el lugar de la cita. Llegamos primero, y nos acostamos a descansar en un claro en la vereda donde, de dos ranchos campesinos bien sombreados, salía un olor a café espeso y humeante.

Un movimiento de los guerrilleros y la voz de ¡firme! anuncian la llegada de los comandantes; sólo falta Juan Ramón Medrano, el tercer miembro de la comandancia de la agrupación sur de la BRAZ.

Hacía pocos días, Estados Unidos había invadido la isla caribeña de Grenada y la conversación empieza por el tema internacional.

"Grenada es una muestra de la intención del gobierno norteamericano de intervenir en Centroamérica", dice Ana Guadalupe Martínez, la comandante "María".

"Ese acto de intervención es una muestra más de que el presidente Reagan es capaz de actuar sin tomar en cuenta a la opinión pública y que trata de intimidar a nosotros y a los sandinistas en Nicaragua".

Habían llegado sudorosos y con una sonrisa, el pañuelo rojo al cuello, sus fusiles, con pantalones café oscuro y camisa caqui, Ana Guadalupe; de gorra, donde se lee en letras pequeñas la sigla BRAZ, camisa verdeolivo, Claudio Rabindranath Armijo, el comandante "Chico", de 26 años, espigado, con su barba ensortijada y anteojos, que le dan un aire profesoral.

Inclinada hacia adelante, con las manos apoyadas en el borde de la improvisada banca de bambú, el pelo negro enmarcando la cara joven, la comandante María insiste en que el desembarco de las tropas norteamericanas en Centroamérica "traerá como consecuencia la inestabilidad total de la zona, la guerra en toda la región; pero tendrían que pelear por años, y luego retirarse, como en Vietnam. Granada, desgraciadamente, era un punto débil por su situación interna, que debilitó la posibilidad de respuesta de su pueblo".

Le preguntamos si la invasión de Granada significará la ruptura del diálogo con el representante del presidente norteamericano en Centroamérica, el embajador Richard Stone, como se había informado en algunos medios. Ese diálogo se había iniciado hacía pocos meses, por insistencia del FMLN/FDR y debido a las presiones de los grupos opositores a Reagan en el Congreso de los Estados Unidos.

"No podemos ligar dos hechos que no tienen por qué estar unidos, nuestra opinión es que hay que buscar, a toda costa, la paz en Centroamérica, y para eso hemos demostrado nuestra voluntad de diálogo, aunque los resultados no hayan sido muy positivos.

"Nosotros hemos construido un ejército revolucionario que tiene experiencia de combate, que ha ido derrotando todas las tácticas del ejército y de los asesores norteamericanos". Frente a esta realidad, "Estados Unidos tiene dos alternativas: la búsqueda real de la negociación en Centroamérica, o la intervención. Los costos de la primera serían mínimos para el gobierno norteamericano, quizás sólo un cambio en el discurso; los de la segunda serían de incalculable consecuencia para los pueblos de Estados Unidos y Centroamérica".

Estados Unidos ha insistido reiteradamente en que las armas de la guerrilla salvadoreña son suministradas por la Unión Soviética y Cuba, vía Nicaragua. Los insurgentes lo han desmentido siempre, pero el tema vuelve en forma obligada.

"No hemos dicho que no tenemos apoyo externo, pero si ustedes van a Morazán, donde tiene su sede la agrupación norte de la BRAZ, verán todo el armamento recuperado al ejército, piezas que los mismos nicaragüenses no tienen".

Ana Guadalupe insiste en que la principal fuente del aprovisionamiento de armas para la guerrilla es el propio ejército de su país y que luego van a tener armas de la contrarrevolución nicaragüense, como los fusiles AK chinos y lanzacohetes RPG-7, porque "la corrupción es grande y ellos las están vendiendo".

Las armas que pudimos ver en un recorrido por esa zona controlada por la guerrilla son de fabricación norteamericana; algunos fusiles dicen aún "propiedad del gobierno de los Estados Unidos", recuperados por los insurgentes en los combates o comprados a los mismos militares, según los comandantes.

La emisora rebelde, radio Venceremos, revela que sólo en los últimos dos meses (setiembre y octubre de 1983) han capturado más de 500 fusiles, además de municiones y armas de apoyo.

"Hasta el momento no ha habido una sola prueba que la administración norteamericana haya podido aportar en relación al traslado de armas desde Nicaragua hacia acá; han acumulado documentos, los han tergiversado también, pero no han podido aportar pruebas".

Bajo un árbol de jícaro, una taza de café en la mano, la conversación sigue con la situación interna salvadoreña.

"Los avances que hemos tenido en la guerra han sido palpables, los asesores norteamericanos han tenido que prolongar su presencia en el país y cambiar sus planes".

"Si analizamos la situación en el departamento de Cabañas, donde ellos decían tener controlada la situación, los últimos combates han sido sólo de victorias para nosotros". El FMLN acababa de ocupar, en esos días, Tejutepeque, en ese departamento, infligiendo una severa derrota al ejército.

Los dirigentes guerrilleros destacaron el avance general de sus fuerzas en los últimos meses de 1983, derrotando nuevos planteamientos políticos y militares del ejército salvadoreño y sus asesores norteamericanos. En abril de ese mismo año, una crisis militar provocó el cambio en la jefatura del ejército con el reemplazo del ministro de Defensa, general José Guillermo García, por el también general Eugenio Vides Casanova. A partir de entonces se

implementó una nueva estrategia militar, en la que pequeñas unidades entrenadas por los norteamericanos trataban de hacer frente al avance de la guerrilla, en vez de los grandes operativos de miles de hombres llevados a cabo por García.

Al mismo tiempo, mediante el plan "Conara", el gobierno trataba de reimplantar en los departamentos centrales de San Vicente y Usulután, importantes zonas agrícolas productoras de café y algodón, a los campesinos que debieron abandonar sus tierras como consecuencia de la guerra.

Ambos planes han fracasado, según los dirigentes guerrilleros, quienes destacaron la aproximación de sus fuerzas a diversas capitales departamentales.

"Actualmente tenemos conflictuado el 60 por ciento del territorio nacional", dejando en evidencia una estrategia tendiente a cercar algunas de las principales ciudades del país, que podrían ser escenarios de los próximos combates, al iniciarse 1984.

Los dirigentes revolucionarios anunciaron también su decisión de consolidar las posiciones de la guerrilla en el cerro de Guazapa, unos 30 km. al norte de la capital, como paso previo para la intensificación de sus acciones en San Salvador.

La ofensiva guerrillera iniciada a principios de setiembre de 1983 con el ataque a la poderosa brigada de infantería de San Miguel, representó para el FMLN "la culminación de una etapa de acumulación de fuerzas y de repartición logística", dijo Armijo.

Desde entonces el FMLN reivindicó haberle causado más de 1.330 bajas al ejército, entre muertos, heridos y prisioneros.

"Lo de San Miguel fue la culminación de una etapa de acumulación de fuerzas", insistió "Chico", destacando que el ataque tenía varios objetivos: "lanzar una ofensiva en una ciudad donde estaban concentradas grandes cantidades de fuerzas del enemigo; burlar la vigilancia del ejército, transportando gran cantidad de armas de artillería hasta las inmediaciones de la ciudad para dar inicio al ataque y demostrar quién va ganando la guerra. El gobierno trataba de decir que habíamos perdido la iniciativa, y eso no era así".

Los dirigentes del ERP revelaron que a fines de 1983 habían entrado en una etapa de coordinación militar cada vez más estrecha con las otras agrupaciones guerrilleras, en particular con las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Los principales diri-

gentes de esa organización, Salvador Cayetano Carpio, el comandante Marcial; y Mélida Anaya, perdieron la vida meses antes, en circunstancias trágicas, en Managua. Eso obligó a las FPL a iniciar un período de intenso debate interno y a recomponer sus mandos, en medio de especulaciones de todo tipo sobre divisiones internas y rupturas con los otros grupos guerrilleros.

Cuando la entrevista concluyó, los comandantes dispusieron algunas medidas y luego seguimos todos montaña abajo hasta cierto punto del camino, donde nos despedimos.

Ellos siguieron hacia su campamento y nosotros hacia la escuela militar. El camino bajaba, a veces abrupto y apretado entre el monte y la vegetación, otras veces suave y ancho, facilitando la marcha. Es en este territorio montañoso, más que en Jucuarán, donde las posiciones de la guerrilla son prácticamente inexpugnables.

Después de cruzar un extenso maizal aparecen las instalaciones donde, en horas de la tarde, los insurgentes recibían su segunda jornada de preparación diaria.

Ahí, un medio centener de jóvenes se entrenaba en el manejo de armas, hacía ejercicios físicos o aprendía a moverse con su equipo militar en la pista de obstáculos.

Dos muchachos aprenden a disparar un mortero de 81 mm, donde se puede leer la inscripción "U.S. Army", que revela su procedencia. Los estudiantes reciben las coordenadas del blanco imaginario, miden la distancia, calculan el disparo, corrigen el supuesto tiro, repiten una y otra vez la operación, bajo el control estricto de un instructor.

Más allá, una ametralladora calibre 50 es armada, desarmada, transportada por los artilleros, que se instalan nuevamente en posición de tiro.

Un cañón de 90 mm —manejado en un rincón por otro grupo de guerrilleros— completa el arsenal de este campo, donde se recibe también formación política.

La pista de ejercicios empieza en un extremo del campamento. Se inicia la carrera, luego hay que tirarse al suelo para pasar la alambrada de púas tendida a pocos centímetros del suelo, levantarse rápidamente ante dos obstáculos, correr en zig-zag, subir una rampa empinada y saltar al otro lado, antes de escalar tres barras paralelas a alturas crecientes, casi al final de la pista.

De ahí se tiran al suelo, en posición de tiro, en espera de que sus compañeros vayan llegando y tomando también sus puestos.

A ese centro de entrenamiento llega la gente recién incorporada al FMLN, explica la encargada política del ERP en la zona, integrante del Comité Político de esa organización.

Diecisiete muchachos, entre ellos ocho mujeres, algunas de 15 y 16 años, una de ellas llegada hacía sólo seis días, jóvenes todos, aprenden las posiciones de tiro: de pie, de rodillas y acostados, bajo las órdenes de un instructor, con uniforme del ejército, con las insignias de sargento.

En esta zona hay una segunda escuela, mientras al norte de aquí, en Morazán, funcionan otras tres, nos informan en el campo.

Después de un período de entrenamiento de varias semanas, los jóvenes se incorporan a las milicias, donde permanecen por lo menos de dos meses, antes de ingresar a una columna guerrillera. Ahí siguen su preparación otros seis meses, para poder incorporarse posteriormente a la brigada, ya bien fogueados en el combate.

Después de la jornada de entrenamiento, los reclutas regresan a su base, al caer la tarde. Cruzan de nuevo el maizal y llegan a una casa campesina, amplia, medio destruida, donde les preparan los frijoles y las tortillas: es su "campamento".

Nosotros seguimos subiendo unos quince minutos más antes de llegar al lugar donde pasaremos la noche: dos ranchos con techo de paja y piso de tierra, donde funciona el equipo de impresión y propaganda de la BRAZ.

El crepúsculo le da un tono rojizo al maizal, a la copa de los árboles y a los cerros que enmarcan el paisaje. Sentados alrededor de una taza de café, los guerrilleros nos preguntan por la vida "afuera": —¿Cómo se ve la lucha de El Salvador en otros países? Se habla de la vida y también de la muerte, de la posibilidad de la muerte, que nadie cree le llegará con el próximo tiro.

Un tono melancólico va cayendo sobre el campamento. Silvio Rodríguez, el compositor y cantante cubano, suena en un tocacassette, bajo las protestas de los que ya se lo han aprendido de memoria; pero no hay muchas alternativas.

A las siete ya cayó la noche, cerrada, y la mayoría está durmiendo sobre el delgado nylon tendido en el suelo, al aire libre, si no pudo conseguir un lugar adentro de los ranchos. Esa noche la presencia nuestra hacía eso muy difícil; los lugares bajo techo

quedaron para los invitados, poco acostumbrados a dormir en el suelo, y menos aún al aire libre.

Pero todavía traemos el ritmo de la ciudad, y es difícil dormir tan temprano. Esperamos entonces la última emisión de radio Venceremos, prácticamente el único vínculo de los guerrilleros con el resto de su mundo, con los otros frentes de batalla. Esa noche, 31 de octubre de 1983, la radio anuncia que las unidades del FMLN tomaron la segunda ciudad en importancia del departamento de San Miguel: ciudad Barrios. "Nuestras fuerzas infligieron la primera gran derrota al batallón Arce (una nueva unidad preparada por los norteamericanos). En cada palmo de Centroamérica vengaremos la sangre derramada en Grenada".

A las cinco de la mañana nos despiertan los primeros movimientos de la tropa. Formados, cantan el himno nacional salvadoreño; luego saludan con la consigna: "¡Yankees, fuera de Grenada y de Centroamérica!", que recuerda la reciente invasión de la isla caribeña.

A esa hora, un enorme perol hierve en el patio bajo el fuego de leña, con el maíz desgranado y un poco de cal, con lo cual se hace la masa para las tortillas.

El perol es la base de la cocina de campaña. Un cántaro y una piedra de moler, para los granos de maíz y café, son las otras piezas que acompañan a los encargados de la cocina al frente de batalla. Si el lugar en que estamos llegara a ser atacado, el equipo de cocina se movilizaría solamente con esas piezas, suficientes para la emergencia.

Lo mismo hace el equipo de propaganda. En una valija tienen listos, para una eventual emergencia, lo indispensable para proseguir el trabajo bajo las balas.

Cuando se mira el mapa de El Salvador, como dijo el comandante Armijo, se ve con claridad el avance de la guerrilla, que aprieta el cerco en torno a algunas cabeceras departamentales, en particular San Francisco Gotera, en Morazán, y Sensuntepeque, en Cabañas. El territorio bajo control del FMLN es creciente. Eso les permite descansar, abastecerse de comida, armamentos y munición, reclutar nuevos militantes, mostrar fortaleza y una alta moral combativa.

Esta nueva situación que se va conformando en el país fue analizada también por el jefe de las fuerzas del FMLN en Jucuarán, el comandante Cirilo.

"En 1982 combatíamos en Torola, Perquín y San Fernando, al norte de Morazán, porque el ejército se mantenía en esas posiciones, pero ahora se han ido".

"En realidad, Morazán no representa nada desde el punto de vista económico, pero combatir en el cerro El Tigre, al norte de Usulután, en plena zona cafetalera, significa que estamos tocando puntos fundamentales de la economía salvadoreña".

"Lo que nosotros hacemos es crearles puntos conflictivos donde más nos conviene".

La afirmación del dirigente guerrillero tuvo una espectacular confirmación el 30 de diciembre de 1983, cuando unidades de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) ocuparon y destruyeron el moderno cuartel de Paraíso, sede de la Cuarta Brigada de Infantería, 50 km. al norte de la capital y a sólo unos 10 de la cabecera departamental de Chalatenango.

Un balance final de las FPL sobre esta acción, difundido por radio Venceremos, señaló que el ejército sufrió en ese ataque más de 300 bajas, entre muertos y heridos —la fuerza armada reconoció sólo la muerte de cien soldados— habiendo perdido la vida en el ataque, entre otros, el segundo jefe de la Brigada, el coronel Ricardo Vaquerano. La guerrilla capturó también a unas 200 personas, algunas de ellas civiles que realizaban obras en el cuartel.

La destrucción del cuartel de Paraíso tuvo otro significado muy particular, pues en esos días circulaban diversas informaciones sobre divisiones en el seno de las FPL que hacían suponer su incapacidad operativa. El ataque vino a demostrar que eso no era así.

El cuartel de Paraíso es la unidad militar más moderna de El Salvador, construida por asesores norteamericanos de acuerdo con su experiencia en Vietnam. Los edificios están protegidos por diversos puestos de vigilancia que abarcan un amplio perímetro defensivo, haciendo suponer que la posición era inexpugnable.

En la madrugada del 30 de diciembre unos 800 hombres, apoyados por morteros de 81 mm y fuego de artillería, inició el asedio contra la posición militar. Unos 450 Cazadores que defendían el cuartel, tropas de élite entrenadas por los norteamericanos, se rindieron dos horas después.

Junto con el cuartel de Paraíso, los insurgentes atacaron otros 25 objetivos militares, entre ellos el cuartel de Chalatenan-

go a fin de distraer las unidades militares e impedir el envío de refuerzos.

En uno de los objetivos atacados, el puesto de la Guardia Nacional en la localidad de San Rafael, a dos kilómetros de Paraíso, un soldado llamó a la Brigada pidiendo refuerzos. "Esta babosada está tomada", le respondió un guerrillero al otro lado del hilo, y agregó:"vayan rindiéndose ustedes también, porque en unos minutos estamos ahí".

Cuando los guerrilleros abandonaron el cuartel de Paraíso, horas después, dejaron las principales instalaciones destruidas, así como dos tanquetas, siete camiones y otros diez vehículos. Los insurgentes se apoderaron de 305 fusiles M-16, 12 ametralladoras M-60, tres ametralladoras .50, cinco cañones de 90 mm, diez lanzagranadas M-79, diez subametralladoras MT-5, tres morteros de 60 mm, un mortero de 81 mm y 29 radios militares PRT-77.

El ataque al cuartel dejó en evidencia lo que el comandante Cirilo quería destacar. Mientras las fuerzas del Gobierno tomaban la iniciativa en el extremo nororiental, sin encontrar a la guerrilla, que se había replegado, unidades del FMLN desataban un ataque espectacular en su retaguardia, confirmando una presencia activa en un territorio cada vez más amplio.

Cirilo marcó en un mapa los diversos lugares donde la guerrilla mantiene posiciones, al sur y al norte de la zona oriental del país, pero también en el centro de los departamentos de San Vicente, Usulután y San Salvador.

En los dos primeros, el ejército ha puesto en práctica un programa de reubicación de campesinos desplazados por la guerra, en un esfuerzo por asegurar la producción de café y algodón, importantes artículos de exportación.

"El plan era repoblar esas zonas con refugiados, pero son principalmente gente de izquierda. ¿Qué pasa si nos ponen cinco mil personas aquí? Eso se convierte en un vivero para nosotros".

"Tenemos que avanzar hacia zonas económicamente más importantes; el hecho de que nos implantemos en la zona cafetalera habla por sí solo. Eso nos deja la posibilidad del boicot económico, de incorporar nueva gente a nuestras filas, de controlar las carreteras Panamericana y del Litoral, mientras el ejército se concentra, a la defensiva".

"El sabotaje económico se ha convertido para nosotros en un arma fundamental, haciendo que el Gobierno dependa cada vez más de la ayuda norteamericana. Pero hay gente que no logra entender el sabotaje; eso nos lleva a variar nuestra política al respecto. Antes, quemábamos buses y carros, ahora estamos orientando el sabotaje contra objetivos económicos más importantes: el café, el algodón, la luz eléctrica".

Al mismo tiempo, las acciones militares se intensificaron en los últimos meses de 1983. "La nueva ofensiva, iniciada con el ataque de artillería al cuartel de San Miguel, fue una muestra de avance político-militar. El operativo significó un enorme esfuerzo logístico, tuvimos que transportar unos cuatro mil kilos de material. ¿Cómo es posible mover un mortero de 120 mm, que no se puede esconder en el bolsillo, desde Morazán hasta dos kilómetros de San Miguel, sin que el ejército se diera cuenta, y después de utilizar esa pieza la llevemos de vuelta a un lugar seguro? Pudimos disparar con precisión, provocamos más de cien bajas entre muertos y heridos en el cuartel, y eso hace que la población vea en nosotros la posibilidad de triunfo y se incorpore a nuestras filas".

El ataque al cuartel de San Miguel fue sólo el preludio de otro, aún más espectacular, llevado a cabo en las primeras horas de 1984, cuando unidades de la BRAZ destruyeron el puente Cuscatlán, sobre la carretera Panamericana, 90 km. al este de la capital.

Transformado en uno de los principales objetivos económicos del país desde que la destrucción del puente de Oro, en octubre de 1981, lo dejó como el único paso de importancia sobre el río Lempa, el Cuscatlán estaba custodiado por más de 400 efectivos al momento del ataque.

Un parte guerrillero informó que a las 00H50 del primero de enero de 1984, la agrupación norte de la BRAZ, apoyada por fuego de artillería, atacó las defensas periféricas del puente y penetró hasta las defensas inmediatas, "aniquilando rápidamente a los efectivos que estaban en el puesto de mando y trincheras".

A las 02H30 los zapadores del FMLN habían volado totalmente el puente, una imponente estructura colgante de 450 metros de extensión, dando inicio a otra campaña militar, llamada "Todo el pueblo a enfrentar la intervención imperialista hasta vencer".

Con el puente Cuscatlán se hundió también el último paso para vehículos pesados entre el centro del país y la zona oriental.

Sólo el puente del ferrocarril, en la carretera del Litoral, continuaba prestando su precario servicio, transformado en angosto paso improvisado de automotores. Para evitar el colapso del transporte terrestre entre ambas zonas, el Gobierno autorizó el tránsito de vehículos por terrenos de la presa hidroeléctrica de San Lorenzo, ubicada a sólo cien metros del puente destruido.

El golpe tuvo una inmediata repercusión, tanto económica como militar.

Sólo la reconstrucción del puente demandará una inversión de diez millones de dólares, según las primeras estimaciones oficiales.

Desde el punto de vista militar, los primeros en reaccionar fueron los norteamericanos. El vocero del Departamento de Estado, John Hughes, estimó que los daños provocados por la destrucción del cuartel de Paraíso y del puente Cuscatlán "no eran, de modo alguno, irreversibles"; pero, agregó, demuestra la necesidad de incrementar la ayuda militar al Gobierno salvadoreño. El día siguiente, portavoces del Gobierno norteamericano dejaban "trascender" la intención de la Casa Blanca de pedir al Congreso una ayuda militar adicional para El Salvador de 100 millones de dólares para el año fiscal de 1984.

El comandante Cirilo se refirió a esa política norteamericana, en particular al diálogo que la guerrilla había iniciado meses antes con los gobiernos de Estados Unidos y de El Salvador.

"En Bogotá —donde se reunió una delegación opositora salvadoreña con representantes del Gobierno de su país el 29 de setiembre del 83— hicimos planteamientos bien claros: que se nos abra una puerta digna para negociar", insistió Cirilo, desmintiendo terminantemente que los dirigentes de la guerrilla se opusieran a las conversaciones que se llevan a cabo en el exterior.

Pero, enfatizó, "el diálogo depende de Reagan; la administración norteamericana ya cumplió todas las etapas para la invasión, ahora tiene que decidir si invade o si negocia realmente".

LA MORAL COMBATIENTE

Los resultados de los tres primeros años de lucha reflejan un deterioro de la moral de las tropas gubernamentales que puede incidir en el resultado próximo de la guerra. Los periodistas que

cubrieron los enfrentamientos en Suchitoto, a mediados de febrero de 1983, se encontraron con soldados que huían en desbandada.

Ante los requerimientos de sus oficiales, que les ordenaban a gritos que avanzaran, los soldados respondían con sorna: —¿que quééé, que avancemos? Y, por supuesto, salían a buscar algún lugar seguro y bien lejos de los disparos.

Esa no es, en todo caso, una situación generalizada. Al contrario, a pesar de que cosas como esta ocurrieron, los mismos dirigentes opositores salvadoreños reconocen que el ejército ha mantenido su capacidad de lucha, que no es previsible ningún derrumbe inminente de las tropas.

Hay diversos elementos de la política del FMLN que contribuyeron a minar la moral del enemigo. Ya hablamos de la impresión que la actitud de los guerrilleros en los combates provocaba a los jefes, oficiales y soldados.

Más recientemente, la decisión del alto mando del Frente Farabundo Martí de liberar a los soldados capturados ha tenido un efecto devastador sobre la tropa, de acuerdo con testimonios de soldados y oficiales.

Yo estaba en Gotera, en octubre del 82, paseando frente a la Iglesia, esperando que regresara el comandante departamental para conversar sobre la situación militar en Morazán.

Era ya cerca del mediodía, el sol caía a pino sobre la plaza. Algunos buscaban la sombra de las veredas o algún árbol donde abrigarse del calor y de la modorra que, al final de la mañana, empieza a adueñarse de todos. En una esquina de la plaza esperábamos al coronel, mientras atendía diversos asuntos.

De repente, un jeep de la Cruz Roja Internacional desembocó prácticamente encima de donde estábamos, seguido de un camión que transportaba a unos 40 hombres. Pensé que volvían de alguna distribución de alimentos en los caseríos de la zona. Un convoy de la Cruz Roja nos había pasado en la carretera Panamericana, a la altura de San Vicente, y nos dijeron que iban a Morazán con esa finalidad.

Pero algo no cuadraba con esa expectativa. Sólo hombres venían en el camión, todos jóvenes, bordeando los 20 años. Usaban camisas variadas, pero mirando bien a través de los adrales se descubría el pantalón verdeolivo del uniforme; estaban descalzos.

¡Eran soldados!

Los soldados que la guerrilla había apresado una semana antes, en un ataque a Perquín y que habían liberado en la población cercana de Arambala. Así, de repente, la constatación caía como una bomba. Hacía varios días se venía hablando de negociaciones para la devolución de esos prisioneros, pero nadie conocía detalles. La Cruz Roja trabaja en medio de un estricto hermetismo y no adelantó ninguna información. Pero ahí estaban, rescatados gracias a una inteligente política de los insurgentes, que ha causado estragos en las filas del ejército. Seguros de que van a ser devueltos si son capturados vivos, los soldados prefieren entregarse a morir peleando. Ahora saben que las historias sobre torturas y una muerte horrible, si caían en manos del FMLN, no son ciertas.

Los efectos de esa política no pasaron desapercibidos por la Embajada Norteamericana. En un esfuerzo por contrarrestarla, anunciaron en junio del 83 que los guerrilleros habían asesinado a unos 30 soldados, después de haberlos capturado en el Puente Quebrada Seca, en San Vicente. La embajada organizó una presentación de las fotos de la presunta masacre, donde aparentemente se podía observar tiros de gracia en la cabeza de los muertos. No vi las fotos, pero conversé con periodistas y fotógrafos que sí las vieron. "No se puede asegurar nada con lo que nos mostraron", me dijeron. Por otra parte, ni el ejército, ni el Gobierno salvadoreño, hablaron nunca de esa "masacre". Se trataba, evidentemente, de una maniobra para contrarrestar los efectos de la política del Farabundo Martí.

Desde junio de 1982 está prisionero, en el Norte de Morazán, el ex viceministro de Defensa, coronel Francisco Adolfo Castillo. En entrevistas a la emisora del FMLN, Castillo reconoció que ha sido bien tratado y los presos que vi llegar a Gotera habían estado con él. El oficial de mayor rango entre los liberados en Arambala, el capitán Flores, quien regresó herido en un pie, conversó largamente con Castillo, así como con su colega de promoción, el capitán Francisco Mena Sandoval, hoy incorporado a las filas insurgentes.

Todo eso trasciende a la tropa y empieza a minar la moral de los oficiales y soldados.

La entrega de los 44 soldados a la Cruz Roja, que se realizó en esa pequeña localidad al sur de Perquín, en una ceremonia presidida por el jefe del Frente Nororiental de la guerrilla, comandante Jorge Menéndez, y del capital Mena Sandoval, fue transmitida en directo por la clandestina radio Venceremos.

Menéndez hizo una larga exposición de los motivos de la lucha guerrillera, enfatizando siempre que no se trataba de una lucha contra el ejército, ni para destruir a las fuerzas armadas, sino que era una lucha contra los oficiales corruptos. La sorpresa mayor vino cuando el comandante guerrillero, acercándose al capitán Flores, le extendió su pistola de reglamento, diciéndole que se la devolvía "como prueba del respeto del FMLN hacia su rango militar".

Mena Sandoval habló también, dirigiéndose a sus ex colegas militares, explicando el por qué de su incorporación a las guerrillas.

En ese entonces yo no sabía que Flores se había entrevistado con el viceministro de Defensa salvadoreño, prisionero en Morazán, pero esa información me fue confirmada por otro militar, compañero del capitán Flores, después de haberlo visitado en el hospital donde lo internaron a raíz de una herida en el pie.

Esos soldados, que convivieron con la guerrilla casi diez días, parecían confundidos con la experiencia. Consultados sobre el número de guerrilleros alzados en la zona, los estimaron en un número "incalculable". Abordados brevemente arriba del camión, en la plaza de Gotera, antes de que fueran introducidos al cuartel, decían haber sido bien tratados y mostraban aún el desconcierto por esa libertad inesperada.

¿Cuál será la influencia de ese contacto en su comportamiento futuro en el combate? No hay que olvidar que esos campesinos encontraron en las guerrillas a sus amigos, a otros campesinos de la zona, probablemente viejos conocidos, divididos hoy en dos bandos muchas veces por razones fortuitas, más que por divergencias políticas.

Entre esas circunstancias fortuitas hay que destacar la forma de reclutamiento militar. En la plaza de Gotera se habían reunido rápidamente varias madres de soldados desaparecidos, al correrse la noticia de que llegaban los liberados por la guerrilla, pero ninguna pudo ver a sus hijos, introducidos casi de inmediato al cuartel.

Quedaron entonces por allí, angustiadas, preguntando si fulano había venido, si este otro estaba entre los recién llegados, con un llanto más que contenido, seco, como esta tierra, con sus

rostros envejecidos prematuramente, arrugados.

Tulio Enríquez Mendoza había vuelto. De sólo 17 años, enrolado veinte días antes y ya un veterano de guerra, había vuelto. El rostro curtido de la madre no sabía tampoco sonreír; salió apresurada para volver con una bolsita de plástico llena de golosinas que le hizo llegar al cuartel. Tendría que esperar aún tres días para poder verlo, según las instrucciones.

Reclutados por la fuerza en los cantones, el ejército ha ido incorporando a miles de jóvenes campesinos a sus filas; pero más difícil es darles cierto entrenamiento, es inculcarles una causa que no entienden. Al otro lado de la trinchera puede estar el amigo de toda la infancia, incorporado a las filas guerrilleras. Ese reclutamiento forzoso se extiende a medida en que la guerra se prolonga, en que los empleos escasean, en que la agricultura se paraliza, en que la inseguridad y, a veces, el miedo, aumenta.

Fuentes norteamericanas revelaron que la mitad de los soldados entrenados en Estados Unidos en 1982 habían abandonado las filas una vez cumplido su período de servicio militar. No sé si esas cifras son reales. En todo caso, no provenían de grupos opositores interesados en desprestigiar a las fuerzas armadas, sinó de simpatizantes del Gobierno salvadoreño.

Hay también quienes vienen a enrolarse por su propia voluntad. Un muchacho esperaba en la plaza de Gotera, con su madre, el regreso del coronel. La conversación surgió dificultosa, pero luego se hizo ancha. Había estado en la Defensa Civil de su cantón. Allí ya no puede volver, pues la guerrilla opera cerca; en Gotera no tiene nada que hacer, pues no hay trabajo. Decide entonces ingresar a las filas: "si me matan, que al menos sea con un arma en las manos".

Así la guerra va definiendo el destino de cada uno y, finalmente, de todos.

Un joven sargento (su grado lo supe después), ese día vestido de civil, rondaba la plaza de la ciudad, angustiado; había estado tomando, a pesar de que era todavía temprano, poco más de las once de la mañana. Se alborotó al ver el camión de la Cruz Roja. Corre, se acerca, mira, pregunta y empieza a gritar. Ya nada lo detiene en su desesperación. Corre por la plaza, los gritos son desgarradores, se pierde en la esquina, pero su presencia sigue, dolida, aplastada.

— ¡No estááá, no estáááááááá, mi hermano no estáááááááááááá! ¡Coronel!, mi hermano no estáááááááááááááá!

La muerte, la constatación de la muerte, la muerte de la esperanza de que el hermano volvería, golpea brutalmente. Medio borracho, corre desesperado por la plaza, sin que nadie atine a hacer algo. Sus compañeros de cuartel lo miran paralizados, mientras el grito de la muerte corta la plaza en todas las direcciones: ¡No estáááááááááá!

El hermano se quedó en las montañas, y el sargento pide permiso al coronel para ir a avisar a su madre y autorización para buscar el cuerpo en el escenario del combate, cuando se desaloje a la guerrilla. El permiso fue concedido.

La madre de Tulio fue más afortunada; su hijo regresó, pero ¿quién sabe hasta cuándo?

Es increíble que en esta región, donde la guerrilla es particularmente fuerte, estén operando jóvenes que no tienen aún edad para incorporarse a las filas militares y que, en la primera línea de combate, haya soldados con sólo 20 días de estar en las filas.

Así se explica que la ofensiva guerrillera no encuentre muchas veces una fuerte resistencia, que el número de prisioneros hechos por el FMLN aumente constantemente, que los soldados hablen de miles de insurgentes en armas ante el empuje del ataque, cuando probablemente sean un centenar, o menos; y que el ejército sólo pueda entrar en ciertas zonas con miles de hombres, después de un bombardeo por aire y tierra.

La Segunda Compañía del cuartel de Gotera perdió 24 hombres, de los 35 que combatieron en Perquín. Once de ellos lograron huir hacia Honduras, en desbandada por los montes y veredas, desde donde fueron traídos en helicóptero hacia la ciudad.

El ejército hondureño presta apoyo efectivo a sus colegas del otro lado de la frontera, aunque sus autoridades lo nieguen. Ahí tratan de cortarle el suministro a los guerrilleros, de impedir que ingresen a descansar después de las batallas, o prestan auxilio a las tropas salvadoreñas, en casos como esos.

Dos horas después de la llegada de los prisioneros liberados, algunas madres merodean aún por la plaza, piden noticias a los soldados, envían algo más de comer a sus hijos; hay una resignación ante lo que ocurre, ante la tragedia en que sus vidas se han visto atrapadas. Pero ese llanto escondido, casi seco, las caras

arrugadas, no pueden ocultar una tristeza secular que arrastran consigo, como pegada a la piel por muchas generaciones.

Como contrapartida a la actitud del FMLN, de liberar a los soldados capturados después de atenderlos de manera respetuosa, como los mismos prisioneros lo reconocen, el ejército no hace prisioneros. En esta guerra no hay insurgentes presos ni heridos. Sólo muertos.

En marzo de 1982, poco antes de las elecciones constituyentes, cuatro periodistas holandeses fueron asesinados cuando iban a una entrevista con los guerrilleros. El asunto provocó conmoción entre los periodistas que estábamos en El Salvador —en esos días llegaron unos 800, para cubrir las elecciones— y el propio presidente Duarte se apersonó al hotel donde se alojaba la prensa internacional, para tratar de calmar las cosas. Nos preguntó entonces qué queríamos que hiciera, y simplemente le pedimos que ordenara a las fuerzas armadas que no dispararan contra nosotros.

Duarte prometió entonces una investigación sobre lo ocurrido con los holandeses. Días después volvió sorpresivamente al hotel y nos ofreció llevar de inmediato al cuartel de Paraíso, en la carretera a Chalatenango, en cuyas inmediaciones ocurrió el asesinato. Ahí nos darían una explicación sobre lo ocurrido y luego nos llevarían al terreno, para ampliarlas. El único "inconveniente" era que no podríamos hablar con ninguno de los integrantes de la patrulla que mató a los periodistas, pues "estaban cumpliendo una misión en el terreno".

El edecán de Duarte tenía una exposición cuidadosamente preparada, en español y en inglés, donde reitreró la tesis oficial de que los cuatro murieron en un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Pero no convenció a la mayoría de los que estábamos allí, unos 30 periodistas quizás. Nos quedamos con la idea de que habían sido capturados y asesinados. Entre otras cosas, nadie pudo explicar por qué las ropas de dos de ellos fueron encontradas en el campo, ensangrentadas y rotas, incluyendo medias, calzoncillos, camisetas, pantalones y pañuelos.

Durante la exposición en el cuartel de Paraíso pregunté al oficial cuál era la proporción de muertos y heridos en una guerra. La respuesta fue de que "dependía de la guerra". Insistí: "en una guerra como esta que se libra en El Salvador, ¿cuál es esa proporción? No pude obtener una respuesta, pero estoy convencido

de que en ninguna guerra, salvo en ésta, la proporción es de miles a ninguno, sólo hay guerrilleros y civiles muertos.

Esto es absurdo y tiene un efecto tremendo sobre la tropa. A la larga, la desmoraliza, y ese sentimiento se profundiza a medida en que la actitud contraria del FMLN los deja en evidencia.

La falta de motivación, el reclutamiento forzoso, la degradación que significa el asesinato indiscriminado de prisioneros, combatientes o civiles que se estiman partidarios de la guerrilla; todo contribuye a minar la moral de la tropa y tengo la impresión de que ese factor empieza a pesar cada vez más decisivamente en el resultado de los combates.

Mucha gente insiste en destacar las diferencias entre la guerra popular librada en Nicaragua contra la dictadura de Somoza, y la que se libra actualmente en El Salvador. Se señala que, en El Salvador, el frente contra el Gobierno es menos amplio. Somoza era el hombre contra el cual todos los opositores estaban, pero era también el que aglutinaba a sus partidarios. Cuando él cayó y abandonó el país, la estructura que lo mantenía ya no pudo sostenerse. El que lo sustituyó en el cargo, Urcuyo Maliaño, trató de mantenerse y los mismos norteamericanos tuvieron que llamarlo y decirle que se dejara de tonterías. Al día siguiente el Frente Sandinista entraba en Managua.

En El Salvador no hay una figura similar contra la cual todos luchen. Pero tampoco hay un Somoza que compacte al ejército tras de sí, que sea el líder por el cual hay qué luchar. En ese sentido, el ejército salvadoreño tiene mucho menos cohesión que el de Somoza. Eso los ha obligado a redoblar esfuerzos para levantar la moral de la tropa y su espíritu de combate. Ese esfuerzo estaba en pleno desarrollo a mediados de 1983, pero sus resultados se desconocían aún.

Capítulo II

LA SITUACION POLITICA

Un año después de las elecciones constituyentes, celebradas en El Salvador el 28 de marzo de 1982, los recuerdos de aquel acontecimiento se mezclan con una sensación de asombro, de incredulidad, de decepción y escepticismo.

No creí nunca que esas elecciones pudieran celebrarse. Las esperanzas de los sectores gobernantes en América Central estaban centradas, en aquella época, en los comicios próximos. Semanas antes de las elecciones había tocado el tema con el entonces canciller de Costa Rica durante el Gobierno de Rodrigo Carazo, Bernd Niehaus. Acababa de celebrarse en San José, en enero, una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de El Salvador, Honduras y Costa Rica, en la que se creó la "Comunidad Democrática Centroamericana" (CDC), un organismo cuyo verdadero y nada oculto objetivo era aislar al Gobierno de Nicaragua, como se reveló desde el día mismo de su constitución.

Las elecciones salvadoreñas eran presentadas como un impulso decisivo hacia la democratización de la región. En enero había asumido un nuevo Gobierno Constitucional en Honduras,

en febrero había elecciones en Costa Rica y, en marzo, en El Salvador y Guatemala. Sólo Nicaragua quedaba fuera del esquema de "democratización". El destino de cada uno de esos procesos electorales fue muy distinto y no es el momento para analizarlos todos.

Sólo puedo asegurar que detrás de la creación de la CDC estaba la mano del Departamento de Estado. En diciembre de 1981, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Santa Lucía, el entonces Secretario de Estado, General Alexander Haig, propuso, tanto a Niehaus como a su colega salvadoreño, Fidel Chávez, la idea de la CDC, que luego ambos apadrinaron.

Las elecciones salvadoreñas ganaban así un realce especial, además de la importancia interna que pretendían atribuirle como parte del proceso político para aislar y derrotar a las guerrillas del FMLN.

En aquel estado de guerra, con constantes ofensivas guerrilleras, con parte del país virtualmente ocupado, aunque fueran, en aquella época, partes marginales como las zonas nortes de Morazán o Chalatenango, mientras los insurgentes incursionaban esporádicamente en otros sectores, las elecciones parecían algo fuera de lugar.

La tradición de fraude, la inexistencia de registros electorales, la exclusión de la izquierda, la decisión de los abogados salvadoreños de rechazar la invitación para integrarse al Consejo Central de Elecciones, todo hacía prever que esos comicios, de efectuarse, no representarían una clara voluntad popular.

La verdad, nuevamente, quedó a mitad de camino. Las elecciones se realizaron el 28 de marzo en la mayor parte del país, con un entusiasmo popular real, como pudimos comprobar todos los que estuvimos allí.

Apenas cerradas las urnas, eufóricos, todos los sectores participantes en los comicios y grupos gobernantes centroamericanos celebraban lo que parecía un éxito increíble. Durante algunas semanas la palabra "Democracia", como expresión electoral de la voluntad popular, ganó la primera plana de los periódicos y sirvió de argumento a los políticos salvadoreños para apoyar su tesis de un aislamiento de la guerrilla que, a partir de entonces, perdía todo justificativo para su accionar y todo apoyo que le diera sustento.

Pero esa situación duró poco. Dos días después de los comicios, los primeros resultados conocidos indicaban que algo no funcionaba. La extrema derecha, unida, se alzaba con la mayoría, reduciendo al hasta entonces gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) a una posición minoritaria, aunque individualmente fuera confirmado como primera fuerza electoral.

Los resultados fueron calificados como "catastróficos" por el Nuncio Apostólico en El Salvador, Monseñor Lajos Kadas, húngaro, conservador y vinculado a la democracia cristiana.

Así eran en efecto. Los resultados, lejos de consolidar el reformismo propuesto por la embajada norteamericana y apoyado políticamente por el PDC, puso en primer plano a los sectores desplazados del poder por el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979.

Luego, con el pasar de las semanas, veríamos que los comicios no fueron tampoco limpios, con indicadores de fraude demasiado evidentes para no ser tomados seriamente en cuenta.

Pero los resultados confirmaban el triunfo de la extrema derecha. El caos político que eso traía empezaba ya a vislumbrarse y nadie parecía muy preocupado por detenerse en el análisis del fraude. Las elecciones habían cumplido su papel. Habían servido de ejemplo de democracia, pero los resultados apenas permitían sacar partido de ese triunfo. El FMLN y el FDR habían dicho que las elecciones no serían ninguna solución para la crisis salvadoreña y fue esa opinión la que, finalmente, se reveló la única acertada. Los comicios, a la larga, ni dieron legitimidad al proceso democrático, ni permitieron el triunfo de las corrientes reformistas que lo concibieron como parte de su estrategia contrainsurgente.

LA CONSPIRACION Y EL GOLPE

Las elecciones de marzo de 1982 fueron la culminación de esa estrategia, concebida luego del golpe de octubre del 79. En ese período, la historia salvadoreña tuvo un desarrollo vertiginoso, que se caracterizó, entre otras cosas, por una represión creciente, que terminó por marginar a la izquierda del Gobierno y la empujó a una difícil clandestinidad, cuando sus principales diri-

gentes fueron secuestrados y asesinados por grupos paramilitares, a fines de noviembre de 1980.

El testimonio de algunas personalidades que estuvieron en el poder en aquella época y que posteriormente se incorporaron a la oposición deja en evidencia la trayectoria seguida por los militares.

Esa tendencia represiva empezó a delinearse a pocos días del golpe y provocó el fracaso de la primera Junta de Gobierno, abriendo las puertas para una creciente unidad opositora que, a poco andar, se plasmaría en la constitución del FMLN y del FDR.

Esa unidad se construyó, sin embargo, en medio de un complicado proceso político, cuyos orígenes remontan al golpe de octubre, enfrentado, desde el primer momento, con perspectivas diferentes por las diversas organizaciones populares.

Mientras algunas, principalmente las que integraban el Foro Popular, un frente creado poco antes del golpe, aceptaban incorporarse al gabinete, otras decidían oponerse, en las calles y en el campo, al nuevo Gobierno.

A medida en que la implementación de las reformas prometidas se fue combinando con una creciente represión y que los "militares jóvenes", uno de los grupos castrenses que promovió el golpe, perdieron terreno ante los altos mandos del derrotado régimen del general Carlos Humberto Romero, las agrupaciones que los habían apoyado abandonaron el Gobierno. En enero de 1980, los militares en el poder sólo contaban con el apoyo de la Democracia Cristiana y de la embajada norteamericana de San Salvador. Pero con la división de la Democracia Cristiana, en marzo de 1980, su base de sustentación se redujo aún más. Héctor Dada abandonó la Junta de Gobierno y renunció al Partido, junto con un importante grupo de dirigentes, para formar el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC). Nepoleón Duarte, el principal líder demócrata cristiano salvadoreño, lo sustituyó entonces en el Gobierno. Candidato presidencial en 1972, a la cabeza de una papeleta en coalición con la izquierda, Duarte debió exiliarse después de esos comicios, y permaneció varios años en Caracas. A su regreso a San Salvador, después del golpe de octubre del 79, reasumió la conducción del PDC. Es considerado un hombre de confianza de la embajada norteamericana y de tendencia conservadora dentro del Partido.

Entre el 17 de octubre de 1979, cuando se conforma la primera Junta de Gobierno, y el 2 de enero del año siguiente, cuando ésta renuncia, la pugna entre civiles y militares en el gabinete se acentuó. El resultado de ese conflicto fue el triunfo de los sectores "duros" del ejército, reflejado en la imposibilidad de poner fin a la represión y en la poca voluntad de llevar a cabo efectivas reformas en el país.

Esa historia me fue contada por uno de sus protagonistas, el entonces viceministro de Agricultura y militante demócrata cristiano, Jorge Villacorta, ahora integrado al MPSC, y confirmada por otras fuentes muy cercanas al poder en aquella época.

"El Gobierno del general Carlos Humberto Romero había entrado en una gran crisis en 1979. Primero, por no haber sabido enfrentar los problemas de los años 70, consecuencia de la quiebra del Mercado Común Centroamericano. Se había buscado varias alternativas, inclusive tratando de encontrar terceros mercados para los productos salvadoreños. Los norteamericanos, por su parte, recomendaron una "ampliación del mercado interno" y de ahí los intentos de llevar a cabo una reforma agraria durante el Gobierno del coronel Arturo Molina (72-77), que fracasó por la oposición de la oligarquía. Había entonces un creciente uso de la fuerza para detener las demandas de la población.

En segundo lugar, se acentuó la polarización política después de los fraudes electorales de 1972 y 1977. La Unión Nacional Opositora (UNO) —integrada por la Democracia Cristiana, los socialdemócratas del Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista (UDN), representante de los comunistas, que triunfó en los dos comicios pero fue postergada por los militares— entró en crisis.

Las acciones armadas aumentaron tremendamente, los sindicatos se integraron a las organizaciones populares, como la Asociación Nacional de Educadores (ANDES) que se incorporó al Bloque Popular Revolucionario (BPR), y así ocurrió con diversas otras agrupaciones; ya no se trataba sólo de la lucha económica, sino también de la política.

Económicamente, ya aumentaba el desempleo, cerraban industrias y la situación agraria permanecía estancada.

El año 1979 estuvo marcado por la violencia de los grupos paramilitares, vinculados al ejército, que empezaron a hostigar a

la Iglesia y a matar a los primeros sacerdotes.

El régimen se enfrentaba a un enorme desprestigio en el exterior, condenado por las violaciones de los derechos humanos y la embajada norteamericana empezaba a sentir la necesidad de un recambio.

El Gobierno hizo esfuerzos por parar la crisis y lanzó la idea de un Foro. Nosotros estábamos ya, como partido (demócrata-cristiano), en el proceso de conspiración, conversando inclusive con el vicepresidente de la República, Julio Astacio; con sectores de la empresa privada, como los Poma y los De Sola; y también con sectores del ejército, en búsqueda de alternativas.

Frente al Foro oficial, las fuerzas democráticas lanzaron el Foro Popular, con la idea de unir a la Unión Nacional Opositora (UNO) con las organizaciones populares que, a esta altura, ya muy activas, lanzaban la consigna de "¡Electoreros, al basurero!".

La Democracia Cristiana empezó entonces a jugar "en dos mesas", como se dijo en la época. En la primera estaban la empresa privada, el Gobierno y el ejército; la segunda mesa era el Foro Popular.

Ya entonces el PDC estaba decidido a dejar de ser oposición y a llegar al poder a como diera lugar".

En el ejército empieza también la conspiración, actuando tres grupos diferentes, señaló Villacorta.

Uno de esos grupos "estaba integrado por gente del general Romero, que manejaba la idea del autogolpe, con la participación de altos oficiales como los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y José Guillermo García".

El miembro de la primera Junta de Gobierno, Mario Andino, con quien conversé sobre ese tema, discrepó de la interpretación de Villacorta. Según Andino, "los generales Gutiérrez y García (en aquella época aún coroneles) no estaban en armonía con Romero".

Andino analizó la situación de la siguiente manera: "el autogolpe, que era una amenaza permanente, podría ser encabezado por el viceministro de Defensa, el coronel Eduardo Iraheta, ya que el ministro era un hombre de la confianza del presidente, pero sin peso militar ni político. Ese autogolpe significaba, de todos modos, la salida de Romero de la presidencia".

"Gutiérrez, y García eran hombres sin ideología definida,

pero desafectos al régimen, principalmente porque veían el deterioro de la institución militar bajo la conducción de Romero. Ambos acusaban al presidente de ser un instrumento de la oligarquía; su preocupación central estaba orientada contra la corrupción administrativa, pero no eran hombres definidos ideológicamente. En el ejército tenían el apoyo de lo que los militares llaman 'jefes' —oficiales con grado de mayor y coronel— pero no de los comandantes departamentales, que eran leales a Romero", dijo Andino, para quien el hombre que fraguó el golpe fue Gutiérrez.

El desarrollo de los acontecimientos y las posiciones del general Abdul Gutiérrez parecen indicar que efectivamente ni él ni García eran hombres de la línea del general Romero.

Villacorta calificó el posible golpe de Iraheta, como de "extrema derecha, que buscaba la salida de Romero y el fortalecimiento de los sectores fascistas, como ORDEN, y de las figuras más tenebrosas del Gobierno" entre las que incluye al mismo coronel Iraheta, "responsable de los Escuadrones de la Muerte".

Sobre el tercer grupo involucrado en el golpe del 15 de octubre Villacorta y Andino coinciden: se trata de los "militares jóvenes", que encabezó el coronel Arnoldo Majano.

"Majano era un militar honrado, señaló Mario Andino, pero no un ideólogo. Había llegado a coronel y a director de la Escuela Militar, una posición de prestigio dentro del ejército, sin más recursos que su salario.

Los militares jóvenes, sobre todo capitanes y mayores recientemente ascendidos, pensaron en él porque representaba lo que ellos querían como modelo de militar: honesto, de extracción popular y apolítico.

Majano supo del golpe una semana antes, cuando estos oficiales lo fueron a buscar para decirle que lo habían elegido como su representante", agregó.

Villacorta prosiguió su relato sobre el período previo al golpe afirmando que, "aunque no lo puedo probar, tengo la certeza de que Duarte y Morales Erlich (también dirigente del PDC y que luego integraría la Junta de Gobierno, a partir de enero de 1980) habían establecido ya contactos, a espaldas del Partido, con el grupo de recambio de Gutiérrez y García".

El golpe del 15 de octubre de 1979 fue iniciado por la Juventud Militar tres días antes, el viernes 12, cuando se sublevaron

en el cuartel de San Carlos, el principal del país; "yo creo que la embajada norteamericana conocía la conspiración, pero no la controlaba", dijo Villacorta.

Con el alzamiento del San Carlos, los tres golpes se enfrentaron todo el fin de semana, hasta que, el 15, se conocieron sus resultados.

Los sectores de extrema derecha fueron los más perjudicados, pues quedaron fuera del poder, pero lograron que sus representantes fueran respetados y se les permitiera salir del país. La organización paramilitar ORDEN fue nominalmente disuelta, pero, de hecho, no se tomó ninguna medida contra sus integrantes.

Sin embargo, la juventud militar no tuvo capacidad para tomar el poder, y terminó negociando con el grupo de Gutiérrez y García, lo que se reflejó en la integración de la Primera Junta de Gobierno. El poder quedó desde entonces repartido pero, como se vería más tarde, los militares jóvenes no pudieron, o no supieron, imponerse en el seno del ejército; al cabo de un año serían totalmente desplazados y sus líderes dados de baja o enviados al exterior.

La proclama del 15 de octubre recoge, sin embargo, todas las posiciones de la juventud militar, cuyos integrantes pensaban que aún se podía evitar la guerra haciendo profundas reformas y parando la represión. En esa posición reformista coincidían con el PDC, de ahí que, junto con otros sectores, como los representados por la Universidad Centroamericana (UCA), buscaran al Foro Popular.

Los militares jóvenes consultaron a monseñor Romero sobre quién podría ser el civil de la Junta, y aparece el nombre del rector de la UCA, Román Mayorga. El Foro Popular propone a Ungo; la empresa privada, por su parte, a Andino. "Un golpe de ese tipo no molestaba a la embajada norteamericana", estimó Villacorta.

LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO (17/Oct./79-2/Ene./80

El 17 de octubre se juramentó la Junta de Gobierno.

Sectores del Foro Popular han dicho hoy que Morales Erlich no integró la primera Junta de Gobierno —en la que estaban representados los militares jóvenes, con el coronel Adolfo Majano; el otro sector del ejército, con el coronel Abdul Gutiérrez; el Foro Popular, con Guillermo Ungo; la empresa privada, con Mario Andino; y la Universidad Centroamericana, con su rector, Román Mayorga —puesto que "estaba en el otro golpe", donde se negociaba, en la primera mesa, el acceso de la DC al poder.

El Foro decidió presentar sólo un nombre, el de Ungo, para integrar la Primera Junta, rechazando la propuesta del PDC de que fueran dos incluyendo el de Morales Erlich, reveló Villacorta.

Al respecto, Mario Andino afirmó que fueron los militares quienes decidieron reducir la representación del Foro Popular en la Junta de Gobierno, al darse cuenta de que sus dos representantes quedarían en minoría frente a los civiles. Optaron entonces por llamar a un representante de la empresa privada, de tendencia más moderada.

"El sector privado me propuso a la Fuerza Armada para integrar la Junta encabezando una terna compuesta, además, por Jesús Funés y Leonel Mejía", dijo Andino, quien comparó la posición de los empresarios que él representaba con la de los militares jóvenes, en el seno del ejército.

"Me consultaron el 17, a las once de la mañana, y en la tarde me llamaron, de parte de la Fuerza Armada, para decirme que había sido elegido como el quinto miembro de la Junta".

"Véngase, que estamos por empezar la conferencia de prensa, me dijeron. Cuando llegué a la Casa Presidencial me enteré de quiénes eran los otros miembros de la Junta. Yo ignoraba totalmente el golpe; el 15 de octubre tenía inclusive confirmación de un viaje a Panamá".

"Llegamos al poder sin planes de gobierno; sólo escoger a los funcionarios nos tomó un tiempo precioso, que no teníamos", estimó Andino. La Junta tardó varios días en nombrar el gabinete y el resto de los altos funcionarios de la administración.

Villacorta describió la situación política imperante en ese período de la siguiente manera: "Durante todo ese gobierno estuvieron presentes los problemas de la represión, que continuaba, y de la orientación de las reformas. En esos meses se hizo evidente que dábamos un paso hacia adelante y dos hacia atrás; mientras algunos trataban de mostrar voluntad de evitar la guerra, de buscar un nuevo pacto social, otros luchaban por evitarlo. Mientras congelábamos la venta de tierras en el país, anunciando la dispo-

sición de implementar la reforma agraria y de dialogar con las organizaciones populares, al día siguiente el ejército masacraba una manifestación o mataba a algún dirigente de las organizaciones con las que habíamos conversado.

El coronel García nunca hablaba durante las reuniones del gabinete, salvo a último momento, cuando pedía la palabra para cerrar el debate, dando la impresión de que eran los militares quienes resolvían todo y que no les interesaba discutir sobre otros temas.

En realidad, nadie se oponía directamente a las reformas, ni el representante del sector privado; el mismo García preguntaba a veces qué pasaba con ellas. Pero cuando se planteaba un proyecto, los representantes militares nunca estaban para discutirlos. Enrique Alvarez, entonces ministro de Agricultura, decía siempre que le parecía que no había voluntad real para llevarlas a cabo.

Todo eso iba acompañado por el incremento de la acción de los grupos populares, que consideraban los esfuerzos del gabinete como un último intento del sistema para sobrevivir. La represión impidió también que esos grupos confiaran en lo que se estaba haciendo, a pesar de que los contactos con el gobierno seguían.

Cada día se hacía más evidente que los militares jóvenes iban perdiendo poder y que la generación comprometida con el antiguo régimen lo iba recuperando.

Los militares jóvenes iban cediendo a las estructuras formales del ejército, al Alto Mando integrado por los coroneles, y justificaban su actitud por el estado de guerra que imperaba en el país.

Cada sesión del gabinete era un enfrentamiento entre los civiles y los militares, representados por el coronel García, sobre la represión y las reformas, como ocurrió por ejemplo, con la legislación del trabajo. García se opuso entonces a que se reconociera la sindicalización campesina.

Nuestras protestas generaban reclamos del Alto Mando contra el gabinete, al que acusaban de estarles atando las manos en la lucha contra la guerrilla.

En medio de ese ambiente tenso se llegó a diciembre. Entonces, Majano decidió promover una reunión del gabinete con el Alto Mando, para limar asperezas.

Ahora sabemos que los militares tenían una doble intención y que, a Majano, lo envolvieron en eso.

El Alto Mando se reunió con la Junta y, luego, el gabinete

en pleno, incluyendo a los viceministros, se integró al encuentro. Ahí, coronel por coronel, los militares fueron atacando a los civiles, advirtiendo sobre los peligros de la reforma, abogando por una mayor represión; Enrique Alvarez se distinguió en esa reunión por su enfrentamiento con los oficiales.

De repente, Vides Casanova (nombrado ministro de Defensa en abril de 1983) pidió la palabra y dijo que los civiles se habían olvidado que estaban ahí porque los militares los pusieron y los que no estuviesen satisfechos podían irse.

Esto generó una reacción violenta en el gabinete. Eramos unas 40 personas en esa reunión, que se llevó a cabo en la casa presidencial, el 28 de diciembre de 1980.

Después supimos cómo Vides Casanova, que había grabado toda la discusión, se reunió, esa misma noche, en casa de uno de los grandes cafetaleros, creo que de Alfredo Cristiani, con otros representantes de la oligarquía, para presentar la grabación y jactarse del éxito logrado con su actitud. Todos coincidían en que eso daba al traste con el gobierno.

El gabinete se reunió también esa misma noche, en el ministerio de Agricultura, convocado por Enrique Alvarez, para analizar lo ocurrido y ahí se acordó renunciar.

Junto con esos enfrentamientos en el seno del gobierno, había problemas entre el Foro Popular y la empresa privada. El mismo ministro de Hacienda, Ernesto Arbizú, hoy miembro de la Comisión de Amnistía del gobierno, creaba dificultades para la implementación de las reformas.

Los militantes del PDC en el gabinete fuimos entonces al partido y después de analizar la situación se resolvió permanecer en nuestros cargos.

Duarte había llegado al país, en noviembre, pero ahora no en forma apoteósica, como la primera vez que retornó del exilio, sino con gran oposición popular, inclusive con manifestaciones violentas. Entonces ya tenía contactos con García y Gutiérrez, con la idea de que Majano era peligroso. Duarte se oponía al Foro Popular, insistiendo en una "vía propia" para el PDC.

Duarte era contrario también a la reforma bancaria y tenía una visión muy tradicionalista de la reforma agraria, con la idea de entregar "un pedazo de tierra para cada campesino". Pero, cuando se habló de renunciar al gabinete, estuvo más bien anuente.

Antes de hacer efectiva la renuncia, nos reunimos en el arzobispado: los miembros del gabinete, Abdul Gutiérrez, García y monseñor Romero; pero volvimos a expresar las mismas decisiones, a pesar de los pedidos del arzobispo para que lo reconsideráramos. Nos habíamos reunido también con el Consejo Permanente de la Fuerza Armada (COPEFA), órgano creado por los militares jóvenes después del golpe, y que luego sería disuelto, pidiendo su apoyo; pero ellos nos dijeron que no, que respetaban al Alto Mando, quedando evidente que también habían perdido el poder.

Majano nos pidió también no renunciar, pero ya era tarde. El dos de enero aparecen las renuncias de todos. Entonces el PDC decide ir sólo al gobierno, con los militares, era la posibilidad del "camino propio" defendido por Duarte.

Ante esta realidad, el sector más progresista del partido aceptó, pero exigió la firma de un documento en el cual el ejército debía definirse claramente como antioligárquico. Ese documento pedía originalmente la destitución de García, pero Duarte saltó y dijo que "esto es una muestra de que ustedes no quieren gobernar", argumentando que "eso era imposible", y hubo que retirarlo. Pero exigimos que la Fuerza Armada se declarara antioligárquica; Duarte nuevamente se opuso, pero el punto se mantuvo.

El ejército aceptó y los militares leyeron la declaración en televisión, en una aparente voluntad de llevar a cabo las reformas, pero los problemas siguieron. La represión aumentó y Héctor Dada, representante de la Democracia Cristiana en el gobierno junto con Morales Erlich, renunció a principios de marzo, siendo reemplazado por Napoleón Duarte. En los días siguientes se promulgó la reforma agraria, moderada si la comparamos con el proyecto original, pero todavía muy fuerte en algunos puntos. Duarte se había opuesto a esas disposiciones, preguntándonos por qué queríamos destruir la propiedad privada.

García me dijo que, con la ley de reforma agraria, estábamos "desarrollando cuarteles para los guerrilleros". En su opinión, cada cooperativa sería un centro de insurgentes.

La ley salió el seis de marzo y causó impacto, pero el 10 el ejército ametralló a toda una directiva obrera de la agrupación política opositora FAPU, en Santa Ana, al occidente del país, en una clara advertencia de que la receta "reforma y represión" seguía vigente.

El ejército llevó a cabo la ocupación de las fincas intervenidas, pero donde éstas fueron entregadas a los campesinos, la directiva era, enseguida, asesinada o amenazada. Todos los presidentes de las cooperativas de reforma agraria empezaron a renunciar, haciendo que la voluntad generada con la promulgación de la ley decayera. Ahí nos dimos cuenta de que las reformas habían sido aceptadas como parte de una guerra de contrainsurgencia; en abril y mayo se dan las mayores masacres del país, con hasta 50 muertos diarios. Era ya evidente para todos el juego paralelo del ejército, encabezado por García".

Hasta aquí el relato de Villacorta. Entre los muchos méritos que tiene, está el de revelar, desde dentro del gobierno, el copamiento del golpe de octubre de 1979 por las mismas fuerzas militares que gobernaban con el general Romero, a las que se sumó la Democracia Cristiana, con el decidido apoyo norteamericano.

Esa política llevó, finalmente, el PDC al gobierno, como quería Duarte, pero no permitió ni la transformación de las estructuras del país, como lo propusieron los militares jóvenes en su proclama de octubre, ni el fin de la represión.

Desde entonces, la historia es más conocida; Duarte fue nombrado presidente, en diciembre de 1980. Días antes, Majano había perdido una votación en el seno de la Fuerza Armada, en favor de Abdul Gutiérrez y abandonó la Junta de Gobierno, consagrando la derrota completa de los oficiales jóvenes. Majano abandonó el país y algunos de sus antiguos partidarios, ante esta realidad, se incorporaron a las guerrillas. Abdul Gutiérrez fue nombrado Vicepresidente de la Junta.

El gobierno se dedicó desde entonces, en el plano político, a crear las condiciones para celebrar la elección de una Asamblea Constituyente. La fecha del comicio fue fijada oficialmente en enero de 1982, y se celebró el 28 de marzo siguiente.

EL PROCESO ELECTORAL

El día empezó muy temprano, ese 28 de marzo. Antes de las seis de la mañana largas filas se habían formado frente a los locales donde se iba a votar y llevé mi primera sorpresa de esa jornada precisamente cuando llegué ahí, en un colegio esquinero, frente

a una pequeña plaza, donde la fila se enroscaba.

El recorrido prosiguió por diversos barrios salvadoreños, incluyendo Mexicanos y Cuscatancingo, populosas barriadas al norte de la capital, donde las organizaciones populares han sido siempre muy activas.

La situación se repetía, a pesar de que todavía se escuchaban disparos, después de una noche de graves enfrentamientos armados. En las afueras de San Salvador, hacia el norte, en Apopa y San Antonio Abad había lucha, un tiroteo nutrido, pero la gente estaba por allí, escondida tras un árbol o tras cualquier cosa, a la expectativa. Más tarde el tiroteo terminó y también en esos lugares se votó. La gente estaba votando.

Esa fue la primera constatación de la jornada, hecha en horas de la mañana. Un poco más tarde, conversando con dos periodistas norteamericanos, del Christian Science Monitor y de la Revista U.S. News World Report, nos preguntábamos qué significaba esa afluencia a las urnas. Para mí era un signo inocultable de que la gente quería paz. Creo que coincidimos los tres en esa apreciación. En realidad, esa era una evidencia abrumadora, confirmada con sólo preguntar a cualquiera en las filas de votación, el por qué estaba allí.

Pero a partir de esta constatación, las opiniones comenzaban a matizarse. Algunos, tratando de sacar rápido provecho político de la situación, estimaron que ese deseo de paz era un claro rechazo a la guerrilla. Yo creo que el desarrollo de los acontecimientos no avalaron esa interpretación. La elevada participación electoral expresaba, sobre todo, un deseo de paz, de una solución distinta a la guerra. Lo que se podía percibir era un rechazo a esta guerra que se prolongaba y se iba haciendo insoportable. Las elecciones, fuera cierto o no, parecían abrir otra puerta: ofrecían una alternativa diferente. Desesperada, la gente trataba de "tocar el cielo con las manos" volcándose a las calles... en medio de las balas... agarrándose de esa alternâtiva que estaba ahí, al alcance de sus posibilidades. Lo trágico para el pueblo salvadoreño es que finalmente se demostró que la elección de marzo no era una alternativa, que no contribuyó en nada para resolver la crisis del país. Sobre esto volveremos más adelante.

El proceso electoral, durante los meses previos y posteriores a marzo, fue el centro de la vida política salvadoreña. Eso es tan

cierto que el hecho de que el FMLN no hubiera adoptado una posición clara frente a los comicios le costó caro. Recordemos que la guerrilla no llamó ni a votar ni a abstenerse, que no presentó candidatos, que no apoyó a ninguno de los participantes, limitándose a señalar que las elecciones no eran una solución para los problemas de El Salvador.

El pueblo estaba inquieto e interesado en las elecciones...

Revisando los apuntes, nerviosos, telegráficos, de la gira que realicé esa mañana del 28 de marzo por diversos lugares de votación de San Salvador y alrededores, veo resumidas las primeras impresiones de la jornada.

"Barrio de San Miguelito, 600 personas esperan para votar".

Ahí vi, por primera vez, las modernas urnas transparentes utilizadas en estas elecciones, los votos acumulándose, hasta llenar llamativamente algunas de ellas horas antes de lo previsto para el cierre de la votación.

Anoté rápidamente el proceso a que se sometía al elector, al llegar a la mesa: registro, cédula, nombre y firma. No había registro electroal, por lo que cada elector se presentaba en cualquier mesa, donde lo identificaban y tomaban los datos personales, marcándole luego la mano y la cédula con una tinta indeleble e invisible. Para asegurar de que no había votado ya en alguna otra mesa, se revisaban las manos y la cédula con luz ultravioleta. En seguida se le daba una cédula y luego pasaba a la urna, sobre la cual se apoyaba para marcar su preferencia, antes de depositarla.

La gira prosiguió. Mejicanos: tiros. Los disparos empezaron a las 5 de la mañana; en la Escuela Amalia de Mendoza, unas mil personas esperan para votar. Enrique y Ana (los dos cantantes juveniles españoles) suenan en un tocadisco.

Escuela República del Japón: Hay 12 urnas; "la gente no ha querido llegar para integrar las juntas receptoras de votos, un 60 por ciento no compareció", dice Gilberto Suárez, miembro de la Junta Electoral Municipal en representación de Arena, partido político de extrema derecha.

Desde las seis empezó el tiroteo aquí, mientras un helicóptero militar disparaba sobre las supuestas posiciones de los insurgentes, nos informa Suárez.

En Cuscatancingo encontramos el primer herido de la jor-

nada. Los franco-tiradores disparan, ocultos entre las casas. Un hombre yace en el suelo mientras un equipo de televisión trata de acercarse para hacer las tomas; los soldados se aproximan protegiéndose pegados a las paredes.

Siguiendo por el norte, ya saliendo de la ciudad, la lucha se intensifica.

Apopa: la noche anterior había comenzado el tiroteo. Los primeros disparos a las once de la noche. Sólo hay un puesto de votación, en la Escuela Vicente Acosta; la gente está adentro, las urnas no han sido instaladas todavía.

En realidad, la votación se inició en Apopa muy entrada la mañana. En las primeras horas se combatía aún en la ciudad, con tiroteos esporádicos pero intensos; la gente, escondida y expectante, acechaba detrás de muros, árboles o cualquier cosa que la protegiera, en espera de poder salir nuevamente.

Cerca de allí, en San Antonio Abad, se produjo el enfrentamiento con mayor saldo de bajas; doce guerrilleros perdieron la vida al caer en una emboscada del ejército.

El relato de los corresponsales que estuvieron en esa localidad es impresionante. Terminada la lucha, los cuerpos de los insurgentes estaban esparcidos por el suelo. Uno de ellos, todavía herido, pedía clemencia. Fue liquidado con un tiro de fusil en la cabeza. Los cuerpos fueron luego tirados en el camión, en medio de las bromas y la saña de los soldados. Por lo menos unos 10 periodistas asistieron a estas dramáticas escenas y sus relatos coinciden.

Poco después empieza a correr el rumor de que fue herido un periodista. Se trata del chileno Carlos Ruz, 47 años, de la Televisión Nacional de ese país, alcanzado por un tiro en el cuello en Ayuxtepeque, cerca de Mexicanos. Ruz fallecería días después, como consecuencia de la herida.

El balance sigue. Santa Ana: tranquilo; San Miguel: incomunicado; Usulután: situación "horrible", el FMLN ha tomado el barrio de El Calvario, siguen tiroteos, nueve soldados muertos, no hay votación.

En la capital, bien custodiada, la votación es también intensa, principalmente en el Gimnasio Nacional, con unas 30 mesas y largas filas durante toda la jornada. Cuando se cerraron las urnas, a las seis de la tarde en la capital o en otras ciudades importantes;

más temprano en el interior, donde no había luz; culminó un día tenso, nervioso, lleno de sorpresas, que concentró la atención del mundo.

La gente votó y los cables lo decían al mundo. Había ahora que esperar los resultados, que empezaron a conocerse de inmediato. Minutos antes de las seis, violando inclusive las normas dispuestas sobre el horario de votación, la Junta 660, en la Escuela República Oriental del Uruguay, en el Barrio de Zacamil, había iniciado ya el recuento de los votos.

Esperé ahí, ansioso como todos, para ver los primeros resultados: Democracia Cristiana, 216 (43 por ciento); Arena, 86 (17 por ciento); Acción Democrática, 55 (11 por ciento); Partido de Conciliación Nacional, 40 (8 por ciento); Partido Popular Salvadoreño, 19 (4 por ciento) y Partido de Orientación Popular, ninguno. Ese resultado, probablemente el primero en conocerse, no es más que una curiosidad, pero el PDC logró aquí una cifra bastante aproximada a lo que obtendría finalmente en todo el país. Arena casi duplicaría, en los cómputos finales, ese 17 por ciento. El PCN aumentaría su ocho por ciento y AD vería sus votos reducidos a menos de la mitad.

A partir de entonces venía el trabajo más difícil; el de explicar lo que había ocurrido, de sacar las conclusiones que los resultados arrojaban.

Al día siguiente, en medio de las especulaciones sobre los resultados finales, pero ya con la idea clara de que no obtendrían la mayoría absoluta en que habían confiado, los Demócrata Cristianos empezaron a hablar. Julio Rey Prendes, que encabezó la papeleta de ese partido, estimaba entonces que el PDC podría sacar hasta 29 diputados, y que por lo menos 26 estaban seguros. En realidad, lograron 24.

Consultado si su partido tenía una estrategia ya preparada, ante la eventualidad de tener que pasar a la oposición, Rey Prendes dijo entonces que prefería "esperar hasta mañana" para responder. "Ya llegamos al río, ahora vamos a ver como cruzarlo", fue la gráfica expresión que usó.

El PDC estaba ante un dilema y una sorpresa. Los resultados, aún inciertos, permitían ya vislumbrar la imposibilidad de gobernar sin alianzas, para un partido que asumió el gobierno en marzo de 1980, después de una crisis provocada por el retiro de

los representantes de izquierda e, inclusive, de algunos demócrata-cristianos que luego, en el exilio, se incorporarían al FDR.

Desde entonces, con el apoyo del alto mando militar y de la Embajada Norteamericana, los demócrata-cristianos habían gobernado solos. Las elecciones fueron concebidas para consolidar ese poder, para darles una legitimidad que les permitiera enfrentarse a los militares más recalcitrantes, opuestos a las reformas preconizadas, así como para abrir espacio internacional a un régimen que estaba aislado.

Los resultados parecían amenazar esas previsiones. Rey Prendes rechazó, en sus primeras declaraciones, cualquier alianza con Arena o el PCN, admitiéndola con AD. En ese momento todavía tenía esperanzas de que las dos agrupaciones, juntas, pudieran conformar mayoría en la Asamblea. Pero, cauteloso, no descartó totalmente al PCN. En ese partido "está la gente que patrocinó la reforma agraria de Molina; habría que estudiar cuáles son los diputados ganadores del PCN". El general Arturo Molina había impulsado una tímida reforma agraria durante su mandato (1972-77), paralizada por presión de los sectores más conservadores del país. "Todo puede suceder en el plano político; el PCN es un partido populista; no como Arena, que es de corte fascista, ideológico", insistió Rey Prendes, en las declaraciones de esas primeras horas post-electorales, llenas de expectativas.

Un nuevo capítulo en la historia salvadoreña, que está aún en pleno desarrollo, se estaba abriendo. Concebidas por el PDC, por algunos militares y por los norteamericanos como una etapa decisiva en el proceso de institucionalización después del golpe de estado de octubre de 1979 y como instrumento importante en la lucha antiguerrillera, se había llegado al río; pero, como lo recordó Rey Prendes, faltaba aún cruzarlo. Desde entonces, todo ha sido un gran esfuerzo por llegar al otro lado, en medio de una corriente que, a ratos, parece querer volcar el barco.

Los sorpresivos resultados opacaron también otro aspecto electoral importante. La aparente normalidad de los comicios fue dando paso, poco a poco, a especulaciones sobre fraude, que se habría reflejado, sobre todo, en la cifra de votantes, más que en los resultados de las urnas. El tema merece un poco de atención.

FRAUDE

Días antes de los comicios, las discusiones sobre el posible número de votantes eran intensas. El hecho de que no hubiese padrón electoral ni un censo de población en El Salvador, hacía de cualquier pronóstico una aventura. Pero era indispensable dar cifras, hacer cálculos, pues los partidos participantes trataron de hacer de la campaña un plebiscito contra el FDR y el FMLN. Según ese razonamiento, toda participación electoral sería un voto contra las coaliciones de izquierda, cualquiera fuera el partido favorecido.

La tarea era entonces tratar de obtener alguna cifra confiable o, por lo menos, que representara una opinión mayoritaria.

Los resultados de la encuesta fueron sorprendentes. El líder de la derechista Arena, el mayor D'Aubuisson, estimó en 700 mil los votantes. Temeroso de un fraude electoral, el militar retirado afirmó que su partido aceptaría el resultado, cualquiera fuera éste y se mostró convencido de que, de todos modos, tendrían representación en el gobierno, como realmente ocurrió.

El entonces Ministro de Trabajo y dirigente demócrata cristiano, Julio Samayoa, previó una votación de 800 mil personas. "Pretendemos ganar la mayoría absoluta", nos dijo entonces el Ministro, quien estimó que para su partido era absolutamente necesario realizar unas elecciones limpias. La Democracia Cristiana había sido uno de los partidos más perjudicados por los acostumbrados fraudes electorales en El Salvador. En 1972, el principal líder del partido, José Napoleón Duarte, encabezó la papeleta de centroizquierda, acompañado en la vicepresidencia por el hoy líder del FDR, el socialdemócrata Guillermo Ungo. La coalición triunfó en las urnas, pero no asumió el poder, que nuevamente quedó en manos de los militares, representados por el coronel Molina, candidado del PCN. El PDC tenía entonces el temor de que posibles denuncias de fraude contribuyeran a desprestigiarlo, contagiándolo con el mismo estigma que pesaba sobre el sistema electoral del país.

Julio Rey Prendes, el Secretario General del PDC, estimó que votarían alrededor de 800 mil "o quizás un millón de personas, podría haber hasta 1,5 millones de electores", según sus previsiones.

Hoy sabemos que los resultados sobrepasaron ampliamente las expectativas más optimistas. El total de votos en las urnas superó el millón y medio, o sea, fue inclusive superior a la más alta estimación del total de votantes existentes en el país. Evidentemente eso no puede ser y las explicaciones que se ensayaron fueron muy variadas.

Ninguna de ellas parece muy convincente, como la que decía que la población del país no era de cinco millones, como lo indican todas las estimaciones (el informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalaba la cifra de 4,96 millones, para 1981), sino de seis millones de habitantes.

La realidad era otra; ciertas cifras indican una fuerte probabilidad de fraude en los comicios.

De las 4.556 urnas previstas para todo el país, cerca del diez por ciento no pudo funcionar por diferentes razones; principalmente por situaciones de violencia que predominaron en ciertos lugares, como Usulután. Por otra parte, el propio Consejo Central de Elecciones destacó el hecho de que miles de personas no pudieron votar por falta de tiempo, debido al pequeño número de mesas. El gobierno dispuso limitar el número de mesas y de lugares de votación por razones de seguridad, y eso contribuyó al congestionamiento frente a cada local electoral pero, a la larga, impidió que mucha gente pudiera votar. De este modo, al total de votos anunciados, ligeramente superior a millón y medio, habría que agregar ese número indeterminado de electores que no pudo hacerlo, elevando aún más esa cifra, ya demasiado alta. Es completamente improbable que haya tantos electores en El Salvador, cualquiera sea la fuente que se considere.

Por otra parte, en algunas mesas se llegó a contar 800 votos. Ciertas urnas se llenaron tanto, que hubo que instalar otras, para seguir la votación. Si consideramos que la votación duraba, a lo más, 11 horas (de las siete de la mañana a las seis de la tarde), nos da un total de 72 votos por hora; un voto cada 50 segundos, aproximadamente. Eso no correspondió a la realidad; un cronometraje que hicimos nos dio aproximadamente tres minutos y medio para una votación y aunque esa cifra no fuera representativa del promedio, la otra, de menos de un minuto, parece aún más lejana de la realidad.

Recordemos que el elector se presentaba con su cédula, un

pequeño librito; cada página era revisada con luz ultravioleta para certificar que no tenía la marca de tinta invisible y que, por lo tanto, no había votado antes.

Igualmente, había que revisar las manos del elector, que también se marcaba con esa tinta. Luego se registraban sus datos, se le entregaba la cédula, se dirigía a la urna y votaba. No era posible hacerlo en 50 segundos, mucho menos lograr un promedio de 50 segundos, indicativo de que mucha gente lo hizo en menos tiempo aún. No era materialmente posible.

De modo que, o no se respetó el procedimiento para votar, lo que puede haber permitido que mucha gente votara muchas veces, o el número de votos en las urnas estaba inflado. A eso hay que agregar manejos en el recuento de votos, principalmente en el interior del país, que permitía un aumento arbitrario del total de votantes. Hay que recordar la inexistencia de registros y la imposibilidad de comparar posteriormente el total de votos en las urnas con el total efectivo de votantes. Hay algunas versiones sobre fraudes cometidos de esa forma, inflando simplemente el resultado final de las urnas.

Todo indica que el fraude jugó un papel importante en el aumento del número de votantes. Medios opositores estiman en 700 u 800 mil el número razonable de votos realmente emitidos. Medios diplomáticos hablaron de un millón, o un poco más. El Gobierno rechazó cualquier posibilidad de fraude.

A este elemento hay que agregar una fuerte presión militar, principalmente en el campo, para obligar a comparecer a las urnas. Tuvimos un testimonio de eso en Usulután, donde una integrante de una Junta Electoral local nos reveló, el mismo día de los comicios, que los campesinos llegaban a la ciudad, asediada por la guerrilla, traídos por los militares; pero allí no fue posible votar, debido a los enfrentamientos. Sin embargo, si revisamos la votación final, también en Usulután aparecen votos. Esa situación, probablemente, se repitió en otros lugares del país. No hay razón para pensar que sólo en Usulután, donde lo pudimos comprobar, se ejercía ese tipo de presiones, que contribuyeron a elevar también el número de votantes.

Hay, finalmente, un tercer factor que considerar: el miedo. Había miedo de no votar, miedo de no tener la constancia del voto, escrita con tinta indeleble e invisible, en la cédula de identi-

dad. En un cantón apartado, controlado por las fuerzas paramilitares que tenían todavía una fuerte presencia en muchos lugares, abstenerse de votar provocaba temor a los campesinos. El no haber votado significaba que se era partidario de la guerrilla, según toda la propaganda de aquellos días en El Salvador. Eso era sinónimo de muerte en esos poblados apartados. Por lo tanto, el miedo contribuyó decisivamente para que muchos electores acudieran a las urnas.

Estos tres factores permiten matizar el análisis y sopesar la situación con más realismo. Hay que tomarlos en cuenta, si pretendemos entender lo que está pasando en El Salvador.

LAS CONSECUENCIAS POLITICAS

La argumentación sobre el número de votantes en las elecciones del 28 de marzo de 1982 sigue teniendo cierto peso, sobre todo en el plano internacional. Los norteamericanos, principalmente, insisten en presentarlas como muestra de la decisión democrática del pueblo salvadoreño y, como ya vimos, eso por lo menos tuerce la realidad, que es bastante más matizada.

Pero la cifra de votantes, que pudo haber tenido un papel más importante en el panorama político salvadoreño, se vio rápidamente opacada en la discusión por el sorpresivo resultado de las urnas.

El ambiente en las sedes partidarias era febril en los días posteriores a la elección.

D'Aubuisson celebró eufórico, con tiros al aire, lo que consideró como un triunfo de Arena. Una conferencia de prensa se organizó en la sede del partido, en un barrio residencial de San Salvador, el día 29 de marzo, donde se anunció, por primera vez, que las agrupaciones de extrema derecha se disponían a desplazar a la democracia cristiana del poder. Arena, el PCN, que gobernó el país durante los últimos 30 años, AD y el PPS, se hallaban reunidos desde la noche del mismo 28 para concertar una alianza, una rápida medida de D'Aubuisson que desconcertó al PDC y le dio la iniciativa política durante el año posterior a los comicios.

Un documento aprobado entonces por los cuatro partidos

destacaba que la oposición —Arena, PCN, AD y PPS— era mayoritaria en el país y que se disponía a gobernar, estando dispuesta a invitar al PDC a participar en un gobierno de unidad nacional. Era, sin duda, un tono triunfal y humillante para los que se presentaron a las elecciones como franco favoritos y que aspiraban a obtener la mayoría absoluta.

El documento interpretaba también el resultado electoral como "un rechazo a la violencia, a la penetración del comunismo y a la doctrina comunistarista", defendida por el PDC.

La pugna se planteaba desde un principio en el terreno ideológico, pero sus implicancias políticas eran evidentes; el tiro buscaba, por elevación, advertir que el final de las reformas iniciadas dos años antes estaba próximo, si se consolidaba la coalición opositora.

"El pueblo votó masivamente por los partidos de oposición; a partir de ahora ya no van a mandar sólo de los de la DC, vamos a mandar todos", decía D'Aubuisson, eufórico, asegurando a sus partidarios que sólo un diputado —22 a 21— separaba su partido de la Democracia Cristiana (el resultado final fue de 24 a 19).

Era un ambiente irreal; la Democracia Cristiana, ciertamente derrotada, desconcertada, tenía una carta incomparable en las manos, lo único que, en ese momento de zozobra, le permitiría seguir a flote: un decidido respaldo norteamericano y sólidas vinculaciones internacionales.

El golpe sería absorbido, la Democracia Cristiana no pasaría a un ostracismo político en espera de nuevas elecciones; pero el resultado de las urnas, favorable a la extrema derecha, enfrentado a ese respaldo internacional con que contaba la Democracia Cristiana, produciría un "empate" político de graves consecuencias para el régimen salvadoreño.

La estrategia de contrainsurgencia, diseñada para restar apoyo político al FMLN, en la cual se enmarcaban las elecciones, pero que incluía también, como punto decisivo, una reforma agraria, fue neutralizada por la oposición mayoritaria de la extrema derecha, sin ser cambiada por otra. Esto, sumando al fortalecimiento del FMLN y a la intensificación de sus golpes militares, condujo, al cabo de un año, a la crisis del gobierno de "unidad nacional".

Las contradicciones del momento político se resumían en

el interior de AD. Esa pequeña agrupación liberal de derecha que agrupa a profesionales de prestigio en el país, encabezados por un abogado, René Fortín Magaña, se sumó al carro "opositor". "Nos sentimos cómodos en la coalición, que también preserva la unidad de cada partido. Yo diría que estamos más al centro del espectro político, equidistantes de Arena y del PDC", estimó Fortín Magaña, resumiendo esa necesidad de equilibrio que ya entonces intuía.

"Yo creo que Estados Unidos aceptará esa coliación proveniente de una consulta popular", enfatizó Fortín Magaña, precisando otro problema central de la política salvadoreña en ese momento. Las elecciones, concebidas e impulsadas por los norteamericanos como un paso para el retorno de la democracia, no podían ser desconocidas, ni minimizadas, aunque los resultados impidieran la aplicación de la estrategia concebida. "El resultado electoral, dijo Fortín Magaña, es un ingrediente poderosísimo en el camino que se tomará frente a la guerrilla; no veo posibilidad de negociación, sino que el gobierno tendrá una alta autoridad para enfrentar el problema".

Ese era el esquema post-electoral previsto por todos los partidos participantes. Pero la división política en el seno del gobierno, y la creciente fuerza militar de la izquierda, impidieron que se hiciera realidad.

La posición frente a las reformas era el otro tema de gran sensibilidad en este proceso. Todos sabían que éstas eran indispensables para la continuación de la ayuda norteamericana y nadie se atrevió, por lo tanto, a manifestarse en contra. Al contrario, horas después de cerradas las urnas, sintiéndose ya victoriosos, los líderes de los partidos opositores, uno a uno, reiteraron su adhesión a las reformas. D'Aubuisson las había atacado duramente durante la campaña. Según decía, por los malos resultados que habían dado, en particular la reforma agraria, y manifestaba su disposición a "mejorarlas". No era más que un eufemismo que no ocultaba la intención de, por lo menos, paralizarlas. En efecto, apenas asumió la Asamblea Constituyente, el 18 de mayo de 1982, se suspendió el decreto 207 de la Reforma Agraria que otorgaba parcelas de hasta siete hectáreas a campesinos sin tierra. El tema era tan sensitivo que la comisión de Relaciones Exteriores del Senado Norteamericano aprobó, casi de

inmediato, una resolución congelando la ayuda a El Salvador, rechazando una propuesta del Presidente Reagan para que fuera aumentada de 66 a 166 millones de dólares, en el presupuesto norteamericano de 1983. La partida fue finalmente incrementada, como lo deseaba Reagan pero el incidente revelaba la importancia del problema.

El líder de AD, Fortín Magaña, en una entrevista celebrada dos días después de las elecciones, recordó que una carta de intenciones de su partido, anunciada antes de los comicios, reiteraba la decisión de preservar las reformas efectuadas, de las cuales AD pretendía convertirse en garante en el seno de la coalición derechista.

El PCN se expresó en términos similares. Una conferencia de prensa fue convocada por sus principales dirigentes, entre ellos su Secretario General, Coronel Raúl Molina y la diputada electa, María Julia Castillo al día siguiente de las elecciones. (Esa conferencia fue interrumpida por una fuerte explosión, ocurrida en las cercanías de la sede del partido, que hizo a los periodistas, especialmente a los camarógrafos, salir en desbandada tras el bombazo). Ahí el PCN precisó sus posiciones ante la situación política del país.

"Las reformas serán mejoradas, serán mejor implementadas, porque han sido un fracaso, pero todas se mantendrán. Los campesinos deben ser empresarios agrícolas y no peones del Estado", esgrimió el PCN. Un viejo argumento que no satisfizo a los campesinos, de atenernos a las declaraciones de sus principales organismos luego de la suspensión del decreto 207.

Al cabo de dos días de conferencias de prensa y reuniones con los líderes de los principales partidos de la oposición que, ahora unidos, representaban la nueva mayoría frente a la DC, descubro en mis apuntes una frase sin autor conocido, pero aguda: "El Salvador ha recorrido un círculo completo y podría encontrarse hoy, nuevamente, como en vísperas del golpe de octubre de 1979". La -unica diferencia sustancial, es que, dos años y medio después del golpe, la oposición de izquierda no era más la misma.

El resultado electoral es hoy bien conocido. Una mayoría de derecha y extrema derecha, integrada por cuatro partidos (Arena, PCN, AD y PPS) obtuvo un total de 36 bancas, de las 60

que componen la Asamblea Constituyente, contra las 24 de la DC. Los diputados eligieron, después de complicadas negociaciones, al banquero Alvaro Magaña como presidente de la República, hombre muy vinculado a los militares y al PCN, la misma organización que gobernó el país en los últimos 30 años, y que estaba en el poder cuando ocurrió el golpe de octubre de 1979. Magaña no contó con los votos de Arena, que pretendía poner a un hombre de sus filas en ese cargo, aunque contó con el respaldo de los norteamericanos y del alto mando de las fuerzas armadas.

La mayoría en la Asamblea eligió, sin embargo, a D'Aubuisson como presidente de ese organismo y a representantes de los demás partidos, con exclusión de AD y del PDC, en los cargos directivos.

Ante esta alianza en torno a la extrema derecha, los demócrata cristianos optaron por denunciar lo que calificaban como una traición a los programas electorales, ya que los cuatro partidos opositores se habían presentado por separado en los comicios, sin que a sus partidarios se les hubiese ofrecido alguna alternativa de coalición.

En efecto, durante la campaña no se había anunciado la posibilidad de una coalición que permitiera ese vuelco político en el país.

EL PDC Y LAS ELECCIONES

Una semana antes de las elecciones, la clave del futuro político salvadoreño parecía estar bien guardada en el cofre de la Democracia Cristiana. En esa puerta había que golpear para tratar de desenmarañar las intenciones del oficialismo, después de los comicios.

El que me expresó ideas más acabadas sobre las líneas que pensaban imponer a la nueva constitución del país fue el entonces ministro de Trabajo, Julio Samayoa. En su oficina, en la sede del partido, Samayoa reveló hasta qué punto la Democracia Cristiana estaba confiada en obtener una mayoría suficiente para aprobar el proyecto de constitución que tenía ya listo.

"El régimen Económico del país se cambiará por uno orientado por la ideología socialcristiana, que incorpore el concepto

de propiedad social a la constitución, así como la idea de economía mixta, dentro de un régimen de libre mercado. No pretendemos sustituir la propiedad privada por otra, sino que coexistan diversas formas".

La idea de la Democracia Cristiana era adecuar la constitución de 1950 incorporándole normas posteriores, como las contempladas en el Código de Trabajo, reveló el Ministro, señalando también que las disposiciones sobre las fuerzas armadas se mantendrían inalteradas.

"Pretendemos obtener la mayoría absoluta", dijo Samayoa, estimando que acudirían a las urnas ese 28 de marzo unas 800 mil personas.

Aparte de estas previsiones y del trabajo técnico en torno a la futura constitución del país, Samayoa habló también de lo que, en aquel momento, era lo que más inquietaba: el futuro político del país.

"El triunfo electoral nos dará un poder real, que estamos dispuestos a usar hasta las últimas consecuencias", en una clara alusión a los militares que se oponían a las reformas propuestas. El proyecto del PDC era el de legitimar la posición política del partido con el triunfo electoral para abrir luego una etapa de conversación con la izquierda. Así me lo revelaron en más de una oportunidad diversos dirigentes del partido, pero cada vez que Duarte era puesto frente a esa alternativa la negaba rápida y enfáticamente. El entonces presidente decía siempre que "si converso con la izquierda, me derrocan".

Duarte insistía siempre en lo que "era posible y lo que no era posible" hacer, en un honesto reconocimiento de que el poder en el país, o por lo menos una parte muy importante de ese poder, seguía en manos de los militares.

Los efectos del resultado electoral sobre la Democracia Cristiana empezaron a percibirse apenas conocidos los primeros cómputos; pero la voz de alarma fue lanzada el martes, 30 de marzo, dos días después de los comicios, en una conferencia de prensa.

El tono fue conciliador, pero aún confuso; no se quería poner todas las cartas sobre la mesa cuando se avecinaba un período de complicadas negociaciones.

Los Demócrata Cristianos lanzaron entonces una severa

advertencia: "Si nosotros pasamos a la oposición, será la desestabilización total del país". En ese momento, derrotada y enfrentada a la rápida iniciativa de Arena, que logró unir tras de sí a la oposición, la frase sonaba a una especie de "bluff". Se trataba de presionar a la extrema derecha para asegurar desde ya un espacio en el futuro gobierno.

"El PDC es la única garantía de paz social en el país", repitió el Secretario General Adjunto del Partido, Julio Rey Prendes, que encabezaba la lista de diputados de esa agrupación. "Como partido mayoritario, invitamos a todos los sectores del país para buscar juntos la paz, la consolidación de la democracia y los cambios; no hemos hablado de colaborar con el gobierno de nadie", dijo, en referencia a la coalición formada en torno a Arena; "no hemos dicho todavía que vamos a participar en un gobierno con ellos, pero tenemos que sentarnos a dialogar; el país ha cambiado y esta gente se enfrenta ahora a la opinión pública".

El PDC expresó siempre que con la constitución de Arena la oligarquía salvadoreña, por primera vez en su historia, se daba una representación política. Hasta entonces, decía el PDC, estos sectores habían gobernado ocultos tras las cámaras patronales y a través del ejército.

Con la formación de Arena esa oligarquía se "enfrentaba a la opinión pública", para decirlo en las palabras de Rey Prendes. De este modo, agregaba, se vería obligada a respetar las reglas del juego y, principalmente, a retirar su apoyo a los escuadrones de la muerte y a los grupos paramilitares.

Rey Prendes habló luego del documento conjunto firmado al día siguiente de las elecciones por los cinco partidos opositores —Arena, PCN, AD, PPS y POP, aunque este último no logró representación parlamentaria— estimando que el manifiesto "expresa sólo coincidencia en algunos puntos; ellos lo lanzaron para tener fuerza de negociación, y no para otra cosa".

El famoso manifiesto era, en realidad, un corto documento, negociado por los líderes opositores pocas horas después de cerradas las urnas, pero ya en medio de la certeza del triunfo inesperado. Los rumores sobre ese documento empezaron a correr el lunes 29 de marzo, mientras la prensa trataba de seguir de cerca los pasos de D'Aubuisson y de otros dirigentes que se movían de una reunión a otra, siempre bien custodiados.

Fue en la tarde de ese día, durante una conferencia de prensa en la sede de Arena, que pudimos hablar con Antonio Rodríguez Porth, ex canciller salvadoreño y dirigente de ese partido, uno de los autores del documento.

En él se expresaba la complacencia de los cinco partidos por la alta participación electoral; se hacía un reconocimiento al papel de la fuerza armada y una interpretación del resultado electoral, donde se destacaba el papel mayoritario de la oposición. El documento señalaba también que las elecciones habían sido un rechazo a la violencia, a la penetración del comunismo, a la doctrina comunitarista (del PDC) y significaba la adhesión del pueblo al régimen democrático, representativo y de libre empresa.

Finalmente, anunciaban que los cinco partidos tenían la intención de formar un gobierno de unidad popular.

"La posición de los cinco partidos es falsa", fue la respuesta de Rey Prendes, "no hay unidad nacional porque excluyen a la DC y sin nosotros no hay paz social".

"Si pasamos a la oposición, ¡Dios salve al país!", concluyó el dirigente del PDC ese día, después de reconocer que aún no se había establecido contacto con la coalición opositora pero que, dentro del proceso de negociaciones que se iniciaría cuando los otros partidos aceptaran dialogar con la DC, "todo era posible". Para los demócrata cristianos se trataba, en ese momento, de no quedar fuera del gobierno; para eso contaban, principalmente, con apoyo de los Estados Unidos.

Consultado al respecto, Rey Prendes dijo no saber si los norteamericanos estaban haciendo algún esfuerzo para influir en la formación del futuro gobierno, pero "nos parece lógico que los países democráticos asuman la responsabilidad de continuar con los esfuerzos para impulsar la democracia en el país".

Así las cosas, todos alistaban sus armas para las discusiones que, dentro de las filas del régimen, definirían la estrategia política, posiblemente hasta el final de la guerra.

Conocidos los resultados electorales, quedó al desnudo la enorme ironía de ese proceso.

¿Quién ganó, quién perdió? Se lo pregunté a Fidel Chávez, el canciller salvadoreño, también militante de la Democracia Cristiana, un hombre conservador, pero equilibrado, (Sólo lo vi molesto, irritado, una vez, durante una entrevista en la televisión

costarricense, cuando, en febrero de 1983, el periodista le consultó sobre un eventual diálogo con la guerrilla. Fidel Chávez le respondió abruptamente, alegando no saber por qué los periodistas insistían tanto en ese tema, cuando en su país ya se había votado y la guerrilla no había querido participar. En esa época ya el FMLN estaba logrando grandes triunfos militares).

Hablamos largamente en la oficina del ministro, en San Salvador. Era el primero de abril. La conversación empezó por el balance electoral.

"El resultado demuestra un gran perdedor, el FDR-FMLN, porque hicieron todo lo necesario para boicotear la elección; el pueblo quería paz y se volcó masivamente a eso. Hay también un gran ganador, que es la derecha".

En ese punto, el ministro preguntó mi opinión. Le dije entonces que no me parecía, que el gran perdedor, en mi opinión, había sido el régimen, o sea, todos los que concibieron las elecciones como una forma de consolidar un esquema con el objetivo de debilitar a la guerrilla. En resumen, que la situación estaba ahora más difícil de maniobrar que antes.

— ¡Ah, me dijo él, pero eso es ya otra cosa!

Efectivamente, era otra cosa, pero ahora, a la distancia, estoy convencido que era la cosa que realmente importaba.

Fidel Chávez destacó con claridad lo que había que negociar con la derecha, ahora unida: garantías para la continuación del proceso de reformas; el término del mandato provisional (dos años sería muy delicado, estimó, proponiendo un período mucho más corto); así como la presidencia provisional y la integración del gabinete.

A pesar de esa propuesta, vemos hoy que el período de transición hasta las próximas elecciones presidenciales será finalmente de dos años; que el proceso de reformas fue, de hecho, paralizado, en medio del empate de poder que arrojó las urnas entre la extrema derecha y la DC; y que sólo el nombramiento del presidente provisional —Alvaro Magaña— y la integración del gabinete pudieron, en la práctica, ser objeto de una negociación.

El canciller venía llegando de Washington en esos días, y se refirió a los problemas internacionales, principalmente a las relaciones de su país con Nicaragua, a la que instó a "dejar de ser soporte de los elementos guerrilleros en Centroamérica y en

El Salvador".

Ese es un elemento básico de la interpretación de todos los problemas de la región, tanto de la política exterior salvadoreña como norteamericana: la supuesta injerencia de Nicaragua en cuanto movimiento insurreccional ocurre. Le pedí entonces al canciller que me diera alguna evidencia, algo que pudiera cimentar sobre bases más sólidas esas acusaciones contra el gobierno sandinista.

"Hay evidencias lógicas, como las declaraciones de simpatías a favor del FDR y del FMLN por parte de los gobernantes de Managua. "No hay movimiento guerrillero capaz de sostenerse sin apoyo logístico, para eso necesitan una retaguardia terrestre que, por lógica, es Nicaragua".

No se puede hablar seriamente de este tema sin decir que jamás, ni en una sola oportunidad, los Estados Unidos y el gobierno salvadoreño pudieron presentar una prueba tangible de esa intervención. En mi opinión, sin esa prueba, no se puede aceptar simplemente la lógica del ministro; hay que destacar en este caso, inclusive, que Nicaragua no tiene frontera terrestre con El Salvador.

Ese mismo día el presidente Duarte habló con la prensa e hizo referencia a los supuestos ganadores de las elecciones.

—Hay quienes dicen que este proceso electoral sólo beneficia al FMLN y al FDR porque eliminó la única fuerza capaz de detener la avalancha de la izquierda. La gente que volvió a tener fe en la democracia se puede frustrar y el resultado puede ser una tragedia inevitable, advirtió Duarte.

El presidente era entonces figura clave del momento político, no tanto por el cargo que desempeñaba, sino por haber transformado la elección en un plebiscito en torno a su nombre. El dirigente de Arena, el mayor D'Aubuisson, insitió en diversas oportunidades en que un acuerdo con el PDC era posible pero sin Duarte.

DUARTE

Durante más de diez años, la figura de José Nepoleón Duarte ha estado en el primer plano de la política salvadoreña. En 1972 triunfó en los comicios presidenciales, encabezando una pa-

peleta junto con el ahora presidente del FDR, Guillermo Ungo, pero los militares desconocieron el resultado, impusieron el fraude y otorgaron las presidencia al coronel Arturo Molina, candidato del oficialista PCN.

Duarte sufrió exilio y mantuvo una posición opositora al régimen militar de su país; no obstante, al cabo de diez años llegó finalmente a la presidencia de la mano de aquellos que le habían robado un triunfo legítimo. Cualquiera que se aproxime al problema salvadoreño, no puede dejar de sentirse atraído, en determinado momento, por ese personaje. No recuerdo ya la primera vez que tuve oportunidad de verlo pero, desde entonces, han sido muchos los encuentros, en conferencias de prensa o entrevistas. Duarte es accesible a la prensa; lo era en la presidencia y lo sigue siendo en su oficina en la sede del partido.

Cuatro días antes de las elecciones Duarte recibió a la prensa, aún como presidente de la República, en un salón del Palacio de Gobierno.

Días antes se había producido un golpe militar en Guatemala, anulándose así las elecciones que habían consagrado el triunfo del oficialista general Aníbal Guevara.

La conferencia de prensa empezó por ahí. "El golpe, dijo Duarte, es efecto de la crisis en Centroamérica y debemos hacer algo para corregir una estructura que provoca esa crisis".

"Las elecciones, dijo, refiriéndose ya a los comicios que se celebrarían en pocos días en su país, no son más que un paso para resolver los problemas. Una vez celebradas, el gobierno cobra estatus y esa es la segunda etapa. La tercera es la negociación para incorporar al gobierno a la derecha y a la izquierda. Las elecciones restablecerán el principio de autoridad y darán la base para gobernar el país".

En principio, agregó el presidente, las elecciones "son siempre una solución a los problemas sociales; hemos hablado de solución democrática y eso incluye la participación de todos, pero no en el gobierno". A sólo cuatro días de las elecciones, el esquema estaba claro; legitimación de la democracia cristiana en el poder para que, a partir de una posición de fuerza, hablara con los demás, con la guerrilla, con la extrema derecha, con el ejército, con gobiernos extranjeros.

En la conferencia, Duarte había hecho una alusión a la declaración franco-mexicana, de agosto de 1981, en la que pedían el reconocimiento del FMLN y del FDR como partes beligerantes representativas de una porción significativa del pueblo salvadoreño. Esa propuesta fue rechazada airadamente, en su oportunidad, por el gobierno de Duarte, que la consideró una intervención en los asuntos internos del país. "Hay naciones que tratan de imponer sus posiciones a la nuestra, pero cuando uno tiene un gobierno legítimo, esta situación cambia", dijo el mandatario en la conferencia.

Las elecciones, por lo tanto, no iban a resolver nada por sí solas, pero la Democracia Cristiana estaba segura que le daría legitimidad en el poder, que le daría un nuevo aire, indispensable para seguir gobernando después del enorme desgaste durante los dos años en que rigió los destinos de El Salvador.

Cuatro días después de las elecciones Duarte concedió otra conferencia de prensa. Después hablé largamente con él, acompañado sólo por un periodista argentino. "Regresé al país para trabajar por la democracia y mi trabajo aún no ha terminado; si el pueblo me quiere aquí, aquí me quedaré; si quiere que me vaya me iré; si quiere que luche por las reformas, lo haré".

Duarte salía a la palestra, entre otras cosas, para reafirmar su posición, pues, ante el resultado electoral, no faltaban las críticas a su actuación dentro del mismo partido.

Las declaraciones fueron, por lo general, en "tono de campaña", pero ahora orientadas hacia un objetivo distinto: asegurar para su partido un puesto en el próximo gobierno y reafirmar su posición al frente del PDC. "Es un error político craso de la derecha el haber precipitado la formación de un gobierno que excluya a la DC. El Salvador es importante para el mundo occidental, no sólo Estados Unidos, todos tienen un papel que jugar en el desarrollo de la situación; algunos funcionarios norteamericanos han dicho que ayudarán al gobierno que se forme democráticamente, pero agregan que esperan que se mantengan las reformas sociales, la democratización y la paz social". Duarte estaba poniendo sobre la mesa la carta más importante que tenía.

La Embajada Americana estaba interesada en que los demócratas cristianos siguieran en el gobierno y nadie se preocupó por esconder eso en El Salvador; mucho menos los mismos demócratas cristianos. La presión era tan grande que D'Aubuisson no ocultó su irritación. Cuando, finalmente, el 29 de abril la

Asamblea Constituyente pudo nombrar al banquero Alvaro Magaña presidente interino, por 36 votos a 17, su nombre fue recibido con un intenso abucheo del público, partidario de Arena que, en las gradas de la Asamblea, protestaba por la designación. D'Aubuisson tenía su propio candidato, pero ya no pudo repetir la maniobra realizada después de las elecciones; tuvo que aceptar la ruptura de la efímera coalición que había creado y, desde entonces, ha venido perdiendo poder paulatinamente.

Después de la conferencia de prensa, cuando el presidente se dispuso a recibir en privado a los periodistas que así lo desearan, pudimos conversar tranquila y largamente con él. Entonces algunos rasgos de su personalidad quedaban más en evidencia: la mente fija en el poder; el realismo que lo llevaba a reconocer hasta con crudeza sus limitaciones políticas en ese momento y, por qué no decirlo, un cierto cinismo para apreciar situaciones de guerra, que me resultó chocante.

En seis páginas de apretados apuntes transcurrió la hora y cuarto de conversación con el mandatario.

El primer tema fue una eventual conversación con la oposición de izquierda, y brotó, en seguida, el realismo político: "si digo que mañana negocio con el FDR, hasta ahí llega este gobierno".

Según Duarte, el esquema electoral salvadoreño estaba diseñado "para ir generando una dinámica distinta en el país".

"Analice el pantano en que estamos. Por un lado la extrema izquierda no acepta nada más que el poder. ¿Cómo hacer para que acepte algo menos? Yo no creo que estos sectores vayan a aceptar que se han equivocado o que los han derrotado. Que ellos acepten eso significa para el mundo, la derrota del comunismo; por eso ponen condiciones que hacen imposible cualquier salida política, a menos que se les entregue el poder. Por eso hay que buscar una puertecita, para que se incorporen al proceso democrático; no tienen más salida que esto".

En aquella oportunidad, enfrentamos a Duarte con la realidad de sus palabras: estaba pidiendo a la guerrilla una rendición incondicional, que depusiera las armas. El presidente argumentaba que el FMLN-FDR exigían una partición en el poder que no habían logrado en las urnas; pero él, a su vez, les exigía, nada menos, que la entrega de las armas, en una rendición que el ejército gubernamental no había podido lograr en el campo de batalla.

—¿Qué se había hecho de ese político realista, que sabía bien hasta dónde llegaba su poder frente a la autonomía del ejército? Ahora, frente a la guerrilla parecía convencido que ésta estaba al borde de la derrota, y actuaba en consecuencia.

"El deponer las armas que yo pido no es una rendición", respondió. "Venezuela propuso a los guerrilleros entregar los fusiles; ellos bajaron de los cerros y entregaron las armas. Hoy usted los tiene de diputados y senadores. Deponer las armas no significa rendición, significa pasar del esquema de guerra al esquema de paz".

Así de simple. Los miles de muertos, los escuadrones paramilitares y los mismos militares, que mataron a toda la dirigencia del FDR en una oportunidad, que asesinaron al director del Instituto de Transformación Agraria, militante de la misma democracia cristiana, todo eso estaba fuera del análisis. Para pasar del esquema de guerra al esquema de paz bastaba con que la guerrilla entregara las armas.

Aún suponiendo que el presidente dejaba implícito el proceso de negociación que implicaba ese deponer las armas y que tenía en mente las necesarias garantías que ofrecer a los insurgentes, el pedido de deponer las armas es precisamente lo único que las guerrillas no aceptarán, a menos que pierdan la guerra.

La estimación del presidente era que, "a medida en que el proceso democrático avance, van a ir perdiendo" y que la guerrilla, más que logros en el terreno militar, lo que "había hecho bien era la guerra de propaganda". O sea, la lucha principal la estaba librando en las páginas de los periódicos y no en los campos de El Salvador.

Yo no creo que Duarte nos estuviera engañando cuando hablaba de esas cosas. El presidente daba la impresión de estar atrapado en su propio esquema, con el cual se comprometió y junto al cual se desgastó. Al cambiar la situación política después de las elecciones, y la militar, después de las diversas ofensivas guerrilleras de 1982 y principios de 1983, su suerte ha quedado, más que nunca, ligada a las alternativas norteamericanas.

Hablé también de la impresión que me causaron ciertos comentarios de Duarte sobre la guerra. Me refería, en particular, a las observaciones del presidente sobre la reciente masacre de El Mozote, una población en el nororiental departamento de Mora-

zán, ocurrida en diciembre de 1981.

Las dimensiones de lo que pasó en esa remota localidad y sus alrededores empezaron a conocerse los primeros días de enero, cuando versiones de la guerrilla fueron difundidas por radio Venceremos. Como siempre, los primeros datos eran recibidos con desconfianza; pero, poco a poco, se fue dibujando la verdadera dimensión de la tragedia.

Ya hablaremos más largamente de El Mozote. Allí, y en poblaciones vecinas, el ejército liquidó a más de mil campesinos, incluyendo mujeres y niños, durante un operativo llevado a cabo entre el 7 y el 17 de diciembre.

El operativo, como tantos en esa zona, no tuvo éxito en cuanto a la liquidación de la fuerza insurgente. El ejército dispuso entonces aplicar la política de tierra arrasada o, como lo llaman en la versión salvadoreña, "sacar el pez del agua", separar a los guerrilleros de la población civil en la zona donde éstos se mueven.

Existen listas detalladas de los campesinos muertos en esa masacre. El mismo viceministro de Defensa de El Salvador, coronel Adolfo Castillo, capturado por la guerrilla en esa región durante un operativo llevado a cabo seis meses antes y mantenido como prisionero de guerra en Morazán, fue llevado por los dirigentes del FMLN a El Mozote y dio después su opinión, a través de radio Venceremos. El militar condenó horrorizado lo que había visto.

En marzo de 1982, el asunto era aún tema de comentarios, y pregunta obligada al presidente Duarte. La respuesta fue breve, pero no por eso menos desconcertante.

Duarte desmintió cualquier masacre en El Mozote, estimando en 17 las muertes ocurridas ahí, pero su comentario sobre la situación fue lo que me sonó más brutal.

—Hay mucha gente en los campamentos (de la guerrilla) y esa gente muere cuando ocurre un ataque militar. La única diferencia entre esa gente y el guerrillero es el rifle en la mano. ¿Quién dice que una señora viejita que muera allí, no tenía un fusil en las manos, momentos antes?

La realidad de esta guerra, como todas, es tan brutal que hay quienes prefieren no verla en toda su dimensión.

Finalmente, comentamos de la situación internacional.

En esos días se hablaba de posibles nuevas medidas norteamericanas en el área, entre ellas un eventual bloqueo a Cuba y Nicaragua. Por supuesto, la simple mención de iniciativas como esas, viotorias de todas las disposiciones internacionales y que constituyen un acto de guerra de enorme trascendencia, encontraban de inmediato voces de resistencia en los mismos Estados Unidos.

—"Si el bloqueo significa la posibilidad de terminar con el envío de armas a El Salvador, yo estaría de acuerdo", dijo enfáticamente Duarte.

Ante esta realidad, ¿cómo lograr una reducción de las tensiones en el área; y qué sentido tiene la afirmación de Duarte de que ha hecho "todo lo posible por mantener relaciones buenas con Nicaragua?" La aceptación pública de un bloqueo no es compatible, evidentemente, con esfuerzos para lograr la pacificación de Centroamérica.

Por otra parte, una eventual reunión de mandatarios centroamericanos era también una posibilidad en discusión, en esa época. "Hace poco, dijo el presidente, hablábamos de lo que se puede hacer o no. Si lo pudiese hacer sin provocar reacciones inmanejables, yo estaría de acuerdo".

Por supuesto, no era posible para Duarte haber asistido a una reunión de ese tipo, si se hubiera realizado; pero la respuesta revela también la existencia de sectores muy importantes dentro del gobierno y de las fuerzas armadas que no apoyaban iniciativas pacificadoras en la zona.

La conversación terminó con comentarios sobre diferentes actitudes internacionales frente a la guerra salvadoreña. Duarte acusó a México y Francia —que en agosto de 1981 habían propuesto negociaciones entre las partes en pugna en El Salvador, para poner fin a la guerra— de servir a los guerrilleros en su intención de impulsar negociaciones.

"La izquierda ha ido a las Naciones Unidas y a hablar con el Secretario de Estado, Alexander Haig, para proponer negociaciones y debilitar el proceso electoral. Los izquierdistas están tratando de debilitar a los países que apoyan al proceso electoral", estimó el mandatario. "Con excepción de México y Nicaragua, concluyó, todos los países apoyan las elecciones".

La verdad es que prácticamente ningún país de América Latina y mucho menos de Europa, se atrevió a mandar observa-

dores a esos comicios, a pesar de invitarlos el gobierno salvadoreño.

Un ex Secretario General de la Democracia Cristiana salvadoreña, Juan Ricardo Ramírez Rauda, adversario político de Duarte y actualmente residente en Costa Rica, me reveló en San José algunos entretelones del partido en los días previos y posteriores a la elección.

El equipo electoral del PDC estaba tan desesperado quince días antes de las elecciones, afirmó, que el propio Duarte estuvo a punto de renunciar a la presidencia para dedicarse a la campaña. El hecho de que los principales cuadros del partido estuviesen en el gobierno afectó el trabajo electoral, según Ramírez.

Por otro lado, reveló que cuatro días después de los comicios, ante el resultado electoral, la dirigencia del partido pidió pasar a la oposición, "pero los que estaban en el gobierno lo rechazaron".

"Se puede mantener mejor la vigilancia desde la oposición, estimó Ramírez Rauda; eso permitiría también poner en claro quién es la derecha en el ejército, quiénes integran los escuadrones de la muerte. Si la nueva Asamblea confirma al actual ministro de Defensa —como efectivamente lo hizo con el general Guillermo García— mejor es no participar en eso. Para mí la solución ecléctica de los norteamericanos para el gobierno y el gabinete no es la más aconsejable desde el punto de vista del desarrollo de su esquema político".

Duarte mantenía, sin embargo, un fuerte control sobre el partido, y posiciones discrepantes como esa no tuvieron una respuesta importante en el interior de la Democracia Cristiana.

El partido optó por la "solución ecléctica de los norteamericanos" y finalmente decidió incorporarse al gobierno con la extrema derecha. Desde mayo, cuando Magaña asumió el poder, la política gubernamental se caracterizó entonces por una pugna cada vez más evidente, que lo fue paralizando.

LA POSICION DEL FDR

El panorama político salvadoreño no quedaría completo sin la opinión del Frente Democrático Revolucionario (FDR), que agrupa a la oposición de izquierda.

A fines de enero de 1982, dos meses antes de las elecciones, estuvo brevemente en San José un destacado ex militante demócrata cristiano, Rubén Zamora, que abandonó el partido durante la crisis gubernamental de marzo de 1980, para integrar una nueva agrupación de cristianos de izquierda, afiliada al FDR, el MPSC.

Lo conocí unos dos años antes, en circunstancias trágicas. Su nombre estaba siempre en las listas de los que había que buscar, en cada viaje a El Salvador, para conocer la situación del país. Un día, estando en San Salvador, me entero del asesinato de su hermano, también destacado dirigente del PDC, ocurrido en su propia casa y perpetrado por las bandas paramilitares de la extrema derecha.

Fui entonces al lugar donde lo estaban velando y me dirigí a una persona cualquiera, preguntando por Rubén Zamora. Era él mismo. Lo vi al día siguiente, en el entierro de su hermano, en Cojutepeque, unos 30 kilómetros al este de San Salvador, con la iglesia colmada, la plaza también, la emoción en el ambiente, Rubén Zamora adelante, bajando las gradas del templo donde se celebró la ceremonia fúnebre, cargando el cajón de su hermano.

Esa vez, en San José, hablamos de las elecciones próximas en El Salvador.

—Las acciones militares (de la guerrilla) dependen de un plan de guerra y no de las elecciones; en las últimas semanas ha habido un incremento de esas acciones, que va a continuar. El FMLN no puede suspender la guerra por unas elecciones fraudulentas, de la que el pueblo será excluido y que contará sólo con la participación de la derecha.

El gobierno, continuó Zamora, busca legitimarse a nivel internacional y, en ese sentido, las elecciones son más para la exportación que para el pueblo salvadoreño. Luego, Estados Unidos incrementará su apoyo militar a la Junta, y tratarán de involucrar a otros países latinoamericanos en la guerra.

Unas semanas antes había conversado con otro destacado integrante de la comisión Político-Diplomática del FDR, Fabio Castillo. De las elecciones se giró rápidamente hacia el tema de las negociaciones, como una consecuencia lógica de la postura del FDR frente a la búsqueda de una solución para la crisis salvadoreña.

En diciembre de 1981, sólo tres meses antes de los comicios, el FMLN y el FDR presentaron una propuesta de negociación con el gobierno, firmada por los cinco máximos comandantes guerrilleros y el presidente del FDR, Guillermo Ungo. Ahí reiteraban su disposición a conversar sin precondiciones. Fabio Castillo habló entonces del "carácter global" que debían tener esas negociaciones, de la eventual presencia de países testigos y de la necesidad del retiro total de la ayuda norteamericana al régimen salvadoreño.

"No estamos en contra de las elecciones, pero se necesita un clima adecuado para celebrarlas. Las propuestas de Duarte —dijo, refiriéndose a las exigencias del entonces presidente salvadoreño para que la guerrilla depusiera las armas y se incorporara al proceso electoral— constituyen un absurdo político. Es imposible llevar a cabo las elecciones en las condiciones de guerra y represión que vive el país".

"El FMLN y FDR han hecho un planteamiento serio para iniciar conversaciones; necesitamos una respuesta positiva, pero ésta ha sido negativa en el pasado, lo que demuestra intransigencia y falta de deseo de llegar a una solución política".

Fabio Castillo es un médico de 60 años, con larga trayectoria política. En 1960 integró durante tres meses una junta cívico-militar de cinco miembros, que gobernó el país a la caída de José María Lemus, siendo luego derrocado por un movimiento encabezado por el coronel Julio Rivera. Hoy, Castillo es presidente del Movimiento de Liberación Popular (MLP), una de las cinco agrupaciones políticas que integran el FDR.

Agudo, como Zamora, impaciente, Castillo va presentando el panorama del país desde el punto de vista de las organizaciones que representa. "Podemos empezar las negociaciones mañana, si es necesario, todo depende de la voluntad de la junta salvadoreña". El dirigente del FDR insiste en que están dispuestos a conversar con quien el gobierno salvadoreño designe, incluyendo a los jefes militares, pero advierte que eso no implica la aceptación de todos esos elementos —a muchos de los cuales acusan de ser responsables de masacres y represión— en el futuro. "Conversaremos con quien ellos designen, pero los responsables de crímenes contra el pueblo no participarán en el futuro gobierno".

—Hay dos tesis para la solución de la crisis salvadoreña, resume Castillo. Una es la nuestra, que propone negociaciones globales, para resolver el problema político.

Desde ese punto de vista, las elecciones no son el problema fundamental; al contrario, se estima que si se llega a un acuerdo político sobre el futuro del país, éstas carecen de sentido, en esta etapa. "En 1979, recordó Castillo, el PDC respondió a una propuesta del gobierno sobre elecciones señalando que no eran una solución. Ahora, nosotros decimos lo mismo".

La otra propuesta, continuó, es la de la junta de gobierno: celebración de elecciones para la Asamblea Constituyente, en las que se proponía la participación de la izquierda, representada por el FDR, pero sin el FMLN, cuyos militantes deberían rendirse y deponer las armas. Esa propuesta era considerada inaceptable.

"Los Estados Unidos, dado la política guerrerista de Reagan, pretende hacer de El Salvador un ejemplo de su fuerza y su capacidad de castigar a un pueblo que no acepta su política; pero esa posición es rechazada por la comunidad internacional, incluyendo países europeos y de América Latina. Estados Unidos busca, con sus acusaciones a Nicaragua, una excusa para mantener su intervención en El Salvador. Nosotros insistimos en la necesidad de que los norteamericanos pongan fin a su ayuda al gobierno de El Salvador, para contribuir a una solución política".

Ya entonces el FDR planteaba su preocupación por lo que consideraba una posibilidad real de la internacionalización del conflicto salvadoreño. Fabio Castillo hablaba, en esa oportunidad, de que una posible intervención norteamericana terminaría por arrastrar a Nicaragua y Cuba; transformándose así en una verdadera amenaza a la paz mundial. Desde entonces, los acontecimientos han caminado resueltamente en ese sentido. A un año de las elecciones, el conflicto está más extendido que nunca en El Salvador; los militares hondureños han estado interviniendo en la lucha, aunque en forma todavía limitada, en apoyo a sus colegas salvadoreños; Estados Unidos aumenta sin cesar su ayuda a un ejército que no logra hacer frente con éxito a la guerrilla y los temores de una intervención norteamericana directa, a pesar de todos los elementos en contra, están presentes en los cálculos políticos y diplomáticos en la región.

Desde entonces la situación ha empeorado permanentemente. A fines de ese año, el representante del FDR en San

José, Jorge Villacorta, el ex viceministro de Agricultura de El Salvador, exiliado a partir de marzo de 1980, pasó revista a la situación.

"Desde las elecciones, la gente, que esperaba encontrar la paz, se ha decepcionado; el FMLN dice que el único camino para conseguirla es negociando, el gobierno insiste en que no, que la única respuesta es la aniquilación de la oposición. Como resultado de los comicios se constituyó un gobierno de extrema derecha, que es la parte política de ese plan militar; la crisis económica sigue, las reformas se han detenido.

"Pero las fuerzas del gobierno se han dispersado, no se ha podido consolidar un solo plan, van del gobierno de unidad nacional al Pacto de Apaneca (un acuerdo suscrito por Arena, PDC, PCN y PPS el 3 de agosto de 1982), a la descomposición del PCN (partido que se dividió a raíz de la firma del pacto de Apaneca), mientras las organizaciones empresariales siguen haciendo presión contra las reformas.

"Esa división se traslada al ejército y al ejecutivo y el resultado de ese proceso de descomposición es el rumor constante de golpe de estado".

Esto me fue dicho por Villacorta antes de la sublevación del coronel Sigifredo Ochoa, el comandante militar del departamento de Cabañas, que se alzó en enero de 1983 contra una orden de traslado como agregado militar a Montevideo. Ochoa exigió la destitución del Ministro de Defensa, general García.

El militar se hizo fuerte en la capital del departamento, Sensuntepeque, resistiendo durante dos semanas a acatar la orden, que fue finalmente reemplazada por otra, enviándolo a un cargo militar en Washington. Pero tras la pugna de Ochoa contra García se ocultaban las discrepancias de una extrema derecha que se opone a la política reformista impulsada por la embajada norteamericana y que contaba entonces con el apoyo del alto mando militar.

El ex viceministro de agricultura continuó señalando que "esa dispersión del poder hay que enmarcarla en la situación de guerra que vive El Salvador. Esa guerra se ha ampliado; el FMLN tiene capacidad para paralizar, desde el punto de vista estratégico-militar, la zona oriental del país, interrumpir las comunicaciones, el ferrocarril, cortar la luz y el transporte. La capital está en relativa calma, pero de San Vicente para allá es otra cosa, es la guerra".

"En Guazapa también se controla el acceso a Suchitoto, mientras se amplía en Chalatenango el dominio de la guerrilla. Sólo sostener el frente de Guazapa, a 35 kilómetros de San Salvador, es una hazaña. Pero en la parte occidental del país, en Ahuachapán, Santa Ana e incluso en poblaciones del departamento de La Libertad, áreas que el enemigo consideraba como su retaguardia, hay batallas contundentes".

Villacorta se refirió a contraofensivas lanzadas por los militares en noviembre y diciembre del 82, en Morazán y en Guazapa, estimando muy importantes las derrotas del ejército en ambas. Sobre los resultados militares en el volcán San Vicente y cerros de San Pedro, donde el ejército reivindicó la muerte de 280 guerrilleros, Villacorta estimó que "la masacre se explica por el uso de los nuevos aviones A-37, conocidos como Dragonfly, capaces de disparar tal cantidad de balas sobre un territorio, que mata a todo el que esté ahí. Con el uso de ese tipo de armas, el número de muertos civiles se va a multiplicar; se está llevando a cabo una guerra de aniquilamiento, que es parte de una estrategia como la utilizada en Vietnam, de 'quitar el pez del agua'. Pero eso es también consecuencia del mayor accionar del FMLN, que se refleja en el rápido aumento de presos de guerra.

"El ejército se ha desmoralizado con el poco resultado logrado por los batallones especiales, entrenados en Estados Unidos.

"A todo esto, hay que agregar una situación económica caótica; el consumo de petróleo casi agotó las divisas producidas por el café, que constituyen el 80 por ciento de los ingresos de exportación del país.

"En ese marco el FDR insiste en que la masacre ha continuado; no es cierto lo que dice Reagan, sobre un mayor respeto a los derechos humanos en el país.

"Frente a esta situación, el FDR insiste en parar el baño de sangre, en que el ejército no va a derrotar al FMLN; las elecciones, solas, no van a resolver el problema, hace falta el diálogo. De ahí que estemos desarrollando una serie de iniciativas con sectores políticos y con gobiernos, tratando de encontrar esa posibilidad de negociación. Pero las reacciones son las mismas, mostrando que ningún sector (del gobierno) se atreve a aceptar la responsabilidad de dialogar con la oposición, por miedo a que

otro sector gane influencia.

"Mientras los Estados Unidos no se convenza de que hay que negociar, el Gobierno salvadoreño no aceptará sentarse en la mesa; la posición de Enders sigue siendo intransigente sobre El Salvador, necia contra Nicaragua, pero nosotros seguiremos insistiendo.

"Si eso sigue, a medida que el FMLN ponga en peligro la existencia del ejército la posibilidad de una intervención norteamericana directa aumenta. De ahí la preparación de los hondureños; de ahí la ampliación de las pistas de aterrizaje en ese país. Lo cierto es que Estados Unidos se prepara, ante la eventualidad de la derrota militar del ejército salvadoreño.

"Y esa es otra razón por la que el FMLN insiste en negociar, para evitar una regionalización de la guerra en El Salvador, de la que nadie saldría librado".

Esto resume con elocuencia la preocupación del FDR y del FMLN por las consecuencias de la guerra en su país. Villacorta me diría, a fines de febrero de 1983, cuando regresó de Estados Unidos, donde estuvo durante la presentación de una nueva certificación de Reagan sobre el avance de los derechos humanos en El Salvador, que la guerrilla aceptaría negociar cualquier cosa, menos la entrega de las armas. La respuesta, sin embargo, era siempre un "no" rotundo a cualquier diálogo, reiterado en un documento de la Comisión Política del Pacto de Apaneca, llamado "Bases para la Paz en El Salvador", dado a conocer por Magaña el 23 de febrero de ese año.

En esas condiciones, la lucha seguirá y los peligros de una intervención aumentarán.

EL DETERIORO DE LA CONDICION HUMANA

Fuera del terreno estrictamente político, pero como una de sus consecuencias más importantes, la guerra va creando condiciones dramáticas para la vida de la población. Domingo, el niño Domingo, era un ejemplo vivo de esas condiciones.

El machete cortó el aire, la cabeza, el cuello y las manos de Domingo, en una noche de Navidad, hace ya tres años. La única vez que lo vi estaba jugando fútbol con otros niños, en un refu-

gio de la capital salvadoreña. Había allí unas 1.200 personas en aquella época; 800 niños.

— ¡Domingo, vení acá, un señor quiere verte!

Domingo llegó corriendo, dejó el fútbol, unos 40 niños de cada lado jugaban a olvidar la guerra. Ninguno, sin embargo, la traía tan adentro como Domingo.

Domingo se sacó la gorra. El machetazo, de unos 20 centímetros, le marcaba la cabeza, de atrás hacia adelante, del ancho de un dedo. Supongo que después vino el otro, en el cuello, transversal y, no sé por qué, todavía trataron de cortarle las manos. Las dos.

Fue la única vez que vi a Domingo, hace tres años. Entonces me contó su historia, inverosímil, trágica. La Policía de Hacienda irrumpió en el Cantón en la noche de Navidad. Empezó entonces la estampida; Domingo también corrió, cayó, el machete voló sobre su cabeza de niño, su cuello, su alma pero no lo mató.

Relaté esta historia a un embajador latinoamericano en San Salvador, pero no quise escribir nada sobre ella. Estaba convencido que había que sacarlo del país; su cabeza, su cuello, su alma, eran un testimonio demasiado vivo de la barbarie de esta guerra. Su vida corría peligro si sus frustrados asesinos se enteraban que aún estaba vivo.

De regreso a El Salvador, dos años después, lo busqué nuevamente. Me dijeron que el Washington Post había contado su historia, pero no la vi, ni sé si efectivamente la publicó. No encontré tampoco a Domingo. "Se fue para las montañas de Guazapa, con la guerrilla", me dijeron en el refugio. "Allá está más seguro".

De nuevo en San Salvador, para las elecciones de marzo de 1982, comenté el caso con el entonces presidente, José Napoleón Duarte. Fue el presidente quien se refirió al tema de los refugiados.

—Ustedes, los periodistas, visitan El Salvador, van a los refugios, y luego cuentan esas historias, generalizan como si eso fuese lo corriente en el país. La izquierda mantiene esa gente allí para sacar partido de ella.

Le dije entonces al presidente que el problema me parecía mal planteado. El gobierno debía tomar la iniciativa en el problema, en vez de acusar a los periodistas de estarse prestando para hacerle el juego a la izquierda. Quien le hace el juego a la

izquierda es el ejército o la policía, cuando comete estas barbaridades.

Pero así es la guerra; va destruyendo, no el país, lo que ya es importante, sino a su gente, lo que es mucho más grave.

Un amigo y muy buen periodista del Clarín, de Buenos Aires, tuvo, en ese mes de marzo, el talento y la suerte de reconstruir la historia de una de esas almas partidas por la guerra.

Su nombre era Leonel, 32 años. Leonel tenía cuentas con Dios. Llevaba un registro exacto de su libro de contabilidad: debe y haber, pero de vidas humanas. Primero, mataron a su hermano, Jacinto. Degollado. Cuando, dos años después, la guerra lo reclamó, mató a dos hombres en el primer combate. Estaba, por lo tanto en deuda con Dios, pero la cuenta estaba apenas empezando. Leonel tanía padre, madre y ocho hermanos: mataron a todos, menos a su madre. "Pero siempre me las arreglaré para quedar empatado con Dios". Leonel ocupó posiciones importantes en las filas guerrilleras, pero en su relato prefiere no referirse expresamente a su bando en la lucha. La guerra puso fin a su mundo y casi lo liquidó también. Le falta un brazo, el derecho, volado de un machetazo; tiene una cicatriz en la cara y muchas marcas de bala en el cuerpo. Su relato, publicado por Clarín, contiene algunos de los pensamientos más crudos y profundos sobre la guerra, sobre la condición humana durante la guerra.

En ese relato se revela cómo la presencia de la muerte —no la de esa muerte que llega al final de la vida para todos nosotros; no... la otra... que llega en la mitad de la vida, detrás del ruido seco de la bala de un fusil— despierta todos los sentidos.

Yo nunca vi una alegría más alegre que la de un soldado, muy joven, listo para entrar en combate con la guerrilla, a unos cinco kilómetros al este de San Vicente, en el centro del país, cuando llegaron dos carros de asalto para apoyar un contrataque. Ellos podían representar la sutil diferencia entre la vida y la muerte.

Allí, en la carretera Panamericana, casi sobre la línea de fuego, vimos volver un compañero suyo, con un tiro en el brazo, ensangrentado y lamentándose, llevado de prisa en un taxi que, como nosotros, esperaba en la carretera la posibilidad de seguir su camino. La sensación del peligro, el temor a la muerte, se transformaba, al ver llegar el refuerzo, en una alegría comparable solamente con la de un niño feliz, en una piñata de cumpleaños.

No me quedé para ver el desenlace de la lucha. Teníamos que llegar ese día a Usulután, cabecera del departamento del mismo nombre y pasamos por otro lado. Pero supe después que el ejército no pudo pasar en ese día, ni en el siguiente. La principal carretera de la región, que une Panamá a México, permaneció cerrada en San Salvador, en San Felipe, a unos kilómetros de San Vicente.

Pero la rabia de la muerte —la gente tiene rabia de la muerte, principalmente de la muerte brutal e inesperada— se manifiesta también en forma sorprendente. El día de las elecciones constituyentes en El Salvador, el 28 de marzo de 1982, doce guerrilleros murieron, en un enfrentamiento con el Ejército. Hubo, en ese día, combates más importantes, con mayor número de combatientes y mayor poder de fuego, en diferentes lugares del país. Pero ninguno tuvo un saldo tan trágico como éste.

En esta guerra no hay guerrilleros heridos ni capturados; pero la recíproca no es verdadera. Dos o tres días antes los guerrilleros entregaron seis soldados heridos a un fotógrafo norteamericano, cuando ocuparon Puerto Parada, próximo a Usulután, para que los llevara a un hospital, y, después de eso, han entregado decenas de soldados prisioneros a la Cruz Roja Internacional.

Tan impresionante como el ajusticiamiento de un herido era la alegría histérica, la agresividad incontenida contra los cadáveres de los guerrilleros muertos. El sadismo con el que algunos soldados pateaban las cabezas de los muertos era la venganza, la rabia, por haberlos puesto, durante un momento, frente a frente con la muerte.

"Toda la literatura del mundo no sería suficiente para describir la verdad de dos segundos frente a la muerte real", había advertido Leonel al periodista, después de contar su historia.

—¿Cómo juntar los pedazos, cómo reconstruir de nuevo el país, su gente, después de una guerra como esa? Habrá de ser sobre bases nuevas, distintas.

En una visita al cuartel de Suchitoto, unos 55 kilómetros al norte de San Salvador, de nuevo esta vida en pedazos nos aguardaba.

Suchitoto es una plaza sitiada: Los que pudieron ya se fueron, los que vivían en lugares peores, llegaron. El comercio está abandonado, la ciudad sólo cuenta con agua y luz de vez en

cuando, cuando no hay sabotajes de la guerrilla. El cuartel es una casa requisada cerca de la plaza de la ciudad. Allí, un joven capitán del ejército controla las operaciones militares en el sector. Cerca, a pocos kilómetros, están las laderas del volcán Guazapa, donde la guerrilla está fuertemente instalada. Desde allí operan en varias direcciones. En diciembre de 1982 los militares intentaron por décima vez, desalojarlos mediante un gran operativo, con apoyo de artillería y aviación. El resultado parece haber sido otro fracaso, si nos atenemos a las informaciones oficiales.

En el cuartel de Suchitoto vivía, en ese entonces, un niño de 12 años, rescatado de la guerra en Guazapa, donde los militares lo encontraron después de un ataque contra la zona, en febrero.

Su relato es impresionante. Se perdió de su madre y de los hermanos en la noche en que se inició el bombardeo contra el volcán. "Huimos por las quebradas, para escapar de las bombas que la aviación dejaba caer", afirmó y, en esa huida desesperada, se perdió del resto de la familia. En la imaginación del niño, cinco mil personas buscaban refugio en algún lugar, esa noche, pero es probable que él no haya visto nunca tanta gente junta en su vida.

La zona del volcán es caliente, parte de ella productora de caña: uno de los grandes ingenios del país está precisamente ahí; la vegetación es baja y raleada; en las tierras altas la gente, muy pobre, vive principalmente del frijol y del maíz que siembran. Al oeste, la carretera que conduce a Chalatenango, capital del departamento del mismo nombre, unos 90 kilómetros al norte de San Salvador, pasa al pie del volcán. Poco antes del pequeño poblado de Guazapa está Aguilares, zona de actividad de grupos opositores y de bandas armadas de extrema derecha desde hace varios años, aún antes de que la guerra civil salvadoreña adquiriese sus actuales dimensiones. Por el este está la carretera que conduce a Suchitoto.

El volcán Guazapa es una posición estratégica, ubicada prácticamente sobre la capital, en pleno centro del país, por eso los reiterados intentos de las fuerzas gubernamentales para desalojar y destruir las líneas insurgentes en la zona.

El relato del niño pone en evidencia, además de la tragedia personal con que tropezamos en todo el país —cuando le preguntamos si quería volver a su casa, reunirse de nuevo con su madre y hermanos, nos respondió con naturalidad que no: "allá todo es muy feo, no hay luz y sólo comemos frijoles"— un aspecto importante de la estrategia militar en esta guerra terriblemente cruel que se libra en El Salvador.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acusó al gobierno, en diversas oportunidades, de masacrar a la población civil, principalmente en zonas rurales. El boletín informativo del Centro de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dirigida por los jesuitas, denunció veinte masacres ocurridas en 1981, en las cuales murieron casi 3.400 personas. Las denuncias y, principalmente, la cifra de muertos, son muy difíciles de comprobar, pero no hay duda de que la población civil es afectada, cada vez más gravemente, por la guerra.

Recuerdo perfectamente la llegada de un grupo de periodistas, unos 30, por lo menos, principalmente fotógrafos y camarógrafos, al pequeño poblado de San Antonio Los Ranchos, al norte de Chalatenango, ya cerca de la frontera con Honduras, hace unos dos años. El poblado, ubicado en una zona montañosa, de difícil acceso que pudo tener quizás unos 500, o mil habitantes, todavía ardía cuando llegamos; estaba completamente abandonado.

No pude olvidar nunca cómo empezaba la nota que escribí ese día, al regreso de San Antonio Los Ranchos.

¿A dónde van?, preguntó un periodista a sus colegas, en el ascensor del hotel donde se alojan en San Salvador.

—A dar un paseo turístico, respondió otro, de buen humor, ya con su cámara al hombro.

Dos horas después tragábamos polvo, rumbo a esta hermosa localidad enclavada en las cercanías de la represa de Cerrón Grande.

Cuando llegamos, las evidencias del bombardeo —casas destruidas, quemadas, techos destrozados, marcas de bala por todas partes, restos de raciones militares de fabricación norteamericana, documentos, cédulas de identidad sin utilizar, todo desparramado en la pequeña plaza del lugar— revelaban hasta dónde la población civil estaba siendo afectada por esa guerra.

Voy a citar aquí la carta de una madre a su hija, fechada en San Antonio Los Ranchos el 5 de diciembre de 1980, y que llegó

a mis manos por razones fortuitas. Los nombres citados están cambiados, por razones obvias. He respetado la ortografía y la puntuación original.

"Querida hija:

"Extrañaras mi carta, pero el motivo de escribirte es para enterarte de un fracaso que ha pasado en la familia, ese fracaso se trata de Miguel. Fijate que el día 20 de noviembre Miguel se fue a Chalatenango y no regresó, ese mismo día yo quise ir a buscarlo pero no me fue posible poque no hay transporte, pero fui el siguiente día a buscarlo y no lo pude encontrar ni vivo ni muerto. Así pasó toda esa semana y nosotros seguíamos buscando pero fue imposible allarlo, y en bista de que no apareció decidimos hacerle el novenario. Ha esta fecha el novenario pasó, y de el no se sabe nada. Algunos becinos me consuelan disiendome que como no se encontro muerto, hay una sierta posibilidad de que este vivo, talvez encarcelado, te deves imaginar el dolor que me ha causado, desde que eso paso no como ni duermo pensando en el y cuando veo su ropa y todas sus cosas, siempre yoro.

"Yo creo ya estas enterada de la situación politica que se vive aquí en El Salvador, pero por si no te has enterado te cuento que aqui se muere gente inocente a cada rato, como le toco al pobre Miguel.

"También te cuento que aqui en Los Ranchos toda la gente se esta saliendo por miedo a lo que está pasando, y por lo que se hoye decir que pasará.

"También quiero contarte que me dan ganas de irme para San Salvador pero no me voy porque pienso que él puede regresar y diga, mi mamá ya me dejó, por eso aun estoy en este pueblo, decidida a lo que Dios ponga de nosotros.

"Espero tu carta, cuidate y trata de pedirle a Dios por Miguel. También te cuento que unos primos tuyos Hoscar e Israel, ya fallecieron".

Y firma.

Así era la vida en estos días en los pueblos de Chalatenango. Meses después visitamos esa pequeña población. De la capital departamental tomamos un camino de tierra hacia el este, que va serpenteando hasta Los Ranchos, a unos seis kilómetros de distancia.

Dos años después, todo eso está intransitable, pero ya en esa

época se veía ahí la gravedad de la situación. Las pequeñas casas campesinas estaban abandonadas, muchas destruidas, quemadas.

Estacionamos cerca de la Iglesia. Cuando entramos, una escena increíble se presentaba ante nuestros ojos. Todos los santos cambiados de sus nichos. El Cristo, acostado sobre el altar, un enorme boquete en el techo de tejas, por donde entró el cañonazo, salpicó el piso de restos de barro y de madera. Raciones militares desparramadas, señales de disparos en las paredes, sobre todo en el campanario. En la sacristía, los paramentos volcados. Era un caos tan grotesco que ni Fellini podría haberlo imaginado. En la plaza, documentos, cédulas de indentidad sin utilizar, facturas, todo desparramado. El fuego aún carcomía la madera de sostén de los hermosos techos de tejas. De repente, alguno se derrumbaba. Yo no pude desprenderme de la sensación de que, ahí, en las montañas, la guerrilla y los antiguos pobladores, nos observaban. No había cadáveres, pero un buitre volaba a lo lejos. La vida civil había terminado en San Antonio Los Ranchos. No sé si sus pobladores volverán cuando termine la guerra, pero ese día quiero estar ahí, hablar de esos trágicos acontecimientos, escuchar de ellos los detalles de esas horas que, en ese momento, sólo podía imaginar.

Situaciones similares se repetían en diversas partes del país. Las pequeñas poblaciones rurales estaban siendo poco a poco abandonadas, desde hace ya dos años, a medida en que la guerra llegaba hasta ellos. Pude visitar, en aquella época, por lo menos otras dos: San Lorenzo y Aguacayo.

En esta última, muy cerca de Suchitoto, todavía se combatía en los alrededores cuando llegamos. La población había abandonado la localidad tan de improviso que no tuvo tiempo, ni siquiera, de apagar la luz en la puerta de la iglesia. No había un alma. Sólo animales, perros, gallinas, cerdos, sin dueño, deambulaban por allí. En las otras poblaciones, ni animales había.

En Aguacayo se peleaba en los cafetales que bordean la localidad. Hicimos parte del recorrido desde Suchitoto detrás de una ambulancia militar. Eran tres carros de periodistas, la mayoría de ellos camarógrafos. A la entrada de la población el vehículo militar siguió por una vereda, hacia el campo y nosotros nos desviamos hacia Aguacayo. Como siempre, el camino se transformaba en calle principal y desembocaba en la plaza del

lugar. Pero ahora no se podía llegar en automóvil; unos metros antes, unos troncos atravesados impedían el paso. Entramos caminando, la ciudad totalmente desierta, un caballo muerto a la vuelta de la esquina, los buitres alborozados, ante la inesperada irrupción del grupo, a pesar de que caminábamos en silencio y tensos. Llegamos a la plaza, desconcertados. En la esquina, la pulpería, abierta, mostraba algo en los estantes, un refrigerador, muebles. Lo mismo en las casas, con señas claras de que, de allí salieron todos a las carreras. Los animales deambulaban, supongo que buscando comida, o agua, pero la población se fue, casi seguramente, con lo puesto. Dos o tres días después, lo que quedaba en las casas era cargado en camiones del ejército y llevado quién sabe adónde. Entonces sí, ya no quedaba nada.

De Aguacayo partimos cerca de hora y media después, cuando empezó de nuevo un tiroteo en las afueras, que se fue moviendo por un costado de la población hacia el lugar por donde habíamos entrado, amenazando así de cortarnos la salida y dejarnos atrapados entre las balas. Era hora de irse, como lo habían hecho sus moradores.

A San Lorenzo llegamos días después de haber terminado la lucha. De la Panamericana tomamos un camino de tierra hacia el norte, a la altura de San Vicente, rodeado de cañaverales quemados, postes y cercos derrumbados, signos claros de los enfrentamientos de días anteriores.

Transitamos lentamente, con miedo de que el camino aún estuviese minado, hasta desembocar en la plaza de San Lorenzo, dominada por un hermoso y enorme árbol. Antes de llegar había que transitar sobre catres, muebles, utensilios domésticos, las cosas más inverosímiles, desparramadas en las calles. Mi impresión era de que alguien agarró la ciudad y la sacudió de tal modo, que todo lo que había dentro de las casas se volcó en las calles. Era todo tan silencioso que un equipo de la televisión alemana, con el cual hicimos el viaje, se puso a grabar el ruido metálico, algo lúgubre, que hacía la puerta de la iglesia al golpear el portal, mecida por el viento. Además de eso, sólo se escuchaba el canto de los pájaros. Aquí, ya había sido todo saqueado.

¿Dónde estaba la gente? ¿Se había ido con la guerrilla? ¿Había salido con el ejército hacia lugares más seguros? Nunca pude aclarar el problema, pero creo que las dos cosas eran ciertas. Cuando salíamos de San Lorenzo, dos mujeres y una niña caminaban hacia la población. Paramos, y nos preguntaron cómo estaban las cosas. Venían a ver su casa, a ver si podían salvar algo, nos dijeron, pero nos quedó la impresión de que eran parte de la guerrilla. Venían serenas y parecían dominar bien la situación. Pero la ciudad estaba muerta, con todas las consecuencias que eso significaba para sus antiguos moradores.

Desde entonces, estas situaciones se han multiplicado y esparcido por todo el país. En zonas ya no tan apartadas, en los caminos de San Vicente, de Usulután, en realidad en todas partes se puede encontrar poblaciones abandonadas. Las poblaciones menores, los cantones, son los primeros a ser abandonados. En zonas conflictivas, los que se quedan en los cantones son considerados por el ejército como guerrilleros. Las consecuencias son obvias, pues serán tratados como tales si llegan a ser capturados. La población huye entonces, buscando refugio en localidades mayores, cuando esas son afectadas también por la guerra, deben buscar nuevo refugio.

Esas historias recuerdan el relato del niño, en el cuartel de Suchitoto. Docenas, quizás centenares —él decía cinco mil, en una exageración evidente— huyendo de las bombas, durante la noche, buscando abrigo en las quebradas, mujeres y niños, en su inmensa mayoría, obligados a permanecer allí varios días, mientras dura el operativo militar, comiendo raíces o lo que encontrasen, o no comiendo.

El bombardeo, como siempre, precede el avance de las tropas. Aviación, después los cañones, van peinando el cerro, subiendo poco a poco hasta el reducto de los guerrilleros. Al principio, la resistencia es casi nula; después hay un área relativamente protegida: bombas, minas, trampas, emboscadas, van atrasando el avance de la tropa. Esa resistencia se torna encarnizada en las cercanías de los campamentos guerrilleros que, cuando son ocupados, después de cinco o seis días de lucha, ya fueron abandonados. La guerrilla logra movilizarse con cierta facilidad, aún dentro de las operaciones de "cerco y aniquilamiento", pero la población que los sigue muchas veces cae en esos combates.

El objetivo militar sería no sólo el de destruir las unidades combatientes y material militar de la guerrilla, sino tratar de aislar a los combatientes de la población rural que les sirve de reta-

guardia y apoyo logístico. Por un lado, las poblaciones rurales van siendo poco a poco abandonadas, a medida en que son atacadas y, por otro lado, los campesinos que deciden acompañar a los insurgentes en su huida sufrirán luego el bombardeo de las tropas y la aviación.

Esta realidad es lo que permite al gobierno afirmar que causa 100 ó 200 bajas a las fuerzas del FMLN, cuando lanza un ataque de gran envergadura. El FMLN denuncia esta acción como una masacre. En realidad, la mayoría de los muertos no son combatientes armados.

El resultado de esta guerra es devastador. Cuando se recorre por tierra el país, cuando se deja atrás San Salvador para adentrarse en zonas más conflictivas, una sensación extraña, indescriptible, se adueña del viajero, en un primer momento. Se siente algo imposible de precisar. Pero en pocos minutos uno se da cuenta de lo que ocurre: las carreteras están desiertas a partir de ciertos puntos; las casas, al borde de los caminos, abandonadas. Si el abandono es reciente, los platos pueden estar aún sobre la mesa; después, todo desaparece, poco a poco. La desolación es impresionante. Este panorama está a sólo 40 ó 50 kilómetros de la capital.

Pero ese es un paisaje fácil de observar para cualquiera que se disponga a caminar por el país. Hay otro, más difícil de detectar, pero que, cuando se observa con detenimiento, aparece aún más devastado. Es la angustia de las almas, de las madres, de los niños, de los ancianos. En sólo un refugio en San Salvador, bajo control de la iglesia, había en un momento cerca de 800 huérfanos. Las madres que estaban allí con sus hijos terminaban sus relatos de lo vivido en los días previos a su decisión de buscar refugio ahí, casi siempre revelando que "estaban enfermas de los nervios".

Ese ambiente de terror se observa en muchas partes. En uno de los viajes a El Salvador fui a un famoso "botadero de cadáveres", El Playón, un lugar medio fantasmagórico. No está cerca del mar y no sé de dónde deriva su nombre. Pero es una extensión de tierra volcánica, de lavas similares a las que se encuentra, por ejemplo, en el parque nacional del volcán de Masaya, en Nicaragua. Son rocas oscuras, porosas, que sólo permiten crecer una vegetación rala. El Playón, a unos 30 kilómetros de la capital, bordea una carretera importante, y se hizo famoso porque

los escuadrones de la muerte lo transformaron en un lugar predilecto para abandonar los cadáveres de sus víctimas. A veces aparecían cinco o seis, abandonadas allí en la noche. Miles de buitres, medio camuflados entre las rocas oscuras, habían hecho del lugar su residencia. Cuando fui, había sólo un cadáver. Era reciente. Le habían carcomido la cuenca de los ojos, los labios, la lengua, pero el sexo y el vientre aún no, de acuerdo con un orden macabro, respetado rigurosamente por estas aves de rapiña.

Seguramente lo habían abandonado ahí la noche anterior, casi al borde de la carretera. Servía así de escarnio; cumplía, después de muerto, la tarea de advertir a los que pasaban de lo que les podía suceder, si se metían en lo que no les correspondía.

Cuando corría el rumor de que había muchos cadáveres en el Playón, empezaban a llegar familiares de desaparecidos, con la dramática esperanza de encontrar allí a los suyos.

Salí del Playón y, un poco más allá, detuve el carro para preguntar a una campesina si había visto otros cadáveres por allí. Ella interrumpió su camino. Se detuvo y nos contestó de lejos: "No me doy cuenta... No he visto nada... " y siguió caminando. Hay temor en las cercanías del Playón, en cuyas cercanías habitan numerosas personas.

Regresando del Playón, bajo una persistente llovizna, fui a la sede de la Democracia Cristiana. Ahí estaban velando los cuerpos de una mujer, alcaldesa de una localidad del interior, cuyo nombre ya no recuerdo, y el de su hija. Habían sido asesinadas en su casa, también por bandas de extrema derecha.

Es una vorágine de muertes, no sólo como consecuencia de la lucha, sino por la acción permanente de esas bandas, que va corroyendo la mente, va envolviendo a todos, sembrando el terror, hasta terminar, como una extraña consecuencia por embotar los sentimientos, por hacer de una situación mostruosa, algo normal.

En el caso de El Salvador es evidente que, al cabo de muchos años, por lo menos 50 desde que, en 1932, una masacre de campesinos liquidó al dos por ciento de la población del país, la rebeldía y el rencor se han canalizado en forma creciente hacia un apoyo a la guerrilla. Por eso la insistencia permanente de los norteamericanos para que el gobierno controle, de una vez por todas, las acciones de las bandas de extrema derecha. Pero no es

fácil, cuando éstas se han hecho ya parte del cuerpo político del país, y cuentan inclusive con apoyo en el seno del ejército y de las fuerzas de seguridad. Que eso es así quedó demostrado al no poderse, transcurridos más de tres años, llevar a juicio a los militares responsables del asesinato de cuatro monjas norteamericanas, ocurrido en diciembre de 1980, y de dos asesores agrarios, también de esa nacionalidad, llevado a cabo un mes después. Ya ni hablar de los miles de muertos salvadoreños, en cuyos casos ni siquiera se ha abierto juicio.

Por supuesto, las consecuencias económicas de la guerra, que, como siempre, afectan más gravemente a los campesinos, están aún por precisarse en toda su magnitud. Pero la desnutrición y la mortalidad infantil hacen estragos en las familias, como consecuencia de las dramáticas condiciones de vida. Sus efectos, ya graves en el país aún en condiciones normales, se harán sentir con más fuerza en el futuro.

LA VOZ DE LOS QUE NO TIENEN VOZ

Finalmente, no se puede concluir un capítulo sobre la vida política salvadoreña sin hablar del papel de la iglesia católica.

La iglesia salvadoreña irrumpió como factor decisivo en la vida del país bajo la conducción de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, entre febrero de 1977, cuando asumió la arquidiócesis de San Salvador, y marzo de 1980, cuando cae asesinado en plena misa. La figura de Monseñor Romero le dio ese destaque, transformándola, como él mismo lo señaló, en "La voz de los que no tienen voz", en la boca de los campesinos sometidos a una represión que se incrementó terriblemente durante su período al frente de la iglesia. Pero, como contrapartida, fue posiblemente la historia brutal del país en los últimos años la que transformó paulatinamente la posición de la jerarquía católica.

El origen del conflicto entre la iglesia, por un lado, y la oligarquía y el ejército por otro, estuvo en lo que, años después, el actual arzobispo, Monseñor Arturo Rivera y Damas, definiría como la presentación de "un evangelio encarnado, que tenga que ver con liberación y desarrollo".

Esa tendencia no era nueva en la iglesia salvadoreña, sino

que se había expresado desde 1970, cuando, luego de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en Medellín en 1968, y del Concilio Vaticano II, se inició una pastoral muy vinculada a las dramáticas condiciones de los campesinos salvadoreños.

En enero de 1970, la Asamblea Legislativa había iniciado la discusión de una tímida reforma agraria, que fue respaldada decididamente por la iglesia. Ese mismo año se celebró una Semana de Pastoral, que vino a reforzar la acción de la iglesia en el campo, para alarma de los sectores más conservadores del país.

Ya en 1970 fue asesinado el primer sacerdote. La situación se fue agravando en los años siguientes hasta tal punto que, en junio de 1977, el arzobispado de San Salvador publicó un detallado documento titulado "Persecución de la Iglesia en El Salvador", revelando la brutal represión desatada en su contra por las autoridades.

El balance de lo ocurrido en sólo seis meses, entre diciembre de 1976 y mayo de 1977, reveló el asesinato de dos sacerdotes y cuatro laicos; la expulsión de once sacerdotes y la salida del país de otros tres, amenazados de muerte; amenazas de expulsión contra los jesuitas, que mantenían, entre otras cosas, un trabajo pastoral en la zona de Aguilares, escenario de una salvaje represión, unos 25 km. al norte de la capital, y la dirección de la Universidad Centroamericana (UCA).

Esa institución universitaria sufrió seis atentados dinamiteros, mientras organizaciones paramilitares colocaban también bombas en la imprenta del arzobispado.

Cuando Monseñor Romero asumió la jefatura de la iglesia católica salvadoreña heredó un proceso de renovación pastoral iniciado por su antecesor, Luis Chávez y González, del que era inmediato colaborador. Romero se encargó luego de profundizarlo, imprimiéndole el sello de su notable personalidad.

Monseñor Romero asumió el arzobispado en plena crisis entre el gobierno y la iglesia. Asociaciones gremiales del empresariado, recalcitrantemente conservadoras, responsabilizaban a los sacerdotes por las crecientes luchas campesinas, afirmando que "hordas asesinas organizadas por curas tercermundistas, líderes marxistas, protegidos por la tolerancia oficial, ensangrentan nuestro suelo".

En febrero fueron expulsados del país once sacerdotes,

acusados por el gobierno de "subversivos"; Monseñor Romero protesta por las expulsiones, presintiendo quizás que la violencia contra la iglesia estaba apenas empezando.

El 12 de marzo del 77 las bandas de extrema derecha asesinaron al sacerdote jesuita Rutilio Grande y, en mayo, al sacerdote Alfonso Navarro. El 21 de junio, una de esas agrupaciones, la Unión Guerrera Blanca (UGB), da un plazo de un mes para que los 47 jesuitas que viven en El Salvador abandonen el país, amenazándoles de muerte.

La creciente violencia contra la iglesia coincidió con el cambio de gobierno, cuando el general Romero sustituyó al coronel Arturo Armando Molina en la presidencia de la República, después de elecciones fraudulentas en febrero. En esos comicios, la coalición de centroizquierda Unión Nacional Opositora (UNO) vio escamoteado su triunfo en las urnas, por segunda vez consecutiva.

Ante esta realidad, Monseñor Romero fue definiendo la posición de la iglesia en las cuatro Cartas Pastorales que emitió durante su corto período al frente del arzobispado de San Salvador.

La primera, de abril de 1977, fue titulada "Iglesia de la Pascua"; divulgó otra, en agosto del mismo año, llamada "La Iglesia, cuerpo de Cristo en la Historia". Las dos últimas revelan, ya en sus títulos, la creciente preocupación del arzobispo: "La Iglesia y las organizaciones políticas populares", en agosto de 1978; y "La misión de la Iglesia en medio de la crisis del país", en agosto de 1979.

Conversé personalmente sólo una vez con Monseñor Romero, cuando asistió a una reunión del episcopado centroamericano en San José, meses antes de su muerte. Aunque no tengo ya el texto de la entrevista, recuerdo claramente cuando hablaba del peligro de un asesinato, que Romero tomaba como una posibilidad en su camino, que lo atemorizaba pero que no lo movía de la posición adoptada con extraordinaria lucidez y valentía.

Los otros encuentros con él no fueron personales, sino en la catedral salvadoreña, ese gran edificio inconcluso y poco original, en el centro de San Salvador, donde Romero celebraba prácticamente cada domingo la misa de las ocho.

En esa misa decía una homilía en la que pasaba revista a la situación de la semana en el país; su palabra atraía a centenares de salvadoreños, que abarrotaban la catedral y empezó a congregar

también a la prensa internacional. Cada domingo, luces, cámaras, fotógrafos en el suelo, en el altar, en todas partes, captaban los diversos ángulos de ese sacerdote cuyas palabras despertaban aplausos en la concurrencia. A la misa llegaban las delegaciones de campesinos del interior del país a presentar a Romero sus denuncias y solicitudes.

El 23 de marzo de 1980, un día antes de su asesinato, Monseñor Romero pronunció una de sus homilías más dramáticas y que, sin duda, contribuyó a fijar la fecha de su muerte.

Cinco meses antes se había producido el golpe militar que derrocó al general Romero (quien no tenía ningún parentesco con el Arzobispo) y desde enero, con la renuncia de la primera Junta de Gobierno, se estaba produciendo el reacomodo de las fuerzas políticas en el país. Los militares más conservadores del régimen derrocado reasumían el control del estado, ahora con apoyo de la Democracia Cristiana. La izquierda, a su vez, abandonaba el gobierno, denunciando el aumento de la represión, e iniciaba un proceso de unificación, al que Monseñor se había referido positivamente en su homilía del 20 de enero.

El domingo 23 de marzo, Romero clama a los soldados, exigiéndoles, en nombre de Dios, ¡No Matar!

Días antes había dado a conocer una carta abierta, dirigida al Presidente norteamericano Jimmy Carter, pidiéndole que no enviara más armas a El Salvador.

"Ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la Ley de Dios, que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios; una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. De nada sirven las reformas; si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios —dijo con voz firme e imperiosa, embargado por la emoción y en medio de estruendosos aplausos— y de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno: ¡cesen la represión!".

Hay una grabación impresionante de lo ocurrido al día siguiente. Monseñor Romero celebraba una misa casi privada, en la capilla del hospital de la Divina Providencia, en San Salvador, en recuerdo de la madre del periodista Jorge Pinto, director del Diario "El Independiente", que había sido dinamitado por la extrema derecha.

La voz de Monseñor Romero se escucha poco clara, por el

eco que se producía en el lugar, hasta que un disparo lo interrumpe; cae, se adivina un momento de estupor y luego, voces, gritos. El cuerpo ensangrentado, con una hemorragia nasal, yace detrás del altar.

Tres años después del asesinato estaba yo nuevamente en la Catedral para escuchar la homilía del que sería su sucesor, Monseñor Arturo Rivera y Damas.

El gobierno y los militares trataban de hacer olvidar la figura de Romero. Monseñor Rivera, ante una catedral repleta, exhortó entonces a los fieles seguir sus pasos, con la misma radicalidad de su testimonio. "Debemos ahondar sus reflexiones, no callar ni marginar su recuerdo ni su obra".

Rivera y Damas había colaborado estrechamente con su antecesor. En junio de 1977, cuando Romero era ya el arzobispo y Monseñor Rivera se desempeñaba como obispo auxiliar de San Salvador, le correspondió presentar un documento sobre la persecución a la iglesia.

"El pueblo de Dios en El Salvador, especialmente en la Arquidiócesis... está pasando la experiencia purificadora y vital de la persecución". Esa persecución no es consecuencia del "celo por la observancia de las leyes... sino el compromiso de los gobiernos militares con los altos intereses económicos de mantener inalterable la situación de injusticia en que languidece el pueblo, aún cuando para ello haya que recurrir a medidas represivas extremas".

El documento del arzobispado no ocultaba la situación vigente en el país. "Cuando la iglesia salvadoreña insiste en las raíces de iniquidad sembradas en la espantosa desigualdad de la tenencia de la tierra, se ataca a esta evangelización de materialista".

"Esa situación de miseria, de empobrecimiento progresivo, se mantiene gracias a un régimen político que utiliza todos los recursos, incluida la fuerza de las armas, para impedir cualquier cambio. Mientras se reconoce a unos pocos salvadoreños el derecho constitucional de asociarse en organizaciones empresariales, se niega a los campesinos y trabajadores del campo el derecho a organizarse".

El documento acusaba a esas organizaciones empresariales, "en perfecta coordinación con el gobierno", de los ataques

a la iglesia. El documento terminaba señalando que no se trataba de "luchar para que vuelva la paz o incluso los privilegios a la misma Iglesia-Institución, sino de luchar por hacer del país algo que se asemeje al Reino de Dios".

Sin la espectacularidad, quizás sin el énfasis que le daba Monseñor Romero, Rivera y Damas vino a asegurar la continuación de una línea que se venía dibujando en la iglesia salvadoreña hace más de diez años.

Capítulo III

LA POLITICA NORTEAMERICANA

En enero de 1982, precisamente un año después de que Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca, las nuevas orientaciones de la política norteamericana empezaron a tomar cuerpo en Centroamérica.

El 19 de enero, después de una rápida y sorpresiva visita a San José, los cancilleres de El Salvador, Fidel Chávez Mena, y Honduras, coronel César Elvir Sierra, anunciaron, junto con su colega costarricense, Bernd Niehaus, la creación de La Comunidad Democrática Centroamericana (CDC), integrada por las tres naciones.

El día anterior, poco antes de salir de San Salvador, Chávez Mena había hecho alarde de que, en la capital costarricense, darían a conocer un "documento trascendental".

"El proyecto histórico que nos une en San José tiene una trascendencia histórica y una proyección en lo económico y lo político de tanta importancia que, a partir del martes 19 de enero (de 1982) podremos decir que América Central inició el despegue hacia el progreso", dijo, en tono eufórico, Chávez Mena.

Reinaba entonces un absoluto hermetismo sobre lo que se iba a tratar en la capital costarricense, donde inclusive algunos ministros desconocían el proyecto en marcha.

Las expectativas del canciller salvadoreño se revelaron absolutamente desmedidas a sólo semanas, o quizás días, de anunciado el proyecto, pero su entusiasmo no respondía apenas a un error de apreciación; detrás había el compromiso norteamericano de transformar la Comunidad, recién creada, en instrumento canalizador de apoyo político y económico hacia sus aliados en América Central.

Se trataba así de apuntalar al régimen salvadoreño, crecientemente acosado por la guerrilla. Como contrapartida, se pretendía aislar a Nicaragua, dando inicio a medidas para debilitar el régimen sandinista y preparar su caída, medidas que están hoy en pleno desarrollo y ya en su fase de lucha armada.

Un año después de su creación, el origen de la CDC es conocido. El canciller hondureño había hecho una referencia sobre esto, aunque ocultando lo esencial.

"La idea sobre esa reunión en San José surgió por acuerdo de los tres países durante la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en diciembre del año pasado en Santa Lucía ", dijo César Elvir Sierra, evitando revelar que les había sido propuesta por el entonces Secretario de Estado norteamericano, general Alexander Haig.

La gravedad de la situación centroamericana acaparó las intervenciones de los cancilleres durante el debate informal en la reunión de Santa Lucía; un proyecto de resolución apoyando las elecciones constituyentes en El Salvador,que debían celebrarse tres meses después, fue también tema de intensas negociaciones. En ese ambiente, el Secretario de Estado norteamericano se reunió con los tres cancilleres de las naciones que luego formarían la Comunidad. Haig le dijo a Niehaus que quería que Costa Rica se alejara de Nicaragua, que si eso era así estaban dispuestos a ayudar económicamente al país.

La propuesta era delicada, pero tentadora. Carazo había apoyado decididamente a los sandinistas durante su insurrección, después de diversos incidentes fronterizos a fines del 78 y de las amenazas de Somoza de invadir el país y esas relaciones seguían siendo cordiales después del derrocamiento de la dictadura. Por

otra parte, el gobierno costarricense había suspendido el pago de su deuda externa desde agosto de 1981, y la situación económica era muy difícil.

"Cuando nos dimos cuenta de que lo que Haig pedía era un cambio de actitud hacia Nicaragua, varios ministros empezamos a protestar", reveló el entonces ministro de la Presidencia y hombre muy cercano a Carazo, José Rafael Cordero C.

"Niehaus insistió ante Carazo para que aceptara las propuestas de Haig. Como sabía de la oposición en el gabinete, y de la mía —agregó la que, en ese momento, era embajadora de Costa Rica en Managua, María Elena Chassoul— a ese proyecto, el ministro manejó todo bajo estricta reserva. Cuando se creó la Comunidad yo no sabía nada, José Rafael Cordero y Elizabeth Odio (ministra de Justicia), tampoco".

El secreto fue tan grande que la embajadora tuvo una discusión con su colega de Argentina, en Managua, el día de la creación de la CDC. El embajador le empezó a hablar de un cambio en la política costarricense hacia Nicaragua y la embajadora lo rechazó enfáticamente, hasta que éste le preguntó si ella sabía lo que se estaba firmando, en ese preciso momento, en San José. Era la Comunidad Democrática Centroamericana, de la que el embajador argentino había sido informado por su colega hondureño.

"¡Cuál no fue mi sorpresa al ver que lo planteado en la CDC era lo mismo que Haig había pedido a Niehaus en Santa Lucía!", dijo la ex embajadora.

Eran los primeros pasos de una estrategia por medio de la cual se empezó a presionar a los gobiernos centroamericanos. Carazo mismo cedió en ese momento; tanto María Elena Chassoul, como Cordero Croceri, o el que fuera ministro de Seguridad Pública, Juan José Echeverría, todos muy allegados al presidente, confirmaron que éste no quiso hablar del asunto con nadie.

Niehaus había revelado las propuestas de Haig en una fiesta de fin de año, en diciembre de 1982, recordó Cordero, a la que asistió Carazo y todo el gabinete. Un mes después se plasmaba la CDC.

"Cuando vi lo que se había firmado, me vine inmediatamente para San José", recordó la entonces embajadora, y le pregunté a Niehaus con base en qué estaban invitando a 'semejantes democracias' para crear una alianza con Costa Rica. Niehaus me insis-

tió en que no estaba tratando de mortificar a Nicaragua y me dijo que si no estaba de acuerdo debía renunciar; pero como yo no había sido nombrada para el cargo por él, sino directamente por el Presidente, me negué".

Los motivos de Carazo para aceptar esa presión norteamericana son aún especulaciones. "Yo creo que Carazo se metió en eso porque pensó que, metiéndose, podría moderar la situación", dijo Chassoul. La otra alternativa, que al parecer temía aún más el presidente, era que se consolidara el "triángulo del norte", una alianza entre El Salvador, Honduras y Guatemala, que contribuyera a exacerbar las tensiones en el área.

"El documento que Bernd Niehaus le llevó a Carazo para firmar fue redactado por los norteamericanos; era, inclusive, un documento mal traducido", enfatizó la ex embajadora.

"No me cabe la menor duda, concluyó María Elena Chassoul, que los sandinistas quisieron hacer de su revolución algo sui géneris, inclusive por consejo del propio Fidel Castro"; pero, como con la revolución cubana, la presión de los Estados Unidos parece impedirlo".

El documento que dio origen a la Comunidad, que consta de seis páginas, contemplaba aspectos políticos, económicos e institucionales, pero era entre los primeros donde estaban los puntos conflictivos.

Por un lado, las tres naciones afirmaban su "mutua solidaridad política en todas las circunstancias", agregando que tal solidaridad se extendía al caso de que "alguno de los miembros de la Comunidad sea víctima de cualquier tipo de agresión o de alguna forma de presión internacional; en estos casos la solidaridad se ceñirá a los principios y normas del sistema interamericano".

Por otro lado, reafirmaban "su derecho individual a recurrir a medidas de seguridad colectiva, dentro del marco de los tratados vigentes", en una alusión clara al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Entre los considerandos del documento que creó la CDC se mencionaba "la resolución sobre la situación de El Salvador, aprobada el 17 de diciembre de 1981, en la XI Asamblea General de la OEA, celebrada en Castries, Santa Lucía".

Esa resolución, de respaldo a las elecciones constituyentes que se celebrarían en ese país, fue copatrocinada por Honduras y

Costa Rica, pero no tuvo el voto de Nicaragua ni el de México. El Departamento de Estado, por el contrario, en una interpretación muy particular, la estimó "un claro llamado de América Latina a las guerrillas izquierdistas en El Salvador para que renuncien a la violencia y entren en el proceso político".

Toda la maniobra se enfilaba contra Nicaragua y contra la guerrilla salvadoreña. En efecto, El Salvador acusaba a Nicaragua de abastecer de armas a la guerrilla, denuncia en la que contaba con el decidido apoyo de Estados Unidos, sin que nunca pudieran aportar una prueba concluyente al respecto.

En la víspera de un debate secreto en la Cámara de Representantes para discutir la continuación de la ayuda norteamericana a la contrarrevolución nicaragüense, en julio de 1983, funcionarios de la Casa Blanca reconocieron que la CIA no había podido interceptar ni un solo embarque de armas desde Nicaragua hacia la guerrilla salvadoreña.

El pretexto de Reagan para continuar con las "operaciones encubiertas" contra Nicaragua era precisamente poner fin a ese supuesto flujo de armas.

El senador republicano del Comité de Inteligencia del Senado, David Duremberger, insistió en que la CIA, desde que opera dentro de Nicaragua, no pudo mostrar a los comités del Congreso absolutamente nada. "Quizás se debe a que no están enviando nada", ironizó.

Funcionarios gubernamentales dijeron entonces a la prensa en Washington que la CIA no fue capaz de presentar ni una sola prueba de envíos de armas a El Salvador desde Nicaragua.

Honduras, por su parte, acusaba a los nicaragüenses de supuestas violaciones de su territorio, que fácilmente podían desembocar en una denuncia por intervención. En ambos casos la CDC reforzaba y actualizaba resoluciones que permitirían la aplicación de sanciones colectivas, contempladas en el TIAR, contra Nicaragua.

A esto había que sumar las acusaciones repetidas por los cancilleres de los tres países sobre lo que califican de "armamentismo nicaragüense", carrera que, según el documento de la CDC, "pone en peligro la estabilidad de la región".

El documento que creaba la CDC —cuyo depositario es el canciller de El Salvador— fue leído en el salón dorado de la Can-

cillería costarricense, en presencia de los jefes de misiones diplomáticas y de la prensa. Las caras de sorpresa de los diplomáticos se fueron transformando a medida en que iba conociendo el contenido del documento. Concluida la ceremonia, la opinión de los embajadores presentes era de que todo apuntaba contra Nicaragua. La intención era demasiado evidente y provocó, por eso mismo, inmediatas reacciones.

El canciller mexicano, Jorge Castañeda, advirtió, meses después, contra el peligro de invocar el TIAR para tratar de resolver las "dramáticas convulsiones que agitan a Centroamérica", en un discurso pronunciado el 17 de noviembre de ese mismo año en la sede de la OEA, en Washington. Las referencias de Castañeda al TIAR fueron una respuesta al reemplazante del general Haig en la Secretaría de Estado, George Schultz, quien mencionó la posible aplicación de ese Tratado, "en el caso de que un país de Centroamérica ataque a otro".

El canciller costarricense salió, de inmediato, al paso de las primeras interpretaciones hechas sobre la CDC. Lo entrevisté dos días después en su despacho, e insistió en que la acción colectiva, que se mencionaba en el documento, "no necesariamente tiene que ser militar. Podría ser un esfuerzo de las democracias para combatir a los regímenes totalitarios; esa es nuestra interpretación".

Le pregunté también al ministro sobre su encuentro con Haig, en Santa Lucía, y se limitó a decir que el Secretario de Estado "estaba preocupado por la carrera armamentista existente, que se puede desbordar contra Estados vecinos y ahí es cuando se menciona el Pacto de Río".

El ministro enumeró entonces los diversos problemas que, estimaba, estaban agravando la situación centroamericana. "Además de la infiltración totalitaria, está la carrera armamentista, en una espiral sumamente peligrosa para el futuro pacífico de la región. Costa Rica considera vital que sean los pueblos los que se manifiesten y eso no está pasando en todos los países. Aquí hay necesidad de una acción colectiva, dentro del principio de no intervención, para que se celebren elecciones. La acción colectiva debe consistir en promover la democracia, y no en una intervención armada", insistió Niehaus.

Estábamos en vísperas de las elecciones salvadoreñas, Honduras había celebrado elecciones y se trataba nuevamente, de aislar al régimen nicaragüense. Ya para entonces, los líderes de la contrarrevolución nicaragüense actuaban abiertamente en Honduras. El dirigente de los indígenas miskitos, Stedman Fagoth, un ex integrante de los servicios de información de Somoza, casi perdió la vida en un accidente cuando una aeronave de la fuerza aérea hondureña en la que viajaba, en compañía del jefe militar de la zona, cayó en la costa atlántica de Honduras, cerca de la frontera con Nicaragua.

Pero se trataba de presentar a Nicaragua como una amenaza para sus vecinos, y los gobiernos de San Salvador y de Tegucigalpa como democracias ejemplares.

"Con estas elecciones el gobierno salvadoreño busca una legitimación internacional; en ese sentido son más para la exportación que para el pueblo salvadoreño. Luego, los Estados Unidos incrementarán su apoyo militar a la Junta, y tratarán de involucrar a otros países latinoamericanos en la guerra", comentó, una semana después de la creación de la CDC, el miembro de la Comisión Político-Diplomática del FMLN-FDR, Rubén Zamora.

"Estados Unidos busca dividir a los países centroamericanos para aislar a sus enemigos, y unir a tres países diferentes, para darles una característica democrática. Es una muestra de cinismo el que El Salvador se convierta en coordinador de la CDC, un régimen que ha sido condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y que tiene años de vivir bajo estado de sitio. Esto es parte del plan para darle legitimación a la intervención norteamericana en El Salvador y aislar a Nicaragua; detrás de todo eso está el problema de la intervención", enfatizó Zamora.

El ex ministro de Seguridad Pública de Carazo, Echeverría Brealey, me dijo también que, en su opinión, la intención de Reagan es de intervenir en Centroamérica; "de ahí la importancia estratégica de Honduras, único país que tiene su ejército ocioso".

Echeverría fue el primero en llamar la atención sobre la figura del embajador norteamericano en Honduras, John Negroponte, al que había conocido bien durante negociaciones entre Costa Rica y Estados Unidos sobre la pesca del atún, cuando ambos encabezaron las delegaciones de sus países.

"Negroponte está ahí para un trabajo más importante que el de un embajador", me dijo entonces el ex ministro, indicando

claramente que su papel era montar, desde Honduras, la parte oculta de la política norteamericana en el área. En concreto, las operaciones para desestabilizar a los sandinistas en Nicaragua y, de paso, detener el flujo de armas hacia los rebeldes salvadoreños que, según la opinión de Washington, era obra del gobierno nicaragüense, que utilizaba para eso el territorio hondureño. El papel de Negroponte en las actividades encubiertas de la CIA en Centroamérica, principalmente de respaldo a la contrarrevolución en Nicaragua y los intentos de control del abastecimiento de armas a la guerrilla salvadoreña, sería confirmado meses después por medios de prensa norteamericanos.

"Las acusaciones de Estados Unidos contra Nicaragua son una excusa para mantener su intervención en El Salvador; insistimos en la necesidad de que los norteamericanos pongan fin a su ayuda al gobierno salvadoreño, para contribuir a una solución política", insistió Rubén Zamora, al comentar la posición de la administración Reagan en Centraoméricа.

LOS FUNDAMENTOS DE LA POLITICA NORTEAMERICANA

En abril de 1983, el FMLN y el FDR emitieron una declaración sobre la situación en El Salvador y Centroamérica, precisando sus críticas a la política norteamericana en el área.

Los Estados Unidos han definido esta región "como vital para sus intereses militares, económicos y políticos; por consiguiente, consideran inadmisible cualquier movimiento autónomo de los países y pueblos de la región. El concepto de que Centroamérica y el Caribe son la cuarta frontera, la frontera sur de Estados Unidos, es la expresión más categórica y alarmante de esa política".

La región vivía días tensos, en medio del agravamiento de las acciones armadas de grupos contrarrevolucionarios contra Nicaragua y de las denuncias cada vez más generalizadas, inclusive en el seno del Congreso norteamericano, de un involucramiento de la CIA en los esfuerzos por desestabilizar a los sandinistas y derrotar a las guerrillas salvadoreñas.

Para el 27 de abril estaba anunciado un discurso de Reagan ante el Congreso en pleno sobre la situación en Centroamérica. La espectacularidad del anuncio y la gravedad de la situación regional despertaron una enorme expectativa (en los últimos 25 años, en sólo nueve oportunidades un presidente norteamericano había recurrido a un discurso ante el Congreso para destacar la importancia de sus palabras). Las embajadas norteamericanas en los países del área financiaron la transmisión en vivo del discurso del mandatario. En la noche de ese miércoles, Centroamérica tuvo oportunidad de volver a escuchar una reiteración de la política de la administración norteamericana en la región. Concluido el discurso, el senador Christopher Dodd, demócrata por Connecticcut, respondió a Reagan, señalando que su propuesta era "una fórmula para el fracaso" y una "alianza con perdedores".

Estados Unidos "debe utilizar todo su poder y su influencia para obtener un inmediato cese al fuego", tanto en El Salvador como en Nicaragua, y "trabajar por soluciones negociadas a los conflictos políticos en la región", estimó Dodd.

Pero Reagan no estaba dispuesto a escuchar palabras de moderación. Las emisoras de radio y televisión centroamericanas interrumpieron sus programas para transmitir en directo el esperado discurso. La puesta en escena fue cuidadosamente estudiada para contribuir al clima de guerra fría que el mandatario, expresamente, se decidió a resucitar: "algunas personas olvidan los éxitos de aquellos años (de la guerra fría) y las décadas de paz, prosperidad y libertad que aseguraron", expresó.

Estados Unidos "no puede ignorar el incendio que arde en su propio jardín"; "la seguridad nacional de todas las Américas se ve comprometida en América Central. Si no podemos defendermos nosotros mismos en esa región, no podemos esperar que prevalezcamos en otras partes; nuestra fiabilidad se derrumbaría, caerían nuestras alianzas y la seguridad de nuestra patria estaría en peligro", advirtió el mandatario norteamericano.

Reagan trataba de justificar su insistente pedido de incremento de ayuda militar a El Salvador; de lograr una reasignación de 60 millones de dólares, y otros 50 millones más, como parte de un presupuesto extraordinario para reforzar la asistencia militar a El Salvador en el año fiscal de 1983.

Pero la argumentación del mandatario dejó al desnudo los verdaderos fundamentos de la política que, esa noche, volvió a proponer a los congresistas y al pueblo norteamericano.

"Los problemas de América Central afectan directamente

la seguridad y el bienestar de nuestro pueblo; y América Central está más cerca de Estados Unidos que muchos de los atribulados lugares del mundo que nos interesan".

"El Salvador está más cerca de Texas que Texas de Massachusetts; Nicaragua está tan cerca de Miami, San Antonio, San Diego y Tucson, como esas ciudades lo están de Washington".

Dicho así, los problemas centroamericanos pasan a ser un problema interno norteamericano.

En esos días, el presidente de Brasil, general Joao Batista Figueiredo, visitaba oficialmente México e hizo varias declaraciones sobre el problema centroamericano. Entre las cosas que dijo Figueiredo estuvo el reconocimiento de que "Estados Unidos tiene derecho a no quedarse con los brazos cruzados ante la presentación de un peligro en sus fronteras". Pero lo que no admitiría Brasil, agregó, "es que Estados Unidos interviniera directamente en los problemas de otros países".

Tanto Figueiredo, como su anfitrión, el presidente mexicano Miguel de la Madrid, reiteraron que las causas del conflicto centroamericano, lejos de estar en los intereses estratégicos de la Unión Soviética, "se encuentran en la historia, en estructuras económicamente desequilibradas y socialmente injustas" de los países de la región.

Esa idea se abría paso en forma abrumadora en América Latina. Brasil se solidarizó con los esfuerzos que realizaban México, Venezuela, Colombia y Panamá —integrantes del grupo de Contadora— para lograr una solución pacífica a las crecientes tensiones en el área. A principios de abril, el grupo de Contadora se había reunido en Panamá con los cancilleres de las cinco naciones centroamericanas, intensificando los esfuerzos iniciados en enero de 1983. Desde entonces —además de Brasil— Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador se pronunciaron a favor de estos esfuerzos, que no merecieron siquiera una mención en el discurso de Reagan, quien prefirió proponer una iniciativa mediadora propia.

Su discurso, en el mejor estilo de la guerra fría, transformó el problema centroamericano en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

En vez de sumarse a las iniciativas de paz latinoamericanas, el mandatario prefirió anunciar el nombramiento del ex senador

por Florida, Richard Stone, un conservador con un historial de fracasos en anteriores intervenciones en América Central, como embajador especial en la región. Stone anunció que su primer objetivo sería tratar de convencer a la guerrilla salvadoreña para que participara en las elecciones presidenciales, previstas para fines de 1983.

Al respecto, los opositores salvadoreños han reiterado que, sin negociaciones previas destinadas a crear condiciones propicias, no depondrán las armas para participar en los comicios.

Vista la crisis centroamericana como una amenaza a la seguridad nacional norteamericana, ¿qué valor pueden tener las promesas de Reagan de que no enviará tropas a la región? Si aquí está en juego la seguridad de su país y la guerrilla salvadoreña amenaza con derrotar al ejército gubernamental, ¿quién puede confiar en las promesas del mandatario de que su país no se involucrará aún más en la lucha? Si la presencia sandinista amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿cómo creer que la administración norteamericana no está involucrada en las acciones desestabilizadoras organizadas desde Honduras para derrocar al régimen de Managua?

La previsión de una escalada que se asemeje a la realizada en el sudeste asiático en los años 60; el "espectro de Vietnam", que tanto asusta a los norteamericanos, llevó a los mismos congresistas a recordar a Reagan los peligros de esa política sin alternativas.

Ya a fines de 1982 había embajadas en San Salvador informando a sus gobiernos de la inevitabilidad de esa intervención directa si la administración mantenía su política, y yo pude ver algunos de esos informes.

Reagan confiaba en un triunfo militar sobre la guerrilla si el Congreso aprobaba el incremento de la ayuda y si lograba entrenar una mayor cantidad de militares salvadoreños.

Pero eso puede no resultar así. En marzo de 1983 el general Jaime Abdul Gutiérrez, ex integrante de la Junta de Gobierno salvadoreña, entonces en estado de "disponibilidad", y por lo tanto no incorporado a las filas, me dijo que si el ejército podía entrenar a unos tres batallones más en Estados Unidos, la guerrilla estaba perdida.

Me acordé entonces de que lo mismo decía a principios de

1982, cuando los primeros salvadoreños terminaban su entrenamiento en cuarteles norteamericanos. Se esperaba que el retorno de esos soldados, previsto para mayo, sólo 45 días después de las elecciones constituyentes de marzo, permitiría poner un fin rápido a la guerra. Se contaba también con que las elecciones representarían una derrota política tal para el FMLN que, sumados los dos factores, antes que terminara el año 1982 los guerrilleros estarían neutralizados. Esa oponión me fue confiada por el mismo Abdul Gutiérrez, quien reconoció el exceso de confianza implícito en la apreciación.

La verdad es que desde entonces hemos visto una desmoralización creciente en el ejército y una mayor iniciativa de la guerrilla.

¿Qué pasará si ese proceso sigue? Reagan no tendrá más alternativa que enviar tropas a El Salvador, o aceptar que sus predicciones catastróficas se cumplan. El mandatrio está jugando con fuego, coincidían los medios diplomáticos de la capital salvadoreña, y podría no quedarle, al final, más alternativa que invadir Centraoamérica con sus tropas, a pesar de la oposición del Congreso norteamericano y del casi consenso latinoamericano contra una medida de esa naturaleza.

Los argumentos del mandatario reforzaban la advertencia que el FMLN-FDR habían esgrimido en su documento sobre la política norteamericana hacia El Salvador.

"La cercanía en el mapa apenas revela toda la importancia estratégica de la América Central, bordeando el Caribe, nuestra línea de abastecimiento hacia el mundo exterior. Dos terceras partes de todo nuestro comercio exterior y el petróleo pasan a través del canal de Panamá y del Caribe. En una crisis europea, por lo menos la mitad de nuestros abastecimientos a la OTAN irían hasta esas áreas por mar", recalcó Reagan en su discurso del 27 de abril.

Un columnista italiano, del diario La República, planteó el problema en sus debidos términos. De acuerdo con la gravedad del panorama descrito, lo menos que Reagan debía proponer "era enviar los marines" a El Salvador. El diario destacó la "absurda contradicción" entre "la retórica de la alarma" y la "modestia de los remedios", atribuyendo el fenómeno al inicio de la campaña electoral en Estados Unidos.

El gobierno francés, por su parte, evocó el "agravamiento de la situación en América Central", en un discurso del canciller Claude Cheysson ante el Consejo de Ministros, dos días después del discurso de Reagan, cuando recordó también el apoyo de Francia a la iniciativa del grupo de Contadora.

En realidad, ¿cómo podría el eventual triunfo de las fracciones más radicales salvadoreñas poner en peligro la seguridad de Estados Unidos; cómo podría esto amenazar siquiera las alianzas estratégicas norteamericanas, como la OTAN? Es evidente que el presidente exageraba, pero el discurso empujaba a Centroamérica por el camino de la guerra.

Los argumentos de Reagan por lo menos no dejan ninguna duda de lo que está detrás de la política norteamericana; lo de la lucha por la democracia, por las elecciones, por los derechos humanos, son el "envase" en el cual la idea se vende al público; aunque en realidad se trata de la defensa de los intereses norteamerinos.

Sin embargo, aún en este caso quedan dos preguntas importantes por contestar. La primera, es si los legítimos intereses norteamericanos pueden ser defendidos con la política propuesta por Reagan, y la segunda es si la seguridad nacional de los Estados Unidos está realmente tan amenazada en Centroamérica como el mandatario trata de presentarla.

Las reacciones inmediatas al discurso en los mismos Estados Unidos dieron algunas respuetas a estas preguntas. El New York Times, por ejemplo, reprochó a Reagan el tono "extravagante" del discurso y la definición extraordinaria de lo que implican, para los Estados Unidos, los conflictos en Centroamérica; pero aprobó un aumento de la ayuda económica y militar para El Salvador. En general la prensa norteamericana se mostró partidaria de ese aumento, pero la visión de Reagan sobre lo que está en juego en la región cuenta con un respaldo mucho menor.

A sólo una semana de pronunciado su discurso, la Comisión de Inteligencia de la Cámara, presidida por el demócrata Edward Bowland, asestó un severo golpe a las propuestas del mandatario, al aprobar, por nueve votos a cinco, un proyecto de ley prohibiendo a la CIA o a cualquier otro organismo oficial financiar operaciones encubiertas para derrocar al gobierno de Nicaragua.

El proyecto no dejaba sin recursos a la CIA en la región.

Al contrario, aprobaba 30 millones de dólares para 1983, y otros 50 millones para 1984, para ser distribuidos entre gobiernos amigos de Estados Unidos en Centroamérica, con el fin de impedir el denunciado tráfico de armas desde Nicaragua y Cuba hacia otras naciones del área. Ese tráfico no ha sido probado satisfactoriamente por la administración norteamericana. Es más, cuando Estados Unidos preparó un Libro Blanco sobre el tema, en 1981, y lo presentó a sus aliados en Europa, algunos lo calificaron como una "farsa". La misma prensa norteamericana desnudó las falsedades de ese documento, que contribuyó, finalmente, a debilitar aún más credibilidad de la administración en su política hacia el área.

El proyecto aprobado por el comité de Bowland revelaba la profunda desconfianza reinante en la Cámara ante las evidentes operaciones ilegales de la CIA en Honduras y Nicaragua.

Otro proyecto de ley fue presentado esa misma semana a tres comités de la Cámara (de Inteligencia, Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas), exigiendo que la Casa Blanca informara sobre diversas actividades clandestinas de la CIA en Nicaragua y Honduras. La verdad es que reinaba una profunda desconfianza hacia la política de Reagan, aunque los representantes se cuidaban mucho de asumir la responsabilidad de cortar todos los recursos para las operaciones de inteligencia. Pero no querían ver involucrado a su país en operaciones para desestabilizar a los sandinistas; se trataba de limitar esa posibilidad, otorgando siempre recursos abundantes para tratar de detener el tráfico de armas hacia la guerrilla salvadoreña.

En naciones europeas, las reacciones a las palabras de Reagan fueron también reticentes.

En Londres, salvo el conservador Daily Telegraph, que apoyó sin reservas las posiciones del mandatario norteamericano, el resto de la prensa, incluyendo el Financial Times, estimó que la política de Estados Unidos en América Central "puede empujar aún más a Nicaragua hacia el campo soviético". "La máxima contribución que puede aportar Washington a América Central consiste en otorgar el mayor apoyo posible a los esfuerzos de las potencias regionales, como Venezuela y México, mejor colocadas para evaluar la verdadera amenaza que implican las guerras civiles en América Central".

El diario liberal The Guardian señaló que Reagan "se limitó a pedir cien miserables millones de dólares al Congreso, a fin de aplazar en un año la victoria guerrillera en El Salvador".

La idea de que la política norteamericana en Centroamérica, cuyas líneas actuales fueron definidas en los últimos meses del gobierno de Carter, amenaza los intereses estratégicos norteamericanos, en vez de defenderlos, fue planteada con claridad ya en noviembre de 1980. Esto consta en un documento disidente de funcionarios del Departamento de Estado, elaborado en consulta con analistas del Consejo Nacional de Seguridad, del Pentágono y de la CIA. Ese documento, fechado en Washington el 6 de noviembre de 1980, ha caído en el olvido.

Las ideas del grupo disidente no sólo perdieron toda influencia en la política exterior norteamericana con la llegada de Reagan al poder, sino que sus artífices fueron barridos de sus cargos en el Departamento de Estado. Pero, como la batalla no ha terminado, puede ser que, al final, todos nos lamentemos de que estas recomendaciones no hayan sido escuchadas.

"La asignación de recursos y las declaraciones oficiales públicas (del gobierno norteamericano) han identificado nuestros intereses estratégicos en Centro América y el Caribe con el destino de un régimen relativamente débil, impopular y aislado internacionalmente", decía el informe, refiriéndose a El Salvador. Y advertía, ya en aquel entonces, que "diversas agencias gubernamentales han tomado medidas preparatorias para intervenir militarmente" en ese país, si las circunstancias así lo exigían.

"La política actual constantemente subestima la legitimidad nacional y el apoyo internacional de que goza la coalición opositora FDR/DRU", agregando que, al parecer, "no se ha prestado ninguna consideración seria a las implicaciones para la seguridad a nivel global de un mayor conflicto regional, involucrando a participantes estadounidenses, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y otros".

"La articulación de la política estadounidense ante las audiencias públicas o congresionales ha tergiversado la situación en El Salvador, enfatizando la viabilidad del régimen actual, menoscabando su responsabilidad por los excesos que están cometiendo las fuerzas paramilitares y de seguridad, exagerando el impacto positivo de las reformas actuales, y presentando a las fuerzas de

oposición como terroristas que no están ni calificados ni dispuestos a participar en un diálogo constructivo", advertía el estudio.

"Nuestras acciones y nuestras palabras han reducido nuestras opciones políticas a una vía única de incremento gradual del involucramiento militar directo en una región vital a nuestros intereses nacionales y dentro de un contexto político que le da al uso de la fuerza pocas posibilidades de lograr un desenlace satisfactorio".

"Claramente, el actual gobierno de El Salvador no es estable y las fuerzas de seguridad son incapaces de ganar un enfrentamiento militar por sí mismas".

El diagnóstico era certero y el paso del tiempo, lejos de enmohecerlo, ha resaltado sus aristas más agudas. Desde luego, el enfoque sobre la manera de defender los intereses estratégicos norteamericanos en el área, en particular contra lo que califican de expansionismo cubano-soviético, difiere radicalmente de lo puesto en práctica por la administración Reagan.

"No estamos de acuerdo con aquellos que minimizan la amenaza del expansionismo cubano", advierte el informe, y el objetivo clave de nuestra política "es limitar la influencia cubana y del bloque soviético en la región".

"Pocos acontecimientos abrirían más oportunidades para Cuba en Centroamérica y el Caribe que la regionalización del conflicto armado que seguiría a la escalada del involucramiento militar estadounidense en El Salvador". Por lo tanto, concluyen, Estados Unidos debe "evitar la regionalización del conflicto armado, revirtiendo la tendencia actual de la escalada de nuestro propio involucramiento militar". Es evidente que la tendencia seguida desde entonces ha sido exactamente la contraria.

El segundo objetivo de la política norteamericana en la región, según el informe, debería ser la promoción de gobiernos estables. Sin embargo, afirman, "claramente, el actual gobierno de El Salvador no es estable. No puede llevar a cabo las reformas que decretó y no puede proporcionar un clima social y político conducente a la normalización económica". La evaluación hecha en el documento sobre la Junta de Gobierno y las fuerzas armadas salvadoreñas era de que "no han logrado movilizar ningún apoyo significativo a sus programas de reformas y contrainsurgencia. El intento de redistribución de la tierra no ha logrado

neutralizar a la población campesina ni ha tenido éxito en aislar a las fuerzas guerrilleras".

Al leer estas apreciaciones tengo por lo menos la sensación de realismo, de una evaluación adecuada de objetivos, de la fuerza enemiga y de caminos viables para el logro de esos objetivos. Al respecto, los autores del documento recriminaban la incapacidad de la administración norteamericana "de conceder que ha llegado la hora de otorgar su reconocimiento al nuevo statu quo emergente".

Señalan también la conveniencia de mantener un bajo perfil a lo largo del proceso de negociaciones que debía llevarse a cabo. "Nosotros no debemos iniciar ningún esfuerzo de mediación. En vez, debemos apoyar tales iniciativas y alentar a aquellos con quienes mantenemos influencia a que se sumen".

Pero Reagan prefirió nombrar un embajador especial para la región, el ex senador Richard Stone, un ex empleado del régimen militar guatemalteco del derrocado general Romeo Lucas García, quien lo contrató durante su gobierno para hacer presión en su favor en Washington y en Londres.

Reagan omitió también cualquier referencia a los esfuerzos del grupo de Contadora para promover un proceso de negociación en la región.

Ante esta realidad, su llamado para la elaboración de una política bipartidista republicana/demócrata hacia Centroamérica, lanzado en el discurso de abril ante el Congreso, queda reducido a una simple maniobra para ablandar la creciente resistencia parlamentaria a sus propuestas. Lejos de buscar un acuerdo que permita conciliar posiciones tan discrepantes, el mandatario ahondó las diferencias con sus opositores.

La política anunciada por Reagan se limitó a intensificar los esfuerzos en cada uno de los cinco puntos puestos en práctica por la administración Carter para enfrentar la crisis salvadoreña. Esos puntos contemplaban iniciativas políticas y económicas para aumentar la viabilidad del régimen, su legitimidad y prestigio internacional, para fortalecer la capacidad de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, así como la puesta al día de planes alternativos ante el eventual deterioro de la situación; y, finalmente, la busca de apoyo en el Congreso y ante la opinión pública para esas medidas.

Las actividades de la Casa Blanca, señalaba el "dissent paper" de los funcionarios del Departamento de Estado, implican "una asignación de recursos burocráticos y financieros que supera lo dedicado a cualquier otra crisis hemisférica desde 1965", fecha de la invasión de Santo Domingo por los marines.

Entre los planes que el documento denuncia estaban los necesarios para el despliegue multilateral o unilateral de fuerzas militares norteamericanas en El Salvador y Guatemala. De este modo, los temores de que los marines lleguen a desembarcar en Centroamérica no son un simple ejercicio intelectual. A pesar de las enormes dificultades, tanto debido a la legislación interna norteamericana como a la opinión negativa de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos a esa intervención, el camino elegido deja cada vez menos alternativas a la administración. Y los planes para la intervención son una realidad.

He querido mencionar extensamente este documento por dos razones. La primera es la reivindicación de un camino radicalmente distinto al elegido por la administración Reagan para defender lo que considera como intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Eso nos demuestra que dentro de las esferas gobernantes norteamericanas las opiniones sobre ese punto fundamental son ricas en alternativas y no una simple dicotomía entre aplastar a la guerrilla o ver sucumbir los legítimos intereses de su país en Centroamérica.

La otra razón es que, como documento de los "perdedores" en la pugna surgida en el Departamento de Estado desde la llegada de Reagan a la Casa Blanca, cayó en el olvido, a pesar del realismo y coraje empleados para analizar y proponer soluciones a la crisis.

Pero la historia, hasta hora, no ha marchado por ahí y eso ha costado caro a El Salvador y a Centroamérica. No quiere decir tampoco que no haya tiempo de revisar lo actuado; las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre de 1984 serán, tal vez, la mejor oportunidad para esa revisión.

Evidentemente, nada de lo que está ocurriendo puede ser sorpresa para nadie; los fundamentos de lo que estamos viviendo remontan, en esta nueva etapa, a los documentos preparados durante la campaña electoral de Reagan, entre ellos el conocido como "Documento de Santa Fe", de mayo de 1980.

Ahí, al grito de "la distensión es la muerte", un grupo de extrema derecha lanzó "una nueva política interamericana para los años 80", base de la orientación impuesta por Reagan en América Latina.

"Jamás nuestro país se ha encontrado en una situación tan riesgosa con respecto a su flanco sur; es hora de tomar la iniciativa", clamaban los cinco jinetes del apocalipsis que firmaron el documento.

"La crisis es metafísica", agregaron, culpando a "la falta de habilidad para proteger nuestros valores y creencias fundamentales" el que se los haya llevado "a la actual situación de indecisión e impotencia".

Desde entonces Reagan ha empeñado todos sus esfuerzos para detener a los insurgentes en El Salvador y poner fin al régimen sandinista en Nicaragua.

Operando desde Honduras, los norteamericanos combatían simultáneamente contra los sandinistas de Nicaragua, en el frente este; y contra el FMLN, de El Salvador, en el oeste.

Actuando por líneas internas, a través de Honduras, los norteamericanos aplicaron la clásica estrategia militar de contener a las fuerzas principales (la nicaragüense) con el mínimo de tropa, para liquidar primero al atacante más débil (la guerrilla salvadoreña) y luego volverse, con todos sus recursos, contra el otro contrincante.

Durante esa etapa, que duró el primer año y medio de la administración, vimos los esfuerzos principales concentrados en poner fin a las guerrillas en El Salvador. Esos esfuerzos debían culminar a mediados de 1982, después de las elecciones y del regreso de los batallones especiales, entrenados en Estados Unidos. Como me dijo el general Abdul Gutiérrez, el ejército pensaba que, seis meses después de las elecciones, la guerrilla estaría terminada y reducida a la impotencia. El mismo me reconoció la sobreestimación que habían hecho. El embajador norteamericano en El Salvador, Deane Hinton, habló también, en diversas oportunidades, sobre esas expectativas.

En esa etapa, se trataba sólo de establecer en Honduras una fuerza capaz de detener el flujo de armas que los norteamericanos suponen, circula principalmente desde Nicaragua hacia El Salvador, por ese país. Para eso realizaron maniobras

conjuntas con las fuerzas hondureñas en la costa Atlántica, transportaron hacia la región nuevas unidades militares y crearon un aparato de inteligencia en la zona.

El fracaso de la primera etapa obligó a cambiar la estrategia sobre la marcha.

El fortalecimiento de la guerrilla salvadoreña parece haber convencido a los estrategas norteamericanos que necesitaban poner fin, a cualquier precio, al abastecimiento de armas a los insurgentes. De este modo decidieron apoyar a los grupos contrarrevolucionarios de ex guardias somocistas, acantonados en territorio hondureño, fronterizo con Nicaragua, apresurando su preparación y abastecimiento para lanzarlos a la acción al otro lado de la frontera.

Los militares saben que el cambio de objetivos en medio de las operaciones es un peligro mortal; pero, al parecer, no había alternativas.

Además, otros dos factores empujaron a esa decisión: los guardias somocistas empezaban a crear problemas en Honduras, pues no era posible mantener inactivos a unos tres o cuatro mil hombres en campamentos en la selva o en la montaña por un tiempo demasiado largo.

Por otro lado, la presencia de esos campamentos empezó a hacerse pública, creando una presión insostenible sobre el gobierno hondureño, que hacía esfuerzos inauditos para convencer al mundo de que no prestaba su territorio, su ejército y su decisión política a los objetivos y a la estrategia norteamericanas en la región.

De modo que se decidió intensificar las acciones para derrocar a los sandinistas. Según Washington, sus acciones iban orientadas únicamente a detener el tráfico de armas hacia El Salvador; el objetivo de los grupos con los que trabajaban para lograr ese fin, decían, no era problema suyo. El que hizo la formulación más cínica en ese sentido fue el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Barry Goldwater. Pero el mismo Reagan se refirió al tema en términos parecidos durante su discurso de abril, ante el Congreso.

Reagan, finalmente, reconoció ante la prensa, en Washington, el 4 de mayo de 1983, que Estados Unidos estaba apoyando a los "combatientes de la libertad" (como él los denomina) a derrocar a los sandinistas en Nicaragua.

Desde los últimos meses de 1982 habíamos visto los resultados de ese apoyo reflejados en un rápido incremento de las acciones armadas contra las unidades militares y poblaciones fronterizas nicaragüenses, e inclusive en un intento fracasado de penetrar profundamente en el departamento de Matagalpa, que terminó en desastre para los contrarrevolucionarios. Sin embargo, Reagan, presentando las cosas a su manera, decía que "no iba a proteger a los sandinistas de la ira de su propio pueblo". El mandatario se estaba refiriendo, evidentemente a los contrarrevolucionarios que él mismo había armado y entrenado.

De este modo, la Casa Blanca trasladó el "frente salvadoreño" a las fronteras de Nicaragua y los conflictos centroamericanos se transformaron, más que nunca, en una guerra cuya estrategia es concebida en Washington como un conflicto regional.

CENTROAMERICANIZAR LA GUERRA

Así, haciendo caso omiso de recomendaciones como las del grupo disidente del Departamento de Estado, Reagan ha optado por el camino más peligroso que, a la larga, amenaza inclusive los intereses legítimos de su país.

Pero ante las dificultades internas y externas para comprometer directamente fuerzas norteamericanas en el conflicto, la administración Reagan trató de involucrar al mayor número de naciones posible en su estrategia de contrainsurgencia en el área.

En el plano militar, Honduras ha sido tomada como base de operaciones de la inteligencia norteamericana y de los grupos armados antisandinistas, con el consentimiento del gobierno liberal y del alto mando de las fuerzas armadas.

Pero hacía falta un respaldo político a los esfuerzos norteamericanos por aislar a los sandinistas y sostener al gobierno salvadoreño. El esfuerzo inicial, la Comunidad Democrática Centroamericana, mostró rápidamente que tenía patas cortas para una misión de tal aliento. Desde su creación, en enero de 1982, permaneció totalmente inactiva y ya en agosto Enders estaba hablando de nuevos proyectos.

En un discurso pronunciado en San Francisco, el Secreta-

rio de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos lanzó algunas propuestas para "construir la paz en América Central". Ya no mencionó a la CDC, creada sólo ocho meses antes en medio de enormes expectativas. Al contrario, Enders lanzó las ideas que luego se plasmarían en una nueva iniciativa diplomática de los Estados Unidos en la región, el "Foro Pro Paz y Democracia", que se crearía en San José de Costa Rica dos meses después.

"Los sandinistas nos dicen que estamos regionalizando el conflicto (en América Central), preparando a Honduras, El Salvador y Costa Rica, como bases de acciones contra ellos. Por tanto, hemos sugerido que todos los países de América Central se comprometan a poner un límite razonable y bajo al número de asesores extranjeros militares y de seguridad que tengan, así como a no importar más armas ofensivas pesadas. Ambos compromisos tendrán que estar sujetos, naturalmente, a la verificación internacional.

"Nicaragua también tendría que acallar los temores de sus vecinos, que nosotros compartimos. Hemos pedido a los nicaragüenses que pongan fin a su participación en el conflicto de El Salvador.

"Nicaragua debe cesar, asimismo, su terrorismo y otras actividades agresivas contra Honduras y Costa Rica", agregó Enders, sin precisar a qué se estaba refiriendo.

"Les hemos planteado una segunda cuestión, que preocupa hondamente a los vecinos de Nicaragua. Me refiero a la tendencia de la organización y uso del poder estatal en Nicaragua", un tema que, ciertamente, no puede ser objeto de discusión internacional sin significar una clara intromisión en los asuntos internos de los estados.

Enders sugirió aún, en ese discurso pronunciado ante el Commonwealth Club de San Francisco, otros cuatro puntos, que serían luego recogidos por el Foro en su documento de creación.

El funcionario norteamericano propuso iniciar un proceso de reconciliación dentro de cada estado; poner fin a la exportación de la subversión y a la adquisición de armas pesadas y poner coto a la intervención extranjera.

"Tal vez, concluyó, los países democráticos deberían unirse y ver si es que no pueden formular un enfoque común". Ya estaban entonces en consultas para dar forma a alguna nueva idea

que les permitiera retomar la iniciativa en el terreno político, perdida desde el fracaso de la CDC.

El 30 de setiembre Enders volvió sobre la idea, ahora en un discurso pronunciado en Chicago, durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

"Ya es hora de que las democracias comiencen a definir las condiciones en las que podrá reinar la paz en Centroamérica. Algunas de esas condiciones son evidentes. No puede haber paz si un país de la zona trata de exportar la revolución a otro, mantener en su territorio el cuartel general, el apoyo logístico y la base de adiestramiento de una insurrección dirigida contra un vecino, tal como hace Nicaragua contra El Salvador".

"Al igual que es condenable el que los guerrilleros salvadoreños traten de obtener una parte del poder con las armas, en vez de competir por ese poder en las urnas, del mismo modo sería condenable excluir de participación política a quienes ahora están dispuestos a aceptar la competencia pacífica dentro de las instituciones democráticas".

Hay que señalar que cuando Enders pronunció estas palabras, Estados Unidos estaba patrocinando, hacía muchos meses, la lucha armada de la contrarrevolución en Nicaragua y que Honduras, además, estaba comprometida en prestar su territorio y apoyo militar a esos grupos.

Como contrapartida, los guerrilleros salvadoreños, a los que se acusaba de buscar el poder por las armas, habían reiterado su disposición a negociar las condiciones necesarias para una eventual participación electoral.

Lo que el FMLN no aceptaba era deponer las armas para ir a elecciones en las actuales condiciones del país, que no les ofrece ninguna oportunidad de competir, en igualdad de condiciones, con los partidos oficiales.

La propuesta de Enders, por otra parte, pretendía obtener de la guerrilla, en la mesa de negociación, una entrega de las armas que el ejército salvadoreño no había podido lograr en el campo de batalla. A cambio, les ofrecía una participación electoral de la cual el FMLN no podría esperar prácticamente nada.

Esa era la realidad; pero el discurso del Subsecretario se refería a un mundo completamente diferente, y esa visión distorsionada de las cosas es la mayor dificultad para cualquier salida

negociada a la crisis regional.

Enders remachó su intervención con una amenaza apenas velada, en la que condicionaba la paz a los cambios internos en Nicaragua: "A menos que Nicaragua permita el establecimiento de instituciones democráticas, o al menos pluralistas, en las que el poder sea asignado mediante elecciones libres, sus vecinos nunca confiarán en ella para mantener la paz". Esa idea de "elecciones libres" sería luego la piedra angular del Foro pro Paz y Democracia.

Los representantes de nueve países —Costa Rica, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Belice, Jamaica, Panamá y Estados Unidos— en su mayoría ministros de relaciones exteriores, se reunieron en San José, el 4 de octubre de 1982. Dos importantes invitados rechazaron participar: México y Venezuela; mientras Nicaragua, nuevamente, era excluida del encuentro.

Los resultados de la reunión cayeron pronto en el olvido. Pero hay que recordarlos, para dejar claramente establecida la coincidencia entre las propuestas aprobadas y las sugerencias de Enders. Eso es tan cierto, que los gobiernos de México y Venezuela optaron por no asistir al encuentro de San José, mientras el de Panamá, que envió a dos representantes del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), no firmó el documento final. El canciller de Colombia, Rodrigo Lloreda, estuvo en San José, pero se lamentó de la ausencia de Nicaragua en la cita. Esas cuatro naciones se apartarían luego del Foro, reuniéndose el 8 de enero siguiente en la isla de Contadora, en Panamá, donde declararon su disposición para buscar una solución pacífica a los problemas de la región, con la participación de todas las partes involucradas.

Tres meses después, visitó la región el vicecanciller de Suecia, Pierre Schori. Consultado sobre las iniciativas de mediación en el área, a su paso por San José, dijo que, en Europa, se sabía poco del Foro, pero que las resoluciones de Contadora eran bien conocidas. Las declaraciones del vicecanciller fueron recibidas con una agresiva ironía por la prensa conservadora local, pero reflejaban una indudable realidad política: el Foro murió sin tomar ninguna iniciativa, tal como su antecesora, la CDC. Su entierro ocurrió también en San José, el 14 de febrero siguiente, cuando los cancilleres de Costa Rica, El Salvador y Honduras se reunieron para analizar la situación, optando por no mencionar al

Foro, en una declaración emitida al cabo del encuentro. El canciller costarricense, Fernando Volio, a esta altura, no ocultaba su decepción por los resultados de la iniciativa.

El Foro había sido inaugurado por el presidente Luis Alberto Monge con un discurso donde, en una frase, respondía a la propuesta de Enders de que "las democracias empiecen a definir las condiciones en las que podrá reinar la paz en Centroamérica".

"Esta reunión es una clarinada, clamó el mandatario: la democracia asume desde ya la inciativa. Basta de andar a la zaga de los designios de las estrategias de sus adversarios".

El documento final repetía también las diversas propuestas de Enders: impedir el uso del territorio propio para apoyar a la subversión en otros estados; limitar los armamentos y la magnitud de las fuerzas militares; establecer una vigilancia internacional de áreas estratégicas; promover al retiro de los asesores militares extranjeros e impedir la importación de armas pesadas a la región.

Concluido el Foro, el embajador norteamericano en San José en ese momento, Francis McNeil, dijo que "el resultado de la reunión depende de la respuesta de Nicaragua", insistiendo en la intervención de ese país en el conflicto salvadoreño y en la necesidad de que la situación centroamericana encontrara una "solución global".

Nicaragua había respondido ya a la iniciativa cuando, al día siguiente de su clausura, el miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, comandante Luis Carrión, destacó que era "incomprensible hablar de paz en Centroamérica sin tomar en cuenta a Nicaragua".

Esa posición, avalada por la ausencia de México y Venezuela, así como por la reticencia de Panamá, que prefirió no firmar el documento final, selló el destino de la iniciativa: el Foro nació muerto.

De su fracaso surgió, sin embargo, una iniciativa latinoamericana impulsada por el grupo de Contadora, cuyos esfuerzos por lograr la paz en la región estaban en pleno desarrollo. Marginados de esa iniciativa, los norteamericanos han expresado públicamente su acuerdo para que el grupo prosiga sus gestiones, que cuentan con un respaldo mayoritario entre las naciones del continente. Pero los norteamericanos se han preocupado de dejar en claro que no es "su" iniciativa y que no creen en sus resultados, posición

que contribuye a debilitar las propuestas del grupo.

Ese distanciamiento público de las propuestas de Contadora que, en privado, se ha convertido en una fuerte presión para hacer fracasar sus gestiones, cierra otra puerta a las negociaciones y nos deja más cerca de la guerra.

Nuevas señales de la opción de Washington por la vía militar para resolver los conflictos centroamericanos fueron dadas después de la visita de nueve días realizada a la zona en febrero de 1983 por la embajadora norteamericana en las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick. La gira se realizó cuando, en el Congreso norteamericano, se abría un nuevo período de debate sobre la situación salvadoreña a raíz de la certificación presentada por Reagan para continuar con la ayuda militar a ese país, tal como lo exigía una enmienda a la ley sobre Seguridad Internacional y Cooperación para el Desarrollo, aprobada a mediados de 1981 por el Congreso Norteamericano.

La embajadora Kirkpatrick, cuyo desprecio por las posibilidades democráticas en América Latina son bien conocidas, reiteró en su informe la impresión de que aumentaba la amenaza "cubano-soviética" en la región y pidió un incremento de la ayuda a El Salvador.

"Considero que El Salvador en particular, y la América Central en general, son mucho más importantes para los Estados Unidos que lo que generalmente se ha entendido", dijo la embajadora en un discurso que pronunció ante el Club de Mujeres Periodistas, en abril de ese año.

"Están en juego, agregó, las rutas marítimas de las que dependen el transporte de nuestras materias primas. Un puerto de aguas profundas en el lado Atlántico de Grenada amenazaría las rutas de los transportes de petróleo. Lo que sucede en El Salvador, enfatizó una vez más, es un esfuerzo de la guerrilla, bien abastecida desde Nicaragua, por el bloque soviético a través de Cuba".

En los mismos días, el ejecutivo norteamericano presentó su tercera certificación sobre los "progresos" del gobierno salvadoreño en el terreno de los derechos humanos, de las reformas sociales y electoral, y en la investigación de los asesinatos de ciudadanos norteamericanos en El Salvador, indispensable para proseguir la ayuda militar.

Esa ayuda ascendió finalmente a 76,3 millones de dólares, después que la comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una propuesta de la senadora Nancy Kassebaum, de elevarla en 20 millones. Eso significó un rechazo de la pretensión de Reagan, que había solicitado 136,3 millones de dólares para este año y 86,3 millones para el próximo.

La certificación presentada por la administración provocó un nuevo e intenso debate en el Congreso, dejando en evidencia que las discrepancias con la Casa Blanca, respecto a la situación salvadoreña, son cada vez mayores.

En el informe que acompañaba la certificación, el gobierno insistía en que los abusos contra los derechos humanos siguieron reduciéndose durante el año de 1982, en El Salvador. Los civiles muertos no pasaron de 200 al mes durante los últimos meses, promedio menor que el de 500 por mes en el año anterior, decía el documento.

No sé de dónde la administración norteamericana saca su información sobre la violencia que reina en El Salvador, pero esos datos no coinciden con los del organismo más serio que, sobre el tema de los derechos humanos, funciona en ese país.

En efecto, el Socorro Jurídico Cristiano de El Salvador, dependiente del arzobispado, presentó, el 15 de enero de 1983, un informe destinado al trigésimo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí se indicaba que "no menos de 6.050 civiles no combatientes fueron ejecutados extrajudicialmente en El Salvador, durante 1982", y que "no menos del 70 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales serían responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas de El Salvador".

El informe agregaba que, debido a la sospecha de que colaboraba con la guerrilla, fue asesinada "gran cantidad de niños y mujeres en zonas que las fuerzas armadas calificaban de insurgentes", señalando que, a la cifra de casi seis mil muertos, habría que agregar otros seis mil, de personas que perdieron la vida en acciones colectivas del ejército contra la población no combatiente, lo que da un total de, por lo menos, 12 mil civiles asesinados en doce meses.

"Continuamente se reportaron, durante 1982, agresiones bélicas contra la población civil no combatiente. En estos casos,

la población fue obligada a abandonar sus lugares de habitación, sus pertenencias y es perseguida, hasta la muerte, mayoritariamente por miembros de las fuerzas armadas".

Ese informe parece mucho más cerca de la realidad que el mundo pintado por la administración norteamericana ante el Congreso, hablando de avances en el terreno de los derechos humanos, de las reformas y de los procesos judiciales.

En el mismo instante en que la administración insistía en esos "progresos", la justicia salvadoreña adoptaba nuevas maniobras dilatorias en el juicio a los siete guardias nacionales acusados del asesinato de tres monjas y una asistente social norteamericanas en El Salvador, en diciembre de 1980.

Sobre la situación de los derechos humanos, además de los informes del Socorro Jurídico —que, en la última semana de abril, volvió a constatar la muerte de 205 personas no combatientes en manos de las fuerzas de seguridad—, basta conversar con cualquier persona en los refugios que la iglesia mantiene en San Salvador, para darse cuenta de la violencia arbitraria impuesta en el campo por las autoridades militares.

Esa impresión prevaleció también en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que resolvió prorrogar por un año el mandato del representante especial sobre la evolución de los derechos humanos en ese país, por 34 votos a favor y seis abstenciones.

El informador especial, al abrirse la sesión, destacó "la pasividad de las autoridades policiales y judiciales de El Salvador, frente a la violación de los derechos humanos".

La certificación presentada por Reagan al Congreso se refería también al progreso de las reformas, en particular de la reforma agraria, y del proceso político salvadoreño. Si bien hay cifras de una mayor cantidad de campesinos beneficiados en los últimos meses con el otorgamiento de la propiedad de pequeñas parcelas, no se dice ni una línea sobre la paralización de la reforma en su conjunto, tal como está contemplada en la ley de reforma agraria de marzo de 1980.

Se alega también que la celebración de elecciones constituyentes en marzo de 1982 dio inicio a un "proceso democrático que debe culminar antes de fines de 1983 con comicios presidenciales y un referéndum para ratificar la nueva constitución". De

ser así, las elecciones sólo sirvieron para que la administración reforzara sus argumentos sobre supuestos progresos del proceso político salvadoreño; la realidad es que los comicios no permitieron avanzar hacia la solución del conflicto, facilitando a la extrema derecha recuperar posiciones y entrabar el mismo proceso de reformas.

Finalmente, la administración no puede menos que reconocer que el aparato judicial salvadoreño no funciona, al referirse a los casos de ciudadanos norteamericanos asesinados por fuerzas militares, y cuyos procesos, transcurridos tres años, no han podido llegar a juicio.

El mismo embajador Hinton pronunció un discurso al respecto ante la Cámara de Comercio Salvadoreña-Norteamericana, en octubre de 1982, que fue luego severamente censurado por los miembros de esa agrupación, de tendencia muy conservadora.

La administración tuvo, una vez más, que hacer malabarismos para certificar ante el Congreso los avances del gobierno salvadoreño en cada uno de esos terrenos, y se enfrentó con una creciente oposición parlamentaria a aceptar ese documento.

COMO EN VIETNAM

Todo ese debate contribuyó a revivir, en Estados Unidos, el espectro de la guerra de Vietnam, que la administración Reagan trata de enterrar definitivamente.

Pero la misma argumentación utilizada por los funcionarios norteamericanos recordó la que, en la década de los 60, se esgrimió para involucrar cada vez más a las fuerzas norteamericanas en el conflicto de Indochina.

Estados Unidos justificó su creciente participación en Vietnam por razones estratégicas y políticas.

"El Sudeste Asiático posee gran importancia estratégica en la defensa avanzada de los Estados Unidos; su ubicación, en medio de las vías marítimas que conectan Oriente con Occidente, domina las puertas de entrada entre los Océanos Pacífico e Indico", advertía, en 1964, el entonces Secretario de Defensa de Lyndon Johnson, Robert McNamara.

Pocos meses depués las tropas norteamericanas estaban de-

sembarcando en Indochina. En 1965 Vietnam "estaba al borde del colapso", según la apreciación del ex presidente Richard Nixon. "Para evitar que fuera conquistado por Vietnam del Norte, en el mes de febrero el presidente Johnson ordenó bombardear el Norte, y, en el mes de marzo, las primeras unidades de combate independientes norteamericanas desembarcaron en Danang. A medida que Norteamérica se comprometía más y más en la guerra, hasta el punto de tener en Vietnam del Sur 550 mil hombres, en el momento en que Johnson dejó de ser presidente, se hicieron cada vez más patentes los fatales errores de la política norteamericana en Vietnam", estimó Nixon.

Los argumentos para justificar los intereses de Estados Unidos en el sudeste asiático, son prácticamente los mismos que los usados en el caso de El Salvador; con la diferencia que, en este caso, Reagan agrega, con frecuencia, el de la proximidad geográfica.

"El Salvador está más cerca de Texas que Texas de Massachussets", volvió a reiterar el mandatario en su discurso pronunciado el 10 de marzo de 1983, ante la Asociación Nacional de Manufactureros.

"La América Central está muy cercana y los intereses estratégicos son demasiado importantes para pasar por alto el peligro de que ocupen el poder gobiernos con lazos ideológicos y militares con la Unión Soviética".

En un extremo de América Central está el Canal de Panamá, y la mitad del comercio extranjero de los Estados Unidos pasa por el Canal o por las rutas marítimas del Caribe, advirtió el mandatario.

Es evidente que, a pesar de la utilización propagandística de los argumentos , América Central y el Caribe son una región de gran importancia estratégica y política para los Estados Unidos.

Pero cuando se compara las justificaciones y estrategias utilizadas por Estados Unidos en Vietnam y en El Salvador queda en evidencia que, como en el sudeste asiático, una política equivocada conducirá aquí a una tragedia, tanto para los pueblos que la sufren, como para los propios norteamericanos.

Transformada en la potencia conservadora de nuestra época, Estados Unidos y sus gobernantes parecen imposibilitados de percibir la necesidad de acercarse a los grupos que buscan transformaciones profundas en sus naciones, como la única forma de

defender sus intereses estratégicos.

Nadie puede pensar seriamente que El Salvador, aún bajo el gobierno más radical, se transformará en una amenaza militar para los Estados Unidos. Eso incluye, por supuesto, el cálculo de que los norteamericanos no permitirán la instalación en el continente americano de armas estratégicas ofensivas soviéticas. De modo que, aún bajo un eventual régimen radical en El Salvador, un decidido apoyo norteamericano (no la ayuda vergonzante que siguen prestando a cada régimen revolucionario en las primeras semanas después del triunfo) sería un arma eficaz en defensa de sus intereses.

Pero tendremos que esperar aún muchos fracasos de esa política conservadora para que los gobernantes norteamericanos se den cuenta de la realidad; hay voces sensatas en las esferas gobernantes norteamericanas que empiezan a pregonarlo.

Una concepción de esa naturaleza implica, además, una visión muy distinta de las relaciones internacionales de la que priva actualmente en la Casa Blanca. No es con la convicción de que la tercera guerra mundial ha empezado, como dice Nixon, que se podrá avanzar en ese sentido. Desgraciadamente, esa tesis extremadamente conservadora y peligrosa es la misma que está en la base de toda la política exterior de la actual administración norteamericana. La distensión internacional, que prevalecía hace pocos años, ha quedado muy atrás; en una inversión asombrosa de la historia, fue enterrada al grito de la "distensión es la muerte", proclamada por el grupo de Santa Fe, que parece tratar de convencernos de que "la guerra es la vida". Todo esto me suena a algo así como el "muera la inteligencia", de la guerra civil española.

Mientras no vuelva a imponerse la cordura tenemos que seguir escuchando advertencias y teorías sabias pero tontas, como la "del Dominó", popularizada por el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger.

Sabia, porque advierte las consecuencias de cada triunfo revolucionario en las naciones vecinas; tonta, porque no saca de ahí las conclusiones necesarias y trata, con la fuerza militar, de detener las consecuentes lógicas de los acontecimientos.

En Vietnam, Estados Unidos insistió en que un triunfo del movimiento de liberación en el sur, significaría la "caída" del res-

to de la península de Indochina. Washington parecía no darse cuenta de que, con esa posición, perdía toda posibilidad de influir en los acontecimientos en naciones vecinas como Laos y Cambodia y de mantener relaciones normales en el futuro.

Los norteamericanos prefirieron retroceder su "línea de defensa" a Tailandia, reforzar las alianzas militares, mantener un hostigamiento diplomático permanente contra Vietnam para terminar, con esa política absurda, apoyando al sanguinario régimen de Pol Pot, derrocado en Cambodia con apoyo de las tropas vietnamitas.

Los norteamericanos han aprendido poco de todas esas lecciones. En abril de 1965, Johnson decía, sobre la lucha en Vietnam, que no podía "abandonar esa nación pequeña a sus enemigos; haremos todo lo que sea necesario para frenar esa agresión". El presidente advirtió entonces que estaba dispuesto a ir a la "fuente misma del problema", en ese caso, China y la URSS, e insistía en que el problema de Vietnam del Sur residía en el apoyo del norte, desde donde fluían armamentos, municiones y vituallas en una corriente incesante. Reagan insiste hoy en su decisión de "ir a la fuente" de los problemas centroamericanos; en su opinión, la intervención de Cuba y, nuevamente, la URSS, en la zona.

Es realmente asombrosa la similitud de argumentos que escuchamos respecto a El Salvador.

Los teóricos militares soviéticos, había dicho Reagan en marzo, en su discurso ante la Asociación de Manufactureros, quieren destruir nuestra capacidad de reabastecer Europa Occidental en caso de una emergencia, quieren amarrar nuestra capacidad de actuar en lugares más alejados como Europa, o el Golfo Pérsico, el Océano Indico y el Mar de Japón.

¡He ahí la causa de la guerra civil en El Salvador!

Todo eso parece, ciertamente, una broma de mal gusto. Pero si Estados Unidos insiste en su política y pierde la guerra en El Salvador, esa predicción catastrófica puede convertirse en algo de realidad. Contra esa eventual derrota no hay fuerza militar que represente una garantía total, como lo demostró Vietnam. Sólo una política inteligente puede prevenir que un cambio radical en El Salvador signifique una tragedia para la política exterior y para la seguridad de Estados Unidos.

Puestas así las cosas, los europeos no deben tener ninguna confianza en sus aliados norteamericanos, pues la política actualmente en marcha amenaza con conducir a todos a una guerra absurda, de la cual nadie podría sacar provecho.

LA ESTRATEGIA MILITAR

Pero no sólo en el plano político los errores de apreciación de los norteamericanos sobre la guerra de Vietnam parecen repetirse.

"Cuando asumí la presidencia de los Estados Unidos, en 1969, recordó Nixon, me di cuenta de que la estrategia de los Estados Unidos debía ser profundamente revisada".

Entre los nuevos objetivos estaban el dar marcha atrás en la norteamericanización de la guerra e impulsar su "vietnamización"; dar prioridad a la pacificación del país, para facilitar el control gubernamental en las zonas rurales; y reducir la amenaza de invasión mediante la destrucción de los refugios enemigos y sus líneas de suministro en Laos y Cambodia.

En julio de 1969, en su primer viaje a Vietnam como presidente de los Estados Unidos, el mandatario ahondó en esas apreciaciones que, según él, conformarían lo que luego se conocería como la "Doctrina Nixon".

El núcleo central de esa doctrina "lo constituye la premisa de que los países amenazados por una agresión comunista deben asumir con carácter primordial la responsabilidad de su propia defensa".

"El aspecto más importante de la vietnamización consistía en transformar al ejército de Vietnam del Sur en una fuerza militar potente e independiente, capaz de hacer frente eficazmente a los comunistas.

"Después de dar gran importancia a la vietnamización, lo primero que los militares debían atender era atacar los refugios y líneas de suministros del enemigo en Cambodia y Laos".

En abril de 1983 Reagan evocó la guerra de Vietnam, en su discurso ante el Congreso. "Permítanme decirles, a aquellos que invocan la memoria de Vietnam; no se piensa enviar soldados de combate norteamericanos a la América Central; no se necesitan.

Todo lo que nuestros vecinos nos piden es asistencia en adiestramiento y armas para protegerse a sí mismos, mientras ellos estructuran una vida mejor".

Adviértase que el mandatario dice que "no se necesitan", pero los últimos meses de lucha indican precisamente que podría necesitarse, si las cosas siguen igual...

Hasta ahora, Reagan está aplicando una de las lecciones de Vietnam: no hacer la guerra por los salvadoreños. En el sudeste asiático se llegó a esa conclusión después de haber enviado más de 500 mil norteamericanos a la lucha, sin resultados. La vietnamización de la guerra tampoco impidió la derrota. Por ahora, se ha optado por mantener esa línea en El Salvador: un acuerdo para entrenar tropas en Honduras, en vez de enviarlas a Estados Unidos, está en marcha, reduciendo así enormemente los costos de esa preparación.

La otra parte de la estrategia consiste en cortar la línea de suministros hacia el enemigo.

Trece años antes del discurso de Reagan, en abril de 1970, Nixon decidió bombardear Cambodia. La historia es conocida, pero vale la pena recordar los problemas que el entonces segundo de la embajada norteamericana en Phnon Penh tuvo con el Congreso de su país, por sus declaraciones falsas sobre esos bombardeos. El funcionario, Thomas Enders, ocupó luego la Subsecretaría de Estado para Asuntos Latinoamericanos. Con él, parte de los más brillantes del equipo diplomático y de inteligencia que operó en el sudeste asiático está concentrado en los problemas de América Latina; algunos de los cuales se trasladaron a Centroamérica y, más particularmente, a Honduras, base de las operaciones clandestinas de la CIA y del gobierno norteamericano en la región. Al frente del equipo, en Tegucigalpa, está el una vez encargado de la sección política de la embajada de su país en Saigón, John Negroponte.

Estábamos en 1981 y se empezaba a vislumbrar, aún tímidamente, las maniobras ilegales de Estados Unidos contra Nicaragua y las operaciones clandestinas de la CIA en Honduras, en apoyo al ejército salvadoreño. Desde entonces, el papel clandestino de Negroponte se ha visto confirmado por diversas publicaciones, en particular de periódicos norteamericanos.

Su misión pública, en el terreno de la inteligencia y la

seguridad, es la de tratar de cortar el suministro de armas a la guerrilla salvadoreña. Ese objetivo incluye, por supuesto, la desestabilización del régimen sandinista de Managua, al cual los norteamericanos responsabilizan de ese suministro.

El derrocamiento de los sandinistas se fue transformando en un objetivo más importante que el de cortar el abastecimiento de armas a la guerrilla salvadoreña; aunque la administración norteamericana haya aseverado siempre públicamente que no trataba de hacer caer el gobierno nicaragüense.

En mayo de 1983, después de las operaciones masivas de la contrarrevolución nicaragüense en la frontera con Honduras, Reagan no tuvo más remedio que reconocer el apoyo clandestino de su gobierno a esos grupos, dejando al desnudo la magnitud de la operación desestabilizadora contra los sandinistas.

En realidad, el esfuerzo por detener el tráfico de armas hacia El Salvador no era más que uno de los objetivos, o el pretexto, de las acciones contra los sandinistas. En esa labor desestabilizadora, los norteamericanos han transformado Centroamérica en un campo de batalla.

Reagan debería recordar que el bombardeo de Cambodia y Laos, en 1970, no contribuyó a ganar la guerra de Vietnam, a pesar de la apreciación de Nixon de que esos ataques impidieron ofensivas de gran envergadura programadas por Vietnam del Norte y el Vietcong contra Vietnam del Sur. Cierta o no esa apreciación, a la larga estas acciones no pudieron impedir la derrota. Los ataques fueron acompañados por una intensificación de los bombardeos contra Vietnam del Norte y por la colocación de minas en la Bahía de Haiphong, medidas que, según Nixon, lejos de enfriar las relaciones con la URSS y con China, les hizo comprender la imposibilidad de ganar la guerra en el terreno militar y condujo a las negociaciones de paz de París, en 1973.

Es evidente que quieren imponer la misma receta en Centroamérica; operando desde Tegucigalpa, prosiguiendo una escalada amenazadora que, por ahora, no ha traído a los marines a la región, pero que, si fuera necesario, podría ocurrir.

En 1965, cuando inició su escalada militar en Vietnam, el gobierno norteamericano publicó un libro blanco, titulado "Agresión desde el norte. Hanoi suministra el personal clave para la agresión armada contra Vietnam del Sur". El informe no dilucidó

nunca si el origen de la lucha en el sur eran las condiciones de miseria y opresión en las que se vivía, o si era el producto de la intervención de las fuerzas del norte.

En febrero de 1981, Estados Unidos presentó también un libro blanco sobre la situación en América Central. Ahí, Nicaragua fue acusada de ser el instrumento de Cuba y la URSS para subvertir la región, pero los argumentos esgrimidos por el Departamento de Estado fueron puestos en duda inclusive por la prensa conservadora norteamericana. Altos funcionarios de naciones europeas, aliadas de los Estados Unidos, calificaron como una "farsa" ese documento, como ya lo recordé.

Pero la administración republicana está decidida a seguir los pasos de la política aplicada en Vietnam. Ciertamente suponen que las lecciones de entonces servirán para no repetir errores y ganar ahora la guerra que perdieron en 1975.

SACAR EL PEZ DEL AGUA

Cuando hablamos de la estrategia empleada por el ejército salvadoreño nos referimos a los intentos de "sacar el pez del agua", de aislar a la guerrilla de la población, en particular de la campesina, como Estados Unidos trató de hacerlo en Vietnam.

La única posibilidad de triunfo contra los insurgentes reside, en realidad, en el éxito de esa tarea. En El Salvador, esto tiene una significación muy particular; el país tiene sólo 21 mil kilómetros cuadrados, y más de cinco millones de habitantes. Esto representa casi 240 habitantes por kilómetro cuadrado, densidad ligeramente superior a la de Gran Bretaña, por ejemplo, o casi cinco veces la de España. Estados Unidos tiene una densidad diez veces menor; la de Vietnam es cuatro veces inferior.

Estos datos muestran claramente la importancia y la dificultad de actuar clandestinamente en El Salvador, aún en el campo, y la imposbilidad de la guerrilla de sobrevivir, si se aísla de la población.

Durante 1980 y parte de 1981, mientras el FMLN se mantuvo fuerte principalmente en la parte norte de los departamentos de Chalatenango y Morazán, zonas agrícolas marginales, con cultivos de subsistencia en un terreno montañoso y árido, los dirigentes salvadoreños no se cansaban de repetir que podían quedarse ahí toda la vida, sin que eso afectara el desarrollo de la lucha.

El error de esa apreciación no se hizo esperar. La guerrilla se fortaleció en esa zona y expandió su radio de acción. Estableció entonces otros centros de operación en el país: en la zona central en el cerro de Guazapa, 30 kilómetros al norte de la capital; en San Vicente y en Usulután, enclavados en la rica zona cafetalera y algodonera del oriente, el corazón económico del país.

Esta realidad llevó al gobierno a promulgar, en marzo de 1980, una reforma agraria, con el objetivo de minar la base de reclutamiento de la guerrilla en el campo.

Analizaremos la reforma agraria salvadoreña más adelante, pero hay que destacar aquí una medida adoptada un mes y medio después de iniciada su aplicación, cuando el gobierno promulgó el decreto 207, con la "Ley para la afectación y traspaso de tierras agrícolas a favor de sus cultivadores directos".

El objetivo de ese decreto era el de convertir en pequeños propietarios a 150 mil familias, favoreciendo a cerca de un millón de personas, dijo en un discurso el entonces presidente del Instituto de Transformación Agraria (ISTA) y miembro de la Junta de Gobierno, José Antonio Morales Erlich.

"Desde este momento termina en El Salvador el sistema tradicional de la aparcería y arrendamiento", proclamó. El decreto entregaba a aparceros o arrendatarios extensiones de tierra de hasta siete hectáreas en propiedad.

El ex viceministro de agricultura de El Salvador, Jorge Villacorta reveló que ese decreto fue preparado por el funcionario de la AID, Roy Prosterman, el mismo que llevó a cabo un proyecto de reforma agraria en Vietnam.

Prosterman estimó que el decreto debía "reproducir empresarios como conejos" y que tenía como función generar una base social de apoyo al ejército, reduciendo la de la guerrilla.

La aparcería y la medianía se daban en diversas zonas del país, pero particularmente en las zonas marginales de Chalatenango y Morazán, donde la guerrilla está fuertemente implantada, y fue diseñada para eliminar ese apoyo, enfatizó Villacorta. Prosterman trató también, con el decreto 207, de contrarrestar los efectos del decreto de Reforma Agraria, que consideraba demasiado estatista.

De este modo, la reforma agraria estaba concebida como un paso muy importante en la estrategia de contrainsurgencia norteamericana en El Salvador.

Nixon había escrito que después de los bombardeos de 1972, "los norvietnamitas sabían que, militarmente, sus posibilidades de éxito eran casi nulas. Y como la economía de Vietnam del Sur seguía prosperando mucho más que la economía de Vietnam de Norte, la ideología comunista de Hanoi iba perdiendo más y más atractivo. Por ejemplo —agregó— el programa de Thieu, denominado 'la tierra para el que la cultiva' había reducido el sistema de aparcería al siete por ciento, desde un anterior sesenta por ciento en 1973, avance verdaderamente revolucionario, que desvirtuó la argumentación comunista, según la cual el gobierno de Vietnam del Sur estaba aliado con los ricos para oprimir al pueblo".

No pretendo discutir aquí las apreciaciones de Nixon, pero quiero destacar la importancia dada al programa agrario. En El Salvador, Morales Erlich decía que la reforma agraria de su país era la "más radical de América Latina" y pretendía también mostrar con eso que el gobierno ya no era representante de una estrecha oligarquía.

Nada de eso correspondía a la verdad y la reforma agraria siguió implementándose como un esfuerzo más por aislar a los insurgentes, pero cada vez más alejada de los objetivos de transformación social y productiva que la situación de El Salvador hace imprescindible.

En mayo del año pasado, cuando la Asamblea Constituyente quiso suspender la aplicación del decreto 207, la reacción norteamericana no se hizo esperar. La comisión de Relaciones Exteriores del Senado decidió de inmediato congelar la ayuda militar a El Salvador. "No habrá un centavo para El Salvador, si se detienen las reformas emprendidas", se escuchó decir en el Senado. Poco después, el gobierno salvadoreño emitía una aclaración limitando los alcances de la decisión de la constituyente y asegurando que la reforma agraria y el decreto 207, en particular, seguirían vigentes; pero el incidente reveló hasta dónde la medida tenía objetivos estratégicos en la lucha contra la guerrilla.

La otra medida para "sacar el pez del agua", de la que se empezó a hablar mucho más recientemente en El Salvador, es la creación de "aldeas estratégicas" para concentrar la población y

vigilarla estrechamente, impidiendo que pueda seguir en contacto con los insurgentes. Se pretende así cortar los suministros de la guerrilla, eliminar su base de apoyo entre la población, aislarla, y finalmente, liquidarla. El plan es otra copia de una idea similar que fracasó rotundamente en Vietnam.

Estados Unidos planeó construir 16 mil aldeas estratégicas en Vietnam del Sur, a principios de los años 60, pero la experiencia no era novedosa; había dado buenos resultados a los ingleses en Malasia, en la lucha contra los insurgentes. En esa etapa de la guerra, las aldeas estratégicas se transformaron en el principal objetivo militar de los norteamericanos.

Se trataba de transformar la guerra de guerrillas en una guerra regular, con frentes de batalla definidos precisamente por la existencia de esas aldeas. La concentración de la población permitía al gobierno controlarla, aislar a los guerrilleros, dificultar su movilización y suministro de alimentos.

En las zonas bajo control gubernamental el ejército simplemente agrupaba a la población en aldeas y la cercaba. En zonas de influencia de la guerrilla, lanzaban primero "operaciones limpieza", para irla concentrando en aldeas fortificadas; y, finalmente, en la zona controlada por la guerrilla, trataban de sacar a la población para instalarla luego en las aldeas ya creadas en otros sectores.

Los norteamericanos lograron construir 7.000 aldeas estratégicas en Vietnam, de las 16 mil planeadas. No obstante, en 1965, el proyecto había fracasado; quedaban solamente 600. Esa fue una de las razones para la invasión de las tropas norteamericanas, a partir de ese año.

El Salvador es un país agrícola, pero con características "semi-urbanas". La densidad de la población y la cercanía de los cantones con las grandes ciudades o las vías principales de comunicación hacen que no exista en el país grandes extensiones aisladas. La intensificación de la guerra ha ido afectando a esas pequeñas poblaciones del interior, obligando a los habitantes a abandonarlas paulatinamente y a buscar refugio en localidades mayores.

El ejército mismo considera enemigos a los campesinos que permanecen viviendo en los cantones en disputa y, con más razón, a los que están en territorios controlados por la guerrilla. Eso va provocando el éxodo: de los caseríos a las poblaciones cercanas.

Cuando la guerra llega ahí, a la ciudad más próxima; y luego, si se puede, a la capital. Ese proceso es también simultáneo en el tiempo; mientras los campesinos más pobres están abandonando los caseríos para dirigirse a la población más cercana, las personas de más recursos han abandonado ya esa población, para irse a otra, más segura y con más recursos.

Esas poblaciones van siendo fortificadas en un intento del ejército por mantenerlas bajo control, mientras abandonan extensas zonas rurales.

La aceleración de ese proceso, consecuencia del fortalecimiento de la guerrilla en los últimos dos años, ha obligado al ejército a tratar de detenerlo, so pena de verse estrangulado y cercado en poco tiempo en las grandes ciudades o de perder, inclusive, alguna capital departamental, como la de Morazán.

Dadas las características geográficas del país, la ocupación de zonas rurales permite a los insurgentes ejercer fuerte presión sobre las dos únicas carreteras que lo cruzan de este a oeste, y que lo comunican con Guatemala, por un lado, y con Honduras, por el otro. El corte de esas vías prácticamente paraliza el transporte centroamericano por carretera, obligando a un largo y caro desvío por Honduras.

Ante esta realidad, el ejército salvadoreño anunció, a principios de 1983, la intención de crear "aldeas estratégicas" en Usulután y San Vicente, dos departamentos enclavados en el centro del país, zonas productoras de gran importancia para la economía salvadoreña, ubicadas al este de la capital.

La idea es lanzar pimero una enorme "operación limpieza" en las zonas de influencia guerrillera en esos departamentos. En marzo de ese año, fuentes de la embajada norteamericana reconocieron la intención de crear aldeas estratégicas en esas zonas, donde hablaban de hacer regresar a sus lugares de origen a miles de campesinos que habían buscado refugio en lugares más seguros. En Usulután, por ejemplo, el FMLN ocupó en febrero de 1983 la importante localidad de Berlín, en plena zona cafetalera. Desde entonces, en las afueras de la ciudad, empezó a concentrarse una creciente población refugiada, que vive en condiciones muy precarias.

Se estima que en El Salvador hay entre 500 mil y un millón de desplazados a causa del conflicto bélico, según diversas fuentes;

el regreso de parte de esas personas y la normalización de la actividad productiva, principalmente en las zonas agrícolas de mayor importancia, es vital para el gobierno, donde la propuesta de crear aldeas estratégicas empieza a ganar adeptos.

La idea, en todo caso, parece difícilmente realizable en la actual situación militar del país, ya que el ejército ha venido perdiendo constantemente terreno e iniciativa en la guerra civil salvadoreña. Este podría ser, en todo caso, el penúltimo esfuerzo por aplicar en El Salvador los experimentos de Vietnam.

"Aquí, como en Vietnam, lo que vale no es el arma, es el hombre", me comentó, hace dos años, un camarógrafo alemán, veterano de esa guerra en el sudeste asiático. Mientras ese hombre siga apoyando a la guerrilla, como lo hace actualmente, a pesar de la campaña que trata de convencernos de lo contrario, no habrá salida satisfactoria para los norteamericanos, ni para el ejército salvadoreño.

NO ES LA PRIMERA VEZ

América Latina tiene, a veces, memoria corta. La actual política norteamericana en Centroamérica tiene diversos antecedentes, tres de ellos relativamente recientes y ocurridos en la región. Me refiero a la intervención en Guatemala, en junio de 1954; la invasión de Cuba, en 1961; y la de República Dominicana, en 1965. Cada caso tiene sus particularidades y, evidentemente, las relaciones regionales no son las mismas, principalmente después del fuerte golpe que representó para el sistema interamericano la posición adoptada por Estados Unidos durante la guerra de las Malvinas, en apoyo a Gran Bretaña.

Pero la revisión de cada caso —el de Guatemala, Cuba y República Dominicana— muestra una constante en la política estadounidense, que está presente también en esta nueva crisis centroamericana. En cada uno de ellos, la Casa Blanca mezcló acciones militares clandestinas con una intensa actividad diplomática, con el objetivo de derrocar gobiernos que no eran de su simpatía, violando normas del derecho internacional y los principios de autodeterminación y no intervención en los asuntos de otros estados.

En las intervenciones contra los gobiernos de Arbenz, en

Guatemala, y de Fidel Castro, en Cuba, los norteamericanos trataron de mantener en la clandestinidad todo el proceso de preparación militar de la agresión, pero los detalles son hoy bien conocidos. Guatemala y Cuba sufrieron también un intenso cerco diplomático, para lo cual los norteamericanos utilizaron principalmente los recursos que pone a su disposición la Organización de Estados Americanos (OEA). En el caso de República Dominicana, la invasión fue hecha con fuerzas regulares de Estados Unidos y, como en los casos anteriores, la OEA sirvió de instrumento diplomático para apoyar la intervención.

De los tres, ninguno tiene una prolongación que incida más directamente en la actual crisis centroamericana que el de Guatemala. El régimen militar impuesto por la invasión de 1954 aún perdura y desempeña una función activa en la política regional.

La revisión de los antecedentes de esa intervención muestra claramente que los tiempos no han cambiado tanto, en la percepción de la Casa Blanca. En cierto modo las situaciones se repiten con maniobras similares para lograr objetivos idénticos: el derrocamiento de un gobierno que no cuenta con las simpatías de Washington; en este caso, el de Nicaragua. La maniobra tiene una incidencia directa en la situación salvadoreña; ya expresé anteriormente mi impresión de que la guerra de El Salvador se libra actualmente en Nicaragua.

Por esa razón he decidido pasar revista a lo ocurrido en Centroamérica durante la agresión a Guatemala. Pero hay otra razón más que justifica esa decisión. Quizás como ningún otro, el caso de Guatemala está estudiado con minucia y agudeza extraordinarias por uno de sus protagonistas más destacados, el entonces canciller del gobierno de Arbenz, Guillermo Toriello. Seguirlo, mientras desmenuza las maniobras diplomáticas norteamericanas y los preparativos armados contra el gobierno guatemalteco es apasionante, pero, sobre todo, muy aleccionador. Adaptadas a las circunstancias actuales, esas maniobras vuelven a repetirse.

En enero de 1953 cambió la administración norteamericana: el general Dwight Eisenhower triunfó en las elecciones. "Una ráfaga de catástrofe corrió por toda América Latina. Los pueblos se estremecieron ante el temido ascenso del Partido Republicano, símbolo de la 'mala vecindad' expresada, para dolor de América, en múltiples atropellos e intervenciones en el pasado y sintetizada en la política del big stick y en la diplomacia del dólar de anteriores gobernantes republicanos".

Ese cambio fue la voz de alarma para el gobierno de Guatemala, enfrentado a la poderosa empresa bananera United Fruit (UFCO) desde junio de 1952, cuando promulgó una ley de reforma agraria. El ex abogado de la UFCO, John Foster Dulles, asumió la jefatura del Departamento de Estado, iniciándose la campaña contra Guatemala. En octubre de 1953, el entonces Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, John Moors Cabot, abrió el fuego, advirtiendo al gobierno guatemalteco que "ningún régimen que abiertamente juegue el juego comunista puede esperar de nosotros una cooperación positiva".

A partir de entonces, la campaña propagandística, las iniciativas diplomáticas y los preparativos armados se intensificaron, orientados a denunciar la supuesta "amenaza roja" que significaba el régimen reformista de Arbenz para las Américas.

Cada uno de esos aspectos mereció una atención cuidadosa, en un experimento cuyo éxito parece alentar al Departamento de Estado a tratar de repetir la receta guatemalteca en Centroamérica, 30 años después.

Las maniobras diplomáticas se iniciaron a fines de 1953, durante los preparativos para la Décima Conferencia Interamericana de la OEA, que se celebraría en marzo del año siguiente en Caracas.

Dulles encontró la "cuadratura del círculo", dice Toriello: "para que no se nos acuse de intervencionistas, digamos que hay una intervención extranjera en un país americano y que lo que nosotros vamos a hacer es ir en su socorro".

"Llamemos al odioso movimiento nacionalista y democrático de Guatemala intervención comunista (así, ambiguamente) y, entonces, parecerá que impulsados por la gran tradición democrática de Estados Unidos y para salvar la 'civilización cristiana', debemos liberarlos de esa agresión extranjera".

La maniobra, repetida hoy con majadería en el caso de El Salvador, apunta hacia Nicaragua, supuesta nación interventora, contra la cual se orientan las iniciativas diplomáticas y militares norteamericanas en la región.

En 1954, Estados Unidos propuso, a última hora, incluir en la agenda de la Conferencia de la OEA, el punto "Intervención del Comunismo Internacional en las Repúblicas Americanas".

El 29 de enero de ese año, a menos de cinco meses de que se produjera la intervención, Guatemala advirtió sobre los preparativos bélicos que se venían intensificando para invadir el país. El cuartel general de los agresores, que Toriello califica de "mercenarios", estaba en Nicaragua, entonces bajo la dictadura de los Somoza; luego se trasladarían a Honduras, cuyos gobiernos parecen trágicamente destinados a prestarse para las maniobras contra las naciones vecinas.

Dulles respondió de inmediato, diciendo que la denuncia de Guatemala era "un esfuerzo comunista para obstruir la labor de esa conferencia (de la OEA) y lesionar la solidaridad interamericana".

En marzo se inauguró la reunión de Caracas. Toriello dice que, en ese momento, ya los servicios de inteligencia de Guatemala sabían que la decisión del Departamento de Estado de derrocar al gobierno de Arbenz "era irrevocable", y que no sería revisada ni ante una "claudicación absoluta" frente a las demandas de la UFCO.

"Han aconsejado el boicot y la agresión económica contra Guatemala", dijo el canciller guatemalteco, en un discurso ante la Conferencia, el 5 de marzo. "Invocando de nuevo la sagrada palabra de la democracia y repitiendo el pretexto absurdo de que Guatemala es una 'cabeza de playa del comunismo en América', y que la pequeña república constituye una amenaza a la seguridad de todo un Continente, se atreven a cometer el último atentado, ya no contra Guatemala, solamente, sino contra el más sólido cimiento del panamericanismo, al propiciar una intervención abierta contra el gobierno guatemalteco".

En mayo de 1983, los medios más conservadores de Centroamérica pedían que no se garantizara la seguridad de Nicaragua, ni a cambio de que "saque sus manos de El Salvador". Supuestamente, esa era la razón que justificaba el apoyo de Reagan a los grupos contrarrevolucionarios de Nicaragua; pero la realidad es que la decisión estaba tomada: se trata de derrocar a los sandinistas y ya no hay tampoco medidas que puedan disuadirlos de esa intención. Los objetivos y los métodos son los mismos, lo único diferente es la situación y la época: el ejército sandinista no es el mismo que el de Arbenz, y la América Latina de hoy no es la misma de hace 30 años.

Toriello enderezó su argumentación ante la Conferencia de la OEA a exigir una definición precisa de lo que la propuesta norteamericana llamaba "comunismo internacional". "¿Qué es el comunismo internacional? ¿Es acaso una doctrina o una filosofía? ¿Es una teoría económica? ¿Será simplemente un partido político, o se pretende que es un instrumento al servicio de la Unión Soviética? La ambigüedad era parte de la estrategia de Dulles".

"Los términos 'comunismo internacional' habían sido empleados para condenar especialmente en América los movimientos nacionalistas y los anticolonialistas, las reivindicaciones sociales y antimonopolistas, la lucha por la liberación económica de los pueblos, las expropiaciones petroleras, la reforma agraria y hasta las más sencillas prácticas de democracia elemental, cuando así convenía hacerlo", recordó el diplomático.

Dulles respondió irónicamente, diciendo que era lamentable que las relaciones internacionales de una república latinoamericana estuvieran en manos de alguien tan ingenuo como para hacer preguntas de ese tipo, y la ambigüedad se mantuvo; era lo que Estados Unidos necesitaba para montar la maniobra contra Guatemala.

En octubre de 1982, la prensa norteamericana reprodujo una declaración del general Vernon Walters, ex subdirector de la CIA y actualmente embajador de los Estados Unidos para misiones especiales en América Latina. A Walters le preguntaron acerca de la veracidad de las acusaciones nicaragüenses sobre el apoyo de Washington a los grupos contrarrevolucionarios. El embajador respondió con cinismo: "déjelos que se preocupen. Nosotros hemos descubierto que esa constructiva ambigüedad es un arma política muy poderosa para la política exterior norteamericana".

Volvamos a nuestro tema. Los norteamericanos impusieron la aprobación de la Resolución 93, con el título de "Declaración de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención del Comunismo Internacional".

Toriello hace un extenso análisis de esa resolución que vino a cambiar el carácter de las disposiciones de seguridad colectiva regional, tal como habían sido aprobadas en Río de Janeiro, en 1947, y abría las puertas a una eventual interven-

ción colectiva en Guatemala.

La corta resolución declaraba que "el dominio o control de las instituciones políticas de cualquier estado americano por parte del movimiento internacional comunista, que tenga por resultado la extensión hasta el Continente americano del sistema político de una potencia extracontinental, constituiría una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos que pondría en peligro la paz de América y exigiría una Reunión de Consulta para considerar la adopción de las medidas procedentes de acuerdo con los tratados existentes". La maniobra diplomática estaba montada.

Simultáneamente, proseguían los preparativos para la agresión armada. El gobierno de Honduras, cuyo territorio sería la base de operaciones de las fuerzas mercenarias que comandaría el coronel Castillo Armas, canceló el exequatur de tres cónsules guatemaltecos, el mes de mayo siguiente, bajo el pretexto de que "su ideología viola las instituciones del país". Eran los cónsules de lugares claves para la puesta a punto de la invasión: Copán, futuro cuartel general de los agresores; Puerto Cortés, de donde partiría un ataque por mar; y San Pedro Sula, centro de comunicaciones entre las dos ciudades.

El 17 de mayo, recordó Toriello, estalla un escándalo. Dulles denuncia "un grave desarrollo" de la situación; había llegado un cargamento de armas para Guatemala, proveniente de la "órbita soviética".

Estábamos a sólo un mes de la invasión de las fuerzas mercenarias de Castillo Armas. Se trataba del barco M/N Alfhem, el único que los norteamericanos dejaron pasar en esos días hasta Guatemala con armamentos, precisamente con el objetivo de armar un escándalo. El Departamento de Estado, que conocía perfectamente la llegada de este embarque de armas, tal como conocía todos los demás que estuvo interviniendo en diversas partes del mundo, preparó de inmediato un informe confidencial para los gobiernos latinoamericanos. El fin era apoyar la solicitud de una Reunión de Consulta con el fin de patrocinar una intervención colectiva contra Guatemala; su título era "Penetración del Movimiento Comunista Internacional en las Instituciones Políticas de Guatemala; Amenaza a la Paz y a la Seguridad de América y a la Soberanía e Independencia Política de Guatemala".

El gobierno guatemalteco emitió un comunicado, el 21 de mayo, precisando la situación: ante las amenazas de invasión, hizo infructuosas gestiones para comprar armas en Estados Unidos, para mantener al ejército en condiciones adecuadas, pero los norteamericanos rechazaron inclusive la venta de municiones a un Club de Caza, Tiro y Pesca. Las gestiones guatemaltecas para conseguir armas en los países de Europa Occidental fueron también bloqueadas por los norteamericanos, mientras seguían proporcionando armamentos a Nicaragua y Honduras, así como al grupo de mercenarios de Castillo Armas.

Guatemala denunció entonces que "la política de cerco, de boicot económico y militar y la propaganda sistemática de difamación contra un Estado son también actos de agresión, tan graves o más que la agresión armada".

Estados Unidos insistió, sin embargo, en su campaña y declaró que el despacho de armas de la órbita soviética a Guatemala "encaja en el sistema de penetración subversiva", y que sólo pudo hacerse "con la autorización de los dirigentes soviéticos", aún sabiendo perfectamente que todo esto era falso. En realidad, Guatemala había comprado esas armas en el mercado internacional, imponiendo a los vendedores la condición de que el pago se haría contra entrega en puerto guatemalteco, visto el boicot efectivo impuesto por los norteamericanos a todo suministro de material bélico al país.

La argumentación norteamericana —como la utilizada hoy contra Nicaragua—, señalaba que ese despacho de armas "puso a disposición de los agentes del comunismo internacional en Guatemala los medios para dominar el país por la fuerza", para agregar que esas armas hacían de Guatemala "una posible fuente de abastecimiento" para los "elementos subversivos de los países vecinos", que aumentaba "la tensión y la inestabilidad" en América Central. Es sorprendente el tipo de argumentación esgrimida ya en aquella época, y que hoy ha sido desempolvada, casi literalmente, para defender la nueva, aunque vieja y agresiva política norteamericana en la región. Nada de lo dicho entonces contra el gobierno de Arbenz era cierto, pero sirvió al propósito deliberado de desestabilizarlo, preparando, en el terreno diplomático y de la propaganda, la próxima invasión. La acusación dejaba también abierta la puerta para la convocatoria del Organo de Con-

sulta del TIAR, propiciando una intervención colectiva si las fuerzas mercenarias no fueran suficientes para derrocar a Arbenz.

A fines de mayo, Estados Unidos celebró pactos de ayuda militar con Honduras y con la Nicaragua de Somoza, cuyo gobierno, inclusive, rompió relaciones con Guatemala, el 21 de ese mismo mes. Faltaban sólo tres semanas para el inicio de la agresión armada y a Somoza se le había asignado la tarea de pedir la convocatoria del Organo de Consulta.

A esta altura, Castillo Armas entrenaba ya a sus fuerzas en el aeropuerto hondureño de Toncontín a la vista del público y fotografiado por corresponsales norteamericanos. Pero faltaba aún el último round de las gestiones diplomáticas, librado en las salas de las Naciones Unidas y la OEA, mientras se desarrollaba la agresión.

El 17 de junio de 1954, las fuerzas de Castillo Armas, pertrechadas y preparadas por Estados Unidos, actuando desde Honduras, atacaban por tierra y aire el territorio guatemalteco.

Al día siguiente, Guatemala planteó el caso de agresión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presidido, ese mes, por Cabot Lodge, el embajador norteamericano. Estados Unidos, apoyado por Colombia y Brasil, pidió de inmediato el traslado del asunto a la OEA. La maniobra era clara, dice Toriello; el único organismo de la OEA capacitado para considerar el caso de agresión, denunciado por Guatemala, era el Consejo, con base en las disposiciones del TIAR. Pero Guatemala no era miembro del TIAR y, por lo tanto, no podía invocar sus disposiciones, quedando así indefensa. Pero, además, en la OEA, Estados Unidos estaba seguro de imponer sus criterios sin gran oposición.

Para evitar cualquier iniciativa del Consejo de Seguridad que pudiera complicar sus planes, Estados Unidos instruyó a Honduras para que solicitara a la Comisión Interamericana de Paz, un organismo adscrito a la OEA, que investigara las acusaciones de Guatemala en su contra, transformando así el caso de "agresión" en una simple "controversia" entre países amigos, como recordó Toriello. Eso daba nuevos argumentos a Cabot Lodge para argüir en el Consejo de Seguridad que ya el asunto estaba en manos del organismo regional y que, por lo tanto, las Naciones Unidas no debían intervenir.

Y así se hizo. Cuando el debate se reinició en la ONU, el embajador norteamericano se refirió a la controversia local" y calificó las denuncias guatemaltecas de agresión como "maniobras soviéticas". Finalmente, por cinco votos a cuatro, y dos abstenciones, el Consejo de Seguridad se negó a oír al representante guatemalteco, cerrando la única puerta para una efectiva solución diplomática a la agresión. Esto ocurrió el 25 de junio, una semana después de iniciada la invasión.

Estados Unidos había invertido seis millones de dólares en la preparación de las fuerzas mercenarias de Castillo Armas. Para preparar las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses, la CIA ya gastó más de 30 millones de dólares, según fuentes norteamericanas, lo que, aún considerando la devaluación de la moneda, indica la magnitud del esfuerzo.

El plan era invadir Guatemala desde Honduras, con la seguridad de que el pueblo se alzaría contra el régimen de Arbenz y se plegaría a las fuerzas mercenarias, a medida en que éstas avanzaran hacia la capital. Pero había transcurrido una semana y la agresión no prosperaba. Ante esa realidad, Estados Unidos decidió convocar la Reunión de Consulta de la OEA. El Consejo del organismo recibió la solicitud el 26 y decidió hacer la convocatoria para el 7 de julio, en Río de Janeiro. Quedó claro entonces que si la invasión se estancaba, si la "rebelión interna" no se producía, la agresión se hubiera transformado en intervención colectiva.

Pero los norteamericanos y los invasores contaban aún con una carta en la manga: la traición militar (el recurso fue usado en Chile, en 1973, para derrocar al gobierno de Salvador Allende).

Arbenz, obligado a renunciar, entregó el poder a su ministro de Defensa, en quien confiaba, el coronel Carlos Enrique Díaz, bajo la promesa de respetar la vida de los ciudadanos y continuar la lucha contra los invasores.

Pero ya las cartas estaban echadas. Díaz fue traicionado, a su vez, por el coronel Elfego Monzón, al servicio del embajador norteamericano, Peurifoy, en cuyas oficinas se realizaban las negociaciones para los cambios de gobierno. Monzón viaja a San Salvador el 30 de junio y se entrevista con Castillo Armas para llegar a un acuerdo. Pero ante las imposiciones que el militar insurrecto le quiere imponer, Monzón decide regresar a Guatemala.

Enterado de lo que ocurría, Peurifoy viaja personalmente a El Salvador para imponer su solución. El 2 de julio surge un entendimiento y el día siguiente Castillo Armas, "el fracasado y ridículo yanquimalteco rescatado por Peurifoy", como lo llama Toriello, entra triunfalmente en la capital guatemalteca. Terminaba con éxito la agresión.

He ahí una realidad que no ha muerto y que es el origen de gran parte de las tragedias de América Latina, y de Centroamérica, en particular. Guatemala se transformó, desde entonces en factor decisivo para la desestabilización de toda el área.

El día en que terminaba estas líneas, la historia parecía retomar su curso. El embajador itinerante de Estados Unidos para América Central, el ex senador Richard Stone, designado personalmente por el presidente Ronald Reagan, decía ante el Senado de su país que probablemente habrá que invocar al TIAR para resolver la crisis centroamericana. "Va a ser muy difícil interponer físicamente el tipo de muro que se necesitaría para detener el flujo de armas ofensivas" en el área, dijo Stone. El ex senador se refería, evidentemente, a la situación salvadoreña y a la supuesta participación de Nicaragua en el suministro de armas.

La misión de Stone será llevar a cabo el plan trazado para derrotar al FMLN, en El Salvador, que incluye el derrocamiento de los sandinistas en Nicaragua.

De extrema derecha, como todos los responsables de la administración Reagan y de su política exterior, Stone se permitió decir ante el Senado que "ya es demasiado tarde para los sandinistas, pero no para Nicaragua, donde los sandinistas podrían participar en una sociedad pluralista como una fuerza política más". El nuevo Peurifoy ha anunciado claramente sus intenciones.

Centroamérica no tendrá paz. Si Estados Unidos no logra derrocar a los sandinistas, la campaña de hostigamiento político, militar y diplomático seguirá, como ha seguido durante casi 25 años contra Cuba. Si lo logra, la paz de los cementerios se impondrá en Centroamérica, pero no morirán aquí menos de 200 mil personas, antes de que la lucha recomience. La otra alternativa es que se imponga la cordura y los norteamericanos acepten convivir con sus vecinos y respetar realmente su derecho a la autodeterminación.

Un llamado en ese sentido hacía Toriello, en el penúltimo

capítulo de su libro, en unos párrafos encabezados por el subtítulo "Por la senda de la razón".

Ahí, el ex canciller guatemalteco se lamenta de que el Departamento de Estado no haya decidido apoyar "las transformaciones sociales que efectuaba en Guatemala un movimiento democrático y nacionalista", en vez "de hacer causa común, para el restablecimiento de sus injustos privilegios, con los poderosos intereses monopolistas que operaban en Guatemala".

"Si la política del Departamento de Estado hubiera seguido esos lineamientos razonables, habría ganado un ascendiente incalculable en términos de buena voluntad, simpatía y prestigio en la conciencia popular guatemalteca y, por la misma circunstancia, hubiera eliminado la peligrosidad de una situación antagónica que le inquietaba".

Pero nada de eso ocurrió y Estados Unidos insiste nuevamente hoy en sus amenazas militares.

Esa situación fue severamente condenada por el FMLN y el FDR, en un comunicado fechado en San Salvador, el 18 de abril de 1983. Dedicado a la "situación de El Salvador y Centroamérica", el documento acusa al presidente Reagan de pretender ocultar su intervención militar en el área "con instrumentos pretendidamente democráticos", mientras Washington y Tegucigalpa se niegan a conversar con Nicaragua, proponiendo una "solución regional que, en el fondo, es la oposición a resolver ese conflicto".

El FMLN y el FDR denuncian también la intención de Estados Unidos de instrumentalizar a la OEA, "tratando de convertir al pueblo de Nicaragua y a su gobierno, de agredidos que realmente son, en agresor".

No habrá paz en El Salvador, prosigue el comunicado, si la actual administración norteamericana insiste en su intervención militar y política en el país. Tampoco habrá paz, concluyen si Estados Unidos insiste en soluciones que excluyan a nuestros frentes o ignoren el carácter nacional del conflicto salvadoreño, y no toman en cuenta los factores económicos, militares, sociales y políticos que han dado origen a la lucha.

Capítulo IV

UN PAIS EN PEDAZOS

Berlín no es una gran ciudad. En realidad, hasta el 31 de enero de 1983 no había estado probablemente nunca en las páginas de la prensa internacional. Pero ingresó al mundo de las noticias por el camino más corto: el de los morterazos, de la metralla, del bombardeo y de la lucha. Ese día, la ciudad cayó en manos de la guerrilla.

No estamos hablando, evidentemente, de la capital de Alemania Democrática. Berlín es una ciudad enclavada en el corazón económico de El Salvador, a unos 110 km al este de la capital, en una zona ligeramente montañosa, productora de café. La ocupación de la ciudad por las fuerzas del FMLN provocó conmoción; era la primera vez que una localidad de su importancia, con unos 50 mil habitantes, caía en manos de los insurgentes. No se trataba ya de un pequeño caserío en zonas marginales, así que, en ese momento, la guerra tomó una nueva dimensión en El Salvador.

Llegué a Berlín en marzo, 45 días después de la ocupación, para ver las consecuencias de la lucha, evaluar la situación política,

sentir cómo la presencia guerrillera afectó la vida de la ciudad y conocer los esfuerzos de reconstrucción.

En Berlín me quedó en evidencia, más que nunca, los efectos de la guerra sobre la economía del país. No los efectos que se pueden vislumbrar en las cifras, o en el análisis de los economistas. En Berlín se podía ver cómo esa situación afectaba la vida de la gente, pero también cómo la lucha iba moliendo, triturando, los engranajes del aparato económico, en un proceso que, de proseguir al ritmo en que iba, llevará al país, inexorablemente, a un colapso del cual ni las inyecciones de capital norteamericano podrán salvar.

En Berlín tuve una idea exacta de los jirones en que estaba quedando el país. Era como si la actividad guerrillera —intensa en la zona desde hacía varios meses, y que culminó con la toma de la ciudad— hubiera hecho saltar del aparato económico salvadoreño la rueda que correspondía a Berlín.

La región es productora de café, el principal producto de exportación salvadoreño. Pero este año "la cosecha ha sido muy mala", me dijo, desolado, el alcalde de Berlín, Santiago Yazbek. No se trata sólo de una cosecha fracasada; la crisis es más profunda.

El pequeño propietario de una finca de café en las afueras de la ciudad relataba, resignado, su situación. Desde hace tres años no puede ir a su propiedad, a unos 10 km de Berlín. "Tenía ahí una casa, que se la llevaron, hasta los ladrillos". La plantación, por supuesto, está abandonada, como casi todos los cafetales de la zona que, ante la falta de atención, van siendo presa de la roya.

De este modo, la ciudad va dejando de integrar el engranaje productivo del país.

En la época de la cosecha, de noviembre a enero, principalmente, circulaba mucho dinero en la zona. Ahora, el comercio se va a otras ciudades. En marzo, durante las fiestas patronales, el gremio de los transportistas organizó un pequeño juego para los niños, en la plaza del lugar. Unos cincuenta, quizás, se arremolinaban alrededor del pequeño camión, donde repartían cuadernos y lápices. Los regalos luego terminaron, mucho antes de alcanzar para todos, y el alcalde se lamentaba, desolado: "¡cuándo se había visto algo así aquí! Ya no hay nada, ni plata para comprar, de modo que el comercio languidece en Berlín.

Los que tienen plata se han ido a otra parte, a alguna ciudad más grande. Pero Berlín no se ha despoblado; aquí han llegado miles de refugiados que huyen de la situación en el campo.

Los campamentos que empiezan a rodear la ciudad albergaban a más de 300 familias, acomodadas en ranchos miserables a un lado y otro de los caminos que conducen al lugar. Pero otros miles se han albergado en casas de familiares, de amigos, o de alguien dispuesto a darles alojamiento.

Durante la lucha por recuperar la ciudad la aviación gubernamental bombardeó el cuartel, a media cuadra de la plaza, destruyendo unas cinco cuadras por efecto de las bombas y de un incendio que se propagó rápidamente.

El alcalde Santiago Yazbek vivía exactamente en una de las esquinas de la plaza. Después de limpiar los escombros a que quedó reducida su casa levantó dos piezas improvisadas, de madera y plástico, con material donado por los norteamericanos. Pero allí no podía vivir y seguía en casa de un hermano.

Hay una línea de crédito para la reconstrucción, en la que está previsto invertir algo más de un millón de dólares, pero Yazbek señaló con realismo que no está en condiciones de pagar ni lo que debe, mucho menos de endeudarse para reconstruir su casa. Berlín ha saltado también del engranaje financiero nacional. Aquí nadie puede pagar sus deudas.

¿De qué vive entonces esta agobiada población que ya no produce, que no compra, no vende, ni paga sus deudas?

Un Comité de Emergencia funcionaba en la alcaldía para hacer frente a la dramática situación de la ciudad. En una gran bodega, sacos de maíz, frijoles, arroz, azúcar, aceite, van siendo inventariados y distribuidos entre la población afectada. La Agencia Norteamericana para el Desarrollo (AID) estaba invirtiendo 1,5 millones de dólares en la ciudad, en un esfuerzo por crear fuentes de trabajo. Uno de los proyectos estaba destinado a la reconstrucción de la ciudad, en el que se debían emplear mil personas. Otro proyecto contemplaba, además de la limpieza de escombros, la reposición de tuberías, del adoquinado de las calles y la exhumación de cadáveres, enterrados en diversas partes de la ciudad, para darles sepultura en el cementerio.

Pero mientras persista la guerra la actividad económica no podrá reactivarse. Esa paulatina parálisis económica era soporta-

ble para el gobierno mientras la situación se circunscribió a las zonas marginales de Chalatenango o Morazán. A medida en que se extiende por el rico centro cafetalero y algodonero, se va haciendo más y más insoportable. Las cifras, como luego veremos, así lo revelan. Pero hay que destacar también cómo la vida diaria de la gente va cambiando, a veces brutal, a veces imperceptiblemente.

"Lo peor de todo es que ya no quedan patrones y no hay dónde ganar un jornal", se lamentaban los peones de Berlín. La frase encierra la profundidad de los cambios ocurridos. Berlín no es ya parte activa del sistema económico del país, al cual se vincula ahora por medio de la ayuda oficial. Pero no había nacido tampoco ahí un sistema nuevo. La ciudad estaba en plena crisis, producto de la destrucción del orden hasta entonces vigente, sin que se vislumbrara aún algo nuevo. La reconstrucción sólo será posible cuando cese la lucha, y la forma que adopte va depender, evidentemente, del resultado que ésta arroje.

GUERRA Y REFORMAS: LA RECETA GUBERNAMENTAL

"No queremos ver a la América Central dominada por los marxistas-leninistas, sino que queremos que se realicen reformas allí", clamó el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Enders, ante la Subcomisión de Asuntos Interamericanos del Senado, en febrero de 1983.

Enders habló en defensa de la certificación que, cada seis meses, la administración norteamericana debe presentar al Congreso para continuar con la ayuda militar a ese país.

La alternativa presentada por Enders es reforma o "marxismo-leninismo". Pero, en realidad, la política norteamericana en El Salvador tiene un solo objetivo: liquidar la insurrección.

La guerra en El Salvador es una guerra popular, y su principal ingrediente es el político. De modo que, para triunfar, es necesario eliminar las bases del descontento que son el soporte de los guerrilleros. De ahí la política de reformas que comprende, principalmente, la reforma agraria, además de la nacionalización bancaria y del comercio exterior.

La política reformista impuesta después del golpe de 1979

fue concebida, desde un principio, como una respuesta a la creciente agitación popular que se iba adueñando del país desde el fraude electoral que llevó al poder al general Romero, en 1977. Y fue el triunfo sandinista en Nicaragua, en julio del 79, que sirvió de catalizador para que éstas se concretaran meses después del derrocamiento de Romero.

Son reformas concebidas como armas de la guerra, pero que difícilmente se han podido implementar. Las nacionalizaciones de la banca y del comercio exterior, por ejemplo, debían asestar un golpe decisivo al poder de la oligarquía. Sin embargo, los mismos sectores que antes se beneficiaban del crédito bancario, lo siguen haciendo, mientras los grupos exportadores de café y algodón han encontrado también la fórmula para mantener sus beneficios.

La reforma agraria afectó a unos 240 terratenientes y benefició a unas 30 mil familias que antes no tenían tierra. Pero no ha habido un cambio en las formas de producción, ni en el nivel de vida campesino, según los mismos estudios gubernamentales.

La guerra impide cualquier cambio efectivo en las estructuras de poder en el país, uno de los objetivos declarados de las reformas; y anula también toda posibilidad de éxito económico, como lo señalan los resultados de estos dos años, aunque sea temprano para una evaluación global.

La lucha entre guerra y reformas fue particularmente aguda durante la primera Junta de Gobierno, entre octubre y diciembre de 1979. La solución del problema dejó en evidencia que la guerra estaba por encima de la reforma, como lo muestra el análisis de ese período.

A fines de diciembre de 1979, dos meses y medio después del golpe militar, la primera Junta de Gobierno hizo crisis. Un documento difundido por los que abandonaron el gobierno en aquella oportunidad, entre ellos Guillermo Ungo, quien luego sería presidente del FDR, denunció el copamiento del gobierno por los militares vinculados al derrocado régimen anterior.

"Durante los ochenta días de gestión de la Junta de Gobierno, los militares de alta graduación reconstruyeron el mando militar, asumiendo las posiciones jerárquicas estratégicas dentro de la Fuerza Armada; con esta acción neutralizaron políticamente a los jóvenes oficiales". A pesar del lenguaje algo rebuscado del

documento, se dejaba ver con claridad que los militares no comprometidos con los esquemas represivos habían sido derrotados. Esa derrota fue tan categórica que, tres años después, hasta los norteamericanos reclamaban de la violencia institucionalizada que dificultaba tremendamente obtener el apoyo del Congreso para las políticas de Reagan en El Salvador.

Lo denunciado entonces fue precisamente el esquema de represión que, ya en esa fecha, se impuso a los sectores más reformistas del golpe de octubre, y que obligó el alejamiento de los sectores de izquierda del gobierno. Se firmó entonces un pacto entre el PDC y las fuerzas armadas, reflejado en la constitución de un nuevo gobierno; cada sector tenía dos representantes en la Junta, a los que se agregó el doctor Ramón Avalos Navarrete, un "independiente" que no representaba ninguna fuerza política significativa.

En diciembre de 1979, el número de víctimas de la violencia militar en el campo era tadavía relativamente reducido, comparado con las dimensiones que alcanzaría luego: no había llegado aún al millar. Pero los aparatos represivos seguían intactos; los reclamos para investigar las desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos eran desoídos; y había ya en los altos mandos resistencias a la realización de verdaderas reformas.

La segunda Junta de Gobierno fue la encargada de aplicar, de manera decidida, la peligrosa mezcla de reformas y represión.

Si los muertos y desaparecidos habían alcanzado a 449 personas entre octubre y diciembre de 1979, durante 1980 esa cifra se multiplicó no sólo por cuatro sino por veinte, habiendo perdido la vida o desaparecido 8.024 personas, según cifras del Socorro Jurídico del Arzobispado.

Fue la segunda Junta la que decretó el Estado de Sitio, la militarización de los servicios públicos de importancia, la toma militar de la Universidad, y la que promulgó el Decreto 507, que faculta al ejército a detener por tiempo indefinido a cualquier persona.

El 23 de febrero fue asesinado en su casa, en condiciones especialmente dramáticas, el Fiscal General de la República, Mario Zamora, destacado militante demócrata cristiano y hermano de otro ex líder del PDC, Rubén Zamora. Diez días después renunció a la Junta Héctor Dada, quien luego dejaría el PDC para

fundar el Partido Popular Social Cristiano. Dada sería reemplazado en el cargo por Napoleón Duarte, que había regresado de su exilio en Caracas para asumir el poder. La violencia no amainó; al contrario, el 24 de marzo, el asesinato brutal de Monseñor Oscar Arnulfo Romero conmovió al mundo; el crimen fue condenado inclusive por el gobierno salvadoreño, pero las investigaciones no condujeron nunca a los criminales. Una semana después, durante el entierro de Monseñor Romero, las fuerzas militares y de seguridad dispararon sobre la multitud, dejando docenas de muertos sobre las calles del centro de San Salvador.

Esa arbitraria violencia gubernamental quedó documentada en las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de la Comisión Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, desde 1978, no cesaron de censurar severamente al gobierno salvadoreño.

En noviembre del mismo año grupos armados, con apoyo militar, secuestraron y asesinaron a los seis principales dirigentes del FDR, poniendo fin a cualquier posibilidad de existencia de una oposición legal en el país. Recuerdo bien ese secuestro, ocurrido en el externado San José, de la capital salvadoreña porque, en el mismo momento en que ocurría, recibimos una llamada en la capital costarricense de un testigo presencial que nos describió por teléfono lo que estaba ocurriendo en San Salvador. Mientras escuchábamos angustiados el relato, sabíamos perfectamente que era la última vez que tendríamos noticias de los seis dirigentes opositores con vida. Los asesinados fueron el presidente del FDR, Enrique Alvarez Córdoba, miembro de una de las familias más tradicionales del país; el líder del Bloque Popular Revolucionario (BPR), Juan Chacón, Manuel Franco, Humberto Mendoza y Enrique Barrera, además del dirigente sindical y periodista, Rosales Hernández. Por supuesto, los culpables nunca aparecieron y, desde entonces, cualquier llamado para la participación electoral de la izquierda quedó sepultado por la sangre de los seis dirigentes del FDR.

Los paramilitares entraron al lugar donde se realizaba una reunión opositora pública, sacaron a los dirigentes amarrados por los dedos pulgares, como acostumbran hacer, y los subieron a una camioneta; sus cuerpos aparecieron al día siguiente, torturados y acribillados.

El relato del secuestro fue interrumpido a los pocos minutos: "Vienen por aquí, tengo que colgar". La noticia dio rápida vuelta al mundo y, desde el mismo San Salvador llamaban para preguntar de dónde habíamos sacado la información.

Afuera del externado, mientras los paramilitares secuestraban a los dirigentes, tropas uniformadas garantizaban su impunidad.

En diciembre culminaría la ola represiva desatada en 1980. Tres monjas de la orden Maryknoll, y una asistente social, todas norteamericanas, fueron secuestradas, violadas y asesinadas por cinco miembros de la Guardia Nacional cuando se dirigían del aeropuerto a la capital, distante unos 40 kilómetros. Hasta hoy los culpables, detenidos y perfectamente identificados, no han podido ser llevados a juicio. El caso se ha transformado en uno de los principales escollos para que Reagan pueda llevar a cabo su política en El Salvador sin problemas en el Congreso, donde permanentemente hay voces exigiendo una condena judicial para los responsables de esos crímenes.

LA NACIONALIZACION DEL COMERCIO EXTERIOR

La ola represiva que caracterizó a la Segunda Junta de Gobierno, se conjugó con las reformas, promulgadas en los primeros días de marzo de 1980.

Esas transformaciones habían sido anunciadas por la Democracia Cristiana y la Fuerza Armada cuando conformaron su gobierno, el 9 de enero. En un documento divulgado entonces, revelaron su intención de extender la nacionalización del comercio exterior del café, al algodón, al azúcar y a los productos del mar; de "implantar en forma acelerada" la reforma agraria y nacionalizar la banca.

La nacionalización del comercio exterior es, de las tres medidas reformistas, la menos analizada y posiblemente la que menos resultados ha dado en el sentido de cambiar las estructuras previas a su promulgación.

La primera iniciativa en este sector fue tomada el 2 de enero de 1980, cuando la Junta de Gobierno creó el Instituto Nacional de Café, organismo al que se otorgó la facultad exclusiva de exportar este producto, principal fuente de divisas del país.

A la segunda Junta le correspondió crear el Inazucar, que

debería controlar las ventas de azúcar al exterior.

La nacionalización del comercio exterior del café, lejos de afectar los intereses de los grupos exportadores, les abrió nuevas posibilidades, según estudios de la Universidad Centroamericana.

El decreto mediante el cual se creó el INCAFE, que vino a sustituir a los organismos estatales que hasta entonces promovían la comercialización privada de este producto, fue publicado en una edición del Diario Oficial sin número, "como si se pretendiese evitar el conocimiento público" de la medida, recordó uno de esos estudios.

La nacionalización del comercio exterior del café tocaba los intereses de los sectores económicos más poderosos del país y despertaba, por lo tanto, resistencias muy severas.

Los difíciles debates sobre esa disposición, adoptada el 20 de diciembre, quedaron en evidencia al constatarse que sólo fue publicada el 2 de enero de 1980, aún considerando las fiestas de fin de año. Ya en esos días los sectores civiles de la Junta de Gobierno sentían la presión de los militares partidarios del régimen anterior, que lograban recuperar posiciones.

Cuando aún no existía INCAFE, los grandes beneficiadores del grano dictaban la política de precios y controlaban, de hecho, los mecanismos de exportación. Esto generaba fuga de divisas mediante procedimientos fraudulentos, como subfacturaciones, pesos falsos o mezcla en la calidad del café, así como a través de la política de exportaciones propiamente dicha.

El decreto de creación del INCAFE recordaba, en sus considerandos, que "la falta de bases democráticas en el país es una consecuencia de la concentración del poder económico en pocas manos". Eso permitía "la toma de decisiones de gran trascendencia en favor de minorías poderosas, como sucede de manera especialmente pronunciada en relación con la exportación y la comercialización externa del café, que es el principal producto de la economía nacional".

A partir de la fecha de su creación, el Instituto se transformó en el único organismo autorizado para exportar el café salvadoreño o comercializarlo en el exterior.

Un primer diagnóstico sobre los resultados de la nacionalización del comercio exterior del café, hecho a fines de 1981, señaló que "la fuga de divisas originada por y en beneficio de los

antiguos exportadores ha terminado gracias a la nacionalización", pero la medida no favoreció directamente al productor, que estaba recibiendo un porcentaje menor por cada saco exportado que antes de la nacionalización.

INCAFE ha aumentado también los ingresos de los beneficiadores que siguen siendo las mismas grandes empresas de antes. Estas empresas "parecen estar intentando ganar en el beneficio lo que antes obtenían de esa misma actividad, unida a la exportación".

Un estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas en la revista de la Universidad Centroamericana en mayo-junio de 1983, revela que "las ocho empresas que antiguamente controlaban el 51,47 por ciento del beneficiado, en la cosecha 81/82 procesaron 6,8 millones de quintales, lo que representa el 62,4 por ciento del total".

Los beneficiadores han logrado también que la totalidad de sus operaciones sean financiadas con recursos de INCAFE y que los costos financieros de esas operaciones "sean íntegramente trasladados a los productores".

INCAFE ha decidido además que el 73 por ciento de la cosecha sea entregada a los beneficiadores privados, lo que obliga a mantener ociosa la capacidad de los beneficios del propio INCAFE y de las cooperativas de reforma agraria.

El mismo día 20 de diciembre la Junta de Gobierno promulgó el decreto de creación del Ministerio de Comercio Exterior. Este, contrariamente al anterior, fue publicado en un Diario Oficial numerado, creando un organismo encargado de "generar una nueva política de comercio exterior".

Junto con ese ministerio la Junta de Gobierno creó el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), "aunque la impresión general es que, por razones de penuria fiscal, desvertebración económica y otros factores, el proceso de control de las ventas al exterior quedó incompleto y en suspenso".

LA BANCA NACIONALIZADA

La nacionalización del sistema financiero fue la última de las tres reformas promulgadas y vino a completar las transformaciones llevadas a cabo por la Segunda Junta de Gobierno.

El decreto de nacionalización, del 7 de marzo de 1980, destacaba que el capital propio de los bancos e instituciones financieras "representa un porcentaje mínimo en relación a los recursos ajenos" que captan, lo que justifica un control por parte del estado de esos organismos.

En sus considerandos el decreto señalaba también la existencia de una elevada concentración del crédito en pocas manos, y la necesidad de un cambio en la política financiera del país.

Como consecuencia, las acciones de los bancos comerciales, de las financieras y de las asociaciones de ahorro y préstamo fueron expropiadas. Los bancos extranjeros podían seguir operando, pero quedaban prohibidos de captar depósitos.

A pesar de los propósitos anunciados, a dos años de la nacionalización los primeros balances de la medida indican que el crédito se sigue orientando a las actividades tradicionales de exportación, mucho más que a la producción de granos básicos. Cifras del Banco Central indican que, en 1981, los productos de exportación absorbieron, al igual que en 1978, casi el 20 por ciento de la cartera total de préstamos; mientras la producción de granos obtuvo menos del 3 por ciento. Los productores de café, algodón y caña recibieron, en 1978, 511 millones de colones, además de otros 82 millones para refinanciar sus deudas. Esas cifras eran muy superiores a los 20 millones de colones destinados a los productores de maíz, frijol y arroz, y a los 7,5 millones para el refinanciamiento de sus deudas. En 1981, casi dos años después de la nacionalización, la situación permanecía prácticamente igual.

Del mismo modo, el crédito sigue altamente concentrado, con el agravante de que los plazos otorgados a los propietarios se ha reducido considerablemente, a un promedio de más o menos seis meses.

Se estima también que la morosidad aumentó grandemente, pasando de 500 millones de colones en 1979 a 700 millones en 1980 y a 800 millones al año siguiente. El aumento entre 1979 y 1980 indica claramente el agravamiento de la situación económica; el menor ritmo de aumento de la morosidad entre 1980 y 1981 podría indicar la disminución de la capacidad de solicitud de crédito de los sectores económicamente más débiles y de mayores exigencias de parte de las empresas finan-

cieras para otorgar esos recursos.

El único indicador de cambios drásticos en los patrones de comportamiento de la banca nacionalizada es el de los préstamos al sector público. En 1979, último año antes de la nacionalización bancaria, el sector privado obtuvo casi el 70 por ciento del total del crédito; esa cifra descendió a menos de 48 por ciento, en 1982. Como contrapartida, el crédito al gobierno central aumentó del 4 a casi 31 por ciento, en el mismo período; mientras otras instituciones oficiales veían disminuir su participación, del 27 al 22 por ciento.

Pero aún sectores partidarios de una mayor participación del estado en el crédito criticaron el hecho de que más del 30 por ciento de los préstamos al sector público no estaban destinados a la inversión o a actividades productivas, sino a cubrir insuficiencias de caja o a pagar salarios y suministros.

Por otra parte, se denunció irregularidades en el propio proceso de nacionalización de las acciones de los bancos y otras instituciones financieras. Algunas de ellas fueron pagadas a sus propietarios por un monto hasta ocho veces mayor que su valor nominal, en algunos casos superior inclusive a lo sugerido por la misma comisión evaluadora nombrada por el gobierno.

A pesar de sus insuficiencias para transformar de manera decisiva la situación política y económica del país, las reformas afectaron los intereses de una tradicional oligarquía, acostumbrada a gobernar sin contrapeso.

El Segundo Simposio del Sector Productivo, que agrupó a los principales grupos privados de El Salvador, celebrado en mayo de 1982, estimó en una de sus conclusiones que "la principal causa de la crisis económica por la que atraviesa el país es el caos jurídico que creó el gobierno del partido Demócrata Cristiano, al emitir un sinnúmero de decretos demagógicos, destruyendo las bases fundamentales del sector productivo".

Entre esos sectores privados, representados políticamente principalmente por Arena y el PCN, el "comunitarismo" del PDC es tanto o más condenable que el "comunismo" que achacan a todas las agrupaciones de izquierda.

Las organizaciones populares, por su parte, incluyendo las partidarias de la democracia cristiana, como la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), no han cesado de reclamar por la

insuficiencia de las reformas.

Implantadas como instrumentos de la guerra civil que se libra en El Salvador, éstas no han servido para crear la nueva situación política y económica que el país necesita y que sus mismos propulsores anunciaron.

LA REFORMA AGRARIA: OTRO INSTRUMENTO DE LA GUERRA

La reforma agraria y las elecciones "son los dos elementos que podrían conducir a la solución del conflicto salvadoreño", dijo en febrero de 1982 un ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, Angier B. Duke, ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de su país, después de encabezar una misión de estudio a San Salvador.

Casi dos años antes, el 5 de marzo de 1980, el régimen salvadoreño había promulgado un ambicioso decreto de reforma agraria, cuyo objetivo era "transformar la estructura del país", según declaraciones del entonces presidente del Instituto de Transformación Agraria (ISTA), el dirigente demócrata-cristiano José Antonio Morales Erlich.

La reforma agraria estaba concebida como el instrumento económico y político de mayor envergadura para reducir el poder de una oligarquía de extrema derecha y para restar apoyo popular al FMLN.

Esas expectativas fueron expresadas por el embajador Duke, cuando afirmó que "la reforma agraria ha creado un nuevo e influyente sector del electorado, que muy bien puede resultar la clave de las elecciones constituyentes que se efectuarán el 28 de marzo".

El gobierno esperaba, con esa ley, "terminar con el latifundio en El Salvador". El entonces miembro de la Junta de Gobierno, coronel Adolfo Majano, así lo anunció al dar a conocer el decreto, revelando que, a partir de ese momento, el ejército estaba ocupando los latifundios mayores de 500 hectáreas, que serían afectados por la primera etapa de la reforma. "La Fuerza Armada pone su potencial militar al servicio de esa medida", anunció Majano.

Las declaraciones de Duke, Morales Erlich y Majano contri-

buyeron a poner el problema en su debida perspectiva: la política.

La Ley Básica de Reforma Agraria, contemplada en el decreto 153 del 5 de marzo de 1980, estipuló la expropiación de las fincas de más de cien hectáreas en los terrenos de mejor calidad, o de las de más de 150, en tierras peores. Pero, al anunciar su puesta en práctica, el coronel Majano advirtió que el proceso se iniciaría con aquellos latifundios mayores de 500 hectáreas.

El mismo día el gobierno había promulgado otro decreto, autorizando a la fuerza armada a intervenir las haciendas afectadas. En la mañana del seis de marzo las tropas intervinieron las 50 principales propiedades agrarias del país, en un despliegue espectacular e inusitado en El Salvador. Se quería así mostrar el compromiso de los altos mandos militares con una decisión que, sin ese apoyo, no podría ser implementada. Detrás de todo estaba el respaldo político norteamericano y la concepción de una lucha a largo plazo contra la guerrilla que debía ser librada en todos los terrenos, incluyendo el político y el económico.

La expropiación de las haciendas de más de 500 hectáreas afectó a 282 unidades agrícolas del país, que controlaban cerca del 15 por ciento de las tierras, por cierto las de mejor calidad, según el último censo agrícola salvadoreño.

El dato contrasta con el otro extremo en la escala de propiedades, donde el 50 por ciento de las 271 mil unidades agrícolas del país tienen menos de una hectárea.

Esa tremenda concentración de la tierra tiene efectos dramáticos en el campo salvadoreño. De acuerdo con un estudio de la Universidad Centroamericana, los trabajadores sin tierras representaban, en 1975, el 40 por ciento de la población rural. Más del 50 por ciento de la mano de obra rural carecía de empleo las dos terceras partes del año; el documento cita también un estudio de la AID, señalando que el 88 por ciento de la población rural salvadoreña percibe ingresos inferiores a los 225 dólares anuales.

A pesar de esa realidad, el anuncio de la reforma agraria provocó fuertes reacciones de la traidicional oligarquía del país. Su política seguía siendo la de mantener el statu quo, sin ceder a las reformas que, desde los preparativos del golpe de 1979 pasaron a contar con el respaldo norteamericano.

Se trataba, en parte, de una política preventiva, consecuencia del triunfo sandinista en Nicaragua, que intentaba evitar que el ejemplo se propagara.

De todos modos, la Ley Básica de Reforma Agraria era sólo una parte del proyecto; la otra parte, el otorgamiento de tierras a los campesinos arrendatarios, sería promulgada poco después. La finalidad real de la reforma se vio con más claridad cuando ese nuevo decreto vino a complementar las disposiciones del 153.

El 28 de abril se promulgó el decreto 207, a través del cual se pretendía poner fin al sistema de aparcería y arrendamiento, expropiando los predios de hasta 100 hectáreas que no estuvieran siendo explotados directamente por sus propietarios. Esas tierras serían entregadas a los campesinos que las estuvieran trabajando, en propiedades no mayores de siete hectáreas.

Si con la ley básica de reforma agraria se pretendía "quebrar la espina dorsal de la oligarquía", el objetivo de la nueva medida era crear la base social del ejército y reducir el apoyo a la guerrilla en el campo.

Se trataba de "crear empresarios como conejos", como dijo el norteamericano Roy Prosterman, un funcionario de la AID, autor del decreto. Prosterman tenía ya experiencia en esta materia, pues había implantado una reforma similar en Vietnam.

Se estimó entonces que el decreto 207 beneficiaría a 150 mil familias, unas 850 mil personas. Ese enorme contigente campesino, ahora potencialmente propietario de sus tierras, debería alejarse de la tentación de la lucha armada y transformarse en base de apoyo del régimen, de acuerdo con los objetivos planteados.

LA REALIDAD

Un año después de promulgada la reforma agraria, asistí a un acto conmemorativo en la hacienda San Isidro, en el departamento de Sonsonate, en la zona occidental del país.

El latifundio, ex propiedad de la rica familia salvadoreña de los Regalado, tenía casi 2.500 hectáreas, sembradas principalmente de café y caña; desde marzo de 1980 se había transformado en una cooperativa propiedad de 700 socios, con una población de 3.600 habitantes.

El acto conmemorativo se celebró en la cancha de fútbol de

la hacienda, con la presencia de Morales Erlich y otras autoridades del gobierno, con banda de música y mucha solemnidad.

El balance del presidente de la cooperativa dejó en evidencia las muchas dificultades que ya entonces se presentaban. No sólo la oposición de los antiguos propietarios, que en diversas oportunidades se enfrentaban a los integrantes de las cooperativas con las armas en las manos; por lo menos 90 dirigentes campesinos fueron asesinados en 1981 por los antiguos propietarios y sus aliados, en un intento desesperado por detener el proceso. Pero la falta de capital para poner en marcha las haciendas expropiadas causaba también estragos. "Nosotros trabajamos una quincena, pero la otra no", se quejaba un campesino en la hacienda San Isidro. Uno de ellos afirmó haber quedado sin trabajo 15 quincenas, más de siete meses, durante el primer año agrícola de la reforma agraria. Morales Erlich estimó que las cifras estaban exageradas; "antes tenían trabajo sólo tres o cuatro meses al año, ahora trabajan siete u ocho". Por otra parte, entre las ventajas logradas estaba un salario ligeramente superior al mínimo fijado. En San Isidro los hombres ganaban, en esa época, seis colones por día (algo más de dos dólares), cifra superior a los 5,20 colones pagados a la mayoría de los campesinos. Las mujeres reciben sólo 5,20 colones de jornal, pero también más que los 4,60 fijados.

Un balance oficial de la reforma agraria, publicado en mayo de 1982 por el ministerio de Agricultura, señaló que "el problema más difícil para la consolidación del proceso y el desarrollo de las cooperativas es su situación financiera; de seguirse un criterio netamente bancario, muchas de ellas ya no podrían operar". O sea, estaban quebradas.

Balances de la reforma realizados por diversas instituciones en 1982, señalaron entre sus principales limitaciones el que no afecte a la mayor parte de los productos de exportación, principalmente el café, cultivado normalmente en fincas menores de 500 hectáreas; que no ha cambiado sustancialmente la vida de los colonos; que ha ido acompañada de una alarmante ola de violencia contra los campesinos; y que tiene severas deficiencias de planificación e implementación.

En el plano técnico, la reforma agraria salvadoreña sufre aún de diversos otros problemas. Entre ellos el abandono de un 10 por ciento de las tierras expropiadas, particularmente en los

departamentos de San Vicente y Usulután, en el centro del país, donde la guerrilla se ha implantado fuertemente en los últimos dos años. Esos departamentos son precisamente donde el ejército piensa lanzar su "operación limpieza", para instalar aldeas estratégicas, en un esfuerzo por contrarrestar la influencia del FMLN y reactivar la producción.

Pero también en los departamentos occidentales de La Libertad y Santa Ana, donde la actividad guerrillera es de mucho menor intensidad, hay un fuerte abandono de tierras expropiadas, lo que indica la incidencia de problemas administrativos en el mal funcionamiento de las cooperativas de reforma agraria.

Por otra parte, según un informe de la AID de 1982, poco más de 17.000 personas se habían inscrito en las cooperativas, lo cual representaba sólo el 49 por ciento de las metas del ISTA para esa época.

Las cooperativas no cuentan tampoco, salvo tres excepciones, con un eficiente sistema contable, indispensable para la administración de haciendas como las expropiadas; no hay asistencia técnica permanente; ni se ha variado el patrón de producción, manteniéndose el mismo alto grado de subutilización de la tierra y los cultivos para la exportación; las cooperativas se han visto afectadas, además, por la descapitalización y la falta de maquinaria.

Ese balance de la reforma agraria salvadoreña indica las dificultades con que la medida ha tropezado, y la imposibilidad, tanto política como administrativa, de llevar a cabo eficientemente la reforma. En estos tres años ha quedado claro que sin el apoyo campesino el avance de la reforma agraria será muy limitado. La expropiación de las haciendas de más de 500 hectáreas quitó a la oligarquía una de sus fuentes principales de poder, pero no ha servido para impulsar un mayor desarrollo de la producción, ni para generar una nueva base de poder en el país. En realidad, los efectos de la guerra son dramáticos, principalmente en el campo, y en el terreno de la reforma agraria cualquier resultado dependerá, además de todos los factores ya indicados, de la posibilidad de pacificación del campo. Tal como las elecciones, la reforma agraria, en la actual situación salvadoreña, no representa más que otro esfuerzo por reducir la influencia guerrillera, que contribuya así a ganar la guerra.

Las dificultades son tan evidentes que días antes de la celebración del primer aniversario de la reforma agraria el entonces presidente de la República José Napoleón Duarte anunció que la etapa siguiente, que debía afectar a las fincas comprendidas entre 100 y 500 hectáreas, sería aplazada por cinco o diez años. En realidad, eso significa una postergación indefinida, hasta que se resuelva la guerra civil, permitiendo a los triunfadores decidir, ya sin oposición militar, el destino que le quieren dar.

EL DECRETO 207

La Ley Básica de la Reforma Agraria salvadoreña contemplaba la expropiación inmediata de los latifundios mayores de 500 hectáreas. Esa medida se implementó en un día, con un apoyo militar y político que dejó muy pocas alternativas a las familias afectadas. Las haciendas fueron ocupadas por el ejército y entregadas a las cooperativas campesinas.

Casi dos meses después de promulgada esa ley el gobierno decretó la expropiación de las fincas trabajadas en aparcería o arrendamiento, con la intención de entregar parcelas de hasta siete hectáreas a los campesinos sin tierra. Mediante ese decreto se trataba de completar la transformación en el campo, de modo a restar el mayor apoyo posible a los insurgentes.

Sus destinatarios eran más de 116 mil familias sin tierras y debía beneficiar a unas 700 mil personas, que representan el 50 por ciento de los hogares agrícolas del país, de acuerdo con el estudio del Ministerio de Agricultura de marzo de 1983.

Más del 60 por ciento del total de potenciales beneficiados por esta medida están repartidos entre las zonas central y oriental del país, donde se ubican los departamentos de Chalatenango y Morazán, respectivamente, fuertes bastiones de la guerrilla.

Sin embargo, tres años después de promulgado el decreto, sólo el 22 por ciento de los posibles beneficiarios, correspondiente a 26 mil familias, se habían acogido a las disposiciones del 207, principalmente en la zona occidental del país, donde la presencia guerrillera es menos efectiva.

Un 40 por ciento del total de parcelas adjudicadas tenía una extensión inferior a 1,5 hectáreas, siendo la superficie promedio por familia de 1,7 hectáreas.

De las 90 mil familias restantes, más de la mitad expresó "no tener interés", o "desconocer los trámites" necesarios para reivindicar una parcela, mientras 15 mil expresaron temor de acogerse al decreto. El estudio del ministerio de Agricultura señaló que para que esos posibles beneficiarios sean atendidos será necesario "un cambio en la situación de violencia existente en el campo".

El documento revela también que las 90 mil familias aún no atendidas cultivan algo más de cien mil parcelas, de las cuales el 50 por ciento tiene menos de 0,7 hectáreas. Como contrapartida, sólo el dos por ciento de las fincas cultivadas por esos campesinos tiene más de 3,5 hectáreas. Nuevamente, son las regiones central y oriental donde el minifundio está más extendido. Esas cifras explican la decisión norteamericana de impulsar una reforma agraria como la contemplada en el decreto 207.

El documento del Ministerio de Agricultura contiene aún datos impresionantes sobre las condiciones sociales imperantes entre estas 700 mil personas potencialmente beneficiadas por el decreto 207, que integran el sector más pobre de la sociedad salvadoreña.

Casi el 71 por ciento es analfabeto, el 41 por ciento de las familias recibe menos de mil colones por año (menos de 300 dólares anuales), mientras sólo un siete por ciento de las familias recibe más de cinco mil colones por año.

La supervivencia de esas familias sólo es posible en condiciones miserables. El mismo ministerio de Agricultura salvadoreño reconoce que "las familias menos favorecidas en recursos económicos carecen de capacidad de ahorro y que inclusive se generan saldos negativos del ingreso con relación al gasto a nivel familiar".

La situación alimentaria de esos campesinos es tan dramática, que los que reciben más de cinco mil colones al año consumen prácticamente dos veces más leche y carne que los del sector pobre que, ciertamente, no los consumen prácticamente nunca.

La dieta de esos campesinos se limita casi exclusivamente a maíz y frijol, únicos dos productos cuyo consumo percapita anual supera los requerimientos nutricionales mínimos. El 73

por ciento de las viviendas no cuenta con servicio de agua potable; el 90 por ciento no dispone de ningún servicio sanitario, y el 97 por ciento cocina con leña.

"En las parcelas menores, el ingreso que se percibe por la producción agrícola es menor que el obtenido en concepto de salarios, trabajos artesanales, etc", señala el documento del Ministerio de Agricultura.

A pesar de esa realidad, y de la urgencia de las fuerzas gubernamentales de crearse una sólida base de apoyo en el campo (si pretende llevar adelante con éxito la lucha contra el FMLN) la aplicación del decreto 207 ha sufrido enormes dificultades que se reflejan, entre otras cosas, en el hecho de que, de las 26 mil familias realmente beneficiadas, sólo el uno por ciento tenía su título de propiedad definitivo en diciembre de 1982.

La importancia del decreto 207 no puede ser minimizada. La posibilidad de hacerse propietarios de la tierra que cultivan ha despertado entre ciertos sectores campesinos una profunda expectativa. Por eso, cuando en mayo de 1982, un decreto de la Asamblea Constituyente amenazó con paralizar la entrega de tierras, se produjo una intensa agitación social en el campo salvadoreño, que repercutió inclusive en el Senado Norteamericano. Ese decreto suspendía la aplicación del 207 en las tierras destinadas a los cultivos de algodón, caña de azúcar, cereales o a la ganadería. En realidad, representaba el fin de la posibilidad de hacerse propietarios para miles de pequeños campesinos.

La Unión Comunal Salvadoreña (UCS), que estima agrupar a 280 mil campesinos denunció, a fines de ese mes, que la suspensión del 207 había producido ya 3.604 desalojos en diversas partes del país.

El Secretario de Organización de la UCS, Samuel Maldonado, quien regresó en esos días de un viaje a los Estados Unidos, donde se reunió inclusive con Thomas Enders, estimó que la única esperanza de poner fin a esos desalojos era el ejército. "El general García (entonces ministro de Defensa) me garantizó que ellos van a hacer que se cumpla el 207 y van a reinstalar a los desalojados. Si el pueblo salvadoreño se ve frustrado, si la reforma agraria no continúa, aquí no se parará la guerra civil".

La UCS es un organismo que cuenta con el respaldo de la democracia cristiana y del sindicalismo norteamericano y sus dirigentes no ocultaban su temor de que la situación se tornase explosiva y se les fuera de las manos.

En esos días visité Tepecoyo, una localidad ubicada 40 km al oeste de San Salvador, en el departamento de La Libertad. Enclavada en una zona montañosa, sus calles empedradas serpentean entre las modestas casas de la localidad. Una mezcla de indignación, temor y confusión reinaba en Tepecoyo, población de unos 800 habitantes. "Los propietarios dicen que la reforma agraria ha desaparecido", me dijo al alcalde del lugar, José Vásquez, militante demócrata-cristiano. "Si le quitan la tierra a la gente, esto va a ser el diablo, es necesario que la fuerza armada venga a poner en posesión de sus tierras a los campesinos que han sido desalojados", afirmó, con una indisimulada desesperación.

La reacción ante la suspensión del decreto 207 fue tan grave, que el presidente Alvaro Magaña tuvo que zanjar la diferencia señalando que sus disposiciones seguían vigentes, y que los campesinos ya beneficiados mantenían sus derechos.

El presidente de la comisión Económica y Agrícola de la Asamblea Constituyente, el diputado Félix Canizales, de Arena, manifestó que el objetivo de la suspensión del 207 era "incentivar la producción ahora, para luego consolidar lo que se ha hecho hasta el momento. La baja de producción en el país se ha debido a la falta de confianza, y nosotros pretendemos restablecer esa confianza".

El presidente del Consejo de Actividades Agropecuarias, Martín Saldívar, un importante productor de algodón, estimó que el decreto 207 afectaba más a los productores medianos que a los grandes, abarcando un 30 por ciento de la producción agrícola. "El delito más grande de los que han implementado la reforma agraria es haberse robado la tierra; ahí comenzó mal la reforma, pues no han pagado a los propietarios, ni emitido los bonos. El algodonero, agregó, ha perdido todos sus recursos en estos dos años".

En el Senado norteamericano, donde se conocía bien la importancia de la reforma para poder seguir la lucha contra la guerrilla, se advirtió claramente que no habría "ni un centavo para El Salvador" si ésta se suspendía. Duarte advirtió también sobre las consecuencias de lo que podía pasar. "Piensen lo que significa para la oficialidad y los jefes militares, después de dos

años de lucha y de más de mil muertos, que de la noche a la mañana le quiten el apoyo, eso produce frustración".

Ante las presiones, la reforma prosiguió, dentro de sus limitadas dimensiones, y cada vez más afectada por la extensión de la lucha y por las dificultades económicas del país.

Conscientes de su importancia decisiva, los norteamericanos le siguen otorgando importantes recursos. En los primeros días de junio de 1983 concedieron un crédito de 23,4 millones de dólares, que elevó a más de 76 millones lo otorgado a la reforma agraria, desde 1980.

La decisión contrasta, por ejemplo, con el tratamiento dado a los nicaragüenses, donde una reforma similar está siendo llevada a cabo, sin violencia en el campo, pero también sin ninguna ayuda de la Casa Blanca. La promulgación de una reforma agraria fue también la causa de la caída del gobierno de Arbenz, en Guatemala, en 1954. En El Salvador, sin embargo, es un instrumento más de la lucha, y hace falta el apoyo campesino, si se quiere derrotar a la guerrilla. Pero, hasta ahora, no ha podido impedir que los insurgentes se muevan con facilidad por casi todo el país, con un apoyo importante de la población campesina.

LA ECONOMIA: CUARTO AÑO POR EL DESPEÑADERO

Hay un aspecto del deterioro económico en El Salvador que se puede observar a simple vista, con sólo realizar un recorrido por extensas zonas del campo, por sectores industriales, por los tugurios o por cualquiera de los refugios que albergan a los miles de desplazados en la capital.

La destrucción de la infraestructura productiva y de comunicaciones, los cultivos abandonados y la miseria en las ciudades, consecuencia de la paralización industrial y del desempleo, se observan prácticamente por todas partes.

La guerra infiltra, a veces violenta, pero también sutilmente, el aparato productivo, lo va paralizando, va obligando al gobierno a desviar recursos para la reconstrucción, amenaza los intereses del sector privado, que prefiere enviar sus capitales fuera del país, creando una crisis profunda, difícil de percibir en toda su dimensión.

Hemos tratado de describir los mecanismos y mostrar los efectos de esa crisis sobre la vida productiva del país. Las cifras, a pesar de las enormes divergencias, según las fuentes utilizadas, dejan al desnudo la gravedad de la situación.

La economía salvadoreña sobrevive actualmente sólo gracias a la inyección de recursos norteamericanos, que permite sobrellevar la guerra y mantener aún funcionando el aparato estatal y la producción. El embajador de Estados Unidos en San Salvador, Deane Hinton, recordó, en octubre de 1982, que su país estaba financiando el 20 por ciento de las importaciones salvadoreñas. El peso económico de la guerra está todo en manos de Estados Unidos, ante la imposbilidad del gobierno salvadoreño de hacer frente a gastos de defensa y seguridad pública que representaban en 1983 un 20 por ciento del presupuesto, superior a cualquier otra asignación.

Los indicadores de la marcha de la economía salvadoreña empezaron a pasar al rojo en 1979, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en un 1,5 por ciento, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la inversión privada cayó también abruptamente, el consumo se contrajo, los capitales empezaron a buscar lugares más seguros, las reservas disminuyeron y la inflación se aceleró. Todos los ingredientes indicaban el deterioro de la situación, que se agravaría con el transcurso de la guerra.

Esta situación, que analizaremos en detalle más adelante, fue interpretada desde una doble perspectiva.

Los sectores más conservadores clamaron contra toda intervención del Estado en la economía en una tradicional posición de extremo liberalismo, muy de acuerdo con las teorías vigentes en las esferas oficiales norteamericanas desde la llegada de Reagan al poder.

El representante de Arena, Ricardo Valdivieso, un hombre que reside en Estados Unidos desde hace varios años y que hoy habla español con marcado acento norteamericano, reiteró la posición de su partido ante las reformas que se habían llevado a cabo en El Salvador, en una conferencia de prensa celebrada en la sede de esa organización, unos meses después de las elecciones constituyentes de marzo del 82.

Valdivieso me entregó una copia del testimonio que había prestado en mayo de ese año ante el subcomité de Operaciones

Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"La economía salvadoreña empezó a deteriorarse aproximadamente en 1979", decía el dirigente de Arena en su declaración. "En 1978, tuvimos las más altas cifras de producción en nuestra historia, debido a los altos precios que recibimos por nuestros productos de exportación en el mercado internacional". Esa bonanza fue despilfarrada en pocos años por "el gobierno paternalista" que tuvimos y, en particular, por el "comunitarismo" establecido por la Junta de Gobierno, que aceleró esa declinación. "Nosotros no creemos que los problemas económicos y sociales de El Salvador puedan resolverse con una mayor intervención del gobierno en los negocios privados de la gente. Por el contrario, creemos que nuestro principal problema en el pasado fue precisamente el gobierno".

En los mismos días, durante un simposio del sector privado salvadoreño, se volvió a destacar "el deterioro económico, social y político del país" en los últimos años. El documento señalaba que, "promediando el año 1981, la situación nacional era ya verdaderamente crítica, contribuyendo a ella tanto la estrategia de la guerra popular prolongada... como las consecuencias perjudiciales de la política económica desarrollada por la entonces Junta Revolucionaria de Gobierno".

Las críticas del sector empresarial se orientaban en particular contra la doctrina comunitarista demócrata cristiana, pero también contra el presidente Duarte, al que responsabilizaban personalmente de haberlos excluido de la segunda junta de gobierno.

Los empresarios no ocultaron su satisfacción con el nombramiento de Magaña. El nuevo presidente era también un empresario, al que conocían bien y, con él, volvieron también al gobierno.

Esa visión de los problemas económicos del país tenía su contrapartida en todos aquellos sectores que no estaban satisfechos con la situación imperante antes del golpe de 1979.

"Muchos han sostenido y siguen sosteniendo que la economía de El Salvador era, antes de la presente crisis, fuerte y vigorosa, y que los sucesos de 1979 vinieron a interrumpir su avance", decía un autor salvadoreño, al analizar la situación en un artículo de la revista Estudios Centroamericanos, de la universidad de los jesuitas en San Salvador, titulado "La Economía en una época de guerra".

Antes de 1979, agregó, los indicadores de la economía salvadoreña parecían mostrar un crecimiento constante pero "el hecho de que una economía esté creciendo no implica que sea saludable".

No hay duda que el "crecimiento económico" salvadoreño ocultaba graves distorsiones que afectaban a la enorme mayoría de la población.

En términos estrictamente económicos, la reducción del mercado interno reflejaba una organización productiva orientada hacia el mercado exterior, tanto de productos agrícolas (el 70 por ciento de las exportaciones está formado por el café, algodón y azúcar) como industriales. El Salvador fue, junto con Guatemala, el principal beneficiado del proceso de integración económica desarrollado en la década de los 60. Pero ese crecimiento, lejos de aliviar las presiones sociales, las agravó hasta tal punto, que explotaron.

Algunas cifras ilustran mejor lo que estamos hablando. El informe anual del BID de 1979 señalaba que la tasa de mortalidad infantil, de 50,5 por mil nacidos vivos, así como la expectativa de vida al nacer, de sólo 62,2 años, "son todavía relativamente desfavorables" en El Salvador.

Otros datos revelan que en 1981, o sea, aún antes de generalizarse la guerra, 500 mil personas no tenían casa en El Salvador y más del 70 por ciento de las existentes no reunían los requisitos mínimos para ser habitadas; un 75 por ciento de los niños presentaba algún grado de desnutrición; en el campo esa situación es aún más dramática. El mismo estudio del BID señala, por ejemplo, que el área metropolitana de San Salvador, donde reside poco más del 15 por ciento de la población, concentra casi el 50 por ciento de las camas de hospitales y el 42 por ciento de los médicos, en una situación en que el seguro social cubre apenas el 13 por ciento de la fuerza laboral.

Las cifras de desnutrición, lejos de disminuir, han venido aumentando desde la década de los 60, lo que indica con claridad el agravamiento de la situación de vida de la población, de un modo tal que no deja dudas sobre las dramáticas consecuencias del proceso de desarrollo económico que venía sufriendo el país.

El golpe de 1979 pretendía ser una respuesta a la grave crisis política que se cernía sobre El Salvador. Cada sector que participó en ese golpe, y fueron muchos, tenía su proyecto. Pero, de ningún modo, el resultado del derrocamiento del general Romero podía ser la continuación de una política económica que era expresión de los intereses de una pequeña oligarquía que controlaba todos los resortes del poder y que había hundido el país en la crisis.

Desde entonces las principales decisiones gubernamentales han estado sometidas, en forma creciente, a una estrategia militar cuyo objetivo es derrotar al FMLN. La política económica no ha escapado a esta orientación.

En estos cuatro años, la lección más importante es que la economía del país no puede soportar mucho tiempo más esta guerra en la que el sabotaje es usado como arma de tremenda eficacia por los guerrilleros y donde los esfuerzos militares consumen los cada vez más escasos recursos del gobierno.

Cifras recientes muestran hasta qué grado el aparato productivo y el sistema económico de la nación se han deteriorado.

En 1982, las desastrosas consecuencias de la guerra hundirían el Producto Interno Bruto (PIB) real de El Salvador por cuarta vez consecutiva, me dijo en noviembre de ese año el presidente del Banco Central de El Salvador, Alberto Benítez.

La previsión del funcionario era de que el PIB se reduciría ese año en un 5 por ciento, después de resultados negativos de casi diez por ciento en 1981 y 1980. Esa caída se había iniciado en 1979, con una cifra moderada, de sólo 1,5 por ciento.

Los números eran aún más dramáticos según fuentes universitarias, que señalaban una baja de 9,5 por ciento en 1982, después de descensos sucesivos de casi 15 por ciento en los dos años anteriores.

Un estudio de la Universidad Católica de San Salvador estimaba que el nivel de vida de la población había caído a una situación comparable con la de hace 25 años.

"Los problemas más serios que enfrentamos, expresó Benítez, son el desequilibrio externo y la situación fiscal, donde tenemos un déficit jamás visto. No cubrimos ni los gastos corrientes con los ingresos corrientes", con lo que indicaba que la recaudación del gobierno, principalmente en impuestos, no era

suficiente para pagar salarios y otros gastos de operación.

"Las causas de esa situación son la caída del producto, la reducción del precio del café, y el crecimiento de los gastos corrientes, principalmente de seguridad. Sólo dos ministerios, los de Defensa y Educación, absorben el 40 por ciento del presupuesto". El déficit fiscal, según el BID, representaba un 5,3 por ciento del producto interno, y estaba siendo financiado con un mayor endeudamiento.

"Ya no se puede reducir más los gastos; o se modifica el cobro de impuestos, o se paran las entidades del sector público", dijo Benítez, señalando que el cálculo de desocupación abierta más el subempleo "anda en un 35 por ciento". La cifra, sin embargo, podría ser muy superior; el BID señaló, en su informe de 1982, que la tasa media de desempleo abierto llegó a 19 por ciento, mientras fuentes universitarias estimaban que era de casi 40 por ciento.

En el sector externo, "la crisis de divisas es álgida, consecuencia de la brecha entre importaciones y exportaciones; son tres años con un déficit en cuenta corriente muy amplio. El financiamiento externo no es suficiente y el plazo inadecuado, por lo que no se está atendiendo ni las necesidades de materias primas", reveló Benítez.

Según las cifras del BID, el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos, resultado de los gastos en importaciones y servicios y de los ingresos por exportaciones, llegó a casi 130 millones de dólares en 1979. En los dos años siguientes esa cifra fue negativa: 61 millones en 1980 y 287 millones en 1981, habiendo caído aún más en 1982.

"La deuda externa es de 1.400 millones de dólares", una cifra relativamente reducida, pero Benítez advirtió que, desde 1970, "la deuda pública ha crecido diez veces".

El BID señaló, por su parte, una disminución de las reservas, que registraban un saldo negativo de 70 millones de dólares en 1980, y de 144 millones, en 1981.

En noviembre de 1982, Benítez negó que hubiese intención de devaluar el colón salvadoreño, que mantuvo durante años una paridad de 2,5 por dólar. Sin embargo, en ese entonces, la moneda nacional valía ya 3,75 en los bancos, mientras que, en el cada vez más extendido mercado negro, alcanzó precios hasta

4,5 colones por dólar, consecuencia, entre otras cosas, de la enorme presión sobre el mercado ejercida por los dueños del capital, que buscaban divisas para sacarlas del país.

Benítez estimó que la tendencia negativa del sector externo "no podrá ser cambiada en los próximos dos o tres años, pero se mostró más optimista respecto a la caída del PIB que, en su opinión, podía ser frenada en 1983.

Un estudio del presupuesto salvadoreño para 1983 indicaba una reducción del 17 por ciento con respecto al año anterior, considerando una tasa de inflación oficial del 15 por ciento.

El presupuesto de 1983 preveía gastos ligeramente superiores a los 2.000 millones de colones, y un déficit de 50 millones, suponiendo un aumento de un 25 por ciento en los ingresos impositivos, cifra realmente difícil de lograr en medio de la guerra y de la profunda recesión económica por la que atraviesa el país. Todo eso permite presumir que el déficit será realmente mucho mayor, probablemente superior al de 1982, que fue de 200 millones de colones.

Los únicos ministerios que registraron un incremento de gastos fueron los de Defensa y Seguridad Pública, con un aumento de casi 30 por ciento, y el de Economía, con un 15 por ciento más. El ramo de educación sufrió un recorte del 35 por ciento y, por primera vez en la historia reciente del país, su asignación será inferior a la de gastos militares. Estos, que en 1980 representaban sólo un 10 por ciento del presupuesto, tres años después representaban el doble. Hace dos años, el estado gastaba en educación el doble que en defensa; ahora, defensa y seguridad consumen más que la enseñanza.

Los gastos reflejan, inevitablemente, las prioridades del país; el recorte en educación fue significativo, pero el ministerio de Agricultura fue el que sufrió la mayor reducción: 73 por ciento, a pesar de las necesidades de la reforma agraria, en pleno desarrollo. El gasto diario previsto para la defensa, de 1,1 millones de colones, duplica el de salud pública, por ejemplo, pero podría ser aún mucho mayor, según otras fuentes, y refleja la acelerada militarización del país.

Toda esta situación fue resumida en el editorial de la prestigiosa revista Estudios Centroamericanos (ECA), de la Universidad Católica Salvadoreña, dirigida por los jesuitas,

en su primer número de 1983.

Titulado "Otro Año de Guerra Civil", el editorial señala que, en 1982, el consumo de la población descendió un 12 por ciento respecto a 1981, "deterioros que han de sumarse a los experimentados en los dos años precedentes y cuya magnitud es todavía mayor. El país se ha visto aquejado a lo largo de todo el año por falta de divisas... el gobierno salvadoreño, volcado a financiar una guerra cuyo costo ha llegado a superar ya los dos millones de colones diarios, ha incurrido en crecientes déficits presupuestarios... el desempleo efectivo alcanza al 38 por ciento de la población económicamente activa, y el desempleo encubierto puede alcanzar niveles de auténtica tragedia".

"El poder adquisitivo del salario mínimo ha descendido a un nivel equivalente al de hace más de una década. Por otro lado, han empezado a proliferar enfermedades y plagas de diversos tipos, sobre todo de la piel, mientras escasean las medicinas en el país y han cerrado 31 centros asistenciales. Todo ello refleja una situación de verdadera catástrofe".

Las consecuencias de esa "economía de guerra" sobre la vida de los salvadoreños son realmente dramáticas, y aún veremos algunas cifras al respecto.

Pero hay otro aspecto económico de la guerra que no se puede soslayar: el de los efectos de la campaña de sabotajes de la guerrilla, que ha desbordado totalmente la posibilidad de defensa del ejército.

El mismo editorial de la revista ECA señalaba que, "sólo en lo relativo al sistema de conducción de energía, son más de 200 las torres derribadas... de las 45 máquinas de tren de que disponía Fenadesal (la empresa de ferrocarriles del Estado), apenas una media docena no han sido afectadas por el sabotaje, y más de un 35 por ciento de los casi tres mil buses de que se disponía a principios de 1980 han sido destruidos o averiados por acciones insurgentes. Súmese a ello las líneas telefónicas dinamitadas, los puentes destruidos, los beneficios quemados, las cosechas perdidas, los campos arrasados, los edificios bombardeados, las fábricas abandonadas, por no mencionar la continua evasión de capital, y apenas se tendrá una imagen aproximada de lo que la guerra está costando al sistema productivo del país".

Un cuadro del balance de sabotajes guerrilleros durante

1982, según fuentes del FMLN, nos daba el siguiente resultado:

Sabotajes a la energía eléctrica	406
Sabotajes al suministro de agua	21
Sabotajes al transporte comercial y particular	591
Sabotajes a telecomunicaciones	120
Sabotajes a vías de comunicación	56
Sabotajes al comercio e industria	82
Sabotajes a actividades agrícolas	24
Sabotajes a propiedades del Estado	37
Sabotajes a instalaciones militares	1
Sabotajes a ferrocarriles	22
Puentes destruidos y averiados	23
TOTAL DE SABOTAJES	1.383

La acción de sabotaje económico más espectacular realizada por la guerrilla fue, sin duda, la destrucción del Puente de Oro, sobre el río Lempa, en la carretera del litoral, al cumplirse el segundo aniversario del golpe de octubre de 1979. La pista de circulación del majestuoso puente se derrumbó sobre las aguas del río, donde permanece, retorcida, como si fuera de hule.

Poco más de dos años después, el primero de enero de 1984, el FMLN destruiría el puente Cuscatlán, la otra gran estructura sobre el río Lempa, en la carretera Panamericana, unos 30 km al norte del puente de Oro.

El gobierno salvadoreño estimó entonces en 80 millones de colones (32 millones de dólares, al cambio oficial de 2,5) las pérdidas ocasionadas por la guerrilla con la destrucción de 55 puentes desde 1980. Sólo la reconstrucción del puente de Oro y del Cuscatlán demanda unos 16 millones de dólares (la cifra real podría ser muy superior), y un período de dos a tres años para concluir la obra, en condiciones normales.

En cuanto a los sabotajes a instalaciones militares, un comando insurgente destruyó 28 unidades de la fuerza aérea en un mortífero atentado, el 27 de enero de 1982, cuando dinamitaron los aviones estacionados en la base de Ilopango, en las afueras de la capital. La emisora del FMLN estimó que lo destruido representaba más del 70 por ciento de los medios con que contaba la fuerza aérea salvadoreña en aquel momento, aeronaves que fueron luego repuestas, mediante un crédito especial de los Estados Unidos. El arquitecto de ese sabotaje, comandante Alejandro Montenegro, fue capturado en Honduras, en 1982, siendo entregado al ejército salvadoreño, con el cual pasó a colaborar desde entonces.

Sería casi dos años después del ataque a la fuerza aérea, el primero de enero de 1984, cuando el FMLN ocupa una unidad militar de envergadura. En esa fecha fue atacado el cuartel de Paraíso, sede de la Cuarta Brigada de Infantería, en Chalatenango, ocupado y destruido por los insurgentes al cabo de dos horas de lucha.

El balance de las actividades militares de 1983 hecho por la guerrilla destacó el inicio de seis campañas en ese período y la ampliación del área bajo control insurgente. Según las cifras del FMLN, más de 60 de los 261 municipios del país están en zonas bajo su control. Los insurgentes reivindicaron también el haber provocado 7.169 bajas al enemigo, entre muertos y heridos; haber hecho 1.778 prisioneros y capturado 3.690 armas, entre fusiles, morteros, cañones, etc.

A pesar de la creciente actividad militar del FMLN en 1983, y de la ocupación del cuartel de Paraíso al concluir el año, los ataques a objetivos castrenses no tienen aún la magnitud de los realizados contra objetivos económicos.

Estas acciones de sabotaje se prestan, evidentemente, para una doble utilización propagandística; el gobierno trata de presentarlas como "actos vandálicos", destinados a hacer más difícil la vida de la población, lanzando una campaña en todos los medios del país, a mediados de 1983, en la que destacaba el cierre de fuentes de trabajo como consecuencia de los atentados. El Frente Farabundo Martí respondió señalando que los sabotajes son "un arma efectiva y contundente en la lucha contra la dictadura y la injerencia imperialista" en El Salvador.

Los sabotajes, señaló el FMLN a través de la radio Venceremos, "han reducido la capacidad ofensiva del ejército regular, obligándolo a comprometer fuerzas en la protección de su infraestructura estratégica. Cada puente, cada instalación económica importante, significa centenares de hombres que el alto mando no puede hacer entrar en combate. Con nuestra actividad, les estamos obligando a invertir los dólares de la ayuda norteameri-

cana en la reconstrucción de la infraestructura destruida, impidiendo que esos recursos sean usados en armas para el ejército salvadoreño.

Estas acciones insurgentes han ido minando la capacidad productiva del país en forma importante; en particular por las permanentes interrupciones de la energía eléctrica en toda la zona oriental del país, así como por la destrucción de puentes, camiones, buses y máquinas de ferrocarril que, juntamente con el control de carreteras, dificulta enormemente la circulación de mercaderías y personas. La economía se va "enfriando", paralizando, aún sin considerar los enormes recursos que hay que desviar para la reconstrucción.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno tiene cada vez menos alternativas económicas. Es ya evidente que, sin poner fin a la guerra, no podrá resolver la crisis. Mientras tanto, ha debido tomar medidas drásticas, entre otras una congelación de salarios, impuesta en diciembre de 1980, mediante una Ley de Emergencia Económica, en un esfuerzo por detener la inflación.

Como consecuencia de esta medida, el salario mínimo para las actividades agropecuarias perdió un 70 por ciento de su valor adquisitivo, comparado con el de 1971, mientras caía un 42 por ciento para la recolección del café, un 51 por ciento para la industria y un 52 por ciento como promedio para todas las actividades económicas, según medios universitarios. Esas cifras varían, según las diversas fuentes, pero el propio ministerio de Trabajo reconoció que, en 1981, la pérdida del valor adquisitivo del salario mínimo promedio era del 26 por ciento, con respecto a 1971.

La solución de esta crisis no es un problema económico. "Sin la pacificación no habrá confianza, no habrá inversión ni repatriación de capitales", advirtió el presidente del Banco Central. "Es imposible la recuperación con base en puros instrumentos económicos", señalaba, por otra parte, un profesor universitario. "Si no hay paz, agregó, no habrá solución al problema económico y como no se ve solución a la guerra, la perspectiva es de un mayor deterioro de la economía; pero no habrá derrumbe mientras Estados Unidos siga bombeando dinero".

"Si no hay negociación, advirtió, la política de sabotajes se intensificará".

Capítulo V

UN ESFUERZO DE PAZ

En marzo de 1983 conversé largamente con el ex miembro de la Junta de Gobierno y ex comandante del ejército salvadoreño, el general Jaime Abdul Gutiérrez. Hablando de la situación militar en el país, me dijo que "con tres o cuatro batallones de reacción inmediata más" (refiriéndose a las tropas entrenadas por los norteamericanos), la guerra podría terminar rápidamente.

El alto jefe militar, que había sido pasado a estado de "disponibilidad" en la fuerza armada salvadoreña (no había sido dado de baja, pero tampoco se le había asignado ningún nuevo cargo), reconoció que el ejército salvadoreño cometió un error de apreciación después de las elecciones constituyentes de 1982: "esos comicios fueron un golpe muy fuerte para la guerrilla, y eso nos llevó a menospreciarla".

En esa tarde de marzo del 83, un año después de las elecciones, empecé a pensar que, de cierto modo, todo comenzaba otra vez.

Ya hablamos extensamente de cómo, en marzo de 1982, las elecciones y la preparación de los primeros batallones espe-

ciales, entrenados en Estados Unidos, se conjugaron en lo que los militares consideraban como la fórmula para poner fin rápidamente a la guerra.

Tan convencidos estaban de los resultados, que fueron sorprendidos por la reacción del FMLN.

En 1983 el presidente Magaña anunció la celebración de elecciones presidenciales para marzo del año siguiente, una vez que estuviese concluida la nueva constitución.

La estrategia se repite.

El 29 de junio de 1983, los primeros 58 soldados salvadoreños, de un contingente de 2.400 (tres batallones, aproximadamente) llegaron al nuevo centro de preparación militar creado por los norteamericanos en las cercanías de Puerto Castilla, en una apartada región de la costa Atlántica hondureña. Este centro está especialmente destinado a entrenar a soldados salvadoreños, aunque se diga también que recibirán entrenamiento tropas de otros "países amigos".

En realidad, la preparación que se dará ahí viene a reemplazar la que los soldados salvadoreños recibieron, en 1982, en Fuerte Bragg y Fuerte Benning, en Estados Unidos.

Ese entranamiento salía muy caro y la decisión del Congreso norteamericano de no otorgar toda la ayuda militar para El Salvador solicitada por Reagan para los años fiscales de 1983 y 1984 obligó a hacer economías, entre ellas buscar alternativas más baratas para la preparación de las tropas. Pero lo importante es destacar aquí la reiteración de una misma estrategia que, a pesar de la combinación de medidas políticas, como las elecciones, con las militares, tiene un solo fin: derrotar a las fuerzas del FMLN.

Centroamérica vivía, a mediados de 1983, un clima bélico que empezaba a asfixiarla y amenazaba eliminar del escenario político a todas las fuerzas interesadas en una solución pacífica a la conflictiva situación regional.

Desde que la guerra civil salvadoreña fue puesta por la administración Reagan en el marco de la lucha este-oeste y transformada en prueba de su voluntad de detener el "expansionismo comunista" en cada rincón del mundo, las posibilidades de una solución nacional al conflicto se cerraron.

Esta visión geopolítica es compartida por los militares salvadoreños. El mismo Abdul Gutiérrez, que reconoció el error de apreciación del ejército sobre la capacidad de la guerrilla después de las elecciones de 1982 me dijo que "el mismo Fidel Castro no podrá sostener el apoyo del FMLN por mucho tiempo, sin poner en peligro a su propio país".

Basta leer los reiterados informes del Departamento de Estado o del Pentágono sobre la "intervención de la URSS, Cuba y Nicaragua" en el conflicto para darse cuenta de lo que la Casa Blanca tiene en mente.

Uno de esos documentos, presentado por la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y divulgado el 27 de mayo de 1983 en Washington, reiteraba todos los argumentos que pretenden hacer ver la crisis centroamericana y, en particular, el conflicto salvadoreño, como una maniobra soviético-cubana-nicaragüense contra Estados Unidos.

Mientras prevalezca esta perspectiva, no habrá solución negociada a la crisis salvadoreña; todos los esfuerzos en ese sentido, incluyendo los del Grupo de Contadora, que la administración norteamericana dice apoyar, estarán inevitablemente destinados al fracaso.

En los mismos círculos parlamentarios de los Estados Unidos, sin embargo, hay sectores que se dan cuenta de la realidad centroamericana desde otra perspectiva. El senador demócrata Christopher Dodd, quien respondió al discurso de Reagan ante el Congreso, el 27 de abril del 83, señaló que "si Centroamérica no se viera azotada por la injusticia, no habría revoluciones; a menos que cambien esas condiciones de opresión, la región continuará germinando revoluciones, con o sin los soviéticos". Dodd denunció la escalada militar de la administración Reagan en Centroamérica y la enorme cantidad de recursos —700 millones de dólares, dice él— que la administración norteamericana ha entregado a El Salvador.

Entre 1981 y 1984, Reagan entregará más de mil millones de dólares a El Salvador, para contrarrestar a un ejército rebelde cuyos integrantes no superan, según todas las informaciones, los siete mil guerrilleros. "Esto quiere decir que ustedes y yo —agregó Dodd— pagamos 140 mil dólares en impuestos ganados trabajosamente, por cada uno de esos guerrilleros

que tratamos de derrotar".

El cálculo es interesante, sobre todo si lo comparamos con lo que pasa en Nicaragua.

Las "organizaciones político-militares" salvadoreñas tienen unos doce años de existencia. En ese período, han logrado desarrollar su capacidad de lucha hasta el punto de estar en condiciones de amenazar seriamente el poder. En Nicaragua, la contrarrevolución, en unos dos años, ha logrado armar a por lo menos diez mil hombres —según sus propios portavoces— y esperaba tener unos cuantos miles más sobre las armas antes de diciembre de 1983.

Esas cifras revelan la magnitud del apoyo que los guerrilleros salvadoreños han estado recibiendo y, como contrapartida, la intervención mucho más masiva de los Estados Unidos en apoyo a los grupos antisandinistas. Sin embargo, los resultados han sido negativos para los proyectos de la Casa Blanca. Los seis o siete mil guerrilleros salvadoreños son una fuerza implantada en su país, mientras los diez mil o más contrarrevolucionarios nicaragüenses no han podido, a pesar de la masiva asistencia, ocupar parte significativa alguna de esa nación.

Según Estados Unidos, el incremento de la guerrilla en El Salvador es el resultado de la injerencia comunista. El informe del Comité de Inteligencia de la Cámara mencionado refiere que durante todo el año de 1981 "Cuba, Nicaragua y el bloque soviético" rearmaron a la guerrilla (de cuatro a seis mil hombres, según ese documento), e instalaron su cuartel general en Managua. Como resultado de todo eso, "para principios de 1983, los guerrilleros habían controlado unas doce localidades por más de dos meses, y su moral se había recuperado claramente, en parte debido al continuo apoyo cubano, nicaragüense y soviético".

El informe habla nuevamente de "asesores cubanos" y "vietnamitas" en Morazán y otra vez quiero recordar mis experiencias con las constantes denuncias del ejército salvadoreño sobre la presencia de oficiales extranjeros en la guerrilla. Los periódicos salvadoreños hablan permanentemente de cadáveres "con rasgos extranjeros" aparecidos en los campos de batalla después de cualquier enfrentamiento. El ejército salvadoreño nunca nos mostró esos cadáveres, ni mucho menos ningún preso que fuera oficial de nacionalidad extranjera. Cuando trataron de

hacerlo con el joven nicaragüense Orlando Tardencillas, exhibido en el Departamento de Estado después de haber sido capturado en El Salvador, éste desmintió toda la versión previamente presentada, que pretendía hacerlo aparecer como un nicaragüense entrenado en Cuba y enviado a asesorar a la guerrilla.

El informe dice también que "la infiltración aérea por nuevas rutas continúa hasta hoy", a través de las cuales la guerrilla se abastecería de armas. El comandante de la Fuerza Aérea salvadoreña, coronel Juan Rafael Bustillo, me dijo, a fines de marzo del 83, que "actualmente no se han detectado infiltraciones de aviones que den la impresión de venir con armas o municiones para el FMLN. No quiero decir que no exista la posibilidad, ya que la guerrilla tiene que buscar el medio para mantener el poder de fuego considerable que tiene", agregó, estimando que el abastecimiento de armas viene principalmente por tierra, desde Honduras.

Esta realidad, llena de matices, está por completo ausente de los informes norteamericanos. Estados Unidos, sigue hablando de que quiere una solución política a la crisis salvadoreña. Evidentemente la guerra en ese país, que es una guerra política, tendrá una solución política. Pero eso, por obvio, es irrelevante. Lo importante es saber si esa solución política se dará en la mesa de negociaciones o en el campo de batalla.

Si los norteamericanos siguen insistiendo (y los gobernantes salvadoreños repitiendo) que la única solución política es la entrega de las armas por la guerrilla y su participación en el proceso electoral, no habrá negociación seria posible. Los guerrilleros no van a entregar los fusiles a cambio de una curul de diputado, si es que la consiguen, en un país donde las elecciones han sido siempre fraudulentas, donde la prensa mayoritaria es de extrema derecha, donde la oposición ha sido normalmente asesinada, y cuyos representantes han tenido que vivir desde siempre en la clandestinidad. De este modo, crear las condiciones para una efectiva participación electoral de la izquierda requerirá más que simples promesas; en la actualidad las propuestas en ese sentido no pueden ser tomadas más que como realmente son: propaganda destinada a debilitar la imagen de la guerrilla.

Si hemos insistido tanto en el papel de la política norteamericana en El Salvador es por el convencimiento de que los he-

chos analizados indican que no hay una disposición a negociar con el FMLN y que, por otra parte, la decisión de poner fin al gobierno sandinista de Nicaragua está también tomada.

Eso conducirá a un creciente enfrentamiento militar en la región, a una amenaza de guerra regional y a un posible desembarco de los marines en Centroamérica.

Mientras Estados Unidos apoye soluciones militares en la región, no hay posibilidad de una salida pacífica al conflicto; sin el apoyo militar y financiero de Estados Unidos, el conflicto salvadoreño desembocará rápidamente en una negociación entre la guerrilla y el ejército; sin ese apoyo, el conflicto nicaragüense no habría entrado en la etapa armada en que se encuentra y, si ese apoyo es retirado, la lucha decrecería rápidamente; el gobierno sandinista podría concentrar sus esfuerzos en el terreno económico, creando condiciones políticas más favorables para una lucha cívica en el país.

Pero, insisto, nada de eso está contemplado por ahora en la política norteamericana y la lucha se intensificará.

En el terreno militar, todo está en marcha, desde el apoyo "clandestino" a los grupos contrarrevolucionarios, hasta la creciente participación del ejército de Honduras en el conflicto y la presencia militar norteamericana en ese país.

En el terreno político, la batalla está concentrada ahora en el ablandamiento de la opinión pública norteamericana, esfuerzo que Reagan empezó con su excepcional discurso ante el Congreso y que ha continuado por diversos medios. El nombramiento del nuevo Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Langhorne Motley, un empresario que durante la campaña electoral trabajó en forma eficiente para Reagan y se desempeñó luego durante 21 meses como embajador en Brasil, es parte de esos esfuerzos políticos de la Casa Blanca. Según altas fuentes diplomáticas latinoamericanas, que conocen bien a Motley, su papel en el nuevo cargo será reforzar el "cabildeo" ante un Congreso renuente hasta ahora a las presiones de Reagan para transitar abiertamente por el camino de la guerra.

La otra alternativa, es aceptar negociaciones serias con el FMLN y el FDR; pero, por el momento, eso está totalmente descartado por Washington y por el gobierno salvadoreño. Magaña

regresó en junio de 1983 de una gira por la capital norteamericana reiterando que lo único que no puede hacer para lograr la paz en su país es negociar con la guerrilla. Tendrá entonces que liquidarla con el fusil y para eso recibió garantías en la Casa Blanca.

Reagan no desconoce las dificultades que ese proyecto presenta en el terreno militar y por eso mismo ha rechazado reiteradamente descartar la posibilidad de enviar tropas norteamericanas a Centroamérica. "Un presidente nunca dice nunca", afirmó el mandatario, consultado al respecto, agregando que esa era sólo una respuesta "hipotética" a una pregunta "hipotética". Esa eventualidad enfrenta un escollo decisivo: la oposición de la opinión pública norteamericana. Los más altos jefes militares de ese país lo señalaron con claridad afirmando que, sin un apoyo mayoritario en el seno de la población, no están dispuestos a ir a pelear a Centroamérica. El recuerdo de Vietnam está fresco aún.

De modo que no sorprendió el anuncio hecho por el Council for Interamerican Security (CIS), uno de los tantos grupos de extrema derecha afín a la política de Reagan, de que iniciaría una campaña en los Estados Unidos para crear una opinión pública favorable a una eventual intervención militar directa norteamericana en la zona. El proyecto, iniciado en Michigan y en Carolina del Norte, será extendido luego a todo el país, afirmó el presidente del CIS, Francis Buchey. Se trata de enviar miles de cartas a los ciudadanos y de insertar cuñas en la televisión, pidiendo apoyo para la política de "derrota total del comunismo en El Salvador".

Como contrapartida, tanto el FMLN y el FDR han insistido en una solución negociada para el conflicto salvadoreño. Una nueva propuesta en ese sentido fue divulgada el 5 de junio del 83, luego de la primera visita del enviado especial de Reagan a Centroamérica, el embajador Richard Stone.

La divulgación de la propuesta del FMLN-FDR provocó disgusto en el Departamento de Estado, que calificó la decisión de hacerla pública como "un acto de mala fe". Stone había reiterado su disposición a reunirse con un representante del FDR, durante su gira por la región y, a su regreso a Washington, viajó también a la capital norteamericana el representante de esa organización, Rubén Zamora, en espera de ese contacto.

Un primer encuentro entre el delegado del FMLN/FDR y el

representante norteamericano para América Central se celebró finalmente el 31 de julio en Bogotá, bajo el patrocinio del presidente colombiano, Belisario Betancur. En esa oportunidad acordaron celebrar una próxima reunión formal entre ambas delegaciones para iniciar la discusión sobre el problema salvadoreño y sus posibles soluciones políticas.

Ese encuentro se realizó finalmente en San José, un mes después, y significó un tácito reconocimiento del gobierno norteamericano a la guerrilla salvadoreña. Dos años antes, en agosto de 1981, cuando Francia y México emitieron una declaración conjunta proponiendo ese reconocimiento, el entonces Secretario de Estado, el general Alexander Haig, se negó a cualquier contacto con los insurgentes, a los que calificó de "puros terroristas".

No hubo declaraciones sobre el contenido de lo tratado por ambas delegaciones; la salvadoreña encabezada por Guillermo Ungo, y la norteamericana por Stone. En la casa de gobierno, el presidente costarricense, Luis Alberto Monge, clausuró la cita en un acto en el que estuvieron presentes las dos delegaciones.

Informaciones posteriores permitieron saber que la delegación norteamericana se limitó prácticamente a escuchar y se negó a fijar fecha para un próximo encuentro, tal como solicitaron los delegados salvadoreños.

Las perspectivas del diálogo son inciertas. El FMLN/FDR exigió, entre otras cosas, la formación de un gobierno de amplia representatividad que creara condiciones para la celebración de elecciones libres y no ocultó su decisión de proseguir la lucha. En efecto, sólo una semana después de ese encuentro, las unidades del FMLN iniciaron una nueva ofensiva nacional, al atacar la Tercera Brigada de Infantería, en la ciudad de San Miguel, la más importante del oriente del país.

Los norteamericanos, por su parte, manifestaron su disgusto por la negativa del FMLN/FDR a participar en las elecciones presidenciales organizadas por el gobierno salvadoreño y previstas para los primeros meses de 1984. El diálogo, más que una vía efectiva de negociación, parecía un instrumento para ser utilizado en la política interna norteamericana, donde Reagan necesita convencer a la opinión pública y al Congreso de que no está empeñado en implementar una solución militar al problema centroamericano. La presencia, entre otros, de Roger Fontaine,

uno de los autores del "Documento de Santa Fe", plataforma ultraconservadora de la política de Reagan para América Latina, en la delegación de Estados Unidos, muestra la poca disposición norteamericana de llegar a una verdadera solución negociada.

Paralelamente a la reunión con los representantes del gobierno norteamericano, el FMLN/FDR propuso un encuentro con la Comisión de Paz del gobierno salvadoreño. La reunión preparatoria se llevó a cabo también en Bogotá, el 29 de agosto, un día antes de la que se celebró con Stone en San José. Ahí se acordó una próxima cita, posiblemente en San Salvador, entre representantes opositores y los miembros de la Comisión de Paz.

La oposición salvadoreña fue enfática en destacar que ambas reuniones eran independientes y paralelas, rechazando cualquier pretensión de Stone de convertirse en intermediario entre el FMLN/FDR y el gobierno salvadoreño.

Estas iniciativas de la oposición salvadoreña muestran una reiterada disposición a encontrar una solución negociada a la crisis que tome en cuenta la representatividad del FMLN y del FDR. Están convencidos también de que esa solución sólo será aceptada por los Estados Unidos y por los militares salvadoreños cuando la realidad en el campo de batalla les demuestre que no pueden ganar la guerra. De este modo, la lucha deberá intensificarse durante el período de negociaciones.

El FMLN/FDR había presentado diversas propuestas, tanto al gobierno de los Estados Unidos como al de El Salvador, para sentarse en la mesa de conversación. En junio de 1983 una propuesta firmada por la comandancia general del FMLN proponía llevar a cabo "un diálogo directo y sin pre-condiciones entre las partes en conflicto, en el que se discutan globalmente los problemas que nuestra sociedad confronta".

"Consideramos como partes directamente involucradas en el conflicto, por un lado, a los gobiernos de El Salvador y de los Estados Unidos de América; y, por el otro, a nuestros frentes, el FDR y el FMLN".

"Nos hemos dirigido por escrito al señor Stone —al que el FMLN/FDR considera no como mediador, sino como parte en el conflicto— para proponerle que iniciemos un diálogo directo en el que discutamos los caminos de la solución política", sugiriendo al Grupo de Contadora como foro viable

para esas negociaciones.

La propuesta es bien conocida y ha sido reiterada en muchas oportunidades. Lo que todos se preguntan es ¿hacia dónde conducirían esas negociaciones, si llegaran a llevarse a cabo? Dicho de otro modo, ¿sería posible encontrar alguna solución negociada al conflicto, si las partes se dispusiesen a dialogar?

En términos realistas, cualquier negociación sólo es posible si se reconoce al FMLN la representatividad que se ha ganado en la lucha, aunque los alcances de ésta sean tema de discusión entre las partes. Pero los frentes opositores salvadoreños no se van a sentar en la mesa de negociaciones para obtener algo menos de lo que ya han logrado con su lucha y cualquier acuerdo tendría que contemplar su participación en el poder. Las agrupaciones de izquierda aceptarán cualquier cosa, me dijo uno de sus dirigentes, menos la entrega de las armas; esa es la clave del problema.

En algún momento se habló de una "solución Zimbabwe" para El Salvador, recordando la integración de un gobierno encabezado por el dirigente blanco conservador, Iam Smith, con representantes de diversas agrupaciones opositoras negras en ese país africano, conocido como Rhodesia antes de que accediera a la independencia y se celebraran elecciones para la formación de su nuevo gobierno.

La "solución Zimbabwe" circuló como una idea en Centroamérica en 1981, probablemente más como un "globo de ensayo" que como una posibilidad real, en esa época. Pero no hay duda que sin contemplar la participación de los insurgentes en el gobierno, al estilo Zimbabwe o en otra forma, no habrá posibilidad de solución negociada en El Salvador.

Eso implica, por supuesto, la aceptación de un cierto grado de socialismo en el país; de que la lucha entre los grupos opuestos continuaría, ahora en el terreno político; y la posibilidad del control total del poder por las agrupaciones que hoy integran la oposición armada, en el futuro.

Desde el punto de vista del gobierno norteamericano, tal cosa es inconcebible. En la perspectiva de que la tercera guerra mundial ya ha empezado, como lo proclaman los autores del documento de Santa Fe y lo entiende Reagan, y de que la lucha contra la Unión Soviética hay que librarla en todos los rincones del mundo, no hay cabida para una solución de ese tipo.

Pero inclusive dentro de la perspectiva de defensa de los legítimos intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, una salida negociada apoyada por la Casa Blanca sería la única que garantizaría estabilidad a largo plazo y posibilidad de entendimiento con un gobierno izquierdista. Ninguno de los países centroamericanos, ni en manos de gobiernos radicales, representa una amenaza militar para los Estados Unidos. A menos, claro está, que permitiera la instalación, en su territorio, de armas ofensivas soviéticas; pero esa posibilidad no será tolerada por los norteamericanos y nadie puede hacerse ilusiones al respecto.

De modo que, estableciéndose normas de convivencia y de respeto a la soberanía y autodeterminación de cada país, la implantación de regímenes izquierdistas en Centroamérica no representa necesariamente enfrentamientos con Estados Unidos. Nicaragua aceptaría de buen grado normalizar sus relaciones con ese país, si se pone fin a la agresión de que es víctima actualmente.

Nicaragua se siente amenazada y está amenazada. Para los sandinistas, una derrota militar del FMLN en El Salvador sería una amenaza aún más seria.

Pero si una solución negociada reduce las tensiones en ese país, el apoyo que los sandinistas prestan a los rebeldes salvadoreños dejaría de ser significativo y el protagonismo regional de la revolución nicaragüense perdería razón de ser, el Frente Sandinista podría dedicarse a las muy difíciles tareas de reconstrucción económica de su país.

Esa perspectiva es hoy un completo sueño, pero estoy convencido que es la única que podrá resguardar los legítimos intereses norteamericanos en la zona y garantizar a los centroamericanos el respeto a su soberanía.

La otra alternativa es la guerra y, no hay que engañarse, Centroamérica camina hacia allá, empujada por la radical política de la Casa Blanca.

Si esta realidad continúa, el futuro de El Salvador deberá ser resuelto en el campo de batalla y eso incluye la posibilidad de una intervención militar directa de los Estados Unidos que ahogaría en sangre la región, en particular El Salvador y Nicaragua.

Los rebeldes salvadoreños están hoy tan implantados en el país que su derrota militar no puede ocurrir sin la masacre de

un número incalculable de civiles, que los acompaña en las zonas bajo control de la guerrilla.

La masacre de El Mozote, en diciembre de 1981, cuando el ejército liquidó a más de mil campesinos, es una muestra de lo que ocurrirá en el país, si se insiste en esa solución militar. Una intervención militar norteamericana en la zona no costará menos de 200 mil muertos, según diversas estimaciones.

El Farabundo Martí controla amplias zonas en Morazán y Chalatenango, mantiene importantes campamentos en los cerros de Guazapa, 35 km al norte de la capital, en San Vicente, Usulután y otras partes del país, donde ha empezado a crear una estructura de poder popular. En esas zonas está organizada la producción de artículos de subsistencia, particularmente de maíz, frijol y arroz, funcionan escuelas, centros médicos, se celebra misa, etc.

Es imposible calcular el número de personas incorporadas a este nuevo esquema de organización, pero el documento de antecedentes sobre Centroamérica, publicado por el Departamento de Estado y la Secretaría de Defensa norteamericanos, a que ya hicimos referencia, reconoce que, "para principios de 1983, los guerrilleros habían controlado unas doce localidades por más de dos meses", en un claro indicativo de la magnitud de ese poder.

A fines de mayo de 1983, el FMLN anunció la integración de una "Junta de Gobierno Regional" en el departamento de Chalatenango. La medida se adoptó, según fuentes de la guerrilla, debido al control que ejercían sobre "una amplia zona del citado departamento, comprendiendo los municipios de Tejutla, La Palma, Citalá, San Ignacio, San Fernando, La Reina, Aguas Calientes, Nueva Concepción y otros", algunos de ellos fronterizos con Honduras.

La clandestina emisora "Farabundo Martí" señaló que habían celebrado la primera asamblea popular regional de Chalatenango, con la participación de distintas juntas de gobierno locales. La Junta Regional estaba integrada por los principales representantes de esos poderes locales donde la guerrilla ejerce su dominio. Fue precisamente en la troncal del norte, carretera que conduce de la capital a la frontera con Honduras cruzando el departamento de Chalatenango, donde encontré a la guerrilla movilizándose en camioneta, unos kilómetros antes de La Palma, ciudad que había sido abandonada por las fuerzas del ejército y que estaba bajo control del FMLN.

La integración de esos nuevos organismos contemplaba también un Consejo Popular Local, "en el que se integran armónicamente los distintos instrumentos político-militares del pueblo".

La emisora reveló que se estaba llevando a cabo un censo de las personas que vivían en los municipios de Chalatenango controlados por la guerrilla.

Un transportista que circula por la zona —el paso fronterizo, a unos 8 kilómetros de La Palma, seguía abierto— reveló que, de vez en cuando, los guerrilleros colocaban una manta donde podía leerse: "Bienvenidos a territorio liberado. FPL".

Esa estructura de poder, todavía muy incipiente, es parte de la realidad del país y, en caso de un triunfo guerrillero, sería el germen de la futura organización salvadoreña.

Ese triunfo no está a la vuelta de la esquina, pero si las tendencias actuales de la lucha prosiguen, es algo previsible. En el terreno militar, la guerrilla mantiene la iniciativa desde junio de 1982, ante una tropa desmoralizada.

Pero la guerra no será ganada por nadie en el campo estrictamente militar; el triunfo será político, aunque la lucha se dé ahora principalmente en el terreno de las armas y los resultados en el campo de batalla incidan directamente en cualquier posible negociación. Como en el caso de Somoza, en Nicaragua, la guerra salvadoreña será ganada por quien sea capaz de inclinar la opinión pública, la nacional y la internacional, principalmente de los Estados Unidos, a su favor. En los próximos meses, la lucha se intensificará también en ese terreno.

INDICE

Introducción 9

CAPITULO I: EL AVANCE DE LA GUERRILLA 17

El estrangulamiento de las vías de comunicación 20
El acoso guerrillero 33
La conquista de posiciones 37
Otra visión de la guerra. 41
La guerrilla por dentro 47
La moral combatiente 64

CAPITULO II: LA SITUACION POLITICA 73

La conspiración y el golpe. 75
La Primera Junta de Gobierno (17 oct. 79/enero 80) . . . 80
El proceso electoral 85
Fraude 91
Las consecuencias políticas 94

El PDC y las elecciones 98
Duarte 103
La posición del FDR 110
El deterioro de la condición humana 116
La voz de los que no tienen voz 128

CAPITULO III: LA POLITICA NORTEAMERICANA 135

Los fundamentos de la política norteamericana 142
Centroamericanizar la guerra 155
Como en Vietnam 163
La estrategia militar 167
Sacar el pez del agua 170
No es la primera vez 175

CAPITULO IV: UN PAIS EN PEDAZOS 187

Guerra y reforma: la receta gubernamental 190
La nacionalización del comercio exterior 194
La banca nacionalizada 196
La Reforma Agraria: otro instrumento de la guerra 199
La realidad 201
El decreto 207 204
La economía: el cuarto año por el despeñadero 208

CAPITULO V: UN ESFUERZO DE PAZ 219

Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Litografía e Imprenta LIL, S.A. en el mes de abril de 1984.